

# Extractivismo agrario

Dinámicas de poder, acumulación y  
exclusión en Bolivia

Ben M. McKay





# **Extractivismo agrario**

**Dinámicas de poder, acumulación  
y exclusión en Bolivia**



# **Extractivismo agrario**

**Dinámicas de poder, acumulación  
y exclusión en Bolivia**

Ben M. McKay



La publicación de este trabajo ha sido posible gracias a:

Pan Para el Mundo - Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM-SPD) y Welthungerhilfe (WHH)

Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC)  
Award 752-2012-1258.

Este libro es una versión ajustada de la tesis doctoral *The politics of control. New dynamics of agrarian change in Bolivia's soy complex*. ISS - La Haya, Países Bajos.

Ben M. McKay  
Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión  
en Bolivia  
La Paz: TIERRA, 2018.

280 pp.; cuadros; gráficos; mapas  
DL: 4-1-2609-18  
ISBN: 978-99974-323-3-9

EXTRACTIVISMO AGRARIO / ACUMULACIÓN / EXCLUSIÓN /  
SOYA / SANTA CRUZ / BOLIVIA

Traducción al español: Gonzalo Colque  
Cuidado y edición: Gustavo Guzmán  
Diseño y diagramación: TIERRA  
Fotografía de tapa: Agencia de Prensa Gráfica

© TIERRA, 2018  
Primera edición, octubre de 2018

Editor: TIERRA  
Calle Hermanos Manchego N° 2566  
La Paz – Bolivia  
Telf: (591) 2 243 2263  
Fax: (591) 2 211 1216  
Email: tierra@ftierra.org  
Sitio web: www.ftierra.org

Impreso en Bolivia

*Este libro está dedicado a las comunidades de Cuatro Cañadas y San Julián. Sin su generosidad, no habría sido posible. Espero que esta investigación contribuya a las discusiones necesarias en las comunidades para buscar y demandar una vía de desarrollo rural inclusivo y sostenible para la mayoría.*





# Agradecimientos

Esta investigación ha sido posible gracias al apoyo y participación de muchas personas. En primer lugar, quisiera agradecer a Jun Borrás por ser un gran mentor, supervisor, amigo y colega. Su orientación a lo largo de los años ha sido invaluable y sus comentarios, críticas y “señales” han sido claves para escribir este libro. También quiero agradecer a Max Spoor por su tutoría, orientación y edición meticulosa a lo largo de este proceso.

Este libro se benefició de las discusiones, comentarios y críticas de Murat Arsel, quien siempre encontraba formas de desafiarme y empujarme a mejorar mis argumentos y suposiciones, por lo cual estoy agradecido. Estoy en deuda con Henry Veltmeyer, quien me brindó una valiosa orientación y asesoramiento para este trabajo. También me gustaría agradecer a Cristóbal Kay por su consejo, apoyo y aliento. Gracias a la comunidad del ISS y las redes BICAS, ERPI, ICAS y LDPI. Muchos de los temas, teorías y conceptos discutidos en este libro se han beneficiado de las conversaciones e intercambios a lo largo de los años con Gonzalo Colque, Alberto Alonso-Frajeas, Christina Schiavoni, Zoe Brent y Tsegaye Moreda.

Realizar el trabajo de campo en Bolivia nunca hubiera sido posible sin el apoyo de la Fundación TIERRA. Un agradecimiento especial a Gonzalo Colque por facilitar el apoyo institucional, por trabajar incansablemente en la traducción de este libro y por la continua colaboración y amistad a lo largo de este proceso. Un agradecimiento especial a José Luis Eyzaguirre que ayudó a mejorar, llevar a cabo y analizar la Encuesta de hogares. Estoy muy agradecido a Irene Mamani y Gustavo Guzmán por su trabajo de coordinación y edición en español de este libro. Muchas gracias a Floria-

na, Enrique, Alcides, Miguel, Wilfredo, Esteban, Rudy, Efraín y todo el equipo de Fundación TIERRA por su apoyo y generosidad. El importante trabajo de Miguel Urioste sobre “Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia” proporcionó las bases para el inicio de este estudio. Le agradezco sus ideas, consejos y orientación. Agradezco a Enrique Callisaya, quien me facilitó el ingreso a Cuatro Cañadas, su experiencia y conocimiento fueron muy importantes durante mis primeras visitas al campo. Estoy sumamente agradecido con las comunidades de Cuatro Cañadas y San Julián por su hospitalidad, apertura y participación en esta investigación. En particular, Andrés Chuviru, Ronal, Betty Rueda y Benigno, Paulino Sánchez, Abraham Fehr y Lisandra, que con su ayuda, apoyo y amistad hicieron posible esta investigación.

A todos mis amigos en Cochabamba: Lili, Andrea, Jinx, Juan Pablo, Luis, Mauri, Dennis, Daniel, Diana, Eric y otros, gracias por darme la bienvenida a Bolivia y por su valiosa amistad. También estoy agradecido a Isaac Gray, Jason Tockman, Igor Ampuero y a las personas de CEDIB con quienes comencé mi viaje e interés en la política y el desarrollo de Bolivia. A Georgina Catacora-Vargas, gracias por compartir su perspectiva como agrónoma, por su colaboración y amistad. Un agradecimiento especial a Daniel Cruz por el inolvidable viaje por carretera a través de la “ruta del Che” al final de esta investigación y por prestarme el clásico Land Cruiser de 1979 que me guio por los caminos de tierra en Santa Cruz.

Gran parte de este libro fue escrito en Bogotá. Estoy agradecido a Marian por todo su apoyo, estímulo y saludables almuerzos que me impulsaron a seguir escribiendo. A Helena y Carlos, gracias por todo el apoyo. A Greta, gracias por mantenerme alerta y por todos los paseos en el parque. Un agradecimiento muy especial a Carolina por su paciencia, ánimo y energía positiva durante todo este proceso. Leyó cada página, editó meticulosamente y mejoró la traducción. Su amor y apoyo me ayudaron a terminar este libro cuando más lo necesitaba.

Finalmente, estoy muy agradecido a mi familia por su respaldo durante este proceso. Un agradecimiento especial a mi mamá por darme tantas oportunidades. Su amor y apoyo incondicional me han ayudado a lograr mis metas y no hubiera escrito este libro sin ella.

Esta investigación fue financiada por el *Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) Award 752-2012-1258*.

.



# Índice

Presentación .....	1
Prólogo .....	3
<b>Introducción .....</b>	<b>7</b>
La <i>política de control</i> : un marco analítico.....	11
Economía política agraria .....	18
<i>Encuesta de Hogares</i> .....	22
<i>Recopilación de datos cualitativos</i> .....	26
Dinámicas agrarias en Bolivia: una breve descripción.....	29
<i>Cuatro Cañadas</i> .....	35
<i>San Julián</i> .....	39
Organización del libro.....	43
<b>Capítulo 1</b>	
<b>El crecimiento del complejo sojero y la</b>	
<b>“República Unida de la Soya” en América Latina .....</b>	<b>47</b>
El auge de la soya en Brasil y América Latina .....	51
El complejo agroindustrial sojero .....	57
<i>Mercantilización y concentración de los insumos</i>	
<i>agrícolas (semillas, agroquímicos y maquinaria)</i> .....	57
<i>Control, sustitucionismo y uso flexible de la producción primaria</i> .....	64
<i>Capital latinoamericano, “pools de siembra” y</i>	
<i>agricultura por contrato</i> .....	68
Conclusión .....	72
<b>Capítulo 2</b>	
<b>Control de la tierra: estructura agraria de Bolivia</b>	
<b>y expansión de la frontera agrícola.....</b>	<b>75</b>
Contexto histórico .....	75
Las colonias menonitas en Bolivia .....	79
El “sesgo pro-terratente” en las tierras bajas .....	81

Multiculturalismo neoliberal: ¿acumulación con legitimidad?....	85
Expansión del capital extranjero y expansión sojera .....	91
El surgimiento de un nuevo movimiento social.....	99

### Capítulo 3

#### **Control estatal: la política del cambio agrario de Evo Morales ..103**

Introducción.....	103
La “Revolución Agraria”: reclamando la legitimidad estatal.....	105
La “Revolución Productiva”: una alianza Estado-capital .....	112
Mecanismos de exclusión social y económica .....	122
<i>El contrato de “partida”: un nuevo mecanismo de exclusión.....</i>	124
La ‘exclusión productiva’ y sus implicaciones para el cambio agrario .....	130
<i>Formas de exclusión generacionales y de género.....</i>	135
<i>Toxicidad y peligros para la salud .....</i>	141
‘Reproducción simple opresiva’ y población excedentaria .....	143
El ‘dualismo funcional’ y el nexa Estado-sociedad-capital .....	148
<i>El ‘dualismo funcional’ .....</i>	148
El nexa Estado-sociedad-capital: ¿señal de crisis? .....	151
Conclusión .....	154

### Capítulo 4

#### **Control de la cadena de valor:**

<b>relaciones de deuda y dependencia .....</b>	<b>157</b>
Introducción.....	157
La cadena de valor agroindustrial y el capital transnacional .....	158
Acaparamiento del control y el ‘arreglo espacio-temporal’ .....	175
Conclusión .....	182

### Capítulo 5

#### **El extractivismo agrario y las políticas de control .....**

Introducción.....	185
Extractivismo, nuevo extractivismo y extractivismo agrario .....	187
<i>Extractivismo .....</i>	187
<i>El “nuevo extractivismo” .....</i>	190
<i>El “nuevo extractivismo” en Bolivia.....</i>	193
<i>El extractivismo agrario .....</i>	198

'Extractivismo agrario' en Bolivia .....	201
1) <i>Grandes volúmenes de materias primas de exportación</i> .....	201
2) <i>La concentración de la cadena de valor y la desarticulación sectorial</i> .....	203
3) <i>Alta intensidad en la degradación ambiental</i> .....	205
4) <i>El deterioro de las oportunidades y las condiciones laborales</i> .....	213
El 'extractivismo agrario' y las <i>políticas de control</i> .....	214
Conclusión .....	221
<b>Conclusión</b> .....	<b>225</b>
Nuevas dinámicas de control, exclusión y extracción.....	226
Las <i>políticas de control</i> : poder, acceso y Estado .....	229
Trayectorias del cambio agrario: lecciones e implicaciones.....	234
<b>Epílogo</b> .....	<b>239</b>
<b>Bibliografía</b> .....	<b>243</b>
<b>Sobre el autor</b> .....	<b>269</b>
<b>Lista de cuadros</b>	
Cuadro 1. Características socioeconómicas de la Encuesta de Hogares .....	24
Cuadro 2. Deforestación anual por tipo de actores y expansión de áreas cultivadas.....	88
Cuadro 3. Costos de producción de soya en la zona de expansión Campaña de verano, en USD y por hectárea .....	128
Cuadro 4. Generación de empleo en el complejo sojero Campaña de verano.....	135
Cuadro 5. Agronegocios establecidos en Bolivia dentro de la cadena de valor de la economía de las semillas oleaginosas.....	163
Cuadro 6. Distribución de ingresos del complejo sojero Pequeños propietarios, productores y agroindustriales.....	167

Cuadro 7. Agroindustria: cuota de mercado, ranking de ingresos y contribución tributarial .....	174
Cuadro 8. Expansión de la frontera extractivista: áreas protegidas y contratos petroleros .....	194
Cuadro 9. Mecanismos de poder, exclusión y acceso .....	216

## Lista de gráficos

Gráfico 1. Estructura de la tenencia de la tierra Cuatro Cañadas .	37
Gráfico 2. Estructura de la tenencia de la tierra San Julián.....	40
Gráfico 3. Superficie cultivada de soya 'República Unida de Soya' .....	58
Gráfico 4. Costos de producción de soya en Estados Unidos Por acre de soya cultivada y en USD .....	64
Gráfico 5. Tenencia de la tierra por tipo de agricultura Sector soyero de Santa Cruz, 2011 .....	126
Gráfico 6. Cuota de mercado según compañías agroindustriales exportadoras de soya, 2012 .....	162
Gráfico 7. Origen de los agroquímicos en Bolivia 2009-2014.....	173
Gráfico 8. Superficie de tierra cultivada Por tipo de cultivo y en hectáreas .....	181
Gráfico 9. Superficie total y producción de soya, Campaña de verano.....	202
Gráfico 10. Grado de ocurrencia de El Niño Oscilación del Sur (ENSO). Fenómeno climático en Santa Cruz .....	210

## Lista de mapas

Mapa 1. Ubicación del Municipio de Cuatro Cañadas Santa Cruz, Nuflo de Chávez.....	38
Mapa 2. Ubicación del Municipio de San Julián Santa Cruz, Nuflo de Chávez.....	41



# Siglas y acrónimos

ABCD	ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus
ACIPAC	Asociación Comunitaria Integral de Productores Agropecuarios de Cuatro Cañadas
ADM	Integral de Productores Agropecuarios de Cuatro Cañadas
ADN	Acción Democrática Nacionalista
AEMP	Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas
AGCO	Corporación Gleaner-Allis, Corporación Allis-Gleaner
ANAPO	Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo
APPAO	Asociación de Pequeños Productores del Oriente
ARS	Agriculture Research Service (Servicio de Investigación Agrícola)
BASF	Badische Anilin- und Soda-Fabrik (Fábrica Badense de Bicarbonato)
BCB	Banco Central de Bolivia
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
BRICS	Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
CAINCO	Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz
CAMC	China Engineering Company (China CAMC)
CAO	Cámara Agropecuaria del Oriente
CAPPO	Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente
CEDIB	Centro de Documentación e Información Bolivia
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPB	Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
CGIAR	Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional
CIDOB	Confederación Indígena del Oriente Boliviano
CIIC	Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
CIPCA	Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

CNH	Case New Holland
CNMCIQB-BS	Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa"
CNTCB	Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia
COB	Central Obrera Boliviana
COMIBOL	Corporación Minera de Bolivia
CONALCAM	Coordinadora Nacional por el Cambio
CONAMAQ	Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
CONFAGRO	Confederación Agropecuaria Nacional
COOPERCANA	Cooperativa de Plantadores de Caña del Oeste del Estado de San Pablo
CPE	Constitución Política del Estado
CPESC	Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz
CPT	Comisión de la Pastoral de la Tierra
CSCIB	Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
DMI	Distritos Municipales Indígenas
EMAPA	Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
EMBRAPA	Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria
ENSO	El Niño-Oscilación del Sur
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
FAOSTAT	Food and Agriculture Organization of the United Nations Statistics Division ()
FDTFC	Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba
FEDECOR	Federación Departamental Cochabambina de Regantes
FES	Función Económica Social
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FSCIPACC	Federación Sindical de Comunidades Interculturales de Productores Agropecuarios Cuatro Cañadas
FSTMB	Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia

GEI	Gases de Efecto Invernadero
GM	Genéticamente Modificadas
Grupo ETC	Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración
I+D	Investigación y Desarrollo
IAC	Intituto Agronómico de Campinas
IARC	Centros Internacionales de Investigación Agrícola
IBCE	Instituto Boliviano de Comercio Exterior
IDH	Impuesto Directo a los Hidrocarburos
IFAD	International Fund for Agricultural Development (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola)
INC	Intituto Nacional de Colonización
INE	Instituto Nacional de Estadística
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
ISI	Industrialización por Sustitución de Importaciones
ISS	Instituto Internacional de Estudios Sociales
JPCC	Jóvenes Patriotas de Cuatro Cañadas
LPP	Ley de Participación Popular
MAS	Movimiento al Socialismo
MBP	Margen Bruto de Procesamiento
MEFP	Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
MITKA	Movimiento Indio Tupaj Katari
MNR	Movimiento Nacionalista Revolucionario
MRTKL	Movimiento Revolucionario Tupak Katari de Liberación
MST	Movimiento de Trabajadores Sin Tierra
MST-B	Movimiento Sin Tierra de Bolivia
NPE	Nueva Política Económica
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización No Gubernamental
ONU	Organización de Naciones Unidas
OTB	Organizaciones Territoriales de Base
PDES	Plan de Desarrollo Económico y Social
PEA	Población Económicamente Activa

PL	Ley Pública
PLUS	Plan de Uso del Suelo
PMA	Programa Mundial de Alimentos
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRM	Países de Renta Media
PROBIOMA	Productividad Biosfera Medio Ambiente
PROCEDER	Programa de Cooperación Nipo-Brasileño para el Desarrollo de los Cerrados
SEMAPA	Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
SENASAG	Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
SNAP	Sistema Nacional de Áreas Protegidas
TCO	Tierras Comunitarias de Origen
TIAA-CREF	Teachers Insurance and Annuity Association-College Retirement Equities Fund (Asociación de Seguros y Anualidades de Maestros-Fondo Equitativo de Retiro de Colegiados)
TIPNIS	Territorio Indígena y Parque Nacional Isibor-Sécure
TM	Tonelada Métrica
UCS	Unión de Científicos Preocupados
UDP	Unidad Democrática y Popular
UNASUR	Unión de Naciones Suramericanas
UNISOYA	Unión de Empresas Agropecuarias del Norte
USAID	United State Agency for International Development (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
USD	United States Dollars (Dólar de Estados Unidos)
WFP	World Food Programme (Programa Mundial de Alimentos)
WWF	World Wildlife Found (Fondo Mundial para la Naturaleza)
YPFB	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

# Presentación

*Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia* es un libro dedicado a develar cómo el capital transnacional se apropia de la renta agraria sin necesidad de obtener derechos de propiedad formal sobre las tierras agrícolas más productivas de Bolivia: la zona de expansión sojera de Santa Cruz.

Este trabajo de Ben M. McKay documenta las nuevas dinámicas agrarias marcadas por cambios sustanciales en las relaciones de producción que, además de provocar exclusión y marginación de las mayorías rurales, están consolidando las bases de un nuevo modelo económico denominado aquí como 'extractivismo agrario'. Esta tendencia va de la mano con la agudización del patrón extractivista que predomina en la economía contemporánea de Bolivia.

El autor se basa en un extenso trabajo de campo que se llevó a cabo entre 2014 y 2015 en los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián del departamento de Santa Cruz. Su análisis se centró en el sector sojero y con especial énfasis en la manera en que los pequeños propietarios o campesinos beneficiarios de los programas de colonización de los años sesenta y setenta se integran al complejo sojero, luchan por sobrevivir dentro de la cadena de valor que ellos no controlan, y sufren las consecuencias. El resultado alcanzado por esta investigación es la visibilización de las complejas transformaciones agrarias desde una perspectiva crítica que desmonta los argumentos con que los agroempresarios defienden un modelo agrario en el que ellos son actores subordinados al capital transnacional.

Con esta publicación, TIERRA busca contribuir a la comprensión de la economía política del agro boliviano y, sobre todo, a plantear a los investigadores, activistas, líderes de movimientos sociales del campo y políticos, que es momento de cuestionar el 'extractivismo agrario' que reina en el país, y retomar la construcción colectiva de modelos agropecuarios sostenibles, inclusivos y económicamente favorables para las mayorías rurales.

Nuestro agradecimiento para Pan Para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM-SPD) y para Welthungerhilfe, dos organizaciones que hacen posible esta publicación y que apoyan y creen en nuestro trabajo institucional.

Gonzalo Colque  
**Director de Fundación TIERRA**

*La Paz, octubre de 2018*

# Prólogo

*Miguel Urioste\**

Hace poco menos de una década, Ben McKay vino a Bolivia inicialmente atraído por el debate sobre agroecología y soberanía alimentaria, y más tarde concentró su atención en el acaparamiento de tierras, un fenómeno global que latrajo la mirada de académicos de diversas partes del mundo e incluso de los organismos de las Naciones Unidas como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que el año 2011 lideró un extenso estudio regional en América Latina sobre el *land grabbing*. Los primeros contactos de Ben con la Fundación TIERRA datan de esa época y acabó por focalizarse en los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián, zona integrada del norte del Departamento de Santa Cruz, el epicentro del agronegocio sojero. Vivió en el lugar por cerca de un año haciendo trabajo de campo a profundidad y colaborando con varios colegas e investigadores de Santa Cruz. Hacia 2012 y 2013 los caminos de Ben y Gonzalo Colque, director de TIERRA, se cruzan en el Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS) de la Universidad Erasmus de Rotterdam en La Haya, Holanda, donde Ben cursó sus estudios de doctorado sobre la economía política del agronegocio, mientras Gonzalo escribía su tesis en la misma universidad sobre la apropiación de la tierra en la frontera agrícola en Bolivia, que poco después se publicó en Bolivia. Desde el año 2017 Ben es profesor en la Universidad de Calgary en Canadá e investigador asociado de la Fundación TIERRA. De esta relación nace la idea de

---

\* Especialista en desarrollo rural y reforma agraria, investigador de la Fundación TIERRA.

publicar este trabajo en español, una versión adaptada de su tesis doctoral. El autor fue el primero en interesarse en que sus estudios fueran conocidos en Bolivia, cumpliendo así su compromiso de hacer investigación–acción.

No me cabe la menor duda de que este libro se convertirá en un clásico de la literatura sobre las recientes transformaciones agrarias en Bolivia y que contribuirá a una comprensión mucho más profunda y analítica del complejo sojero, sus nexos con las empresas y capitales internacionales, y los perversos efectos de este “modelo” sobre el medio ambiente y la sociedad boliviana, especialmente sobre los agricultores familiares y nuestra creciente dependencia alimentaria. En efecto, Ben demuestra con datos empíricos y observación directa en terreno, que el monocultivo de la soya es pernicioso para Bolivia y los bolivianos, porque que la inmensa mayoría de las rentas que genera son apropiadas por las empresas que dominan el agronegocio en todo el Cono Sur.

Este libro demuestra que no es verdad que –como afirman los gremios cruceños– el “modelo” agroindustrial sea el principal contribuyente de la seguridad alimentaria boliviana. No es verdad porque es el “modelo” de menor productividad del Cono Sur: sus rendimientos por superficie están estancados a pesar del uso indiscriminado de semillas transgénicas, glifosato y otros agroquímicos; tampoco genera grandes cantidades de empleo directo o indirecto puesto que es altamente intensivo en capital y maquinaria muy sofisticada. Este “modelo”, además, concentra la propiedad de la tierra, especialmente la de los pequeños agricultores o ex colonos que se ven obligados a trabajar “al partir” –una vieja fórmula de explotación de la mano de obra y de la tierra de los pobres rurales– o a vender sus tierras; el “modelo”, finalmente, obliga a muchos colonizadores a integrarse al último eslabón de la cadena del agronegocio en condiciones altamente desfavorables para el acceso al crédito, maquinaria y conocimientos de mercados y tecnologías. A diferencia de Brasil y Argentina, donde las exportaciones de soya contribuyen de manera importante con tributos fiscales, en Bolivia el Estado no recibe un solo centavo como impuesto específico



gravado al extractivismo agrario, ni ingresos del impuesto a la propiedad de la tierra de los grandes terratenientes y, lo que es peor, en la última década las importaciones de alimentos se han casi triplicado. Al contrario, el Estado subvenciona el “modelo” a través de los subsidios a los combustibles, la construcción de carreteras, la ausencia de una regulación laboral que defienda los intereses de los trabajadores agrícolas asalariados –que en la práctica equivalen a los peones de antes de la reforma agraria de 1953–, el indiscriminado desmonte que provoca irreversibles efectos ambientales, y la invasión de territorios indígenas como en Lomerío o Guarayos que contamina y deteriora los suelos, el aire y los ríos. Pero el “modelo” sí es muy atractivo para las transnacionales, los sectores empresariales vinculados, las casas importadoras de insumos y maquinarias, y los gobiernos de turno que establecen alianzas con las élites regionales en busca de poder político y estabilidad económica.

En conclusión, el extractivismo agrario como componente estructural del nuevo régimen agroalimentario mundial, ha llegado a Bolivia para quedarse, pero no solo eso, sino que además construye unas relaciones económicas, sociales y políticas donde no hay espacio para los agricultores familiares y menos para campesinos e indígenas. Este “modelo” ha roto la relación de unicidad entre hombre–suelo–herramienta–identidad–cultura. El agroextractivismo como agricultura dominante y en expansión en el mundo, y ahora presente en Bolivia, funciona en redes con múltiples actores, financieros, científicos, tecnológicos, productivos, comerciales y políticos, y miles de millones de consumidores de *commodities* transformados industrialmente en alimentos procesados. Como América Latina, y en especial Bolivia, es uno de los espacios más favorables para la expansión de este “modelo”, el gobierno del presidente Morales no tiene empacho en abandonar la agenda de la *Madre Tierra* y el *Vivir Bien* –discurso que lo llevó al poder el año 2006– y promover la ampliación de la frontera agrícola en diez millones de hectáreas hasta el año 2025, además de intensificar la generalizada extracción de los recursos naturales, es decir, no solo gas y minerales, sino de productos agropecuarios, dando lugar a un fenómeno nuevo en Bolivia que en este libro se denomina

extractivismo agrario. Este modelo extractivista y latifundista no solo desbasta la naturaleza sino que socava las bases institucionales y democráticas de la sociedad boliviana.

El agronegocio es pues incompatible con la agricultura familiar campesina e indígena. No son dos sistemas que se complementan y conviven. El agronegocio subordina y excluye a la agricultura familiar, acelera la deforestación, contamina el medio ambiente y usa cantidades enormes de energía no renovable, además de impulsar la descampesinización y la migración precaria hacia las ciudades. Si persiste este “modelo”, en Bolivia los agricultores pronto no tendrán futuro, engrosarán la población vulnerable, serán excluidos socialmente, irrelevantes económica y políticamente.

Esto y más está expuesto cuidadosamente en este libro que contiene siete capítulos, incluidas la Introducción y la Conclusión. Para quienes hemos venido investigando estos temas desde hace décadas, es una satisfacción ver ahora publicada una obra que recoge anteriores aportes y contribuye magistralmente con nuevos elementos, información actualizada y análisis riguroso. Todo estudioso del agro, cuestiones ambientales y de las relaciones sociales, económicas y políticas que han comenzado a cimentarse a principios del siglo XXI, debe leer este libro, “Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia”.

La Paz, octubre de 2018

# Introducción

Vivimos en un mundo de transformaciones profundas y trascendentes. El sistema agroalimentario global experimenta una reestructuración geopolítica. El capital transnacional no solo fluye hacia nuevas geografías, sino que crea nuevos espacios de penetración, circulación y acumulación de capital. El ascenso político y económico de economías emergentes como las de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (los cinco países que se agrupan bajo la sigla BRICS) y otros Países de Renta Media (PRM), combinado con la reciente convergencia de la crisis en torno a los precios de los alimentos, los precios del petróleo y los cambios financieros y climáticos, han impulsado las crecientes demandas de “cultivos flexibles”, materias primas e inversiones en la agricultura. Han surgido, junto a estos procesos, nuevos centros de acumulación global de capital y sitios clave de producción, circulación y consumo que desafían perspectivas convencionales como aquella de la división Norte-Sur, una de las categorías más significativas para explicar la desigualdad global en cuanto a poder y riqueza (McKay, Hall y Liu, 2016c). Estas dinámicas globales cambiantes tienen implicaciones importantes para el sector agrícola, los medios de vida rurales, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el desarrollo nacional. La cadena de valor industrial de la agricultura se ha convertido en el modelo dominante para el desarrollo rural. Se trata de un modelo que se expande hacia nuevas fronteras alrededor del mundo de la mano de corporaciones poderosas, de instituciones internacionales de cooperación y desarrollo, y de actores estatales; es un modelo que se presenta como la *única vía* a seguir para aliviar la pobreza rural, alimentar a cerca de mil millones de hambrientos en el mundo y cubrir las necesidades de la población mundial que crece sin pausa y que en el año 2050 alcanzará la cifra de 9.700 millones de personas (FAO, IFAD y WFP, 2015).

Este es el mundo en que la soya ocupa el centro de las transformaciones agrarias como uno de los cultivos más importantes del planeta en términos de uso de la tierra, comercio y valor de producción, y como un cultivo fundamental con usos múltiples y flexibles. La soya es utilizada como alimento humano, como alimento para animales, como combustible y como materia prima para procesos industriales (Oliveira y Schneider, 2016). Las plantaciones de soya se han expandido e invadido vastas extensiones de tierra en el Cono Sur de América Latina, región convertida hoy en el principal productor y exportador mundial de semillas oleaginosas. En el contexto de América Latina, las políticas de tierras y desarrollo agrícola se han enlazado con el complejo sojero agroindustrial y global, expandiéndose rápidamente desde los años setenta, aunque de manera desigual, en todo el Cono Sur. Nuevos actores y nuevas formas de penetración de capital asociado al complejo de soya –y, en general, a la fiebre por los recursos naturales– han animado debates sobre si el creciente interés mundial por tierras de cultivo y productos agrícolas representa amenazas u oportunidades para el desarrollo rural (Borras y Franco, 2010; Deininger y Byerlee, 2011). Por un lado, varios factores de “atracción” han alentado a muchos campesinos y pequeños agricultores a dedicarse a monocultivos de soya genéticamente modificada, en el marco del *boom* de materias primas que trajo consigo precios más favorables y discursos de modernización y progreso. Por otro lado, los factores de “rechazo” –como la contaminación de los suelos por la fumigación con avionetas y escorrentías fluviales, las condiciones desfavorables del mercado interno y las formas económicas y extraeconómicas de despojo– han forzado a muchos agricultores a abandonar sus tierras para emigrar a áreas urbanas, buscar empleo como trabajadores asalariados rurales, transitar a la producción agrícola capitalizada, o a alguna combinación de estas posibilidades. Estos procesos de cambio agrario no son exclusivos del sector sojero, son características compartidas por la expansión agroindustrial en todo el mundo. Los discursos dominantes basados en la necesidad de alimentar a una población en crecimiento, acabar con la pobreza rural y brindar oportunidades para que los pobres huyan del trabajo penoso propio de la agricultura campesina, o modernizar la producción mediante semillas

resultantes de la ingeniería genética capaces de producir en abundancia o en condiciones climáticas y en suelos menos favorables, son ampliamente conocidos y continúan configurando las agendas oficiales de las instituciones internacionales de desarrollo y de los gobiernos nacionales. Este libro aborda estos debates y desafía esos discursos a través de la investigación de las políticas y procesos de cambio agrario en el contexto del desarrollo y la expansión del complejo agroindustrial sojero boliviano.

Bolivia, en este contexto, es un país conocido a nivel global por ser productor de quinua y coca, y por su régimen político de carácter progresista encabezado desde 2006 por su primer Presidente indígena, Evo Morales. Bolivia, sin embargo, también se ubica como uno de los diez países con mayor producción de soya en el mundo. La soya se ha convertido en el principal cultivo agrícola de Bolivia, uno de los tres principales productos de exportación y pilar del modelo de desarrollo extractivista junto a los minerales y los hidrocarburos. Las semillas oleaginosas han transformado el paisaje boliviano, han reemplazado a los cultivos tradicionales y las tierras de bosques, y han cambiado significativamente las formas y relaciones de producción. En el marco de una economía política internacional cambiante en el sector de la alimentación y la agricultura, este libro investiga las maneras en que el desarrollo y la expansión del complejo agroindustrial sojero boliviano están transformando las relaciones sociales agrarias en las tierras bajas del departamento de Santa Cruz, incluyendo las diversas implicaciones socioeconómicas y ambientales y las políticas que están detrás de estos procesos. El conocimiento de las particularidades de la inserción de la agroindustria en Bolivia tiene implicaciones significativas para la comprensión del desarrollo rural en el país e ilumina los debates en torno al desarrollo agroindustrial en general.

Este libro revela también cómo la producción mecanizada de soya en Bolivia se ha desarrollado de manera similar a un enclave extractivo, social y sectorialmente desarticulado del resto de la economía y con una producción destinada a mercados de exportación. La fuerza laboral en el complejo sojero se ha hecho excedentaria para las

necesidades de acumulación de capital<sup>1</sup> debido a la mecanización, concentración y monopolización del sector. Adicionalmente, debido a que el principal mercado de consumo de las oleaginosas es externo, no es necesario que la agroindustria se preocupe por la consolidación y funcionamiento del mercado interno. Muchos pequeños agricultores tienen pocas oportunidades de movilidad ascendente debido al acceso limitado a la tierra y al capital; estos agricultores se encuentran atrapados en posiciones contradictorias de clase, generando lo que se conoce como ‘dualismo funcional’ (De Janvry, 1981), un fenómeno en el que la expansión del complejo agroindustrial sojero no es fuertemente cuestionada, social ni políticamente, a pesar de sus características excluyentes y extractivistas.

En este sentido, el estudio aborda temas del capital y el trabajo de las cuestiones agrarias contemporáneas no solo preguntándose si el capital está penetrando al campo, sino cómo y hasta qué punto se desarrolla el capital agroindustrial en el campo; el libro, igualmente, indaga en las nuevas formas (de control) que adopta el capital agroindustrial en términos de la configuración de las relaciones de producción y acumulación, y las formaciones políticas asociadas a estos procesos (Byres, 1986, 1996; Bernstein, 1996). El cómo y hasta qué punto se produce la penetración del capital agroindustrial en el campo –las nuevas formas de penetración y sus implicaciones para la transformación agraria de Bolivia– son temas indudablemente importantes para el desarrollo nacional y la mitigación de la pobreza, pero, al mismo tiempo, son temas poco explorados porque no han sido suficientemente explicados en la literatura actual.

Los estudios que analizan la expansión sojera y el cambio agrario en Santa Cruz proporcionan una excelente comprensión del funcionamiento de los mercados de tierras, la concentración de tierras, la “extranjerización” y la transferencia tecnológica (Zoomers, 2003; Mackey, 2011; Urioste, 2012; Colque, 2014), pero no conectan con las nuevas formas de control que surgieron en el contexto de la ca-

---

1 Esta idea se inscribe en el concepto marxista de ‘población excedentaria relativa’ (*relative surplus population*) recientemente desarrollada por Tania Li (2010).

dena de valor agrícola altamente mecanizada y capitalizada. Los discursos dominantes desde el Estado, organismos internacionales como el Banco Mundial y el propio sector sojero, también presentan explicaciones alternativas sobre las implicaciones de esta nueva penetración de capital destacando el crecimiento económico, la productividad, la seguridad y soberanía alimentaria, y la generación de empleo (García, 2012; IBCE, 2014).

Este trabajo cuestiona estas afirmaciones argumentando que una comprensión más profunda de las relaciones sociales de producción revela una dinámica altamente excluyente, la apropiación de la plusvalía por parte de grupos oligopólicos y el carácter extractivista de la producción agrícola. Los análisis de las dinámicas del cambio agrario basados en el esquema de derechos de propiedad –o según los niveles de productividad agregada y generación de divisas por exportaciones– no logran captar estas dinámicas de control, exclusión, apropiación de valor y extracción que son centrales para el análisis y que se presentarán en las siguientes páginas con mayor profundidad.

### ***Las políticas de control: un marco analítico***

Las nuevas formas y mecanismos de penetración del capital en el agro requieren ir más allá de un marco analítico basado en los derechos de propiedad o propiedad formal de la tierra hacia uno relacionado con el “control del acaparamiento”. Para Borrás, “el control del acaparamiento es intrínsecamente relacional y político; implica relaciones de poder político y puede manifestarse de diversas maneras que ‘no siempre resultan en desposesión de la tierra’” (Borrás, Franco, Gomez, Kay y Spoor, 2012, p. 850). El marco analítico que guía este estudio, denominado *política de control*, se basa en este concepto y sintetiza otras tres contribuciones teóricas: 1) La “teoría del acceso” de Ribot y Peluso (2003) y las nuevas formas y mecanismos de control que emergieron con el desarrollo (agro) extractivo; 2) Los trabajos de O’Connor (1973), Poulantzas (1978) y Jessop (2008) sobre la naturaleza y el papel del Estado capitalista; y 3) Los trabajos de Fox (1993) y Borrás (2007) sobre las relaciones Estado-sociedad. La utilidad analítica de las *políticas de control* es doble. En primer

lugar, permite entender las nuevas formas y mecanismos de control de recursos y apropiación de valor (o extracción) en sectores (agro) extractivos a través del análisis del acceso a la tierra, en lugar de la propiedad o los derechos concesionales. Estas nuevas dinámicas incluyen varias formas de despojo y desplazamiento, pero también mecanismos de exclusión y apropiación que no requieren necesariamente la separación física de los agricultores de su tierra. En segundo lugar, proporciona un marco analítico para la evaluación de las dobles y a menudo contradictorias funciones del Estado que consisten en facilitar la acumulación de capital y, paralelamente, mantener la legitimidad política. Esta doble función requiere mantener relaciones estratégicas entre actores estatales, el sector privado y la sociedad civil, para alcanzar y mantener el control del aparato estatal. El “control” tiene un doble significado: control sobre el aparato estatal y control sobre los factores de producción (tierra, trabajo, capital) y, por lo tanto, acceso a los recursos. Los conceptos de ‘exclusión productiva’, ‘control de la cadena de valor’, ‘extractivismo agrario’ y nexos entre ‘Estado-sociedad-capital’ desarrollados a lo largo de este trabajo, buscan entender las *políticas de control*.

En la literatura sobre las relaciones entre Estado-sociedad existen una variedad de enfoques analíticos para explicar la acción estatal, los resultados de las políticas públicas y los cambios socioeconómicos. Algunos de estos marcos explicativos se concentran en el Estado y otros en la sociedad. Para quienes se enfocan en el Estado, las élites políticas son los tomadores de decisiones y la principal unidad de análisis para explicar la acción estatal y los resultados de las políticas (Evans, Rueschemeyer y Skocpol, 1985), mientras que para los enfoques centrados en la sociedad, las clases sociales y las relaciones de clase son la principal unidad de análisis que determina la acción del Estado y los resultados de las políticas (Paige, 1978; Domhoff, 1987, 1996). Estos marcos analíticos están enraizados en distintas teorías del Estado que van desde la tradición weberiana, donde el Estado es visto como una organización que reclama el monopolio legítimo de la fuerza dentro de un determinado territorio, hasta la tradición marxista, que entiende al Estado como un instrumento de la clase dominante, y de muchas otras variantes a lo



largo de este espectro teórico. Algunos de estos enfoques tienden a entender el Estado y la sociedad como entidades mutuamente excluyentes y autodeterminadas que pueden analizarse de forma aislada, dados los “límites claros e inequívocos entre el aparato estatal y la sociedad, entre los administradores estatales y las fuerzas sociales, y el poder estatal y el poder social” (Jessop, 2008, p. 155). Esto implica que podemos entender el funcionamiento estatal, pero sin entender necesariamente la sociedad, o la estructura social sin comprender la estructura estatal, descartando las “lógicas híbridas como el corporativismo o las redes de políticas, las divisiones entre los administradores estatales debido a vínculos entre los órganos estatales y otras esferas sociales, y muchas otras formas de solapamientos entre el Estado y la sociedad” (*Ibid.*). Este estudio rechaza esta división y argumenta que aunque puedan parecer dos entidades separadas, el Estado y la sociedad están inextricablemente ligados y relacionados, y, por tanto, no podemos entender el funcionamiento del aparato estatal, sus instituciones y administradores, sin entender la estructura social que conforma a la sociedad.

Bajo las lógicas del dualismo Estado-sociedad resulta difícil entender por qué el actual Estado boliviano (como una entidad autónoma y autodeterminada) ha otorgado poder económico y control sobre la tierra y otros recursos a las élites agroindustriales y terratenientes en lugar de implementar su “Revolución Agraria” a través de una reforma agraria redistributiva y atender así los intereses de sus electores, es decir, los agricultores campesinos e indígenas. Un observador atento a la realidad boliviana podría asumir que la nueva élite política que ha nacido con el gobierno de Evo Morales ejercería su gestión y autonomía para recaudar más impuestos y regalías, o tomar control sobre partes del sector agrícola para financiar programas de bienestar social, tal como lo hace en otros sectores (minería e hidrocarburos) que forman parte del modelo de desarrollo “neo” extractivista. Por el contrario, si el Estado no tiene autonomía alguna, se hace difícil comprender por qué y cómo la acción estatal y los resultados de las políticas públicas van –a veces– en contra de los intereses de las clases capitalistas dominantes.

En el contexto del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), autoproclamado como “gobierno de los movimientos sociales”, comprender quiénes son las clases dominantes –si son las nuevas élites políticas, las antiguas elites económicas o una combinación de ambas – es una tarea difícil. Aunque las viejas elites oligárquicas no han desaparecido, su poder económico está siendo disputado cada vez más por la emergencia de una nueva élite política. La participación del Estado en la economía nacional, por ejemplo, ha aumentado del 15 por ciento al 38 por ciento desde 2006; hoy, el Estado en Bolivia controla poco más de 40 empresas de sectores estratégicos y ha aumentado las regalías y los ingresos tributarios de los sectores de la minería y los hidrocarburos (Lazcano, 2013; Varela, 2014). Por otra parte, y si tomamos en cuenta las relaciones entre los actores estatales y sociales en base a la llamada “política de puertas giratorias” –como cuando se dice que los bancos son “demasiado grandes para fracasar” o cuando los grupos de presión claves (por ejemplo, el Pacto de Unidad<sup>2</sup>) tienen mucha influencia en la política electoral–, las líneas entre el Estado y la sociedad se tornan cada vez más difusas. Incluso dentro del aparato estatal los administradores (elegidos y nombrados) están cada vez más en desacuerdo entre ellos, a medida que la política se polariza. Como Wolford y French señalan, “al igual que los actores de la sociedad civil luchan por acceder a los recursos estatales, las entidades estatales y los empleados también tienen que negociar y luchar por el reconocimiento y por los recursos en contra de competidores del propio aparato gubernamental” (2016, p. 11). En Bolivia, por ejemplo, las relaciones entre uno de los líderes de la oposición y Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el Presidente Evo Morales, han pasado de duros adjetivos (Costas llamó a Morales “asesino” y dictador” en medio de un intento de golpe de Estado en 2008) a una aparente alianza iniciada entre los años

---

2 El Pacto de Unidad –creado en 2004– es la alianza de las principales organizaciones campesinas e indígenas de Bolivia. Lo integran: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

2013 y 2014 (Economía Bolivia, 2013; Ortiz, 2013). Desde entonces, Evo Morales es invitado a reuniones con las asociaciones que representan a la agroindustria como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO). Es frecuente, en este plano, que el Presidente asista a la inauguración de eventos corporativos de la élite de Santa Cruz tales como la Fexpocruz y la Expo Soya. ¿Cómo entender esta alianza Estado-capital aparentemente recién conformada?

Ante la ola de gobiernos progresistas de izquierda en gran parte de la región de América Latina, los académicos buscaron volver a desafiar la noción de separación entre el Estado y la sociedad (Cannon y Kirby, 2012; Wolford y French, 2016). Cannon y Kirby sostienen que existe una “naturaleza dialéctica del Estado, la sociedad civil y las relaciones de mercado” que debe entenderse como un todo unificado co-constitutivo, en lugar de analizarse por separado (2012, p. 202). Partiendo del concepto de “públicos fuertes”, Fraser (1990) sugiere que “el papel de la sociedad civil ha pasado de la mera formación de opinión a la participación (...) en la toma de decisiones (...)” (Cannon y Kirby, 2012, p. 202). Esto parece ser lo que ocurre en Bolivia con algunos miembros del Pacto de Unidad que forman parte de la llamada Coordinadora Nacional por el Cambio (CON-ALCAM) y que fueron también protagonistas de la Asamblea Constituyente, responsable del diseño y la implementación de la actual Constitución Política del Estado, promulgada en 2009. Sin embargo, tal como argumentan Schilling-Vacaflor y Vollrath, a pesar de esta aparente y discursiva inclusión de la sociedad civil boliviana en la toma de decisiones, sus opiniones “tienden a ser anuladas por las prioridades gubernamentales” basadas en el extractivismo (2012, p. 137). En Argentina, a su vez, Wylde argumenta que a pesar de la desaparición y cooptación estatal de las formas más radicales de resistencia civil que surgieron durante la crisis de 2001-2002, “estas, sin embargo, dieron lugar a cambios importantes y duraderos en el contrato social argentino, sobre todo debido a la absorción dentro de la política estatal de muchas de las ideas de estos movimientos” (2012, p. 46).

Desde nuestra perspectiva, el presente trabajo contribuye a estas lecturas y entiende el cambio social y político discutiendo el Estado y la sociedad no como variables independientes, sino como una relación social estratégica históricamente situada y siempre en movimiento, formada y reformada por sus respectivos actores e instituciones en coyunturas específicas. Por lo tanto, el aparato estatal no es entendido aquí como una entidad totalmente autónoma ni como un instrumento de la clase capitalista, sino como un terreno de relaciones estratégicas y controvertidas entre fuerzas políticas que intentan mostrarse neutrales y “externas” a la sociedad. Asimismo, asumimos que el poder estatal –entendido como un conjunto de centros de poder desiguales activados por actores estatales y su interacción con fuerzas sociales específicas– se mantiene mediante un cuidadoso equilibrio que facilita la acumulación de capital y mantiene su legitimidad al reconciliar conflictos de clase y antagonismos dentro y entre clases de capital y trabajo (Jessop, 2008; O’Connor, 1973).

La acumulación de capital y la legitimidad, como lo señala O’Connor, son “dos funciones básicas y a menudo mutuamente contradictorias” del Estado capitalista (1973, p. 6). Los actores estatales pueden ejercer su poder para estimular y facilitar la acumulación de capital mediante políticas fiscales y monetarias, acuerdos comerciales, subsidios, inversión en infraestructura, etcétera, para aumentar su capacidad fiscal que “depende de los ingresos que se originan en la esfera de la producción” (De Janvry, 1981, p. 196). Por el contrario, para mantener la legitimidad, las instituciones y los actores estatales deben crear las condiciones para la armonía social y reconciliar los intereses conflictivos de clase dentro de la sociedad. Esto se manifiesta en una variedad de formas tales como los programas de bienestar social, un sistema progresivo de impuestos sobre la renta, mayores regulaciones sociales y ambientales, reformas redistributivas, educación pública y atención de salud, seguridad social y seguro de desempleo, y discursos populares estratégicos. Sin embargo, las acciones y agencias del Estado no ejercen su poder y capacidad de cambio de la manera que desean, sino que deben interactuar (a menudo estratégicamente) con el equilibrio de fuerzas dentro de la sociedad.

Si los gastos públicos superan los ingresos fiscales en la búsqueda de aumentar la legitimidad política (mediante la redistribución de rentas extractivas, por ejemplo), el Estado corre el riesgo de entrar en una crisis fiscal (O'Connor, 1973). Sin embargo, si el Estado facilita la acumulación de capital más allá de su umbral de legitimidad y sin regulaciones sociales, ambientales y financieras, hasta el punto en que facilita la acumulación de capital a costa del bienestar de la sociedad, corre el riesgo de generar una crisis financiera y de legitimidad. Las crisis pueden conducir a reformas políticas, revoluciones sociales, golpes de Estado o a formas represivas de control estatal. La fuerza con que las agencias estatales persiguen estrategias de legitimación y acumulación depende políticamente de las demandas externas, de la autonomía y la capacidad de los actores estatales, y de "la naturaleza de su interacción con las fuerzas contendientes que reivindican tales demandas" (Fox, 1993, p. 31). La formulación de políticas y legislación gubernamental siempre es un proceso disputado, e incluso cuando se redactan en papel, no se autointerpretan ni se autoimplementan, sino que están sujetas a cambios, interpretaciones e implementaciones de acuerdo con las interacciones altamente políticas entre el Estado y los actores sociales (Franco, 2008).

Para fines de claridad conceptual, podemos categorizar los intereses de las diversas clases sociales y fracciones de clase de acuerdo a las funciones *subjetivas* y *objetivas* del Estado. En el caso de las fracciones de la clase trabajadora, sus intereses políticos y económicos se relacionan con las funciones *subjetivas* del Estado (referidas a la legitimación política) y adicionalmente representan a la sociedad dentro del nexo Estado-sociedad-capital. A su vez, las fracciones de la clase capitalista tienen unos intereses políticos y económicos que se relacionan con las funciones *objetivas* del Estado (referidas a la acumulación de capital) y así representan al capital dentro del nexo Estado-sociedad-capital. Sin embargo, es importante aclarar que existen otras fracciones de clase y clases transicionales como los semiproletarios y la pequeña burguesía que a veces se encuentran en posiciones de clase contradictorias, y cuyos intereses socioeconómicos y políticos están influenciados por esta contradicción fundamental. El uso de este marco conceptual, el

nexo Estado-sociedad-capital, busca dar claridad conceptual para comprender la compleja red de relaciones que conduce al cambio social y político. Como un enfoque para comprender la naturaleza del Estado, el nexo Estado-sociedad-capital no separa lo económico de lo político y tampoco reduce la acción estatal y el cambio sociopolítico al determinismo económico o político. Más bien, trata la relación de lo económico con lo político como algo intrínsecamente insertado dentro de las relaciones sociales del capitalismo y, asimismo, entiende al Estado capitalista como un reflejo de las tensiones de clase y dominación existentes en la sociedad (Holloway y Picciotto, 1977).

Bajo esas premisas, el nexo Estado-sociedad-capital proporciona un marco analítico para comprender la naturaleza del Estado a través de la relación del capital, es decir, una relación de lucha de clases entre clases trabajadoras y capitalistas. La relación del capital asume dos formas: la económica y la política. Por lo tanto, los administradores del Estado deben mantener la organización del proceso de producción capitalista, aparentar ser una entidad neutral fuera de la sociedad y reconciliar las diferencias de clase entre trabajo y capital manteniendo el equilibrio entre la acumulación de capital y la legitimidad política. A lo largo de este libro, las políticas de los cambios agrarios en Bolivia se analizan teniendo el nexo Estado-sociedad-capital como marco analítico para contribuir a una mejor comprensión de los cambios sociales y políticos ocurridos desde la elección de Evo Morales y el MAS en 2006.

## **Economía política agraria**

Usar un enfoque basado en la economía política agraria requiere de una investigación sobre “las relaciones sociales y dinámicas de producción y reproducción, propiedad y poder en las formaciones agrarias y sus procesos de cambio, tanto históricos como contemporáneos” (Bernstein, 2010, p. 1). Este enfoque entiende el cambio socio-económico y político como un producto de relaciones y estructuras sociales específicas en contextos históricos determinados. Se requiere identificar la naturaleza, las formas y las relaciones de acumulación de capital, lo que implica un análisis de las clases y estruc-

turas de clases y del papel y la naturaleza del Estado. Por lo tanto, en este enfoque se rechazan las nociones de crecimiento económico o productividad como medidas de desarrollo o progreso social, debido a que tales variables económicas deben estar contextualizadas como productos de las relaciones sociales. Ciertamente, la acumulación de capital puede conducir a la riqueza, crecimiento y abundancia, alivio de la pobreza y progreso social de las naciones, sin embargo, también puede conducir al empobrecimiento, exclusión, desigualdad, destrucción del medio ambiente y otros conflictos. Los enfoques residuales o técnicos sobre el desarrollo y la mitigación de la pobreza se adscriben a menudo a la noción de que, eventualmente, el crecimiento económico y productivo conducirán al progreso social para todos, sin tomar en cuenta la amplia gama de estructuras desiguales y relaciones de poder propias de las sociedades capitalistas. La economía política agraria, por su parte, adopta un enfoque relacional concerniente a las relaciones sociales de acceso, divisiones y condiciones del trabajo, distribución del ingreso y del valor, consumo, reproducción y acumulación (Bernstein, 2010, pp. 22-23).

Estas relaciones deben analizarse en sus contextos históricos y sociales, entendiendo que las estructuras sociales se moldean y han sido moldeadas por la interacción social y la lucha de clases creadora de nuevas condiciones estructurales. Si bien se reconocen las tendencias a la acumulación de capital y a la rentabilidad como inherentes al modo de producción capitalista, estas no son necesariamente determinantes del cambio social. Tales tendencias interactúan con las estructuras existentes y dependen de procesos históricos y luchas de clases. Tal como afirma Ben Fine, es importante que nuestros fundamentos teóricos “sigan siendo sensibles tanto a la diversidad como a las contingencias históricas” (Fine, 1994, p. 522). Bajo este criterio de sensibilidad a la diversidad, se recopilieron datos empíricos durante el trabajo de campo realizado en Bolivia desde 2013 hasta 2015 con el fin de involucrar de primera mano a las personas implicadas en estas nuevas dinámicas de cambios agrarios.

Este estudio emplea un enfoque de investigación de métodos mixtos –utilizando la triangulación entre métodos– en un intento por limitar

sesgos e inconsistencias. Se utilizaron datos cualitativos y cuantitativos, primarios y secundarios, y datos basados en informes oficiales del gobierno; se utilizaron también datos catastrales nacionales, regionales y municipales, publicaciones de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entidades académicas y de noticias, así como investigaciones etnográficas llevadas a cabo a través de la observación participante, entrevistas formales (semiestructuradas) e informales (diarias) y conversaciones con informantes clave y miembros de las comunidades soyeras de Cuatro Cañadas y San Julián. También se realizó una Encuesta de Hogares en colaboración con la Fundación TIERRA y con una contribución financiera parcial de la Universidad de Michigan administrada por la doctora Lesli Hoey. La encuesta registró un total de 303 hogares de Cuatro Cañadas y San Julián (Mapa 1 en la p. 38 y Mapa 2 en la p. 41). El enfoque de métodos mixtos no se usa simplemente para combinar diferentes tipos de datos, sino para compararlos y contrastarlos con el fin de “contrarrestar las amenazas a la validez de los datos identificados en uno y otro lado” (Berg, 2001, p. 5).

Este enfoque también ha permitido que en este estudio se limiten los errores en la recopilación y el análisis de datos, no solo en cuanto a deficiencias de la Encuesta de Hogares que se detallan a continuación, sino también en investigaciones hechas por extranjeros en Bolivia. Si bien se tomaron muchas medidas para reducir parcializaciones en las entrevistas semiestructuradas con informantes clave, también es cierto que ser un “extraño”, particularmente un extranjero canadiense, puede potencialmente generar respuestas sesgadas, falta de voluntad para participar e incluso interpretaciones erróneas. Por otro lado, el ser un forastero (*outsider*) también puede coadyuvar positivamente al estudio porque se percibe como menos amenazante, respetuoso, e incluso como un colaborador. En mi experiencia, las personas de diferentes estratos, tanto estatales como sociales, han sido muy abiertas y dispuestas a participar e involucrarse en largas conversaciones. No obstante, los diferentes sesgos han sido analizados mediante el uso de la triangulación entre métodos que combinan “dos o más estrategias de investigación diferentes para el estudio de las mismas unidades empíricas” (Denzin, 1978, p. 302).



Asimismo, y dado que la naturaleza del problema de este estudio requería de una investigación sobre las relaciones de producción particulares, propiedad y poder, y formas de control y acceso que no siempre se pueden capturar mediante el método de encuesta, este estudio tiene, fundamentalmente, un carácter cualitativo. Lo que la encuesta agrega es un tamaño de muestra más grande y en un área geográfica más amplia; la muestra se utiliza para compararla y contrastarla con los datos de las entrevistas en profundidad. Como Webb y otros autores explican (1966, p. 174), “cuando una hipótesis puede sobrevivir a la confrontación de una serie de métodos de prueba complementarios, contiene un grado de validez inalcanzable con respecto a otra comprobada dentro de un marco más restringido y método único”.

Greene, a su vez, identifica cinco propósitos clave para usar el enfoque de métodos mixtos: 1) *Triangulación*, que combina múltiples métodos para capturar diferentes características de una misma realidad empírica; 2) *Complementariedad*, donde un método mejora, aclara y valida los resultados del otro; 3) *Desarrollo*, donde un método informa al otro; 4) *Iniciación*, que se refiere a paradojas y contradicciones en los resultados de los múltiples métodos utilizados; y 5) *Expansión*, que se refiere a la agregación de amplitud o profundidad que a menudo están ausentes cuando se usa un único método (Greene, Caracelli y Graham, 1989, p. 259).

Sin embargo, y tomando en cuenta que este estudio es sobre todo cualitativo, no se beneficia completamente de la utilidad de estas cinco razones fundamentales para usar el enfoque de métodos mixtos. Los datos de la encuesta recolectados no han podido capturar –o proporcionar– un ángulo alternativo de investigación sobre ciertos aspectos de las relaciones sociales de producción y mecanismos de control que se hicieron evidentes con la recopilación de datos cualitativos mediante entrevistas semiestructuradas, observación participante y grupos focales. No obstante, aunque solo se los haya utilizado de manera descriptiva, los datos de la encuesta complementan la información cualitativa (más exhaustiva) mediante la comprensión de características como las de hogar, tenencia de tierra,

acceso a crédito, maquinaria y otros, de un grupo de hogares más grande de lo que fue posible conseguir a través de las entrevistas en profundidad. No se han encontrado contradicciones o paradojas aparentes en los resultados de los diversos métodos utilizados, lo que valida muchos datos recopilados en entrevistas a profundidad, aunque con muestras más pequeñas, sobre las cuales se basan la mayoría de los hallazgos de este estudio.

### *Encuesta de Hogares*

La encuesta estuvo dirigida a los productores rurales de los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián. Se entrevistó a los tomadores de decisiones que se autoidentificaron como tales o a los “jefes de hogar” identificados por otras personas que viven en el hogar. Para abarcar un número importante de hogares de ambos municipios, se consideró necesario contratar a estudiantes de Agronomía, Veterinaria e Ingeniería Agrícola de la subsección de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en San Julián. Catorce estudiantes (siete hombres y siete mujeres) fueron seleccionados después de varias sesiones de capacitación y prácticas que se llevaron a cabo durante dos semanas. La encuesta se realizó entre noviembre de 2014 y enero de 2015 debido a la disponibilidad de tiempo de los encuestadores antes de la cosecha de soya de verano. En conjunto, los dos municipios suman un total de 13.712 personas que tienen la agricultura como su principal actividad económica (INE, 2012a).

Dadas las largas distancias entre las viviendas y comunidades, y el mal estado de las carreteras durante los períodos de fuertes lluvias, los estudiantes fueron designados para visitar los hogares dentro de las zonas en que vivían. Al principio, se intentó una selección aleatoria, pero esta tenía falencias, puesto que los estudiantes tendrían que haber viajado largas distancias solo para descubrir que muchas personas a encuestar no estaban disponibles. Por otra parte, los recursos financieros limitados y la poca disponibilidad de encuestadores nos obligaron a dejar que los estudiantes visiten hogares accesibles y dispuestos a cooperar, lo que generó un sesgo en la selección de la muestra. Las visitas domiciliarias, sin embargo, se

llevaron a cabo durante períodos aleatorios a lo largo de la semana y, por lo tanto, no se estructuraron solo para los días de la semana o fines de semana, ni solo durante las mañanas, tardes o noches. Esto reduce sesgos de selección hasta cierto punto, aunque hay tener en cuenta que no se logró una muestra aleatoria perfecta. Además, a pesar de que se llevaron a cabo varios talleres de capacitación, debemos asumir variaciones en las interpretaciones del entrevistador y en las explicaciones de ciertas preguntas.

En términos de la muestra total, el 86 por ciento de los “jefes de hogar” autoidentificados eran hombres. Este sesgo de género fue inevitable debido a que estábamos interesados en los productores agrícolas y a que el actual sistema de producción agroindustrial es un sistema patriarcal. En este mismo sentido, los últimos datos del Censo nacional sugieren que el 83,7 por ciento de la población que depende de la agricultura como su principal actividad económica, en los dos municipios, es masculina; se puede decir, por tanto, que nuestra muestra es consistente con los datos oficiales (INE, 2012a).

La exclusión de las mujeres de procesos de producción y toma de decisiones, además, se ha convertido en una característica del modelo agroindustrial ya que el conocimiento tradicional de los agricultores ha sido reemplazado por “paquetes tecnológicos” y el trabajo manual intensivo por la mecanización. Las mujeres desempeñan un rol central en aquellas actividades poco reconocidas por la sociedad e ignoradas en la economía: la reproducción social y familiar. Esto incluye el cuidado de niños, el cuidado de ancianos y enfermos, la preparación de alimentos, limpieza y manejo de huertos familiares, entre muchas otras tareas. Sin embargo, cuando se trata de contratos agrícolas, compras de paquetes tecnológicos o trabajo con maquinaria pesada, la mayoría de las mujeres no participan en ello. Por tanto, y dada la población objetivo de la encuesta, la desigualdad de género constatada es representativa puesto que la mayoría de las preguntas están relacionadas con la economía política de la producción de soya. Aunque la encuesta no revela diferencias de género y generacionales dentro del hogar, es importante reconocer que los hogares no son entidades homogéneas (White, 1986; Razavi, 2009). Estas dinámicas

intrafamiliares y de clase se discuten más a fondo en el Capítulo 3 sobre la base de datos cualitativos provenientes de entrevistas y de la observación participante. En el Cuadro 1 se presentan las características socioeconómicas de la encuesta por hogares.

**Cuadro 1**  
**Características socioeconómicas**  
**de la Encuesta de Hogares**

Total de hogares: 303			
Edad promedio del jefe de hogar		Tamaño promedio de hogar (en personas)	
<i>Edad promedio</i>	47,9	<i>Tamaño promedio</i>	4,62
<i>Desviación estándar</i>	11,4		
Género		Tamaño de la tierra	
<i>Masculino</i>	86%	<i>Tamaño promedio</i>	53,3 ha
<i>Femenino</i>	14%	<i>Desviación estándar</i>	30,7 ha
Nivel de educación		Año de llegada o asentamiento	
<i>Ninguna</i>	7%	<i>Después de 2009</i>	9%
<i>Primaria (parcial)</i>	58%	<i>2000-2009</i>	17%
<i>Primaria (completa)</i>	19%	<i>1990-1999</i>	30%
<i>Secundaria (parcial)</i>	6%	<i>1980-1989</i>	27%
<i>Secundaria (completa)</i>	8%	<i>1970-1979</i>	15%
<i>Post secundaria</i>	1%	<i>Antes de 1970</i>	3%
<i>Universidad</i>	1%		
Etnicidad		Principal actividad económica	
<i>Ninguna</i>	7%	<i>Agricultura</i>	83%
<i>Quechua</i>	68%	<i>Trabajo rural</i>	9%
<i>Guarani</i>	0%	<i>Vendedor</i>	1%
<i>Chiquitano</i>	2%	<i>Trabajo doméstico</i>	1%
<i>Mestizo</i>	1%	<i>Empleado público</i>	3%
<i>Otro</i>	18%	<i>Estudiante</i>	1%
		<i>Trabajador corporativo/industrial</i>	0%
		<i>Otro</i>	1%

Fuente: Encuesta de Hogares realizada por el autor, 2014-15.

Teniendo en cuenta las deficiencias y posibles sesgos de la encuesta, los datos obtenidos se utilizan de forma complementaria en un intento por minimizar variaciones e inconsistencias a través de la triangulación. Los resultados de la encuesta se utilizan de forma descriptiva para ilustrar las características del hogar y la producción.

Las entrevistas semiestructuradas, la observación participante y las conversaciones informales diarias con los productores, en general, han sido mucho más reveladoras que la encuesta por muestreo. Muchos agricultores se mostraron recelosos, nerviosos y escépticos con las formalidades de una encuesta. La revisión cruzada de los datos de la encuesta y las entrevistas cualitativas, reveló inconsistencias llamativas en las respuestas de los productores, especialmente en relación con el número de parcelas o la cantidad de tierras que poseen o trabajan. Dado que la ley les impide alquilar sus tierras, los agricultores dudan en decir la verdad sobre ciertos acuerdos contractuales que prevalecen en las comunidades, particularmente si la encuesta es de larga duración. Desafortunadamente, los discursos políticos y dominantes se basan en una comprensión bastante superficial de la realidad rural que proviene de encuestas sin trabajos de validación. De hecho, ANAPO es la instancia que proporciona al Gobierno Nacional y regional sus datos “oficiales” sobre los cambios en el uso de la tierra, rendimientos, producción total de soya (toneladas y hectáreas) y empleo. Esto ha provocado malos entendidos y afirmaciones falsas de parte de los actores estatales y capitalistas que siguen justificando y legitimando el desarrollo y la expansión del complejo sojero con base en datos que carecen de profundidad y características relacionales. Como afirma Jerven, “si no se comprende que los datos son productos sociales y que su producción está condicionada por las relaciones de poder, puede suceder que investigadores y donantes confíen indebidamente en la totalidad de los datos” (2014, p. 14). Es importante, por ello, reconocer la “naturaleza social de la producción de datos” (2001, p. 141), tal como lo hace Ronald J. Herring. Por ejemplo, el censo y la encuesta de ANAPO no capturan varios aspectos importantes referidos a las relaciones de la tenencia de la tierra.

Ciertamente, el tamaño de la tierra puede ser contabilizado (aunque solo parcialmente), pero el tamaño físico agregado y absoluto de las parcelas de tierra no nos dice nada sobre la calidad del suelo, los rendimientos, los riesgos en las zonas de inundación ni sobre el acceso a la infraestructura y mercados. Igualmente, las relaciones entre latifundistas, trabajadores asalariados y operadores de maquinarias con la agroindustria no se evidencian en las estadísticas, por

lo que es casi imposible revelar y analizar las cambiantes relaciones sociales y las formas de producción inherentes a las relaciones que se tejen en torno a la tenencia de la tierra.

### *Recopilación de datos cualitativos*

Entre los años 2014 y 2015 viví en Cuatro Cañadas, el corazón de la zona de expansión sojera, realizando entrevistas semiestructuradas con informantes clave a través de muestreos de “bola de nieve” y grupos focales con miembros de asociaciones de productores y, a la vez, participando en innumerables conversaciones con miembros de las comunidades cercanas. Primero viajé por la región con Enrique Callisaya, un agrónomo boliviano con más de 15 años de experiencia laboral en Cuatro Cañadas. Enrique no solo tiene conocimientos amplios sobre los cambios en el uso de la tierra, las formas cambiantes de la producción y las transformaciones socioeconómicas y ambientales que presencié por años, sino que también es un experto agrícola de gran prestigio y muy conocido en todas las comunidades. Me presentó a muchos de los informantes clave entrevistados para este estudio, lo que me permitió superar las difíciles barreras sociales y culturales que habrían surgido por ser un investigador canadiense. La Fundación TIERRA, con la que continúo colaborando, me contactó con Enrique Callisaya y me proporcionó apoyo institucional y personal a lo largo de esta investigación. El vivir en la comunidad también fue muy importante para establecer relaciones, ya sea en el mercado, en eventos comunitarios, en restaurantes y gasolineras, en viajes en transporte público o, incluso, en las reuniones de las asociaciones de productores. Las interacciones cotidianas y las experiencias compartidas fortalecieron mi relación con las comunidades del lugar.

En otro ámbito, se llevaron a cabo entrevistas con académicos, investigadores, líderes de movimientos sociales y funcionarios gubernamentales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Viajé a la capital de Brasil, Brasilia, donde realicé entrevistas con funcionarios del gobierno, investigadores de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), agricultores sojeros, así como con líderes de La Vía Campesina y del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST).

En total fueron 84 entrevistas semiestructuradas con informantes clave en todos estos lugares, además de muchas conversaciones informales, especialmente con personas que no trabajan en el sector agrícola en Cuatro Cañadas. Los conductores de taxis, minibuses y camiones, tenderos, maestros de escuelas, estudiantes, trabajadores de hospitales, mecánicos, dueños de restaurantes y trabajadores de estaciones de servicio, me proporcionaron información valiosa sobre los cambios económicos y ambientales de los últimos años.

También asistí a reuniones comunales con asociaciones de productores y gobiernos municipales, la mayoría las veces participando en calidad de observador y a veces presentando avances de mi investigación y formando parte de discusiones en pequeños grupos focales. Los grupos focales se llevaron a cabo con miembros de la Federación Sindical de Comunidades Interculturales de Productores Agropecuarios Cuatro Cañadas (FSCIPACC) y otros de la comunidad de Nuevo Palmar. Como ya se señaló, los participantes de estos grupos fueron solo hombres dada la estructura patriarcal del complejo soye-ro y dada la norma cultural de que son los hombres quienes toman decisiones cuando se trata de la producción agrícola. Debido a que el grupo focal como método de investigación “tiene la intención de alentar a las personas a hablar libremente sobre los comportamientos, actitudes y opiniones que poseen” (Berg, 2001, p. 111), la inclusión de mujeres o jóvenes podría haber reprimido y excluido esta forma de participación. A pesar del sesgo de género y generacional de los grupos focales, las discusiones me permitieron comprender los problemas más amplios que enfrentan los productores desde el punto de vista de las asociaciones y comunidades, algo que me ayudó a orientar mi estudio y otros temas a lo largo de las subsecuentes entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas y conversaciones con mujeres y jóvenes se llevaron a cabo por separado, incluso en el caso de las mujeres líderes de sus comunidades y de asociaciones de mujeres. Las ideas clave de las entrevistas, los grupos focales, la observación participante y la encuesta se entretajan a lo largo de todo el libro. (Con el fin de resguardar la identidad de algunas personas que nos facilitaron información clave, las citamos en este libro con nombres ficticios, lo cual se aclara la primera vez).

Asistí también a eventos locales como la ExpoSoya anual donde las empresas de agronegocios como Syngenta, Monsanto, John Deere, New Holland, Nidera, entre otras, colaboran con la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y funcionarios gubernamentales de los niveles local, regional y nacional para promover nuevas variedades de semillas, cosechadoras, tractores, fumigadores, sembradoras, agroquímicos e incluso servicios crediticios y financieros. En la ExpoSoya de 2014, el Presidente Evo Morales expresó su apoyo a la agroindustria, resaltando la importancia de la soya para la seguridad y soberanía alimentaria, y firmó un Decreto Supremo elevando el límite de exportación de soya en grano a 300 mil toneladas para la cosecha de invierno. Fue el típico discurso gubernamental que se escucha desde el año 2006, lleno de retórica antiimperialista, apoyo a los originarios, campesinos e indígenas, y expresiones sobre la importancia de recuperar la soberanía boliviana frente a su pasado neoliberal. La soya, bautizada como el “grano de oro”, fue elogiada por el Presidente por generar desarrollo, crecimiento económico, empleo, así como seguridad y soberanía alimentaria.

Sin embargo, como se hará evidente a lo largo de este estudio, este discurso no solo se contradice a sí mismo, sino que está lleno de afirmaciones equivocadas sobre las implicaciones socioeconómicas de la producción soyera. No obstante, el primer Presidente indígena de Bolivia, con su carisma y capacidad para conectarse con la población históricamente marginada, pudo ganarse simultáneamente el apoyo y la aprobación tanto de los pequeños agricultores como de los terratenientes del sector agroindustrial. En realidad, su discurso representa claramente las relaciones entre las clases rurales capitalistas y trabajadoras y las *políticas de control* que se harán evidentes a lo largo de este estudio. Más adelante se presenta una descripción de los lugares del estudio, información que incluye sus características demográficas, socioeconómicas y agroecológicas, así como mapas detallados que revelan su ubicación en el centro de la zona de expansión soyera.



## Dinámicas agrarias en Bolivia: una breve descripción

La estructura agraria de Bolivia es extremadamente desigual. Después de dos programas de reforma agraria en 1953 y 1996, y después de la llamada “Revolución Agraria” de 2006, el sector rural se caracteriza por una estructura altamente desigual en la tenencia de la tierra. De las aproximadamente 660 mil unidades agrícolas de Bolivia, el 87 por ciento son pequeñas propiedades que ocupan solo el 14 por ciento del total de la tierra arable disponible (Banco Mundial 2007a, p. 19). Esto se traduce en que 574.200 pequeñas unidades rurales ocupan, cada una y en promedio, solo 0,7 hectáreas. Bolivia tiene una de las tasas de ruralidad más altas de América Latina, con el 33,5 por ciento de la población en áreas rurales y casi un tercio (29,1 por ciento) de la fuerza laboral total empleada en la agricultura (INE, 2012b). Por lo tanto, la renta de la tierra y la agricultura como medios de vida y actividades económicas son todavía muy relevantes y extremadamente importantes para la mitigación de la pobreza y para el desarrollo rural (FIDA, 2010). Sin embargo, las políticas y programas gubernamentales de los últimos sesenta años han producido como resultado una estructura agraria rígida y arraigada donde las clases terratenientes y las élites capitalistas han ganado y retenido el acceso y control sobre la mayoría de las tierras más fértiles del país y sus recursos productivos. Estas desigualdades concuerdan con una tasa de pobreza severa de más de dos tercios entre la población rural (66,4 por ciento) y con casi la mitad de los pobladores rurales viviendo en la pobreza extrema (45,5 por ciento) (INE, 2012b).

Mientras que la estructura agraria actual de Bolivia ha sido moldeada en períodos sociopolíticos previos que instalaron los patrones de despojo y concentración de la tierra, los recientes cambios en la economía política global están generando nuevas formas de penetración del capital mediante nuevos mecanismos de exclusión, apropiación del valor y formas de extracción asociados al complejo sojero agroindustrial. Este modelo de producción agroindustrial y el desarrollo de nuevas biotecnologías transformaron el Cono Sur de América Latina en el primer productor mundial de soya, con

Brasil liderando la propagación de sus tecnologías y la presencia de sus productores a lo largo de la región (Oliveira y Hecht, 2016).

Al año 2017 existe un número limitado de estudios sobre los temas relacionados con la nueva dinámica agraria de Bolivia. Algunos estudios analizan el funcionamiento de los mercados de tierras (Zoomers, 2003) y la apropiación de tierras en la frontera agrícola (Colque, 2014), mientras que otros se concentran en la “extranjerización” de la tierra, estudios que dan cuenta del aumento de la presencia de agricultores capitalistas brasileños y el control creciente de recursos naturales por parte de la agroindustria (Mackey, 2011; Urioste, 2012). Estos estudios proporcionan valiosos conocimientos y han contribuido a nuestra comprensión sobre el cambio agrario en Bolivia, generando las bases conceptuales sobre las que se desarrolla este libro. Nuestro trabajo surge a partir de estos análisis, y va más allá de las miradas centradas en la tierra y la “extranjerización”, enfocándose en formas y mecanismos más sutiles de exclusión, control, apropiación, extracción y las políticas que están detrás de estos procesos.

Entre esos estudios está, por ejemplo, el de Zoomers (2003, p. 255), que examina el funcionamiento del mercado de tierras visibles (formales) e invisibles (informales) de Santa Cruz de fines de la década de 1990, cuando muchos de los pequeños agricultores todavía no estaban produciendo soya o utilizando maquinaria agrícola. Durante este período, el estudio devela que, según una encuesta de 149 familias en tres comunidades, “no hubo una transferencia sistemática de tierras de los pequeños hacia los grandes, lo que significa que no hubo cambios sustanciales en la estructura de tenencia de la tierra” (Zoomers, 2003, p. 256). Este autor, además, resalta la capacidad de los pequeños agricultores para persistir en tiempos de trabajo pesado y diversificar sus estrategias de subsistencia, disminuir el consumo y/o vender una parte de su tierra como una forma para mantener su parcela o parte de ella. Este comportamiento de los agricultores se mantiene vigente hoy, aunque la fragmentación de la tierra aumenta a medida que los agricultores continúan “vendiendo sus tierras poco a poco”, tal como menciona

Zoomers. Pero además, una segunda generación de los pequeños agricultores (colonizadores) está buscando empleo y ejerciendo más presión sobre la tierra. De todas maneras, Zoomers no aborda otros cambios como la expansión de la frontera agrícola durante el período de liberalización de la tierra, el desarrollo de la agricultura mecanizada o la mayor presencia del agro-capital brasileño. Con mayor detalle, estudios recientes de Urioste (2012) y Colque (2014) examinan estos problemas.

Durante los últimos veinte años, los extranjeros –específicamente los brasileños– aumentaron rápidamente su control sobre la tierra y los recursos agrícolas bolivianos. Entre 2006 y 2007, por ejemplo, los brasileños controlaban el 40,3 por ciento del área total de las plantaciones de soya, frente al 19,6 por ciento entre los años 1994 y 1995 (Urioste, 2012). Aunque no hay datos actuales sobre la cantidad total de tierra controlada por los brasileños, el estudio más confiable y reciente realizado por Miguel Urioste de la Fundación TIERRA sugiere que “solo en oleaginosas, los brasileños poseen aproximadamente medio millón de hectáreas de las mejores tierras agrícolas, tanto de Categoría I (uso agrícola intensivo) como de Categoría II (uso agrícola extensivo), sin contar las que están en barbecho o rotación, ni aquellas que están destinadas a otros cultivos o ganadería que generalmente comprenden áreas más grandes” (2012, p. 449). Urioste sugiere también que las inversiones brasileñas más recientes están en tierras de pastoreo para la ganadería. Se estima que los ganaderos brasileños ocupan 700 mil hectáreas en las tres provincias fronterizas con Brasil (German Busch, Velasco y Ángel Sandoval) del departamento de Santa Cruz (Urioste, 2012, p. 451). Por lo tanto, el capital brasileño controla aproximadamente 1,2 millones de hectáreas de 2,86 millones de hectáreas de tierras cultivadas de Bolivia mediante corporaciones con sede en Brasil como el Grupo Mónica (Mónica Semillas), el Grupo Gama y UNISOYA, que controlan más de 200 mil hectáreas de esta tierra (Urioste, 2012; INE, 2011). Sin embargo, estos datos están bastante desactualizados debido al proceso de titulación de tierras (saneamiento) que sigue en curso y a la falta de voluntad de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) para divulgar datos específicos sobre sus

afiliados. Por tanto, las cifras que dan cuenta de la concentración de la tierra y la llamada “extranjerización” podrían ser mucho más elevadas. Con base en discusiones con informantes clave que trabajan en los gobiernos municipales de San Julián y Cuatro Cañadas (ver Mapas 1 y 2) –las dos zonas principales en la región de expansión soyera– así como con numerosos pequeños agricultores, es claro que la cultura de apropiación ilegal de tierras y el acaparamiento de tierras continúan en las tierras bajas del oriente boliviano.

Los datos de Urioste, por ejemplo, se basan en informes publicados por ANAPO, la asociación de agroindustriales de gran influencia política y económica que tiene como objetivo reproducir el modelo brasileño en la agricultura de Bolivia. ANAPO tiene acceso a información más precisa sobre la tenencia de la tierra (y nacionalidad de los propietarios) porque sus afiliados proporcionan estos datos a la Asociación. Sin embargo, las últimas publicaciones de ANAPO ya no incluyen información específica sobre la nacionalidad de los productores, en gran parte debido a publicaciones difundidas por una ONG boliviana sobre el tema de la “extranjerización”. Estas publicaciones generaron una gran reacción pública, no solo contra ANAPO por parte de sus afiliados, sino también del público en general, especialmente desde las organizaciones campesinas que recientemente incorporaron en su agenda política el tema de la “extranjerización” de la tierra (Machaca, Comunicación personal, 15 de octubre de 2014). Sin embargo, es evidente que ANAPO valora y alienta la inversión extranjera, especialmente aquella proveniente de Brasil. Según el presidente de ANAPO, Demetrio Pérez, en 2014 la inversión de Brasil, Argentina y otros países ha ayudado y continúa modernizando el sector soyero con nuevas maquinarias, tecnologías de semillas y agroquímicos, experiencia y construcción de carreteras (D. Pérez, Comunicación personal, febrero de 2014). Urioste también señala que “dos de los principales productores brasileños soyeros forman parte de la directiva de ANAPO, a pesar de que esto requiere cambios en los estatutos de la organización” (2012, p. 446). Claramente, la agenda de ANAPO tienen entre sus propósitos el apoyo decidido al desarrollo y expansión de la agroindustria para la exportación, representando

a los agricultores de mediana y gran escala (22 por ciento de las unidades agrícolas) quienes controlan el 90 por ciento del área cultivada de soya (ANAPO, 2011). Urioste también sugiere que existe una aceptación general de la presencia extranjera, especialmente entre las clases medias de Santa Cruz, para asegurar el acceso a “fuentes de capital, tecnología, empleo, negocios, conocimiento del mercado, insumos y semillas genéticamente modificadas” (Urioste, 2012, p. 450).

Esta constatación general es similar a los hallazgos de la investigación en la región de Mackey (2011). Este estudio prioriza a la transferencia de la tecnología brasileña para “fabricar consentimiento” entre los agricultores bolivianos. Al igual que Urioste, Mackey señala el uso de la tecnología como un terreno de legitimación y alianzas informales de clase entre los agroindustriales bolivianos y brasileños, lo que al final condujo a la “extranjerización” de las tierras bajas de Bolivia (2011). Mackey sugiere que es importante considerar la presencia brasileña en Bolivia en términos de las relaciones político-económicas entre ambos países y tener presente que Brasil busca posicionarse como el país hegemónico regional y como alternativa al imperialismo occidental (2011). El papel de Brasil en la producción y consumo de hidrocarburos bolivianos, así como su rol de prestamista líder, principalmente para infraestructura vial, pero también otorgando créditos para maquinaria agrícola, ha consolidado las relaciones bilaterales entre ambos países y ha contribuido a una aceptación general de la presencia brasileña en Bolivia (Mackey, 2011). Según el Coordinador General de Asuntos Económicos de América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Joao Parkinson de Castro, la relación con el actual gobierno boliviano es delicada pero positiva. Son relaciones que buscan “evitar cualquier discurso sobre el imperialismo regional” (Parkinson de Castro, Comunicación personal, 15 de mayo de 2014). El funcionario brasileño señaló también que “la relación económica entre Santa Cruz y Mato Grosso/Mato Grosso do Sul es muy importante, aunque a veces la política de La Paz puede amenazar esta relación, por lo que es importante que nuestro gobierno apoye pero no extienda demasiado su influencia en Bolivia” (*Ibid.*).

Colque (2014), por su parte, revela el funcionamiento de la apropiación de tierras en la frontera agrícola de Santa Cruz, centrándose en la concentración de la riqueza y el poder agrario en manos de élites agroindustriales de Santa Cruz y su capacidad para desafiar y disputar la autoridad del Estado. Este autor rastrea estas relaciones de poder agrario a través de varias etapas de apropiación que datan desde la primera reforma agraria de 1953. La apropiación de tierras, argumenta, ocurre predominantemente a través de acuerdos informales e ilegales que explotan y marginan aún más a los pobres rurales (Colque, 2014)

Redo y otros autores (2011), a su vez, documentan la dinámica de la deforestación en las tierras bajas de Santa Cruz, sugiriendo que “la mayoría (de la deforestación) fue resultado de agricultores y ganaderos brasileños que se trasladan al noreste de la región desde Mato Grosso do Sul” (Redo, Millington y Hindery, 2011, p. 235). Estos estudios, y otros, han sacado a la luz el importante y controversial tema de la presencia extranjera (principalmente brasileña) en las tierras bajas de Bolivia. Está claro que los extranjeros, especialmente los brasileños, llegaron a controlar una parte importante de las tierras agrícolas en Bolivia en las últimas tres décadas. Pero lo que interesa aquí no es solo si los extranjeros controlan grandes parcelas de tierra y cómo lo hacen, sino conocer cómo las nuevas formas y mecanismos de inversión de capital están cambiando las relaciones de producción, propiedad y poder, quién o quiénes se apropian el valor generado por la expansión agroindustrial, y las implicaciones y trayectorias de estos cambios agrarios. Creemos, asimismo, que los cambios en la economía política agraria no se pueden capturar por completo desde la perspectiva de “extranjerización”, así esté presente el capital extranjero. De manera similar, un enfoque excesivamente “centrado en la tierra” puede perder de vista las relaciones de endeudamiento, dependencia y exclusión, en particular cuando el control de la tierra y los recursos cambia sin desplazamientos físicos o sin cambios en los derechos de propiedad.

Igualmente, concentrar la atención en la nacionalidad de los productores puede convertirse en un obstáculo para comprender la natura-

leza, el ritmo y las trayectorias del cambio agrario dentro del contexto más amplio de las nuevas formas y mecanismos de control. Las líneas que distinguen el capital nacional del capital “translatino” se han hecho cada vez más difusas, debido a matrimonios transfronterizos en forma de empresas de riesgo compartido, subsidiarias, sociedades informales, arrendamientos de tierras y financiamientos que hacen cada vez más difícil distinguir entre el capital boliviano y el brasileño. La nacionalidad debe ser central en el análisis si es que conduce a la fuga de capitales, pero no necesariamente si el capital extranjero opera de manera similar a los nacionales. A medida que el origen nacional del capital y la inversión financiera se entrelazan, crece la importancia de revelar las cambiantes relaciones de acceso y control sobre la tierra y los recursos naturales, incluyendo las políticas existentes detrás de estos procesos. Por lo tanto, este libro no analiza los nuevos procesos de reestructuración agraria en Bolivia como formas de “extranjerización”, sino más bien en términos de la lógica del capital y su incesante impulso a la acumulación a través de la reproducción ampliada, la desposesión y la exclusión.

Romper las imaginarias fronteras nacionales y dar primacía a las clases de capital “distinguidas por el interés y las estrategias del capital en actividades y sectores particulares y según escalas local, regional, nacional y transnacionales” (Bernstein, 2010, p. 112) requiere ir más allá de la “extranjerización de la propiedad” para situarse en el “carácter y dirección de los cambios en las relaciones sociales de propiedad” (Borras *et al.*, 2012, p. 864). Estas son las dinámicas que se analizan en los dos municipios del corazón de la zona de expansión sojera en Bolivia: los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián.

### *Cuatro Cañadas*

El municipio de Cuatro Cañadas se fundó en el año 2002, aunque los campesinos de las tierras altas y los menonitas comenzaron a establecerse en la zona desde finales de los años cincuenta. El municipio está ubicado en el corazón de la zona de expansión sojera, a unos 104 kilómetros al este de Santa Cruz, la ciudad más poblada y de mayor crecimiento económico y demográfico de Bolivia. El municipio existe

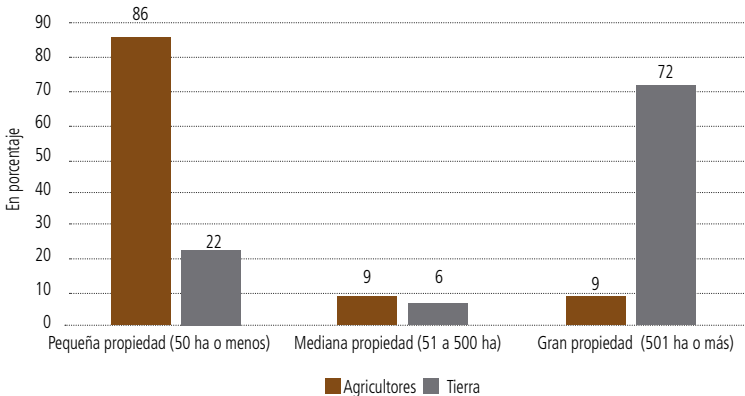
como resultado directo de las políticas de migración planificada y la llegada de los menonitas, quienes establecieron sus colonias como pioneros de la expansión de la frontera agrícola. Si bien los menonitas compraron grandes extensiones de tierra conocidas como “colonias” –que en la actualidad abarcan en promedio 11 mil hectáreas divididas en parcelas familiares de 50 hectáreas–, los campesinos de las tierras altas también recibieron parcelas de hasta 50 hectáreas cada uno. Hoy, Cuatro Cañadas es un territorio sojero por excelencia, pues sus flujos económicos y demográficos tienen correlación directa con el sector. Durante los períodos de cosecha, la zona hierve de actividad con los enormes camiones de carga, tractores y cosechadoras que se mueven de parcela en parcela, de comunidad en comunidad, recogiendo granos de soya para su almacenamiento y procesamiento. El movimiento agitado levanta vastas nubes de polvo que se tragan al paisaje, y los tres hoteles del municipio están repletos y recaudan la mayor parte de sus ingresos anuales en unas pocas semanas de intensa actividad. Con los altos niveles de lluvia de noviembre a marzo, y con una temperatura promedio de 24 grados centígrados, las tierras fértiles de la región producen dos cosechas por año, aunque la época de verano es la más favorable para la soya, mientras que en invierno los productores generalmente cultivan maíz, girasol, sorgo o trigo (Álvarez, 2005; Gobierno Municipal de Cuatro Cañadas, 2008). La precipitación anual para 2013-14 en Cuatro Cañadas fue de solo 773 milímetros, una disminución significativa en comparación con los años anteriores (Álvarez, 2005; ANAPO, 2014). La cosecha total del verano de 2013-14 alcanzó las 245 mil hectáreas cosechadas para obtener 659.050 Toneladas Métricas (TM), lo que llegó a representar el 28 por ciento de la cosecha de soya en Bolivia (ANAPO, 2014). El municipio obtuvo uno de los rendimientos promedio más altos de soya en el país: 2,69 TM/ha, aunque a menudo este alto rendimiento varía drásticamente porque depende de la ubicación geográfica de las parcelas y de los insumos tecnológicos utilizados (ANAPO, 2014). La estructura de tenencia de la tierra para el municipio de Cuatro Cañadas figura en el Gráfico 1.

Cuatro Cañadas tiene 22.845 habitantes, el 52 por ciento son hombres y el 48 por ciento mujeres; el 81 por ciento de estos habitantes



son menores de 40 años (INE, 2012a). De la población económicamente activa (9.604), el 45 por ciento declara que la agricultura es su principal actividad económica, seguida por el comercio, el transporte y los almacenes locales (17 por ciento) y otros servicios no especificados (14 por ciento). Independientemente de la actividad económica, el 38 por ciento de los pobladores de Cuatro Cañadas se autoidentificó como trabajadores y el 39 por ciento como “trabajadores independientes” (INE, 2012a).

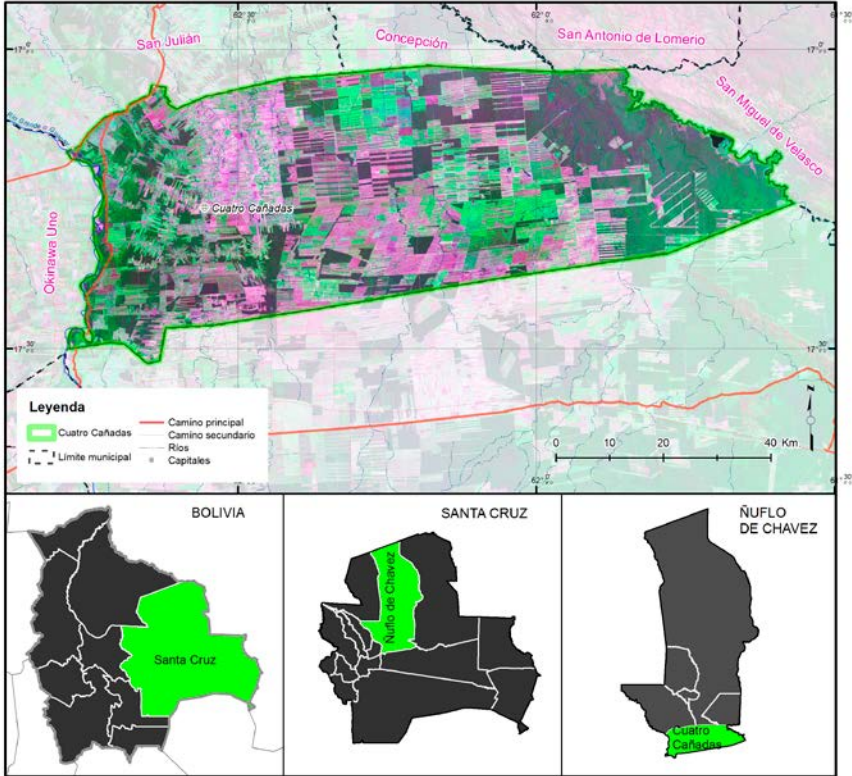
**Gráfico 1**  
**Estructura de la tenencia de la tierra**  
**Cuatro Cañadas**



Fuente: ANAPO, 2014.

El español es la primera lengua del 55 por ciento de la población, seguido de “lenguas extranjeras” (26 por ciento) y quechua (16 por ciento) (INE, 2012a). Esas “lenguas extranjeras” se refieren, principalmente, al Plattdeutsch o alemán bajo menonita (una de las variantes lingüísticas alemanas) y, en menor medida, al portugués brasileño. En cuanto a la pobreza –definida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) como la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas–, esta sigue siendo generalizada y afecta a poco más del 50 por ciento de la población, mientras que el 34,3 por ciento de la misma se encuentra por encima del umbral de pobreza (INE, 2012a). La mayoría de los asentamientos poblacionales en Cuatro Cañadas se encuentran en la parte oeste del municipio.

## Mapa 1 Ubicación del Municipio de Cuatro Cañadas Santa Cruz, Ñuflo de Chávez



Fuente: elaborado por Efraín Tinta Guachalla de la Fundación TIERRA. El mapa se basa en una imagen de satélite que utiliza bandas espectrales Landsat 7 4,3,2 (RGB). El color verde indica vegetación, el verde brillante indica áreas de cultivo y el verde oscuro áreas boscosas. Las áreas de color rosa pálido indican áreas cultivadas intensamente; el color magenta representa suelos con alta humedad y posiblemente con irrigación; y el púrpura oscuro representa áreas cubiertas de agua, ríos y lagunas.

Es en esta zona donde se establecieron los primeros migrantes y desde allí se expandieron hacia las afueras del Río Grande que bordea el municipio. En consecuencia, a medida que la frontera agrícola se expandía hacia el este con la llegada de la agroindustria

brasileña, todo lo que queda al este de la Carretera 9<sup>3</sup> está controlado por menonitas o agricultores a gran escala. Desafortunadamente, la mayoría de los pequeños agricultores ubicados al oeste de la Carretera 9 y alrededores del Río Grande, no solo experimentan bajos rendimientos agrícolas (en promedio 1 TM/ha menos con respecto al oeste) sino que también sufren inundaciones debido a que los bordes fluviales se erosionan cada vez más y las fluctuaciones climáticas se hacen más severas (Álvarez, 2005; Gobierno Municipal de Cuatro Cañadas, 2008; ANAPO, 2014).

### *San Julián*

El municipio de San Julián se estableció como municipio en 1989, aunque al igual que Cuatro Cañadas los asentamientos tienen su origen en décadas anteriores. El municipio, ubicado al noroeste de Cuatro Cañadas, fue una de las primeras zonas de colonización. A diferencia de Cuatro Cañadas, con asentamientos establecidos de manera natural y esporádica, los asentamientos de San Julián son resultado de migraciones planificadas en torno a “núcleos” coordinados por el Instituto Nacional de Colonización (INC) y financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El patrón de asentamiento de un “núcleo” se caracteriza por 40 hogares de colonos, cada uno con parcelas de 50 hectáreas que se irradian desde el centro hacia afuera hasta alcanzar un total de dos mil hectáreas por “núcleo”. Este diseño está orientado a facilitar el establecimiento de vínculos entre las familias de la misma comunidad y así optimizar los costos de provisión de bienes y servicios a sus miembros (Painter y Partridge, 1986, p. 3). Este proyecto de asentamiento comenzó en 1972 aunque la mayoría de los migrantes se establecieron recién en los años ochenta y noventa.

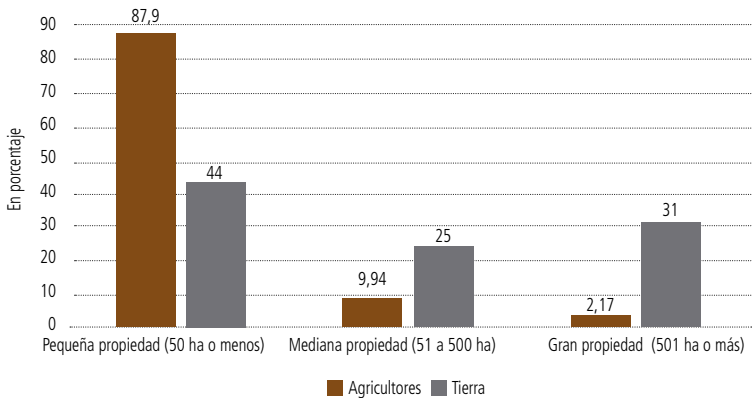
La población actual de San Julián es de 47.416 habitantes y con características demográficas similares a las de Cuatro Cañadas, con

---

3 La Carretera 9 (también llamada Ruta 9), es una carretera interdepartamental que se inicia en la frontera con Argentina, en Yacuiba, y termina en el departamento del Beni, en Puerto Uztare. La vía atraviesa una de las siguientes ciudades y poblados: Yacuiba-Villamontes-Boyuibe-Santa Cruz de la Sierra-Cotoca-Trinidad-Puerto Ustare.

mayor población masculina que femenina (52-48 por ciento) y un 80 por ciento de la población con edades menores a 40 años (INE, 2012a). De la población económicamente activa (19.843), el 47 por ciento indica que la agricultura es su principal actividad económica, seguida por el comercio, el transporte, almacenes locales (17 por ciento) y otros servicios no especificados (14 por ciento). El 83 por ciento de los agricultores son hombres (INE, 2012a). Si bien la estructura de la actividad económica es similar a la de Cuatro Cañadas, San Julián es un municipio mucho mayor denso poblacionalmente y con menores extensiones de tierra cultivable. En el verano de 2013 y 2014, San Julián cultivó 128.000 hectáreas de soya, lo que representa alrededor del 50 por ciento de las tierras cultivadas en Cuatro Cañadas (ANAPO, 2014). La estructura de tenencia de la tierra de San Julián se muestra en el Gráfico 2.

**Gráfico 2**  
**Estructura de la tenencia de la tierra**  
**San Julián**

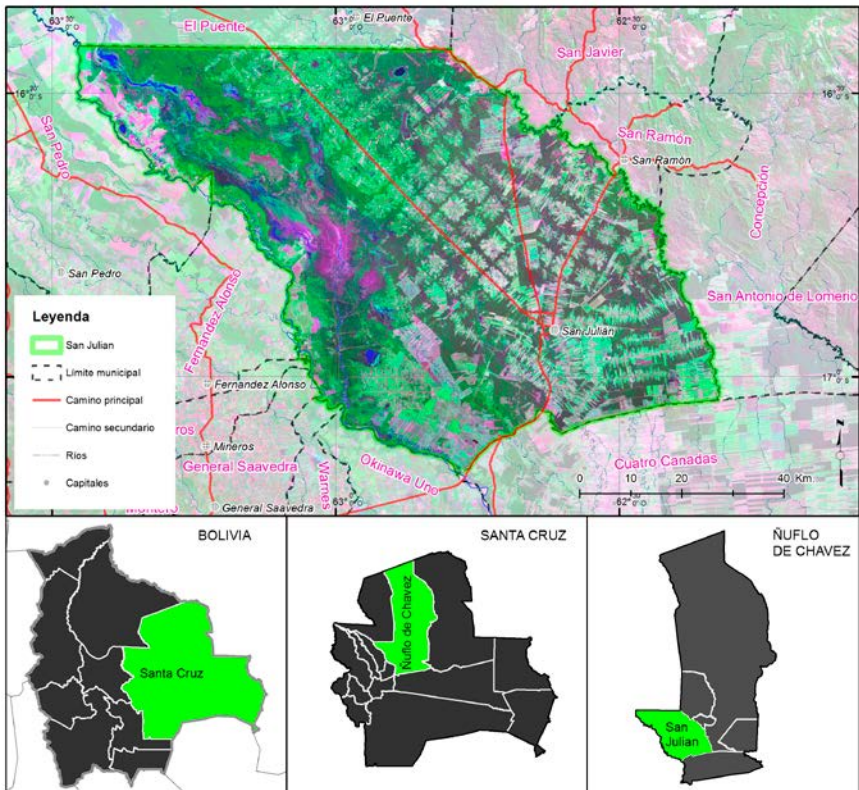


Fuente: ANAPO, 2014.

A diferencia de Cuatro Cañadas, los pequeños productores de San Julián todavía controlan la mayor parte de la tierra. Dos factores interrelacionados pueden explicar esta diferencia clave: la mayor densidad poblacional y el esquema de asentamientos planeados en forma de “núcleos”. En San Julián, zona de asentamientos de campesinos de las tierras altas, el esquema de “núcleos” acabó fortale-

ciendo la cohesión y resiliencia de los agricultores, haciendo más difícil los intentos de apropiación de tierras. Sin embargo, como veremos en los siguientes capítulos, la penetración de la agricultura industrial ha dado lugar a nuevas formas de diferenciación socioeconómica dentro de los “núcleos”.

## Mapa 2 Ubicación del Municipio de San Julián Santa Cruz, Ñuflo de Chávez



Fuente: elaborado por Efraín Tinta Guachalla de Fundación TIERRA. El mapa se basa en una imagen de satélite que utiliza bandas espectrales Landsat 7 4,3,2 (RGB). El verde indica vegetación, el verde brillante muestra áreas de cultivo y el verde oscuro las áreas boscosas. Las áreas de color rosa pálido indican tierras cultivadas intensamente; el magenta representa suelos con alta humedad y posiblemente con riego, y el púrpura oscuro representa áreas cubiertas de agua, ríos y lagunas.

El Mapa 2 muestra la ubicación geográfica de San Julián donde se destacan los núcleos de asentamientos. El oeste de San Julián está bajo riesgo de inundación desde el Río Grande que bordea este municipio y continúa hacia el sur en dirección a Cuatro Cañadas. En las áreas de altos y moderados riesgos de inundación muchas comunidades se han visto forzadas a abandonar sus tierras. Esta llanura con zonas de inundación continúa hacia Cuatro Cañadas, donde se encuentra la mayoría de los propietarios de tierras a pequeña escala.

Estos dos municipios han experimentado una de las tasas más rápidas en el cambio del uso del suelo de las últimas dos décadas y continúan siendo zonas estratégicas para la expansión agroindustrial. De hecho, Cuatro Cañadas y San Julián existen como producto del complejo de soya agroindustrial. Esta región constituye el límite de la frontera agrícola de Santa Cruz, frontera que continúa expandiéndose hacia los territorios indígenas y zonas donde otros pobladores rurales compiten por el acceso a la tierra. Pero estas comunidades no existen en el vacío, por lo que se debe tomar en cuenta en el análisis el contexto de su proximidad geográfica con Brasil y los cambios socioeconómicos y políticos más amplios a nivel nacional, regional e internacional. Por esta razón, mientras en el nivel micro el estudio de caso tiene un valor intrínseco y ofrece especificidad relacional, a nivel macro se utiliza de una manera instrumental para “proporcionar ideas o refinar la explicación teórica, haciéndola más generalizable” (Berg, 2009, p. 326). En otras palabras, en este trabajo se busca extender el análisis desde el nivel micro hacia el nivel macro, lo que nos permitirá extraer ideas desde estos dos estudios de caso para aplicar a una escala mucho mayor. Además, los datos empíricos ayudarán a esclarecer las tendencias generales y actuales de la penetración del capital agroindustrial en el campo.

Usando el enfoque de métodos mixtos y la triangulación de datos, los casos de Cuatro Cañadas y San Julián han permitido perfilar generalizaciones empíricas para entender la realidad de los grandes y pequeños productores integrados al complejo sojero. Las generalizaciones analíticas también se extraen a partir de las tendencias excluyentes y extractivas del complejo sojero y de la penetración

del agro-capital de manera más amplia. Se espera que estas ideas y contribuciones analíticas aporten a una nueva manera de entender las cuestiones agrarias y las políticas de los cambios agrarios que tienen lugar hoy en Bolivia.

## Organización del libro

Este libro consta de siete capítulos, incluyendo esta Introducción y la Conclusión. El primer capítulo analiza el desarrollo del complejo sojero en América Latina, desde la comercialización de semillas transgénicas, agroquímicos y procesamiento, hasta la distribución. Contiene una visión general sobre la emergencia del mercado oligopólico que controla tanto el inicio como el final del proceso productivo y la importancia de Brasil en la adopción, desarrollo y transferencia de sus tecnologías y modelo agroindustrial en toda la región. La combinación de la economía política global cambiante en el sector alimenticio y agrícola, y en el de las innovaciones biotecnológicas, impulsó la expansión de las plantaciones de soya a gran escala, desencadenando una trayectoria de cambios agrarios con importantes implicaciones a largo plazo para el desarrollo agrícola y las relaciones geopolíticas.

El segundo capítulo analiza el desarrollo de la estructura agraria de Bolivia desde una mirada histórica y mediante varias fases de transición desde la Revolución de 1952, la migración, las crisis y las reformas agrarias. La expansión de la frontera agrícola y la llegada de agro-capitalistas brasileños se abordan desde la experiencia de primera mano de algunos de los primeros agricultores brasileños que llegaron a Santa Cruz en la década de los noventa. Las relaciones entre los actores estatales, sociales y capitalistas, y las formas de legitimidad y acumulación que caracterizan estos periodos, se analizan desde la perspectiva de las *políticas de control*. La aparición de nuevos movimientos sociales y el rechazo del neoliberalismo establecieron las condiciones para el ascenso de Evo Morales y el MAS así como del “gobierno de los movimientos sociales”.

En el tercer capítulo se analizan las políticas sobre el cambio agrario durante el gobierno de Morales, desde su “Revolución Agraria” de

2006 hasta la “Revolución Productiva” de 2011. El nexo Estado-sociedad-capital se analiza dentro de este contexto cambiante, argumentando que la alianza capital-Estado se conformó para permitirle al MAS mantener el control sobre el aparato estatal, y al sector agro-capitalista para conservar el control sobre el complejo sojero. Las nuevas formas de exclusión y mecanismos de control que colocan a los pequeños propietarios en posturas contradictorias de clase han empujado a un *‘dualismo funcional’* en el campo obstaculizando la capacidad de los pequeños productores para movilizarse y organizarse como *‘clase para sí’*<sup>4</sup> y por lo tanto obstaculizando su capacidad para hacer escuchar su voz y demandas al Estado.

El cuarto capítulo analiza, desde una mirada macro-global, las formas de apropiación del valor mediante el control de la cadena de valor y las relaciones de endeudamiento y dependencia. Este capítulo revela el limitado valor agregado que se genera en el sector debido a que los insumos agroindustriales se importan desde el exterior y solo se exporta soya semiprocesada para su posterior industrialización en otros lugares. El control concentrado del complejo de oleaginosas limita la competencia y facilita que las corporaciones puedan distorsionar los precios y aumentar su influencia en definir los estándares de calidad y los requisitos de entrada al negocio. Se revelan, asimismo, los arreglos institucionales que rigen el endeudamiento y la dependencia, así como la manera en que erosionan los conocimientos del agricultor local y su capacidad de control del proceso productivo.

El concepto de *‘agro-extractivismo’* se desarrolla en el quinto capítulo. Esta sección revela el carácter extractivo del complejo sojero-agroindustrial. Se exponen cuatro características interrelacionadas del extractivismo agrario en Bolivia: 1) Los grandes volúmenes de materias primas extraídas que se destinan a la exportación, ya sean procesadas o semi-procesadas; 2) La concentración de la cadena de valor y la desarticulación sectorial; 3) La degra-

---

4 El concepto *‘clase para sí’* se refiere al hecho poseer consciencia de clase y actuar como clase.



dación ambiental de alta intensidad; y 4) El deterioro de las oportunidades laborales y/o condiciones laborales. En este capítulo se sostiene que este tipo de desarrollo agroindustrial es paralelo al resto de la economía y constituye un enclave extractivo desconectado de procesos de agregación de valor y de actividades que generan empleo, en gran medida debido a la ausencia de vínculos con el resto de la economía nacional. El concepto de ‘agro-extractivismo’ desafía el discurso que legitima la “agricultura industrial” al argumentar la necesidad de profundizar analíticamente nuestra comprensión sobre la dinámica extractiva de algunas formas de producción agrícola.

La Conclusión que presenta este libro proporciona una síntesis de sus principales hallazgos, incluyendo la utilidad analítica de las *políticas de control*, la creciente influencia de los brasileños en el complejo sojero de Bolivia y la importancia de utilizar herramientas analíticas que giran en torno al acceso, control y exclusión, y no solo el uso de un enfoque que se concentra en los derechos de propiedad. Finalmente, se ponen en discusión las implicaciones del cambio agrario para futuras investigaciones, políticas públicas y agendas de los movimientos sociales.



# Capítulo 1

## El crecimiento del complejo sojero y la “República Unida de la Soya” en América Latina

El desarrollo agroindustrial florece a partir de la lógica que asume que es necesario aumentar la producción de alimentos no solo para los 795 millones de personas desnutridas en la actualidad a nivel global, sino para responder a la demanda de una población en crecimiento que se espera alcanzará los 9.700 millones de personas en el año 2050 (FAO *et al.*, 2015; ONU, 2015). Esta lógica tiene sus raíces en el influyente trabajo del economista y pastor anglicano Thomas Malthus, quien, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, sostuvo que el crecimiento de la población era una de las causas principales de la pobreza debido a que las poblaciones, si no se controlan, crecen en progresión geométrica mientras que los alimentos, dada una cantidad fija de tierras y tecnologías del momento, solo podrían crecer en progresión aritmética. Por tanto, la población tendría una tendencia a crecer más allá de los medios de subsistencia, lo que conllevaría a la escasez de recursos y el aumento de la pobreza y el hambre.

Posteriormente, Ester Boserup (1965) dio la vuelta al argumento de Malthus, afirmando que el crecimiento poblacional era en realidad un catalizador para la innovación, el aumento de la productividad y la creación de riqueza. Las presiones demográficas llevaron al crecimiento agrícola y la innovación porque las personas, siendo activos productivos, aumentan la productividad (Gould, 2009). Y si bien Boserup le dio un vuelco al argumento malthusiano, Marx removió aún más las cosas. Mientras Malthus y Boserup otorgan primacía al crecimiento poblacional como factor determinante para la pobreza y el desarrollo, Marx da mayor preponderancia a las relaciones inherentes al modo de producción. Aunque Marx señala que la cantidad de población variará según las diversas etapas del desarrollo capitalista, esta no es un factor determinante para la pobreza o el

desarrollo. En el capitalismo, la distribución desigual de la plusvalía es la que conduce a la desigualdad, explotación y exclusión de las personas, hechos que a su vez conducen a la pobreza y generan una ‘población excedentaria relativa’ (*relative surplus population*).<sup>1</sup> Por lo tanto, Marx enfatizó que la desigualdad en las relaciones de producción y distribución de recursos en el capitalismo crean las condiciones para la pobreza.

Aunque las innovaciones tecnológicas, particularmente aquellas relacionadas con la Revolución Verde, han demostrado la imprecisión de Malthus de que el crecimiento demográfico superaría el suministro de alimentos, los neomalthusianos siguen equiparando el crecimiento poblacional con la degradación ambiental, el agotamiento de los recursos y la escasez de alimentos (Ehrlich y Ehrlich, 1990, 2012). Ehrlich y Ehrlich (2009, p. 68) sugieren que el tamaño “óptimo” de la población mundial está entre 1.500 a 2.000 millones de personas, debido a que la capacidad de la tierra para producir alimentos es limitada y a que nuestro tamaño poblacional, consumo y habilidades tecnológicas amplían de forma constante la probabilidad de una gran catástrofe. Así, en lugar de focalizarse en la necesidad de transformar las relaciones inherentes al modo dominante de producción capitalista, los neomalthusianos asumen que ello es inevitable y, en consecuencia, enfatizan la importancia del crecimiento poblacional en lugar de abordar el problema de fondo de las causas de la pobreza.

Actualmente producimos suficientes alimentos para alimentar a cerca de 9.500 millones de personas (FAOSTAT, 2016) y, sin embargo, una persona de cada ocho continúa hambrienta, mientras que otros 2.000 millones sufren de sobrepeso y obesidad (FAO, 2015; OMS, 2016). La pobreza y el hambre son problemas estructurales que están relacionados con problemas de acceso, tanto así que producir más alimentos no garantiza que los necesitados tengan un mayor acceso a los mismos. Se estima que un tercio de la producción mundial de alimentos nunca se consume, lo que significa que la atención

---

1 Ver Introducción y Li (2010).

se debe centrar en cómo aumentar el acceso a los alimentos y democratizar los canales de distribución para garantizar que nadie pase hambre (PMA, 2016). Según la FAO, “en los países en desarrollo, un 40 por ciento de las pérdidas [de los alimentos] ocurre en las etapas de poscosecha y procesamiento, mientras que en los países industrializados más del 40 por ciento de las pérdidas se produce a nivel del comercio minorista y del consumidor” (FAO, 2016). La producción de alimentos, al igual que otras formas de creación de riqueza, no “gotea” automáticamente hacia los pobres, sino que depende de quién controla la producción, cómo se organiza el trabajo, cómo se distribuyen los “frutos” y qué se hace con el excedente (Bernstein, 2010). Del mismo modo, las suposiciones neomalthusianas sobre la deforestación y el crecimiento poblacional también fueron refutadas por no tener en cuenta las dinámicas políticas, económicas y sociales subyacentes de las transiciones forestales y por perder de vista que el cambio poblacional es solo una variable que interactúa con “diferentes arreglos institucionales y políticos, formas de valorar la vegetación en ciertos momentos y ecologías dinámicas” (Leach y Fairhead, 2000, p. 39; Hecht, 2014).

Pese a las críticas y a evidencias empíricas, las lógicas neomalthusianas siguen influenciando las políticas nacionales e internacionales. La lógica en que se basan estas políticas supone que el crecimiento en el suministro de alimentos aumentará la disponibilidad y los precios disminuirán, de manera que los alimentos serán así más accesibles para todos. Esas lógicas vaticinan también que la biotecnología disminuirá el uso de agroquímicos y permitirá cultivar en suelos menos fértiles o inadecuados, como el altamente ácido Cerrado brasileño (savana). Para los actores estatales, a su vez, es mucho más difícil transformar las estructuras socioeconómicas existentes en las sociedades capitalistas debido a la influencia política y económica de quienes controlan los medios de producción y los circuitos de distribución. En lugar de abordar el problema de fondo —el que plantea Marx—, los actores estatales están más inclinados a facilitar el crecimiento económico, aumentar la productividad y alentar innovaciones tecnológicas, en combinación con medidas de “control” poblacional tales como la planificación familiar, el control de la natalidad y la educación.

Hay que advertir, además, que la producción agrícola, el comercio y el funcionamiento del sistema alimentario mundial, nunca han sido solo una cuestión de suministro mundial de alimentos. Después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones agroalimentarias estaban reguladas por un conjunto de reglas implícitas y explícitas que estructuraban la “producción y el consumo de alimentos a escala mundial” (Friedmann, 1993, pp. 30-31). El sector agroalimentario se convirtió en un elemento clave durante la posguerra. Estados Unidos, como la nueva superpotencia global, estaba decidido a implementar políticas mercantilistas de comercio agrícola mediante el control de importaciones y subsidios a las exportaciones, rechazando así otras iniciativas multilaterales como la propuesta del Consejo Mundial de Alimentos y la Organización Internacional de Comercio que podrían haber tenido amplio apoyo de los gobiernos de la posguerra (Friedmann, 1993, p. 33). La posición dominante de Estados Unidos en la economía política internacional le permitió fijar las reglas de juego para las políticas agrícolas de comercio internacional. Los precios de apoyo (subsidios) del *New Deal* (Nuevo Trato) para los agricultores norteamericanos se mantuvieron en el período de la posguerra a pesar de haber generado excedentes considerables. Con el mercado estadounidense protegido, otros países también se centraron en desarrollar sus mercados internos.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos utilizó su influencia para canalizar sus excedentes agrícolas hacia otros países a través del Plan Marshal, y más tarde en forma de ayuda alimentaria para el Sur global por medio de la Ley Pública (PL) 480 (Friedmann, 1993). El trigo subsidiado de Estados Unidos llegó a inundar los mercados del Sur global, compitiendo con los productores nacionales y convirtiendo a los países antes autosuficientes en países dependientes de las importaciones estadounidenses. Para los neomalthusianos de este período, “estaba cada vez más claro que el gran desafío era mantener la producción de alimentos per cápita”, lo que provocaba la necesidad de innovación tecnológica para la agricultura (Evenson, 2005, p. 469). Esto impulsó el desarrollo de los llamados Centros Internacionales de Investigación Agrícola (IARC) que luego se reorganizaron como Grupo Consultivo para la Investigación Agrí-

cola Internacional (CGIAR). Los IARC comenzaron a especializarse en cultivos específicos desarrollando bancos de genes y variedades híbridas que desencadenaron la Revolución Verde (Evenson, 2005). Sin embargo, el desarrollo de tecnologías de la Revolución Verde condujo a la industrialización del sector agrícola en la medida en que los insumos naturales fueron absorbidos por los insumos industriales (semillas, agroquímicos, maquinaria), al tiempo que los cultivos pasaron de generar alimentos para el consumo final a generar sustitutos industriales para los productos manufacturados (Goodman, Sorj y Wilkinson, 1987; Friedmann y McMichael, 1989). A medida que la agricultura se industrializaba, también se hizo cada vez más especializada, “vinculada a cadenas de insumos traspasando las fronteras nacionales para producir alimentos comercializados transnacionalmente” (Friedmann y McMichael, 1989, pp. 94-95). Así, los países del Sur global se integraron a los circuitos globales de acumulación de capital en calidad de proveedores de materias primas tropicales de exportación, materias primas que llegaron a ser controladas por grupos oligopólicos de corporaciones agroalimentarias principalmente establecidos en Estados Unidos.

Este proceso, que ya puede nombrarse como complejo agroindustrial, integró cultivos especializados –como la soya y el maíz híbrido– con la producción pecuaria, creando así un complejo aún mayor de carnes-cereales controlado por esas mismas corporaciones agroindustriales. Hasta la década de 1970, Estados Unidos dominaba la producción mundial de soya, pero, como se verá en el siguiente acápite, una serie de crisis y el acuerdo sin precedentes (*détente*) entre Estados Unidos y la Unión Soviética de 1972-73, que derrumbó el muro comercial de la Guerra Fría, sembraron de forma inadvertida las semillas para el surgimiento de la “República de la Soya” en América Latina.

### **El auge de la soya en Brasil y América Latina**

La soya se cultivó por primera vez en Brasil en la década de 1880 y con fines de investigación en la Escuela Agrícola de Bahía y en el Instituto Agronómico de Campinas (IAC), y, más tarde, desde 1900,

en la Escuela de Agronomía de Rio Grande do Sul (William y Aoyagi, 2009). El tratado brasileño-japonés de 1907, a su vez, originó oleadas de inmigrantes japoneses, en su mayoría agricultores y trabajadores rurales asalariados, quienes llevaron semillas de soya de Japón que comenzaron a cultivar para su consumo doméstico. En 1939, el estado más sureño de Brasil, Rio Grande do Sul, producía 40 mil kilogramos de soya de exportación, utilizando como fertilizante verde leguminosas fijadoras de nitrógeno y rotando con el trigo y el maíz para la recuperación de la fertilidad de los suelos (Oliveira, 2016; Shurtleff y Aoyagi, 2009). A medida que el mercado de tierras de Rio Grande do Sul creció rápidamente con la capitalización de cultivos como trigo, soya y arroz durante la década de 1950, los agricultores migraron al norte, hacia Santa Catarina y Paraná, “donde los precios de la tierra eran hasta cuatro veces menores que en Río Grande” (Foweraker, 1981, pp. 68-69).

En 1969, la producción de soya brasileña alcanzó más de un millón de toneladas y en 1971 se creó la Comisión Nacional de Investigación de la Soya en el Ministerio de Agricultura, Comisión que lanzó nuevas variedades de soya (William y Aoyagi, 2009, p. 8; FAOSTAT, 2016). Dos años más tarde, en 1973, se creó la Empresa Brasileña de Investigación Agrícola (EMBRAPA), que poco después sería responsable del “milagro del Cerrado” al transformar esta región de Brasil altamente ácida y deficiente en nutrientes, en un área que hoy en día representa alrededor del 70 por ciento de la producción agrícola total del país (*The Economist*, 2010). Brasil utilizó la soya para alimentar el crecimiento de la ganadería intensiva y, al mismo tiempo, fomentó su procesamiento mediante impuestos a la exportación de la soya no procesada. Brasil comenzó a desarrollar su sector agroindustrial antes de la década de 1970 (Friedmann, 1993, p. 46). Más tarde, los cambios favorables en la economía política internacional consolidaron su trayectoria hacia un nuevo país agrícola.

Durante los años de relaciones constructivas (*détente*) de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los norteamericanos enviaron unos 30 millones de toneladas de granos a la Unión Soviética (1972-1973), “equivalente a tres cuartas partes de todos



los granos comercializados en el mundo” (Friedmann, 1993, p. 40). Este acuerdo comercial sin precedentes, combinado con la mayor demanda internacional de cereales forrajeros y la escasez mundial de proteínas debido a la disminución de la harina de pescado de Perú y de las exportaciones de harina indú y senegalesa, provocó la escasez de granos en los mercados internacionales (Oki, 2008, p. 6).

Como resultado de todos estos hechos, los precios de los alimentos comenzaron a subir, especialmente el de los granos de alto contenido proteínico como la soya, alcanzando niveles récord en 1973. Con el propósito de proteger su industria ganadera doméstica y asegurarse suficientes suministros de granos, Estados Unidos limitó sus exportaciones de soya, cortando así abruptamente el suministro de granos a sus principales socios comerciales en el este de Asia. Japón, por ejemplo, dependía en gran medida de la soya de Estados Unidos con más del 88 por ciento de sus importaciones procedentes de ese país, no solo para alimentación animal, sino también para sus alimentos básicos tradicionales como el tofu, la salsa de soya, el *miso* (pasta de soya), el *natto* (fermentado soya), el *kinako* (harina de soya tostada) y el *aburaage* (tofu rebanado y frito), entre otros alimentos a base de soya (Oki, 2008; Conlon, 2009). Con el fin de reducir su dependencia de la soya norteamericana, Japón buscó que los emergentes nuevos países agrícolas como Brasil diversificaran su oferta sojera, abriendo así un mercado nuevo para la soya brasileña en alza.

La producción de Brasil aumentó casi diez veces entre 1969 y 1975 y se establecieron nuevos centros de investigación de EMBRAPA para su expansión hacia la frontera del Cerrado (Embrapa-Cerrados, est. 1971) y para la producción de soya en suelos ácidos de esta región (Empraba-Soya, est. 1975) (Oliveira, 2016, p. 355). Varios proyectos de asentamientos fueron puestos en marcha en el Cerrado y hacia 1976 se creó el Programa de Cooperación Nipo-Brasileño para el Desarrollo de los Cerrados (PROCEDER) para financiar obras de infraestructura, investigación y mejoras de fincas comerciales en colaboración con otros proyectos nacionales de desarrollo del Cerrado (Jepson, Brannstrom y Filippi, 2010, p. 93). En efecto, esta colaboración entre Brasil y Japón facilitó un mayor acceso al mercado para

la creciente producción de soya de Brasil, que se convirtió en una fuente estable de suministro para la demanda japonesa. Brasil estaba encaminado a convertirse no solo en un nuevo país agrícola, sino en una potencia agrícola mundial impulsada por innovaciones biotecnológicas y nuevas relaciones comerciales con los mercados en crecimiento de Asia oriental que pronto tendrían efectos expansivos en toda la región de América Latina.

A medida que los asentamientos agrícolas se expandieron hacia el Cerrado brasileño en la década de 1990, los subsidios estatales y programas públicos fueron reemplazados por instituciones financieras y crediticias privadas, que junto con las empresas de agronegocios estimularon la producción de soya de exportación agroindustrial (Jepson *et al.*, 2010). La ola de políticas económicas neoliberales se extendió desde finales de los años ochenta hasta principios de la década de 2000, años en los que los flujos de capital internacionales se liberalizaron, se implementaron tipos de cambio flotantes, se flexibilizaron las leyes laborales, se redujeron las restricciones a la importación, se privatizaron los servicios públicos y los estados fomentaron alianzas entre capitales extranjeros y nacionales (Saad, 2010, 2014).

Los aranceles sobre las importaciones de alimentos disminuyeron en toda la región, particularmente en Brasil, donde se redujeron en más del 50 por ciento entre 1984 y 1987, y hasta el 10 por ciento entre 1991 y 1993 (Spoon, 2002, p. 384). El período de estimulación de la producción nacional para la industrialización mediante la política de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) había llegado a su fin, así como el papel de regulador del Estado en la economía nacional. Como dice Spoon, “lo central para el cambio de política fue la reducción del tamaño del Estado, visto como la causa principal de las distorsiones del mercado y fuente de las fallas burocráticas” (Spoon, 2002, p. 385). Estas políticas neoliberales, junto con la comercialización de semillas transgénicas y “paquetes tecnológicos” para la agroindustria, acabaron por integrar a los agricultores a una nueva cadena de valor agroindustrial donde predominan diversos mecanismos de control que conducen a la deuda y a la dependencia

(McMichael, 2013; McKay, 2018). El colapso de varios programas de apoyo público como COOPERCANA<sup>2</sup> “significó que los cooperativistas perdieron vías de acceso simplificado a créditos, [y] a un importante programa que otorgaba descuentos para insumos agrícolas e instalaciones de almacenamiento provocando, por tanto, mayores costos de transacción” (Jepson *et al.*, 2010). Desde el momento de la aceleración de la penetración del capital en el campo, de la mercantilización y el encarecimiento de los insumos agrícolas, los trabajadores rurales se vieron desplazados por la mecanización del agro y su acceso a la tierra se hizo cada vez más difícil. La disminución en el acceso a la tierra y en las oportunidades de trabajo para el campesinado generaron un fenómeno denominado como ‘reproducción simple opresiva’ (*simple reproduction squeeze*), un concepto definido por Bernstein (1979, p. 427) de la siguiente manera:

Lo opresivo dentro de la reproducción simple incluye a los productores que resultan del agotamiento tanto de la tierra como del trabajo debido a las técnicas de cultivo empleadas, a los modelos de “desarrollo” rural que fomentan o imponen medios de producción más caros (semillas mejoradas, herramientas, uso extensivo de fertilizantes, insecticidas, pesticidas, etcétera) y que eliminan la seguridad de rendimientos mayores y proporcionales al trabajo y los costos incurridos, y [cuyo origen se encuentra en el] deterioro de los términos de intercambio para los productos agrícolas de origen campesino.

De manera similar, Cristóbal Kay afirma que “los campesinos se ven afectados por las políticas neoliberales porque, por un lado, no pueden competir con alimentos importados a precios baratos (especialmente si se implementan acuerdos de libre comercio) y, por otro, porque no se benefician de las nuevas oportunidades de exportación debido a que carecen de capital, conocimientos técnicos, habilidades de comercialización, economías a escala, etcétera” (Kay, 2006, p. 464). A pesar de que los Programas de Ajuste Estructural (PAE) prometían mejorar el desempeño del sector agrícola median-

---

2 Fundada en 1963, la Cooperativa de Plantadores de Caña del Oeste del Estado de San Pablo, COOPERCANA, surgió bajo la necesidad de unir a los agricultores de la región en la defensa de sus intereses económicos.

te la liberalización del comercio y la desregulación de mercados – incluyendo el sector financiero y los modelos de privatización–, las evidencias sugieren lo contrario (Spoor, 2002, p. 395). Max Spoor argumenta que las reformas neoliberales condujeron a la agricultura hacia “un camino más inestable y casi volátil” porque el crecimiento económico es, en gran medida, exclusivo del sector de agricultores comerciales que han podido vincularse al capital extranjero, en su mayoría capital transnacional, integrándose en complejos agroindustriales nacionales e internacionales, marginando y excluyendo a los pequeños productores y a campesinos (2002, p. 397). La presión sobre los pequeños agricultores y el campesinado no solo condujo a procesos de diferenciación social en el campo, sino también a una migración generalizada en toda la región.

En los años setenta, los agricultores brasileños –particularmente los de los estados sureños de Rio Grande do Sul y Paraná– fueron afectados por los altos costos de la tierra y de la producción generando el inicio de una importante migración hacia Paraguay y Bolivia, donde las tierras fértiles se podían comprar por una fracción de los precios vigentes en Brasil (Nickson, 1981; Urioste, 2001, 2012; Marques, 2010). A mediados de los años ochenta, Bolivia adoptó las políticas neoliberales y abrió sus fronteras agrícolas a menonitas, brasileños y bolivianos que colonizaron las tierras bajas de Santa Cruz. La expansión sojera se consolidó particularmente a partir de mediados de la década de 1990, cuando las nuevas biotecnologías y el capital agroindustrial provocaron el aumento del número de tierras bajo cultivo a más de 21 millones de hectáreas en toda la región, es decir, el 114 por ciento entre 1995 y 2005 (FAOSTAT, 2016).

A mediados de la década de 2000, los agricultores de origen brasileño llegaron a controlar entre el 40 y el 50 por ciento de las tierras de soya de Bolivia y Paraguay (Galeano, 2012; Urioste, 2012). Los precios de la soya estaban en auge, las fronteras agrícolas en expansión, y las nuevas relaciones agrarias comenzaron a tomar forma. La propiedad formal de la tierra mediante derechos de propiedad privada se convirtió en un mecanismo más de control, a medida que las cadenas de valor agroindustriales comenzaron a expandirse en toda la

región. Los derechos de propiedad mantienen su importancia, pero los nuevos mecanismos de control crearon las condiciones para que los capitalistas capturen la mayor parte de los beneficios de la tierra, el trabajo y el capital. La llamada ‘extranjerización’ en referencia a los agrocapitalistas brasileños expandiendo su control sobre la región, en realidad se trata de formas cambiantes en las relaciones de producción, más que el hecho innegable de que son extranjeros o brasileños. Es la expansión del capital hacia las fronteras “subcapitalizadas” o territorios nuevos donde más plusvalía puede extraerse y apropiarse. El simple hecho de que los agrocapitalistas sean extranjeros no revela nada acerca de los cambios en las formas o relaciones de producción, propiedad y poder. Más allá de la perspectiva de los derechos de propiedad y nacionalidad, este estudio analiza la “constelación de medios, relaciones y procesos que permiten a diversos actores obtener beneficios de los recursos” (Ribot y Peluso, 2003, p. 153).

El complejo agroindustrial sojero ha introducido una variedad de arreglos institucionales que permiten a algunos actores obtener beneficios de los recursos naturales y productivos, al tiempo que excluyen a otros actores, independientemente de la propiedad de la tierra. Estos arreglos incluyen modalidades como la *agricultura por contrato* (Wesz Jr, 2016), arrendamiento de tierras a pequeña escala o “partida” (McKay y Colque, 2016), “pools de siembra” (Craviotti, 2016) y varias combinaciones usadas entre los agricultores y la agroindustria. El siguiente acápite aborda la cuestión de qué significa el complejo agroindustrial sojero boliviano, su proceso de formación y cómo transformó la agricultura.

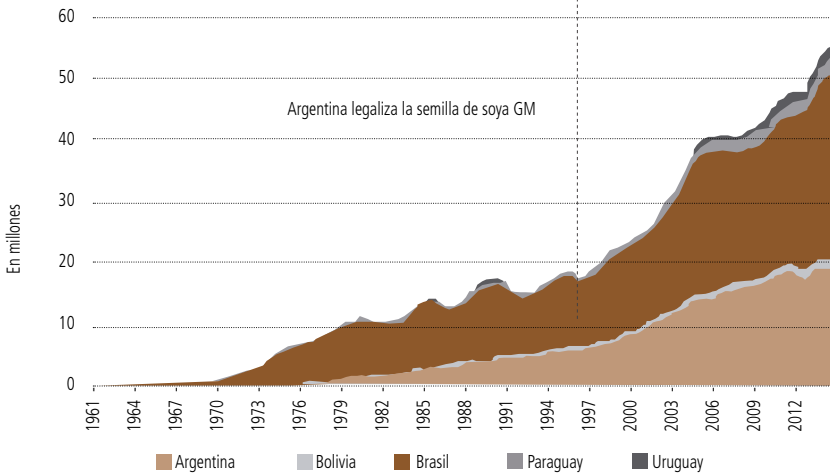
## **El complejo agroindustrial sojero**

### ***Mercantilización y concentración de los insumos agrícolas (semillas, agroquímicos y maquinaria)***

En 2003, la transnacional Syngenta lanzó una campaña publicitaria mostrando un mapa de la “República Unida de la Soya” que cruza Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, con el lema “la soya no conoce fronteras”. La imagen no podría haber sido más clara: el

agronegocio transnacional expandiendo su control territorial sobre América Latina. De hecho, entre 2003 y 2005, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay legalizaron varias variedades de semillas transgénicas (Genéticamente Modificadas, GM) que ya habían sido introducidas por contrabando desde Argentina, país que legalizó las GM en 1996 (Oliveira y Hecht, 2016, p. 254). Esto marcó oficialmente el inicio de un ciclo económico y tecnológico en el que los agricultores se hacen cada vez más dependientes de “paquetes tecnológicos” y semillas patentadas de alto rendimiento y, a la vez, se ven expuestos a crecientes costos de producción. Tras la legalización de semillas transgénicas en Argentina, las plantaciones de soya en el Cono Sur comenzaron a expandirse rápidamente pasando de 17,5 millones de hectáreas en 1996 a 55,7 millones en 2014, convirtiéndose en el cultivo más importante en términos de superficie y valor de exportación en la llamada “República de la soya” (FAOSTAT, 2016).

**Gráfico 3**  
**Superficie cultivada de soya**  
**“República Unida de Soya”**



Fuente: FAOSTAT, 2016.

Las fronteras agrícolas se expandieron hacia “nuevos” y “sub-utilizados” sistemas agroecológicos como el Cerrado brasileño, la Pampa argentina y las tierras bajas de Bolivia. La deforestación generalizada avanzó en paralelo hacia la Amazonía y el Bosque Atlántico, el Gran Chaco y el Bosque Chiquitano, ecosistemas importantes que cruzan fronteras territoriales de la región (Hecht, 2005; WWF, 2014).

La “tropicalización” y comercialización de semillas de soya transgénica fue un éxito para la industria de la biotecnología convirtiéndose en un cultivo caracterizado como “neo-natural”, “apropiado para la siembra y cosecha mecanizada, adaptado a fotoperiodos de larga duración y temperaturas más altas, y capaz de crecer en suelos más ácidos y bajos en fósforo en comparación con las tierras templadas de China, Estados Unidos y Ucrania” (Oliveira y Hecht, 2016, p. 253). Hoy, la soya transgénica representa entre el 88 por ciento y el 99 por ciento del total de este cultivo en la región, y el 83 por ciento a nivel mundial (WWF, 2014; James, 2015). La semilla transgénica, que es resistente al herbicida glifosato, permite a los agricultores usar este agroquímico en los sistemas de siembra directa para matar las malezas o malas hierbas que afectan el crecimiento de la planta. En teoría, se supone que el uso de glifosato reemplaza a herbicidas más tóxicos y, por lo tanto, reduce los volúmenes necesarios para la fumigación (Cerdeira, Gazziero, Duke y Matallo, 2011). Sin embargo, los estudios realizados por EMBRAPA de Brasil y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, develaron que la persistente aplicación de glifosato en los monocultivos de siembra directa de semillas transgénicas provoca la aparición de varias especies de malezas que se han hecho resistentes a este herbicida (Cerdeira *et al.*, 2011; Papa y Tuesca, 2014). Esto ha creado no solamente un “vínculo directo entre los cultivos de soya transgénica y el crecimiento en el uso de herbicidas”, sino que ha provocado aumentos drásticos en el volumen y tipos de herbicidas utilizados en las tierras con plantaciones de soya (Catacora-Vargas *et al.*, 2012). La combinación de monocultivos, la dependencia excesiva del glifosato y el descuido de otras medidas de control de malezas, han provocado lo que la Unión de Científicos Preocupados (*Union of Concerned Scientists*, UCS) denomina “el auge de las supermalezas” (USC, 2013). Estas “superma-

lezas” resistentes al herbicida han afectado cerca de 24,3 millones de hectáreas de tierras cultivadas en Estados Unidos y han generado el incremento en el volumen y nivel de toxicidad de herbicidas y pesticidas, lo que contradice la lógica original del uso de semillas transgénicas (USC, 2013). Esta carrera sin fin en el uso de más pesticidas (Nicholls y Altieri, 1997) no solo aumentó los costos de producción para los productores, sino que introdujo nuevos agroquímicos tales como el 2,4D, la Atrazina y el Paraquat, este último prohibido por la Unión Europea debido a los altos niveles de toxicidad que provoca y su conexión con trastornos neurológicos y reproductivos (Catacora-Vargas *et al.*, 2012, p. 33). Sin embargo, para compañías como Syngenta, desarrollador de uno de los herbicidas más utilizados con base en Paraquat, conocido como Gramoxome, la evolución de las “supermalezas” y el aumento en el uso de agroquímicos significan un continuo aumento de sus ganancias.

La transformación industrial de la agricultura –al inicio vía mecanización, que redujo la necesidad de mano de obra, después mediante la diseminación de semillas híbridas y genéticamente modificadas, y al final a través de la dependencia de los agroquímicos– “ha llevado a una serie de apropiaciones parciales y discontinuas del trabajo rural y de los procesos de producción biológica” (Goodman *et al.*, 1987, p. 2). Esto es lo que Goodman, Sorj y Wilkinson llaman ‘apropiacionismo’ y que “está constituido por la acción de los capitales industriales para reducir la importancia de la naturaleza en la producción rural y, específicamente (controlar) una fuerza (la naturaleza) más allá de su dirección y control (de las agro-industriales)” (Goodman *et al.*, 1987, p.3). Con agricultores cada vez más dependientes de semillas transgénicas, agroquímicos y maquinaria, el capital industrial ha penetrado en la agricultura eliminando parcialmente su base material y parte del proceso de producción natural, proceso considerado incompatible con la acumulación de capital (Goodman *et al.*, 1987, p.156).

La industria no solo ha transformado la producción agrícola en cuanto a su forma técnica, sino que también reconfiguró las relaciones y formas de apropiación del proceso productivo. Esto ha tenido lugar a través de nuevas formas de control de la cadena de valor y de la



tierra que excluyen a las mayorías rurales y extraen valor de la naturaleza y del proceso productivo. Una de las principales formas de control se ha dado a través de la concentración del mercado y consolidación de empresas de semillas y productos químicos, lo que ha conducido a la formación de un mercado oligopólico ampliamente controlado a nivel global por los *Seis Grandes*: Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow Chemical, BASF y Dupont. Estas empresas controlan el 75 por ciento del mercado mundial de agroquímicos, el 63 por ciento del mercado de semillas comerciales y más del 75 por ciento de la investigación sobre semillas y pesticidas del sector privado (Grupo ETC, 2015, p. 4). Además, solo tres de estas compañías (Syngenta, Bayer, BASF) controlan el 49 por ciento del mercado global de agroquímicos, mientras que Monsanto, DuPont y Syngenta controlan el 45 por ciento del mercado mundial de semillas (Grupo ETC, 2015). Hasta la década de 1970, estos mercados todavía estaban dominados por miles de pequeñas empresas del sector, en su mayoría empresas de propiedad familiar (Howard, 2015).

La protección de la propiedad intelectual sobre los organismos vivos se inició entre los años 1970 y 1980, incluyendo la protección completa de patentes sobre semillas transgénicas. Este cambio legal atrajo a grandes empresas que rápidamente comenzaron a comprar “cientos de hasta entonces independientes compañías de biotecnología y semillas” y, hacia el final, se fusionaron para crear los *Seis Grandes* (Howard, 2015). La mercantilización de la semilla –que Kloppenburg llama el “nexo biológico de la producción a nivel de la finca”– fue el cambio clave para los intereses privados de acumulación (Kloppenbug, 2004, p. 37). Sin la innovación científica (Investigación y Desarrollo I+D) y la introducción de nuevas legislaciones, esto nunca hubiera sido posible. La nueva legislación separó al agricultor de la reproducción de la semilla, esto es, de los medios agrícolas de producción. Adicionalmente, tal como argumentan Newell y Glover, la industria biotecnológica y el Estado no solo comparten intereses mutuos para la innovación y crecimiento, sino que “también hay evidencias sobre la existencia de ‘puertas giratorias’ entre la industria biotecnológica y las agencias de gobierno” (Newell y Glover, 2003, p. 12). Estos intereses mutuos, la política de “puertas giratorias” y los poderosos grupos de presión de

las multinacionales como Monsanto, explican en gran medida las razones por las que se aprobaron nuevos marcos legales.

A medida que la semilla se mercantilizó, lo mismo sucedió con la investigación agrícola. En la década de los noventa, la industria privada comenzó a reclutar científicos de élite y a conformar asociaciones estratégicas con universidades públicas. En 1998, por ejemplo, Novartis (ahora Syngenta) firmó un acuerdo de colaboración con el Departamento de Biología Vegetal y Microbiana de la Universidad de California Berkeley, cediendo a Berkeley USD 25 millones y acceso a la base de datos de genomas de Novartis a cambio de un puesto en los comités departamentales y el derecho preferencial a negociar licencias de patentes para descubrimientos seleccionados (Kloppenbug, 2004, p. 329).

A medida que los cultivos transgénicos se mercantizaron y mientras cada vez más países legalizaron las variedades transgénicas, el mercado de semillas se consolidó todavía más. Una prueba de ello es la adquisición de casi 200 empresas de semillas por parte de las diez principales empresas entre los años 1996 y 2013 (Howard, 2015). Con el oligopolio del mercado de semillas, los *Seis Grandes* participan ahora en acuerdos de licencias cruzadas, un efecto “similar a la formación de un monopolio o cártel compartido para excluir a otros competidores potenciales” (Howard, 2015). Pero más que la mercantilización material y el control de los insumos agrícolas, los *Seis Grandes* controlan el acceso a la información y a las innovaciones. En conjunto, sus presupuestos para investigación y desarrollo (I+D) son 20 veces mayores en que los del consorcio del Grupo Consultivo Internacional sobre la Investigación Agrícola (GCIAR) y 15 veces mayores que el presupuesto del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para la investigación en ciencias de cultivos, otorgándole así, al grupo oligopólico de los *Seis Grandes*, un control significativo sobre la industria de I+D agrícola (Grupo ETC, 2015).

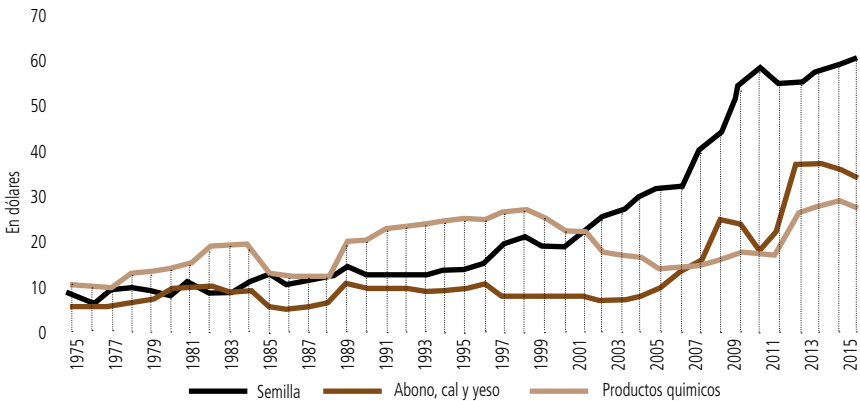
Como argumenta Kloppenbug, la investigación agrícola ha sido “un medio importante para eliminar las barreras a la penetración

del capital dentro de la agricultura” mediante la mercantilización de los insumos agrícolas y el desplazamiento de las actividades productivas desde la granja hacia el entorno industrial (Kloppenborg, 2004, p. 10). Si bien las innovaciones agrícolas son ciertamente importantes, se tornan problemáticas cuando un pequeño grupo dicta la agenda de investigación y define qué tecnologías y qué productos relacionados deberían estar disponibles en el mercado (Miller y Conko, 2001). Con una gran influencia y control sobre la agenda de investigación agrícola, los *Seis Grandes* pueden invertir en dar forma técnica a la agricultura mediante continuas “innovaciones” que requieren sus “paquetes tecnológicos” completos de semillas patentadas, insumos agroquímicos y acceso a la mecanización avanzada. Este control sobre la producción de información y conocimiento representa el poder que la agroindustria tiene sobre las ideas, la innovación tecnológica y, en última instancia, la autoridad que posee sobre los términos en que tiene lugar la producción agrícola moderna.

Completando este monopolio de los insumos agrícolas, solo tres compañías de equipos agrícolas –Deere & Co. (John Deere), CNH (New Holland) y AGCO– facturaron el 49 por ciento de las ventas globales de equipos agrícolas en 2013, lo que significó alrededor de USD 116 mil millones (Grupo ETC, 2015). Estas empresas de equipos están colaborando con los *Seis Grandes* en el desarrollo de plataformas digitales como *Precision Planting* y *Climate FieldView*, que le dan a la industria el control sobre todas las decisiones, desde cultivos hasta semillas y agroquímicos (Grupo ETC, 2015). Este tipo de integración permite a las multinacionales tener mayor control sobre los agricultores, el proceso de producción, e incluso sobre los ciclos biológicos naturales del crecimiento de las plantas. También suprime el valor del conocimiento del agricultor, ya que los “paquetes tecnológicos” dictan ahora los términos y la duración de la producción. Los economistas institucionales sugieren que “cuando cuatro empresas controlan entre el 40 y el 50 por ciento de un mercado, este ya no es competitivo debido a que basta que las empresas dominantes muestren su intención de aumentar los precios para las otras empresas sigan su ejemplo” (Howard, 2015, p. 3). Estas empresas no solo pisotean a los competidores menos capitalizados, sino que crean un oligopolio con control y poder concentrados.

La industria ha mercantilizado y se ha apropiado de los insumos de la producción agrícola –desde maquinaria, fertilizantes, semillas, agroquímicos y biotecnologías hasta la generación de conocimiento (I+D)– reduciendo, vía ‘apropiaciónismo’, la importancia de la naturaleza en el proceso de producción rural (Goodman *et al.*, 1987). Al hacerlo, disminuyó la importancia relativa de la base material de la agricultura porque la industria puede apropiarse del valor excedente a partir de los insumos y procesos agroindustriales, más que mediante el proceso de producción agrícola en sí mismo. Incluso el control de la tierra se convierte en un control secundario si la industria puede controlar los insumos (*upstream*) y la producción final (*downstream*) forzando a los agricultores a comprar sus insumos con valor agregado y vender su producto primario final en el mercado oligopólico. Este poder de mercado tan concentrado, los costos de los insumos agrícolas, y especialmente de las semillas de soya, han aumentado considerablemente, tal como se muestra en el Gráfico 4.

**Gráfico 4**  
**Costos de producción de soya en Estados Unidos**  
**Por acre de soya cultivada y en USD**



Fuente: USDA-ERS, 2016.

### ***Control, sustitucionismo y uso flexible de la producción primaria***

El control de la agroindustria no se limita a los componentes relacionados con los insumos agrícolas. El control sobre los componentes finales, es decir, sobre la cosecha, su almacenamiento, procesamiento, envasado, transporte y distribución, es todavía más concentrado. Las conocidas compañías de agronegocios ABCD (ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus) controlan un estimado de entre el 75 y el 90 por ciento del comercio mundial de granos (Wesz Jr, 2016, p. 294). Este tipo de poder de mercado oligopólico obstaculiza la competencia y puede conducir a la fijación de precios monopólicos, como ocurrió en la década de 1990, cuando ADM recibió una multa de más de USD 100 millones por haberse colusionado con otras compañías para aumentar los precios de la lisina y el ácido cítrico (Murphy, Burch y Clapp, 2012).

En el Cono Sur de América Latina, la presencia de las compañías ABCD comenzó a ganar prominencia en el complejo sojero a mediados de la década de 1990, con la apertura a la economía global, el inicio de las políticas neoliberales, la comercialización de semillas transgénicas y la expansión de las fronteras agrícolas de la región. Esa prominencia se produjo, principalmente, a través fusiones y adquisiciones: las ABCD expandieron su control sobre la soya de la región desde el 10 por ciento de la capacidad de trituración de granos en 1995 hasta más del 50 por ciento en 2011 (Wesz Jr, 2016, pp. 294-295). Mediante la integración vertical y, a veces, colaborando con los *Seis Grandes*, las compañías ABCD se integraron a las diferentes etapas del proceso productivo, como la venta de insumos, planes de financiamiento y seguros agrícolas, asistencia técnica, compra, almacenamiento, procesamiento, transporte y comercio (Wesz Jr, 2016). Y no solo se produce la integración vertical, sino que estas compañías se están expandiendo cada vez más de forma horizontal hacia mercados complementarios como el sector energético, la producción de materiales industriales y las finanzas.

Los usos múltiples y flexibles de los cultivos agroindustriales para la alimentación animal, la comida, los combustibles y procesos in-

dustriales, también facilitaron la integración de estas empresas a diferentes sectores (Borras, Franco, Isakson, Levidow y Vervest, 2016). Con solo el seis por ciento de la cosecha mundial de soya utilizada directamente como alimento humano sin procesamiento industrial, este grano se ha convertido en el cultivo flexible agroindustrial por excelencia (Oliveira y Schneider, 2016). Aproximadamente el 85 por ciento de la producción mundial de soya se procesa como harina y aceite: el 98 por ciento de esa harina es utilizada para la alimentación animal, y el 95 por ciento de ese aceite se utiliza como aceite comestible (Soyatech, 2016). El resto de la harina se procesa como harina de soya y proteína, mientras que el resto del aceite se utiliza como insumo industrial para fabricar productos como jabones, biodiesel y ácidos grasos, entre muchos otros (Soyatech, 2016; Oliveira y Schneider, 2016).

Con sus usos múltiples y flexibles, la industria se especializa en dividir el grano en sus diversos componentes, a modo de insumos industriales que hacen que el procesamiento industrial sea prácticamente una necesidad para el consumo final. Esto es similar a lo que Goodman y otros autores (1987) llaman 'sustitucionismo', un concepto que explica cómo "la industria alimentaria interpone el procesamiento industrial mecanizado y la fabricación entre la fuente de producción en el campo y el consumo final. Una vez que se hubiera dado este paso, la forma rural de la mercancía y sus componentes podría modificarse y oscurecerse, facilitando su tratamiento y presentación como un producto industrial" (Goodman *et al.*, 1987, p. 60). Goodman y otros autores conciben el 'sustitucionismo' como la tendencia a reducir el producto rural a un simple insumo industrial, abriendo así el camino a la eliminación del procesamiento de la producción rural, ya sea utilizando materias primas no agrícolas o creando sustitutos industriales para alimentos y fibras (Goodman *et al.*, 1987, p. 58). Pero, en lugar de utilizar las materias primas no agrícolas o crear sustitutos industriales para los alimentos, los cultivos como la soya se están utilizando cada vez más para la sustitución de insumos industriales como plásticos, adhesivos, agentes anticorrosivos, aceite hidráulico, grasa, tinta, pinturas, cosméticos, emulsiones asfálticas, poliésteres y tableros de partículas entre mu-

chos otros productos (Pederson, 2007). El ‘sustitucionismo’ y el uso flexible representan las formas en que el capital ha penetrado en la agricultura al reducir la cosecha a tan solo otro insumo industrial.

La industrialización del agro se ha intensificado aún más mediante la ‘financiarización’ de la tierra y la agricultura, ya que tanto los actores nuevos como los antiguos participan de forma creciente en la especulación y operaciones financieras. Precisamente, y tras la crisis financiera de 2007 y 2008, y el posterior aumento de los precios de los alimentos en 2008, los inversores comenzaron a fijarse en las tierras agrícolas como una alternativa segura de inversión –a modo de seguro de cobertura contra la inflación– y una excelente forma de reducir riesgos a través de la diversificación (Fairbairn, 2014, p. 778).

A medida que las tierras de cultivo se convierten en un activo financiero para los “inversores”, “especuladores” y para el propio sector de agronegocios, también mantienen su capacidad productiva como valor de uso. Esta “naturaleza dual” de las tierras de cultivo, como lo señala Fairbairn, permite “utilizar la tierra de forma productiva y a la vez de forma especulativa sobre los beneficios financieros apreciados” (Fairbairn, 2014). La ‘financiarización’ de la agricultura, incluyendo las divisiones de servicios financieros de las ABCD, ha vinculado intrincadamente las finanzas, los alimentos y la agricultura debido a la desregulación financiera y a los nuevos tipos de derivados que agrupan una variedad de productos agrícolas no alimentarios, permitiendo a los inversores influir significativamente sobre los precios de los alimentos y la tierra (Murphy *et al.*, 2012). Esto no solo ha reforzado las relaciones desiguales de poder existentes entre los agricultores, los agronegocios y los nuevos actores financieros alejados de la producción, sino que ha llevado a una mayor volatilidad de los precios de los alimentos en los mercados internacionales (Isakson, 2014).

A medida que los insumos y productos agrícolas están cada vez más controlados por unas pocas corporaciones multinacionales y el capital continúa su penetración en la agricultura a través del ‘apropiacionismo’, el ‘sustitucionismo’, la ‘flexibilización’ y la ‘fi-

nanciarización', surgen implicaciones importantes para las poblaciones rurales, especialmente para los pequeños agricultores y el medioambiente. La agroindustria integra a los agricultores a sus cadenas de valor, de modo que al inicio del proceso productivo están obligados a usar (y comprar) ciertas semillas e insumos químicos para cumplir con los requisitos estandarizados de los mercados agrícolas controlados por el mismo grupo oligopólico. Estos nuevos arreglos institucionales empujan a los agricultores a ciclos de deudas y dependencias, alterando su relación con la tierra y el acceso a otros factores de producción a través de formas más sutiles que la desposesión física o el desplazamiento. En lugar de la proletarianización total de los agricultores, ellos tienden a entrar progresivamente en contradictorias posiciones de clase, entre el trabajo y el capital, lo que obstaculiza su capacidad para organizarse como clase y presionar desde abajo para mejorar su posición socioeconómica dentro de la sociedad.

### *Capital latinoamericano, "pools de siembra" y agricultura por contrato*

Aunque sabemos que las transnacionales ABCD expandieron su control sobre el complejo sojero del Cono Sur, no podemos descartar la influencia de los actores regionales del mismo sector en los procesos que discutimos. Muchos terratenientes y empresarios brasileños y argentinos han desarrollado los llamados pools de siembra cuyo propósito es el de aumentar su poder de negociación a través de empresas administradoras de fincas que reúnen recursos para lograr economías de escala mediante compras de insumos, acceso a las instalaciones de almacenamiento y procesamiento. De esta manera, las empresas de agronegocios brasileñas y argentinas, como Cresud-Brasilago, Amaggi-Bom Futuro, Adecoagro, SLC Agrícola, El Tejar, TIAA-CREF Global Agriculture, V-Agro, MSU y Los Grobos, lograron expandirse con éxito a lo largo del Cono Sur y establecerse como parte de los actores principales entre las compañías ABCD (Oliveira y Hecht, 2016). Revisten una importancia particular dos de los terratenientes más grandes de la región: Blairo Maggi, propietario de Amaggi-Bom Futuro de Brasil, y Gustavo Grobocopatel,



propietario de Los Grobo de Argentina. Estos agroempresarios han sido pioneros del complejo sojero de la región, desarrollando y expandiendo sus empresas tanto en el suministro de insumos como en el mercado de granos, junto con las compañías ABCD. Adicionalmente, Amaggi-Bom Futuro también participa en operaciones conjuntas con Bunge y Louis Dreyfus (Oliveira y Hecht, 2016, pp. 261-264). Los pools de siembra representan nuevos acuerdos contractuales que combinan tierra, capital y recursos humanos a través de diferentes escalas, niveles y actores. El modelo fue desarrollado en Argentina a fines de la década de 1980 por la familia Alvarado (El Tejar) y la familia Grobocopatel (Los Grobo), quienes poseen y alquilan alrededor de 1,4 millones de hectáreas y 420 mil hectáreas, respectivamente, en todo el Cono Sur (Oliveira y Hecht, 2016, pp. 262-264). Los pools de siembra pueden referirse a una variedad de “arreglos innovadores” que incluyen el “arrendamiento o disposición de propiedades en fideicomiso, contratación de maquinaria y servicios, uso de paquetes tecnológicos basados en maquinarias modernas, uso de biotecnología y agroquímicos a gran escala e incorporación de sistemas digitales y especialistas en la selección de campos, producción, gestión y comercialización” (Murmis y Murmis, 2012, p. 491). La ‘financiarización’ creciente de la tierra y la agricultura y la convergencia de sectores cada vez más integrados en las cadenas de valor agroindustriales han hecho que los pools de siembra sean mucho más complejos e involucren a una variedad de inversionistas alejados del proceso productivo. En Argentina, Murmis y Murmis (2012, p. 501) sostienen que la expansión de los pools de siembra tiende a conducir a la concentración de la tierra a medida que las grandes propiedades desplazan a las propiedades más pequeñas. Dado que las economías de escala aumentaron en importancia con el desarrollo de las formas de producción agroindustrial intensivas en capital, los mecanismos de mercado favorecen la producción a gran escala, presionando a los productores pequeños a vender o arrendar sus tierras. Una dinámica similar se observa en la región Pampa de Argentina donde la expansión de pools de siembra “está conectada con la desaparición de los agricultores familiares que ahora alquilan la tierra que antes trabajaban ellos mismos” (Gras, 2009, p. 353).

Si bien los pools de siembra también echaron raíces en Paraguay y Uruguay, los arriendos y compras individuales son mucho más comunes. La concentración de la tierra se produce mediante a) la fusión de compras sucesivas en un área determinada, b) el endeudamiento de los agricultores pobres debido a las exigencias intensivas de capital para la producción de soya y c) el desplazamiento forzoso por violencia o contaminación de suelos (Galeano, 2012; Elgert, 2015; Ezquerro-Cañete, 2016). En Paraguay, el capital brasileño ha llegado a dominar la producción soyera, y tiene su origen en las migraciones transfronterizas de la década de 1970 y, más recientemente, por la expansión agroindustrial (Galeano, 2012). Según Galeano (2012, 463), “los brasileños son primeros en términos de la cantidad de tierras que poseen y en términos del número de regiones donde invirtieron en los últimos años (2006-2010)”, mientras que Wesz (2016, p. 289) encontró que “el 90 por ciento de la soya paraguaya es producida por brasileños o sus descendientes”. En Uruguay, el arrendamiento y la compra de tierras también han aumentado sustancialmente en los últimos años. Entre los años 2000 y 2010, la compra de tierras alcanzó el 39 por ciento del área agrícola del país (aproximadamente 6,4 millones de hectáreas), mientras que el 45 por ciento (aproximadamente 7,3 millones de hectáreas) fue arrendado, principalmente, por compañías multinacionales, fondos de inversión y también por empresas argentinas, brasileñas y nacionales (Piñeiro, 2012, pp. 483-485). Piñeiro explica cómo la combinación de compras y arriendos es cada vez más común, particularmente entre las compañías argentinas que “compran una extensión de tierra, establecen una base de operaciones y maquinarias, y arriendan las tierras circundantes para expandir la producción. Esta estrategia reduce la inversión de capital en compra de tierra, pero asegura el control de un área cada vez mas grande” (Piñeiro, 2012, p. 484).

Ahora, la *agricultura por contrato* es la modalidad más común entre los productores de la tierra, particularmente entre los medianos y grandes propietarios que poseen maquinaria agrícola como tractores y cosechadoras. Estos agricultores ricos en capital tienden a arrendar la tierra de otros o alquilar sus servicios (siembra, fumigación, cosecha) a los agricultores con pocos recursos. Muchos de

estos agricultores están asociados para reunir recursos y alcanzar economías a escala o negociar con proveedores de insumos, procesadores y comerciantes; es una especie de *pool* de siembra pero basado en cooperativas a pequeña escala. De hecho, incluso los *pools* de siembra a gran escala son una forma de *agricultura por contrato* entre inversores, varios agricultores y empresas de agronegocios. Sin embargo, aquí entendemos por *agricultura por contrato* los contratos entre los productores y los agronegocios, a diferencia de los *pools* de siembra que involucran a una variedad de actores rurales y urbanos alejados del proceso productivo. Little y Watts (1994, p. 9) brindan una idea bastante completa definiendo la *agricultura por contrato* como “formas de coordinación vertical entre productores y compradores-procesadores que moldean directamente las decisiones de producción mediante obligaciones del mercado contractualmente especificadas (volumen, valor, calidad y, a veces, precios predeterminados). La *agricultura por contrato*, además, proporciona insumos específicos y ejerce cierto control sobre la producción (es decir, una división de funciones de gestión entre el contratista y el contratado)”. A medida que la agroindustria expande su control sobre todo el proceso productivo, su poder para controlar, regular y dictar los términos de producción también aumenta. Como dice Wesz (2016, p. 298), “cuanto más dependientes se vuelvan los productores, los contratos serán menos amigables para los agricultores, en términos de diferencias en las tasas de interés, precios de los insumos, fechas límite para la entrega de bienes producidos y las condiciones generales de los contratos”.

Los defensores de la *agricultura por contrato*, como el Banco Mundial, sugieren que los agricultores bajo contrato tienen ingresos significativamente más altos que otros agricultores, por tanto las organizaciones de productores y la *agricultura por contrato* serían esenciales para que los pequeños agricultores participen en las cadenas de valor y respondan a las demandas de los supermercados (Banco Mundial, 2007b, p.127, 241). Este argumento se basa en la necesidad de integrar a los agricultores con los mercados y, una vez más, se sustenta en una lógica residual y en un enfoque técnico, descuidando aspectos relacionales importantes sobre el poder y el acceso. Se basa

en un marco neoinstitucional centrado en los costos de transacción, en economías de escala, eficiencia, fallas de coordinación y acceso a la tecnología, entre otros. Pero lo que no toma en cuenta este enfoque son las relaciones de poder entre las partes involucradas, los entornos sociopolíticos en que se implementan, los tipos de agricultores que pueden beneficiarse o no, o aquellos que serán excluidos, y la manera en que ello afectará a la diferenciación entre los agricultores (White, 1997; Oya, 2012). Si bien existe una gran diversidad en los tipos de *agricultura por contrato*, al final los agricultores son incorporados a circuitos más amplios de acumulación de capital, cambian sus cultivos diversificados a monocultivos orientados a la exportación y, al tiempo que quedan atrapados en ciclos de deuda y dependencia, se vuelven mucho más dependientes de los dictados de los precios internacionales e insumos industriales externos (White, 1997; McMichael, 2013). En efecto, el capital agroindustrial puede extender su alcance territorial sin poseer la tierra ni asumir riesgos tales como las fluctuaciones de los precios, los desastres naturales y las malas cosechas, o las distintas amenazas de expropiación. Por lo tanto, la *agricultura por contrato* representa una forma de control sin desposesión que, no obstante, produce diferenciación, exclusión y marginalización de los agricultores.

## Conclusión

La innovación tecnológica ha permitido la penetración constante del capital industrial y financiero en la agricultura. Se ha convertido en el modelo de desarrollo agrícola impulsado por las lógicas y teorías neomalthusianas de modernización, para lograr los máximos rendimientos y la expansión de las fronteras agrícolas hacia suelos inadecuados sin tal innovación. El sector agroalimentario es cada vez más corporativo y concentrado, en gran medida dominado por unas pocas empresas multinacionales que colaboran entre sí para controlar la cadena agroindustrial desde el inicio (*upstream*) hasta el final (*downstream*). La reestructuración de posguerra del sistema agroalimentario global permitió a Estados Unidos moldear las relaciones mundiales de producción y circulación agroalimentaria hasta principios de la década de 1970, cuando una serie de crisis condu-

jo a cambios dramáticos en la economía política internacional de la alimentación y la agricultura. En este proceso, Brasil se convirtió en un productor dominante de soya, reemplazando a Estados Unidos en su papel de principal proveedor de soya para el este de Asia. Las tecnologías de la Revolución Verde se desarrollaron en la región del Cerrado brasileño en forma de nuevas semillas híbridas y modificadas genéticamente y en forma de insumos agroquímicos y de producción mecanizada intensiva en capital que se expandió desde el sur de Brasil. El ‘apropiacionismo’, el ‘sustitucionismo’, la ‘flexibilización’ y la ‘financiarización’ caracterizan este proceso como nuevas relaciones agrarias y formas de control que emergen en el campo. Los pools de siembra y varios tipos de *agricultura por contrato* permitieron que el capital industrial y financiero controle y se apropie del valor de la producción agrícola sin necesidad de poseer la tierra. Todo esto incorpora a las clases trabajadoras rurales dentro de las cadenas de valor industriales y generalmente de manera adversa. En este capítulo hemos examinado cómo, dónde y hasta qué punto la agroindustria se desarrolló en América Latina, las formas que ha adoptado y algunas de las implicaciones para el cambio agrario. Los siguientes capítulos profundizan el análisis de estas dinámicas en Bolivia, situando la estructura agraria boliviana en su contexto histórico, exponiendo el desarrollo del complejo sojero y los nuevos mecanismos de control que emergieron, y enfatizando cómo, en última instancia, estas dinámicas conducen a un proceso de exclusión productiva que obliga a los agricultores familiares a contradictorias posiciones de clase, entre la deuda y la dependencia.



## Capítulo 2

# Control de la tierra: estructura agraria de Bolivia y expansión de la frontera agrícola

“La soya es un negocio para grandes productores, los más pequeños no pueden sobrevivir sin el apoyo del gobierno. Con las políticas actuales del gobierno, no hay futuro para los pequeños productores, probablemente tendrán que vender sus tierras y migrar a las ciudades”.

B. Pereira, propietario brasileño en Santa Cruz  
(Nombre ficticio, Comunicación personal,  
abril de 2014).

### Contexto histórico

Bolivia logró su independencia de España en 1825, pero la gran mayoría de la población permanecía marginada, excluida de la participación política y subordinada a una élite terrateniente y a una oligarquía conservadora hasta mediados del siglo XX. Desde la independencia hasta la década de 1950, aproximadamente solo el dos por ciento de la población votaba en las elecciones debido a la exclusión de los pueblos indígenas (Malloy, 1970). Durante gran parte del siglo XIX, las autoridades e instituciones estatales permanecieron concentradas en las principales ciudades—La Paz, Santa Cruz, Sucre, Cochabamba, Potosí y Oruro— ignorando vastas áreas de la geografía nacional. Para las mayorías indígenas, el Estado no era sino un poder ajeno y parte de una realidad colonial (Malloy, 1970; Grindle, 2000). Los barones de la plata y el estaño continuaron extrayendo la riqueza mineral para venderla a Europa, esta vez explotando esa riqueza bajo las relaciones capitalistas, en lugar de las relaciones feudal-coloniales que eran manifiestas durante el dominio español. La agricultura se mantuvo marginal tanto en términos de productividad como en extensión geográfica. Hasta 1950, solo entre el dos y

el tres por ciento de la tierra agrícola disponible estaba bajo cultivo, y casi toda la agricultura estaba concentrada en la región montañosa del altiplano de La Paz y en los valles cercanos (Malloy, 1970, pp. 348-349). Esto fue así debido a que las comunidades indígenas (la fuerza laboral) estaban asentadas y se mantuvieron concentradas en la región del altiplano desde el período preincaico. Dado que la fuerza laboral constituía el principal factor de producción agrícola, su expansión se limitó a la disponibilidad de trabajadores, por lo que, particularmente en las tierras bajas de Santa Cruz, la mayor parte de las tierras más fértiles permanecían subutilizadas. Cuando se instaló el régimen de la hacienda, en las últimas décadas del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, el gobierno expropió las tierras de las comunidades indígenas, permitiendo a las familias de estas comunidades usufructuar pequeñas parcelas de la hacienda siempre que trabajaran como peones para el hacendado (Kay y Urioste, 2007).

Con las autoridades estatales y los intereses económicos concentrados en los Andes y alrededores de La Paz, las regiones fronterizas de Bolivia quedaron desprotegidas. El Estado boliviano no pudo ejercer soberanía en varias regiones ni defenderlas ante los intereses expansionistas de sus vecinos. Bolivia perdió territorio con Brasil (1867, 1903), Chile (1904) y Paraguay (1938). En total, perdió casi la mitad del territorio con que se había fundado en 1825 (Klein, 2011, p. 101). La Guerra del Chaco con Paraguay (1932-1935), durante la Gran Depresión mundial, tuvo una relevancia particular. En medio del declive de la industria del estaño que provocó desempleo entre muchos mineros y el estancamiento del sector agrícola explotador que dejó a muchos campesinos indígenas sin tierras, se desarrolló la Guerra del Chaco en la que Paraguay derrotó a Bolivia en una batalla sangrienta y desigual, causando más de 65 mil muertes, la mayoría de ellos campesinos indígenas que sirvieron en primera línea dentro de un ejército boliviano segmentado según raza y etnia (Klein, 2011, p. 182). La derrota marcó un punto de inflexión en la sociedad boliviana. Emergieron ideas radicales y el sistema tradicional de discriminación según clase, etnia y raza comenzó a ser rebatido. Se conformaron nuevos partidos políticos y Bolivia cam-



bió: “De ser una de las sociedades menos movilizadas de América Latina, a una de las más avanzadas en términos de ideología radical y organización sindical” (Klein, 2011, p. 177).

Las guerras civiles y las tensiones internas alcanzaron su apogeo en 1952, cuando militares y oligarcas se enfrentaron al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) –que se había ganado el apoyo de mineros y campesinos– y cuando comenzó a gestarse la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) (Grindle, 2000, p.101). A medida que el conflicto se extendió rápidamente por todo el país, los militares se desintegraron ante la unidad de campesinos y mineros armados, indígenas y otros trabajadores asalariados decididos a expulsar a las élites terratenientes y a los dueños de las minas. Muchos indígenas (llamados “indios” en ese entonces) comenzaron a autoidentificarse como campesinos y conformaron, años después, un sindicato nacional que unía a quechuas, aymaras y otros pueblos en la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB) que estaba estrechamente vinculada al gobierno del MNR (Albó, 2002). El MNR tomó el poder estatal en 1952 y comenzó a implementar importantes reformas que incluyeron el voto universal que habilitaba a los indígenas como electores, la nacionalización de la mayoría de las minas y una reforma agraria que redistribuyó alrededor del 30 por ciento de las tierras agrícolas de Bolivia a favor de unas 200 mil familias rurales (Grindle, 2000, p. 101; Klein, 2011).

Antes de la reforma agraria de 1953, Bolivia tenía una de las estructuras agrarias más desiguales de América Latina, donde solo el seis por ciento de los terratenientes controlaba el 92 por ciento de la tierra, con un promedio de propiedad de más de 1.000 hectáreas, pero utilizando solo el 1,5 por ciento de la tierra (Klein, 2011, p. 210). Con las mejores tierras infrautilizadas en el oriente, Bolivia dependía de las importaciones para alimentar a su población. Debido a que muchas de las élites eran en realidad terratenientes ausentes y con poco capital invertido, las movilizaciones campesinas de mediados del siglo XX para la expropiación y redistribución de tierras no encontraron una férrea oposición. A medida que los mineros, campesinos, indígenas y sindicatos seguían presionando con sus demandas, la

capacidad fiscal del Estado entró en crisis. El Gobierno Nacional aumentó la oferta monetaria en un intento por financiar programas sociales y reformas económicas exigidas por un movimiento de trabajadores y campesinos cada vez más fuerte. A mediados de la década de 1950, la tasa de inflación anual aumentó en más del 900 por ciento, lo que provocó una devaluación drástica de la moneda y el desencadenamiento de la crisis financiera (Klein, 2011, p. 216). La crisis fiscal se sumó al contexto de agitación socioeconómica amenazando el poder del MNR. Con la Guerra Fría en pleno apogeo, el presidente Eisenhower desconfiaba de la aparición en América Latina de regímenes revolucionarios hostiles a los intereses estadounidenses. Rápidamente, Estados Unidos ofreció ayuda financiera y alimentaria bajo la Ley Pública 480 (PL-480), y para fines de la década de 1950 Bolivia era “el mayor receptor per cápita de la ayuda exterior de Estados Unidos en América Latina, el más alto por habitante del mundo” (Klein, 2011, p. 218). Si bien inicialmente la ayuda alimentaria era necesaria para aliviar el hambre, el *dumping*<sup>1</sup> persistente de harina de trigo subsidiado de Estados Unidos inundó el mercado boliviano y socavó el desarrollo del sector del triguero, afectando tanto a campesinos como a molineros. Bolivia también aceptó un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1957 junto con un “Plan de Estabilización” que “requería que Bolivia equilibre su presupuesto, termine con la subvención de alimentos a los mineros, mantenga los aumentos salariales, cree un tipo de cambio único y adopte una variedad de otras medidas para restringir iniciativas y gastos del gobierno” (Klein, 2011, pp. 220-221).

Los funcionarios del gobierno estadounidense diseñaron una estrategia de desarrollo agrícola y la financiaron a través de un acuerdo de USD 25 millones con el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos para promover el desarrollo económico (Thorn, 1971, p. 165). Dirigido por Merwin L. Bohan, un oficial del Departamento

---

1 *Dumping* es una estrategia de comercio internacional en la que los países exportan excedentes de alimentos y los venden a precios inferiores a los del mercado local con la ayuda de subsidios gubernamentales que a menudo tienen efectos devastadores para los productores locales en el país receptor.

mento de Estado de los Estados Unidos, el “Plan Bohan” recomendó que la población de las tierras pobres del altiplano fuera trasladada a las fértiles tierras del este de Bolivia (*Ibíd.*). La migración subsiguiente, conocida como “la marcha al oriente”, ofrecía a los campesinos de las tierras altas acceder a predios de 20 a 50 hectáreas de extensión en San Julián, Cuatro Cañadas y regiones circundantes para producir cultivos tradicionales destinados al consumo interno y con el propósito de generar la oferta de mano de obra necesaria para las grandes propiedades agrícolas del oriente. Para 1980, se estima que el 41 por ciento de la población de Santa Cruz eran migrantes de tierras altas (Valdivia, 2010, p. 69). También se distribuyeron propiedades a gran escala a los empresarios capitalistas y a las élites políticas, quienes recibieron tierras de entre 500 y 50 mil hectáreas destinadas a la creación de unas supuestas “empresas agropecuarias” (*Ibíd.*).

## **Las colonias menonitas en Bolivia**

La marcha hacia al oriente coincidió con la llegada a Bolivia de los menonitas, quienes inmigraron inicialmente desde Paraguay y Canadá desde 1954 (Kopp, 2015, p. 55). Los menonitas tienen sus raíces en el movimiento anabautista (que significa “rebautizador”) de la Europa del siglo XVI; tomaron su nombre de uno de sus primeros líderes, Menno Simons, un sacerdote católico de la región noroeste de Frisia en los Países Bajos que se alineó con los anabautistas en 1536 (Iglesia Menonita de Estados Unidos, 2014). Según el directorio de la Conferencia Mundial Menonita, el movimiento anabautista está formado por 2,1 millones de personas en 87 países de todo el mundo (*Conference*, 2015). Son pacifistas y fueron perseguidos históricamente por sus creencias religiosas y por su separación de las creencias cristianas dominantes. La persecución los ha llevado a una migración generalizada, sin embargo, independientemente de dónde se establezcan, en gran medida se mantuvieron viviendo dentro de los confines de comunidades simbióticas muy unidas, caracterizadas por sus distintivas creencias y prácticas religiosas y sociales (Winland, 1993, p. 110). Los menonitas fueron parte de las primeras

comunidades en establecerse en lo que ahora se conoce como “zona de expansión” de la soya en las tierras bajas de Santa Cruz. Compraron grandes extensiones de tierra a través de canales formales e informales para fundar sus “colonias”. El Estado boliviano les concedió varios derechos que les permiten defender y proteger su forma de vida “en aislamiento del mundo exterior”, incluyendo la libertad de religión, educación y la exención del servicio militar para los jóvenes (Kopp, 2015, p. 97). A medida que las condiciones para el acceso a la tierra mejoraron, otras familias menonitas de México y Belice llegaron a Bolivia. Importaron maquinaria agrícola usada desde sus países de origen, particularmente de Canadá y México, y se convirtieron en los pioneros de la agricultura mecanizada e incluso del cultivo de soya, antes del auge y de la llegada de brasileños en la década de los noventa.

En la actualidad existen 52 colonias menonitas en Bolivia que controlan 645.735 hectáreas de tierra y, según registros oficiales, su población alcanza a 56.175 habitantes, unas 9.790 familias (Kopp, 2015, p. 69). En promedio, cada familia menonita controla 66 hectáreas de tierra, el 90 por ciento de esas familias asentadas en Santa Cruz, donde se los considera un poco más grandes que los pequeños propietarios (que manejan 50 hectáreas o menos). Las colonias menonitas de Bolivia varían entre sí en términos de identidades etno-religiosas. Algunas colonias se modernizaron, usan electricidad y vehículos motorizados con neumáticos de caucho, mientras que otras colonias permanecen “fuera de la red de servicios públicos” usando generadores a gas natural o diesel. Aunque las colonias más tradicionales usan maquinaria agrícola pesada, algunos de ellos siguen negándose a reemplazar las ruedas de acero por neumáticos de caucho. Esta práctica tiene que ver con la tradición menonita de disminuir su dependencia del mundo exterior y permanecer fieles a sus valores familiares, culturales y religiosos (Notas de campo, 2014-15). Los menonitas se identifican a sí mismos como agricultores o “personas de la tierra”, están dedicados al trabajo agrícola y viven en relativo aislamiento del resto de la sociedad.

## El “sesgo pro-terratendiente” en las tierras bajas

Impulsado por los intereses del Servicio Agrícola Interamericano, a fines de la década de 1950 surgió un “sesgo pro-terratendiente” en las tierras bajas que favorecía la gran agricultura orientada a la exportación (Kay, 2006, 2009). Más que un “sesgo pro-urbano”, que implica transferencias ineficientes e inequitativas de recursos hacia las zonas urbanas, o la “retorsión de precios” (*price twists*) que es desventajosa para las zonas rurales (Lipton, 1977), el “sesgo pro-terratendiente” es un término mucho más útil para entender el cambio agrario que ocurre en las tierras bajas de Santa Cruz. Al respecto, Cristóbal Kay (1981, p. 498), en su crítica del “sesgo pro-urbano” de Lipton y en referencia a las alianzas de clase y el cambio agrario de Chile, apunta:

Existen diferentes clases sociales dentro de cada sector definido económica o geográficamente, sin embargo, la principal contradicción dentro de la sociedad no es entre sectores sino entre clases sociales. Es en esta contradicción esencial entre las clases sociales que el Estado constantemente trata de mediar a través de medidas que van desde la coerción hasta el consentimiento y que apuntan a asegurar el dominio de aquellas clases que tienen el control del aparato estatal. La introducción de un análisis de clase revela que, si bien el Estado pudo haber actuado discriminatoriamente en contra del sector agrícola, también actuó para proteger los intereses de los propietarios de la tierra. Los campesinos han sido el principal grupo social adversamente afectado por los gobiernos.

Por lo tanto, para Kay (2009, pp. 112-113), un análisis más fructífero debiera considerar el sesgo pro-terratendiente como el ejercicio de poder tanto para bloquear la reforma agraria, velar por la inaplicabilidad del salario mínimo y de la legislación en seguridad social, y prohibir los sindicatos agrarios, como para obstaculizar los frenos a las prácticas de explotación de parte de los comerciantes (incluso de los terratenientes) que pagan precios bajos por el excedente que compran a los campesinos, las prácticas de venta a precios altos de insumos que demandan los campesinos o aquellas relacionadas

con el abuso de prestamistas (a veces los propios terratenientes) que entregan créditos a tasas usureras. A fines de la década de 1950, la tecnología, los créditos con bajos intereses y las políticas de inversión en infraestructura se destinaron para la modernización de la agricultura a gran escala (Kay y Urioste, 2007; Ormachea, 2007; Valdivia, 2010). A pesar de que entre 1953 y 1977 se distribuyó el 83,4 por ciento del total de las tierras cultivables disponibles al 74,3 por ciento del total de “familias campesinas”, la ausencia de políticas de apoyo y de servicios de extensión como asistencia tecnológica, capacitación, acceso al crédito, servicios de comercialización y distribución, condujeron a contradicciones internas en el proceso de la reforma agraria, forzando a aquellos con pocos recursos a abandonar sus tierras mientras que algunos seguían luchando por mantener sus parcelas viables y productivas (Thiesenhusen, 1989, p. 10). Muchos pequeños agricultores fueron forzados a trabajar como trabajadores asalariados a fin de complementar sus ingresos agrícolas familiares (Ormachea, 2007, p. 26). Mientras que la estructura agraria en los Andes occidentales se vio plagada de minifundios “económica y técnicamente insostenibles”, en las tierras bajas orientales se consolidó de forma cada vez más dominante un régimen de “empresas agropecuarias” (Kay y Urioste, 2007, p. 58).

La construcción de una nueva carretera que conectó los Andes occidentales con las llanuras orientales facilitó las inversiones públicas y privadas que se destinaron al desarrollo de infraestructuras para la producción agrícola y ganadera, la silvicultura, los ingenios azucareros y las refinerías de petróleo (Kay y Urioste, 2007, p. 4). Las dictaduras militares de 1971-1978 y 1980-1982, consolidaron la reversión de los progresos que se habían dado con la reforma agraria y cientos de miles de hectáreas fueron distribuidas arbitrariamente entre aliados políticos. Este período, asimismo, marca el inicio del proceso contemporáneo de diferenciación del campesinado debido a que el “campesino medio” fue enajenado del acceso a los recursos y comenzó a crecer una marcada división entre la clase terrateniente y los sin tierra o casi sin tierra. Esta “conquista del este” (Kay y Urioste, 2007, p. 44) caracteriza la estructura agraria de Bolivia hasta el presente. Las divisiones de clase se consolidaron con el “Plan

Bohan” y durante los procesos subsecuentes, no solo en las tierras bajas del oriente, sino en todo el país. El altiplano fue ignorado por dicho Plan y fue visto únicamente como una región proveedora de mano de obra excedentaria y disponible para satisfacer las necesidades laborales de la agricultura “moderna” de exportación en las tierras bajas de Bolivia.

Después de 18 años de dictaduras militares e inestabilidad política, el primer gobierno democrático fue liderado por el presidente Hernán Siles Zuazo de la Unidad Democrática y Popular (UDP) que se vio obligado a afrontar una severa crisis económica y fiscal a inicios de la década de 1980. Las tasas de interés de los préstamos internacionales aumentaron sustancialmente, los ingresos tributarios disminuyeron, cayó el acceso a préstamos extranjeros y la economía del estaño entró en crisis con la caída de los precios internacionales de los minerales, hechos que afectaron gravemente a la economía y a las fuentes laborales (Morales y Sachs, 1989). La hiperinflación y el endeudamiento tenían lugar en medio de un crecimiento del PIB anual negativo (-4.5 por ciento) entre 1980 y 1985, una tasa de inflación anual promedio de 569,1 por ciento (algo sin precedentes), y un nivel de endeudamiento externo que se duplicó de USD 2,7 mil millones a USD 5,6 mil millones durante el mismo período (Morales y Sachs, 1989; Van Dijk, 1998). Esta combinación de crisis condujo a la renuncia prematura del presidente Siles Zuazo, a la convocatoria de elecciones y a la instalación de un nuevo gobierno, el de Víctor Paz Estenssoro del MNR, en 1985, lo que dio paso a un período de reformas neoliberales sintetizadas en el Decreto Supremo 20160. Apoyado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y una alianza política con Hugo Banzer de Acción Democrática Nacionalista (ADN) (ex jefe del gobierno dictatorial de 1971-1978), Víctor Paz implementó la llamada “Nueva Política Económica” (NPE) inspirada por Jeffrey Sachs en 1985 (Conaghan, Malloy y Abugattas, 1990). La NPE condujo a recortes drásticos en el gasto gubernamental –incluyendo la eliminación de subsidios a los alimentos y servicios públicos–, congeló los salarios y redujo las fuentes de empleo en el sector público, reformó el sistema impositivo, liberalizó el comercio, devaluó la moneda y fijó acuerdos internacionales “para permitir garantías

extranjeras para los inversores extranjeros” (Van Dijck, 1998, p. 32). Los sindicatos, particularmente la COB y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), fueron reprimidos y disueltos debido al cierre de las minas estatales de estaño de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Cerca de 30 mil mineros perdieron sus fuentes laborales y fueron obligados a emigrar a otros lugares del país, algunos de ellos recibieron tierras en Santa Cruz y más tarde pasarían a formar parte de los pequeños productores en la zona de expansión sojera (Gill, 2000). Para 1987, otros seis mil mineros perdieron sus empleos en el sector de la minería privada, diez mil en la administración pública, dos mil en la banca y se cerraron más de 110 fábricas (Kruse, 2001, p. 159). Para contrarrestar la resistencia de los afectados, la clase gobernante ofreció bonos en efectivo y promesas de “relocalización” en otras fuentes laborales y lugares (Sanabria, 1999). Cada vez que se organizaban movilizaciones de repudio a estas medidas, los huelguistas se enfrentaban a una dura represión de parte de las fuerzas policiales y militares, al tiempo que el gobierno atacaba estratégicamente a las facciones militantes clave de los sindicatos mineros; las fuerzas de seguridad rodeaban rápidamente y sin mucho esfuerzo los lugares de trabajo donde se habían instalado huelgas y/o había ocupación de minas, además de bloquear deliberadamente el suministro de alimentos y cortar las líneas de servicios básicos como la electricidad y el gas natural de uso doméstico (Sanabria, 1999, p. 544). En síntesis, la crisis del precio del estaño debilitó la capacidad del sindicalismo minero para negociar y se erosionó su influencia económica y política. Asimismo, el proceso de eliminación de miles de fuentes laborales afectó severamente la capacidad de movilización de la organización matriz de trabajadores más fuerte de Bolivia, la COB.

El capital privado comenzó a rellenar el vacío dejado por la COMIBOL, y entre 1988 y 1992 la inversión privada en la minería casi se duplicó (Sanabria, 1999). Si bien la NPE controló rápidamente la hiperinflación, estabilizó la economía y restableció las relaciones con los acreedores extranjeros, el desempleo aumentó y la pobreza se generalizó (Van Dijck, 1998). Incluso el principal arquitecto de la NPE, Jeffrey Sachs, a cuatro años de la implementación del Decreto



Supremo 21060, reconoció el aumento de la desigualdad, la dependencia excesiva de un enfoque económico de *laissez-faire* y la ausencia de la diversificación sectorial y regional de la economía (Morales y Sachs, 1989, pp.78-79). Lo más notorio de este periodo es que las clases trabajadoras y los pequeños agricultores campesinos vivían en condiciones mucho más vulnerables debido a que la nueva legislación facilitó el despido laboral y el desmantelamiento de los sindicatos, mientras que en el sector público los recortes presupuestarios provocaron el desempleo inmediato y el retiro de subsidios y la asistencia social.

La combinación de la ausencia de subsidios estatales y servicios de apoyo, la liberalización del comercio y la asignación de un papel económicamente marginal a la producción campesina (Sanabria, 1999, p. 539) derivó en una tasa de pobreza rural de casi el 90 por ciento en las tierras bajas de Santa Cruz en 1994 (Vos, Haeduck y Mejia, 1998, p. 123). La brecha entre el ingreso urbano y rural se amplió y se deterioraron los términos de intercambio en la agricultura a medida que la pequeña producción campesina quedó estancada y se priorizaron los cultivos industriales de exportación (Vos *et al.*, 1998). Los cultivos tradicionales de la región andina sufrieron una tasa de crecimiento negativo del -7 por ciento entre 1991 y 1997, mientras que los cultivos industriales de Santa Cruz crecieron en un 124 por ciento durante el mismo período (Kay y Urioste, 2007, p. 54), haciendo evidente el sesgo pro-terrateniente (Kay, 2009) por el que “la política pública discrimina a los trabajadores rurales y campesinos pobres y favorece a los terratenientes y capitalistas del agro” (*Ibid.*, p. 112). La inversión y la expansión de la frontera agrícola durante este período representan una transición importante en las formas y relaciones que caracterizaban la producción agrícola en ese momento.

### **Multiculturalismo neoliberal: ¿acumulación con legitimidad?**

Durante esta primera fase de las políticas neoliberales, las dos principales organizaciones sindicales, la COB y la FSTMB, se debilitaron de a poco con el desmantelamiento del apoyo estatal y de muchos sindi-

catos. Sin embargo, otro tipo de movimientos sociales se organizaban y surgían desde las áreas rurales. Estos movimientos se unificaron, en gran medida, debido al movimiento Katarista (Movimiento Indio Tupaj Katari, MITKA) de la década de 1970, inspirado por el líder indígena y héroe Tupaj Katari, quien murió combatiendo a los españoles en 1781. Los kataristas unificaron a mineros y campesinos, pero sus demandas étnicas estaban primero (Albó, 2002, p. 76). Los kataristas llegaron a encabezar el movimiento campesino, la CNTCB (que más tarde se convirtió en CSUTCB) y se unieron a la COB, generando así una intensificada conciencia colectiva que combinaba la explotación de clase y la discriminación étnica. Los campesinos conformaron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), los indígenas la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), las mujeres la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CN-MCIOB-BS) y los campesinos cocaleros sus primeros y combativos sindicatos. Los movimientos se conformaron desde 1979 y hasta principios de la década de 1990, ganaron fortaleza e influencia, y si bien el Estado boliviano pudo resolver la crisis económica en el corto plazo, su legitimidad quedó amenazada por la pobreza rural, la creciente brecha urbano-rural y la falta de reconocimiento de los derechos indígenas. Como dice el reconocido antropólogo boliviano, Xavier Albó (2002, p. 77), esta fue la “edad de oro” del movimiento andino campesino indígena. En 1990, más de 300 indígenas dirigidos por la CIDOB participaron en la histórica Marcha por el Territorio y la Dignidad, al recorrer durante poco más de 30 días los 492 kilómetros que separa las ciudades de Trinidad y La Paz en protesta por las invasiones de sus territorios por parte de las empresas madereras, la deforestación del bosque y demandando derechos y reconocimientos colectivos. Esta presión “desde abajo” dio lugar a la aprobación de una serie de decretos supremos anunciados inmediatamente por el entonces presidente Jaime Paz Zamora para el reconocimiento de cuatro territorios indígenas (Assies, 2000, p. 15). Un año después, Bolivia se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en ratificar el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, Convenio 169), obligándose a respetar y proteger los

derechos de los pueblos indígenas. Estas acciones sentaron precedentes importantes para las futuras demandas y luchas de los indígenas, que hoy en día son reconocidos como distintos a los campesinos, algo que genera un renovado sentido de orgullo como pueblos indígenas.

Desde 1986 hasta 1992, la expansión ilegal de las áreas cultivadas por medio de lo que ahora se conoce como el resultado de una “masiva corrupción en la distribución y titulación de tierras” (Kay y Urioste, 2007, p. 58) condujo a altas tasas de deforestación y aumentos en la producción agrícola. Este período fue precedido por la dictadura militar de Hugo Banzer que entre 1971 y 1978 otorgó créditos subsidiados por millones de dólares a los agrocapiatistas de Santa Cruz (Webber, 2011) y cientos de miles de hectáreas de tierra fueron distribuidas fraudulentamente a amigos políticos de forma gratuita (algunas de hasta 50 mil hectáreas) (Urioste, 2010, p. 2). Los privilegiados que tenían vínculos con los gobiernos militares se beneficiaron enormemente durante este período debido a que su acceso a la autoridad política les permitió beneficiarse de tierras fértiles en el oriente boliviano (Ribot y Peluso, 2003). De acuerdo con Steiner y otros autores (2001) la deforestación anual provocada por la agricultura en la zona de expansión de Santa Cruz pasó de 68.196 hectáreas en 1986 a 225.018 hectáreas en 1992 (un aumento del 330 por ciento), deforestación principalmente causada por la agroindustria (103.623 hectáreas) y los productores menonitas (89.954 hectáreas), lo que representó el 86 por ciento de la deforestación de 1992. Además, en la zona de expansión, la extensión cultivada de algodón aumentó en un 135 por ciento, la soya en un 194 por ciento, el sorgo en 108 por ciento y el trigo en un 539 por ciento (Cuadro 2). En 1992, los cultivos de soya cubrieron 200 mil de las 354 mil hectáreas de la zona de expansión de Santa Cruz.

Para ese momento, los campesinos de las tierras altas tenían un papel destacado como principales proveedores de alimentos, produciendo maíz, trigo, papa y otros cultivos tradicionales para el consumo interno. La producción de girasol, sorgo y maíz también aumentó como parte de la evolución del complejo oleaginoso y de la agroindustria en general en una región que permite dos cosechas

por año. Los cultivos intensivos en mano de obra -como la caña de azúcar- se estancaron porque los campesinos colonizadores comenzaron a cultivar sus propias tierras, en lugar de servir como ejército de reserva de mano de obra para la agricultura capitalista (Gill, 1987). La soya comenzó a ganar importancia como un cultivo de exportación, triplicándose su valor de exportación de USD 19 a USD 57 millones en solo seis años, lo que era una señal de que era una actividad económicamente importante (Pérez, 2007).

**Cuadro 2**  
**Deforestación anual por tipo de actores**  
**y expansión de áreas cultivadas**

Año	1986	1988	1990	1992
<b>A. Deforestación anual (ha)</b>	<b>68.196</b>	<b>83.539</b>	<b>149.152</b>	<b>225.018</b>
<i>Campeños de tierras bajas</i>	9.282	11.095	16.184	17.772
<i>Campeños de tierras altas (colonos)</i>	6.956	11.573	14.424	13.669
<i>Menonitas</i>	22.501	24.649	52.060	89.954
<i>Agroindustriales</i>	29.457	36.222	66.484	103.623
<b>B. Área de cultivo (1.000 ha) en zona de expansión</b>	<b>132,3</b>	<b>149,8</b>	<b>291,8</b>	<b>389,3</b>
<i>Algodón</i>	11,2	10,0	3,9	26,3
<i>Arroz</i>	13,7	16,2	18,2	18,2
<i>Maíz</i>	17,1	14,2	19,7	35,4
<i>Soya</i>	68,2	85,4	179,3	200,2
<i>Sorgo</i>	12,1	20,0	30,0	25,2
<i>Trigo</i>	10,0	4,0	30,0	63,9
<i>Girasol</i>	--	--	10,7	20,1

Fuente: Steininger *et al.* (2001) y Hecht (2005).

En 1991, el gobierno implementó el proyecto “Tierras bajas del este” del Banco Mundial (BM) para ampliar la producción agrícola, particularmente soya, con el objetivo de aumentar las exportaciones hasta 200 mil toneladas por año y sustituir el trigo importado con una producción nacional de 30 mil toneladas por año, después de que este último sector había quedado virtualmente destruido por las importaciones del programa PL-480 (Banco Mundial, 1998). Este proyecto tenía como meta explícita consolidar la producción de cultivos industriales a gran escala con el argumento de que ello acele-

raría el crecimiento económico y conduciría al “desarrollo agrícola sostenible”. Siete años después, el BM reportó los resultados de la producción agrícola en los siguientes términos:

El crecimiento agrícola anual real de Bolivia, en promedio de 1,5 por ciento desde 1987, ha estado fuertemente influenciado por la producción ampliada en las tierras bajas del este, cuyas características más sobresalientes son las siguientes: entre 1990 y 1996, las exportaciones agrícolas de Santa Cruz aumentaron hasta 400 por ciento; el valor bruto de la producción agrícola del departamento aumentó de USD 350 millones a USD 685 millones durante el período 1990-1996. Se ha estimado que el 37 por ciento del aumento de la producción podría acreditarse al proyecto [el proyecto “Tierras bajas del este” (Banco Mundial 1998, iii).

Sin embargo, estos resultados se vieron ensombrecidos por la falta de control de la deforestación. Pérez (2007) concluye que el proyecto “Tierras bajas del este” fue el principal impulsor de la deforestación, priorizando el crecimiento de las exportaciones, antes que el desarrollo sostenible, a expensas de los ricos bosques nativos de la región. Esta situación también fue reconocida en el “Informe de finalización de la implementación” del Banco Mundial, donde se dice:

“Lamentablemente, en el proceso, la deforestación aumentó considerablemente, por ejemplo, casi un millón de hectáreas entre 1989 y 1996. Estas acciones superaron con creces las expectativas (...) el proyecto pronosticaba solo 25 mil hectáreas de nuevas tierras desmontadas en la zona de expansión durante cinco años” (1998, p. 4). La deforestación total fue 40 veces superior a la proyectada originalmente por el Banco Mundial.

Este período implicó una rápida incorporación de tierras fronterizas a las plantaciones de soya a medida que la forma de producción comenzó a pasar de la mecanización intensiva en mano de obra a la mecanización extensiva, impulsando la deforestación (Barber, Orellana, Navarro, Diaz y Soruco, 1996; Müller, Pistorius, Rohde, Gerold y Pacheco, 2013). Otros cultivos, como la caña de azúcar y el algodón, siguieron siendo productos de crecimiento lento. Los campesinos de las tierras altas y los colonos menonitas también comenzaron a expandir las áreas cultivadas para aumen-

tar la producción de arroz, maíz y trigo para el mercado interno. Mientras que las grandes propiedades comenzaron a adoptar una agricultura intensiva en capital, los pequeños productores aún tenían la ventaja de controlar la agricultura intensiva en mano de obra, mantener su capacidad productiva y su acceso a la tierra y a la mano de obra (familiar). La agricultura campesina en el Altiplano, sin embargo, sufrió inmensamente a medida que el “sesgo de los propietarios” del programa de ajuste estructural del estado se enfocó en el desarrollo del sector de exportación agroindustrial en el este. Como señalan Kay y Urioste (2007, p. 53), “hasta las políticas de ajuste estructural de 1985, el suministro interno (de alimentos) pudo satisfacer la demanda de la población boliviana pero, con la capacidad de importar libremente alimentos desde 1985, la economía campesina declinó porque no podía competir con la mejor calidad y las importaciones más baratas”. El posterior estancamiento de la producción agrícola en el altiplano coincidió con rápidos aumentos en las tierras bajas orientales, en términos de tierra cultivada, productividad y migración, ya que incluso más campesinos de las tierras altas se dirigieron al este en busca de tierras o de oportunidades laborales. De esta manera, los grandes productores tenían un suministro estable de mano de obra, a pesar de que disminuían gradualmente las necesidades de trabajadores agrícolas.

En 1993 fue electo presidente Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR. Fue Ministro de Planificación del gobierno de Paz Estenssoro y uno de los responsables clave del proyecto neoliberal iniciado en 1985 (Conaghan, Malloy y Abugattas, 1990, p. 14). Para obtener la presidencia, el exministro hizo un pacto político (Pacto de Gobernabilidad) para liderar una coalición de partidos en la que Víctor Hugo Cárdenas del Movimiento Revolucionario Tupak Katari de Liberación (MRTKL) fue no solo uno de aliados más significativos, sino que se convirtió en Vicepresidente del gobierno de Sánchez de Lozada. Aunque Cárdenas ganó popularidad como el primer Vicepresidente indígena de Bolivia, la CSUTCB lo llamó “enemigo y traidor” en el VI Congreso de 1994 por su decisión de aliarse con el MNR y su agenda neoliberal (Van Cott, 2005, pp. 81-82). Si bien la

Nueva Política Económica (NPE) de Paz Estenssoro de 1985 puede ser descrita como uno de los “enfoques más radicales” o una “medida de *shock*” (Conaghan *et al.*, 1990), el “Plan de Todos” de Sánchez de Lozada introdujo algunas leyes socialmente inclusivas y participativas, incluyendo un programa de reforma agraria. Después de obtener cierto crédito político por la recuperación económica ante la hiperinflación y la crisis por el endeudamiento de 1985, Sánchez de Lozada buscó mantener la función estatal de acumulación de capital al tiempo que aumentaba su legitimidad. Petras y Veltmeyer (2005, p. 185) llaman a este híbrido modelo neoliberal como una forma de “liberalismo social” donde un programa neoliberal traducido en medidas y políticas macroeconómicas, incluyendo la privatización, la modernización agrícola y la reforma laboral, va acompañado de una nueva política social dirigida los pobres: una especie de ajuste estructural con “rostro humano”.

Respaldo por un vicepresidente indígena, Sánchez de Lozada intentó mantener el modelo neoliberal basado en las ideologías de libre mercado, privatización, liberalización del comercio y desregulación, y a la vez buscó consentimiento entre los indígenas, campesinos y sindicatos cuya conciencia de clase y étnica estaba en ascenso. También buscó “reconstruir” el Estado restableciendo la autoridad estatal sobre la sociedad, declarando que el Estado había sido “prácticamente destruido”, que carecía de “mecanismos de control y supervisión” y “capacidad para ejecutar e implementar cualquier plan económico” (Sánchez de Lozada citado en Conaghan *et al.*, 1990, p. 118). En ese marco, la reforma constitucional de 1994 tuvo como objetivo hacer exactamente eso: reformar las instituciones estatales para aumentar su capacidad y obtener consenso entre las masas mediante las políticas de descentralización, la participación popular, la reforma agraria y el reconocimiento de los derechos indígenas, pero sin cambiar el orden neoliberal subyacente, o lo que Willem Assies (2000) designa como “reformismo social neoliberal”. Se modificó el artículo 1 de la Constitución para reconocer a Bolivia como un Estado “multiétnico y pluricultural”, y su artículo 171 reconocía a los pueblos indígenas garantizando su derecho a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), la creación de Distritos Municipales

Indígenas (DMI) y el atributo de ejercer el derecho consuetudinario dentro de sus territorios y comunidades, siempre que no contradiga la legislación vigente o la Constitución. Sin embargo, ni las TCO ni los DMI otorgaban poder autónomo alguno (Van Cott, 2002). Entre 1993 y 1997 se aprobaron importantes medidas legislativas como la Ley de Participación Popular, la Ley de Capitalización, la Ley de Reforma Educativa y la Ley de Tierras (Ley INRA).

La Ley de Participación Popular (LPP) tiene una particular importancia porque cumplió una función explícita de legitimización para garantizar una representación ciudadana más efectiva, elecciones directas para alcaldes y concejos municipales, y transferencias financieras directas (20 por ciento de los ingresos fiscales nacionales) a los gobiernos municipales según su peso poblacional (Grindle, 2000, p. 94). Esta ley se complementó con la Ley de Descentralización Administrativa para desconcentrar a los gobiernos departamentales la gestión de los servicios sociales (salud, educación y asistencia social) y delegar las responsabilidades administrativas de transporte, turismo, medio ambiente, electrificación rural y gestión de fondos de inversión (Grindle, 2000, p. 95). La LPP reconoció a las organizaciones comunitarias, incluyendo juntas vecinales, ayllus, y cabildos, bajo el denominativo de Organizaciones Territoriales de Base (OTB) (Albó, 2002). Un total de 311 municipios fueron reconocidos para recibir transferencias financieras directas del gobierno central (Albó, 2002, p. 79). Esto permitió a las instituciones estatales restablecer su “autoridad”, “control” y “supervisión” sobre la sociedad, tal como buscaba Sánchez de Lozada. Antes de 1994, por ejemplo, la mayoría del territorio boliviano y la mayoría de la población rural –alrededor del 42 por ciento de la población total– no tenían un gobierno local formal (Grindle, 2000, p. 96). Sin embargo, muchas de estas nuevas jurisdicciones municipales no coincidían con los territorios indígenas existentes y fragmentaron su capacidad de reorganizarse por estar sujetos a la división político-administrativa municipal, donde a menudo quienes tomaban las decisiones eran las élites locales (Assies, 2000). A pesar de una mayor representación y participación de las OTB, carecían de peso político, fueron absorbidas y acabaron subordinadas al gobierno municipal. En



esa condición, la LPP se convirtió en una forma velada de control que indujo a la fragmentación de las organizaciones indígenas y su efectiva participación política. En lugar de aumentar la capacidad y control estatal sobre el territorio nacional, la LPP fue más bien un “salvavidas para el desarrollo local” que permitió al gobierno central tener presencia territorial utilizando una forma de “inclusión social” que apuntaba a calmar la resistencia organizada contra el nivel central pero sin dar más voz y autonomía a los marginados (Grindle, 2000, p. 118). Sin embargo, al tiempo que la CSUTCB y la COB estaban en contra de la LPP por temor a que destruyera su autonomía y formas orgánicas de organización sociopolítica, las élites económicas regionales también se opusieron porque perdían cierto control en la toma de decisiones y sobre la distribución de recursos. Las oligarquías regionales, establecidas durante el régimen militar de Banzer y también antes de la Revolución de 1952, comenzaron a presionar para la separación y soberanía regionales debido a la ausencia relativa de las instituciones estatales en las regiones. Sin embargo, Sánchez de Lozada y las élites políticas de La Paz querían hacer de Bolivia un país más “gobernable” y expandir su control político en todo el país, tal como lo expresó el propio Sánchez de Lozada (1997):

Pensé que era importante romper el federalismo en este país; era importante que el país no se separe en diferentes regiones. Esas ciudades solo veían las áreas rurales como periferias, nunca iban a hacer nada por las áreas rurales. Nos estábamos protegiendo de los grupos de presión en esas áreas urbanas. Fuimos muy conscientes (en el sentido de la gobernabilidad) del hecho de que si cedes el poder, te vuelves más fuerte, obtienes poder (Grindle, 2000, p. 119).

La capacidad de las autoridades del Gobierno Nacional de adoptar políticas contra los intereses inmediatos de la oligarquía regional demuestra que existía una relativa autonomía del Estado, especialmente durante este período en el que casi la mitad de la población no estaba representada por ningún gobierno local. A medida que las instituciones y capacidades estatales se expandieron y aumentaron en todo el país, las élites locales y regionales comenzaron a

integrarse e infiltrarse en tales instituciones y, con el tiempo, la LPP reforzó los desequilibrios de poder locales y regionales, reflejando así la estructura de clases preexistente en la sociedad. Sin embargo, eso no quiere decir que la LPP y el reconocimiento de los derechos indígenas, la multiculturalidad y lo pluriétnico sean insignificantes. Por el contrario, abrieron nuevos espacios y, más importante aún, acrecentaron la conciencia de clase entre la mayoría marginada, un hecho que llegaría a tener grandes implicaciones en la siguiente década. Tales políticas encajan en el marco de lo que Charles Hale denomina el “multiculturalismo neoliberal”, según el cual los defensores de la doctrina neoliberal apoyan proactivamente una versión sustantiva, si bien limitada, de los derechos culturales indígenas, como un medio para resolver sus propios problemas y avanzar sus propias agendas políticas (Hale, 2002, p. 487).

Una segunda reforma agraria fue lanzada por el gobierno de Sánchez de Lozada mediante la Ley 1715 de 1996 (Ley INRA). Uno de los objetivos clave era formalizar los derechos de propiedad mediante el saneamiento como una forma de fortalecimiento estatal al hacer de la sociedad más inteligible, comprensible y descifrable para el Estado (Scott, 1998). Al hacerlo, el Estado podría generar ingresos tributarios por las tierras agrícolas y estimular la producción al asegurarse que las tierras no permanezcan inactivas o funcionales para el acaparamiento especulativo y cumplan la Función Económica y Social (FES) (Albó, 2002). Los territorios indígenas (TCO) y las pequeñas propiedades también fueron priorizados con protecciones legales y exenciones impositivas. La Ley 1715 tenía por objetivo recuperar las tierras ilegales para redistribuirlas entre las comunidades campesinas e indígenas. Por un lado, esta iniciativa perseguía principios legítimos de justicia social para las mayorías campesinas e indígenas. Por otro, los grupos de poder económico y político lanzaron una confrontación abierta con la intención de neutralizar la nueva ley que buscaba expandir el control estatal sobre las tierras bajas de Santa Cruz. La lucha legal se convirtió en una lucha política (Valdivia, 2010).

La implementación de la nueva ley de tierras implicaba que todas las tierras sin cumplimiento de la FES deberían ser revertidas al Estado. Sin embargo, los grandes terratenientes representados por la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO) reforzaron sus demandas de protección de la propiedad privada y lucharon contra cualquier intento de redistribución de las propiedades pre-existentes (Urioste, 2007). Esta resistencia política y sectorial, con fuerte influencia económica y política cruceña, fue extremadamente efectiva porque el proceso de titulación de tierras arrojó resultados marginales, menos del diez por ciento de tierras tituladas hasta fines de 2004. Como explica Valdivia (2010), la élite de Santa Cruz conformó una hegemonía regional representándose a sí misma como “productores exitosos” a partir de narrativas de legitimación que también proclaman que los pequeños productores y campesinos podrían convertirse en exitosos empresarios agrocapitalistas. Además de esta resistencia sectorial, otro factor que condujo a la ineficacia de la Ley INRA, en cuanto a la redistribución, fue el hecho de que las tierras improductivas de la década de 1990 acabaron siendo controladas por agricultores capitalistas de Brasil, Argentina y Bolivia, quienes compraron grandes extensiones de tierra y expandieron sus propiedades. Esto dificultó la reversión de las grandes y medianas propiedades porque la tierra, antes sin actividad económica, ahora se ponía a producir, cumpliendo así con todos los requisitos para proteger su propiedad privada. Esta reforma agraria quedó en gran parte “inconclusa” con un estimado de 100 mil familias sin tierra y la persistencia de la pobreza rural como efecto del sesgo pro-terratendiente en las tierras bajas que continuó marginalizando a los campesinos, pequeños propietarios y trabajadores rurales asalariados y ,en particular a los pueblos indígenas y mujeres (Kay y Urioste, 2007; Kay, 2009).

### **Expansión del capital extranjero y expansión sojera**

La década de 1990 fue un periodo de incursiones visibles del capital extranjero, no solo en el sector sojero, sino también en la compra de haciendas ganaderas en áreas remotas de la frontera agrícola. En solo quince años (1985-2000) la superficie cultivada con soya aumentó

de 50 mil hectáreas a 500 mil hectáreas (ANAPO, 2015). Esta rápida expansión de la frontera agrícola durante un período de tiempo relativamente corto se llevó a cabo con poca supervisión y regulación sobre la tenencia legal de la tierra. El mercado de tierras estaba “abierto para el negocio”, tal como explicó un agricultor brasileño que trabaja en Bolivia [B. Pereira, Comunicación personal, abril de 2014]. En la década de 1990, el gobierno boliviano estaba tan ansioso por atraer inversiones extranjeras que la tierra se entregaba casi en forma gratuita. Los agricultores compraron tierras en lo que ahora se llama “zona de expansión” por un valor entre USD 20 y USD 30 por hectárea. Hoy, estas mismas tierras se venden por un valor de USD 2.000 y USD 5.000 cada hectárea (Notas de campo, 2014-2015). La ley de tierras no era aplicable porque las transacciones de tierras formales e informales se generalizaron y el mercado de tierras era atractivo para los agricultores capitalizados que veían que, en sus países de origen, los costos de producción iban en aumento.

B. Pereira, por ejemplo, es un propietario grande que llegó de Rio Grande do Sul, Brasil. Creció en el sur de Brasil durante el auge inicial de la soya impulsado por las relaciones comerciales con Japón en la década de 1970. A medida que los precios de la tierra aumentaban dramáticamente en su estado de origen, B. Pereira identificó en Bolivia una oportunidad para expandir sus propiedades y continuar cultivando con costos de producción mucho más bajos. Llegó a San Julián en 1990, compró 1.400 hectáreas de tierra a un precio de USD 30 por hectárea, tierra que ahora utiliza para la producción de soya (700 hectáreas) y para pastizales de ganado (700 hectáreas). En ese momento, prácticamente no existía la agricultura mecanizada y prevalecía la producción intensiva en mano de obra. B. Pereira trajo maquinaria de Brasil al igual que muchos otros durante la década de 1990. B. Pereira explica que ahora podría vender sus tierras al menos por USD 3.000 la hectárea, mientras que al otro lado de la frontera con Brasil, en el estado de Mato Grosso, similares tierras tienen un precio que oscila entre los USD 20.000 y USD 30.000 por hectárea. Además, los costos de producción son mucho más bajos en Bolivia porque el gobierno subsidia el diésel, lo que equivale aproximadamente al 30 por ciento de lo que cuesta en Brasil. Pereira explica tam-

bién que el diésel “no solo es más caro en Brasil, al igual los costos de los insumos agrícolas, sino que allá es más difícil mantener la fertilidad de los suelos, mientras que la calidad de la tierra en Bolivia (zona de expansión) es mucho mejor porque es tierra joven (B. Pereira, Comunicación personal, abril de 2014). Debido a que la mayoría de las tierras de esta región eran hasta hace poco bosques nativos, la fertilidad del suelo probablemente no alcanzó el punto de agotamiento y salinidad por el uso de agroquímicos que las tierras de Brasil experimentaron por el mayor tiempo de uso en producción.

Cuando se le preguntó sobre el gobierno boliviano, Pereira estaba relativamente satisfecho. Señaló que “el gobierno ha sido bueno con los productores y con la economía en general; los precios y las tasas de cambio han sido estables, la propiedad privada es más segura y puedes trabajar tu tierra en paz” (B. Pereira, Comunicación personal, abril de 2014). Pero si bien las leyes son favorables para los productores y propietarios de tierras a gran escala, Pereira describió la situación de los pequeños agricultores. “La soya es un negocio para grandes productores”, explicó. “Los más pequeños no pueden sobrevivir sin el apoyo del gobierno. Con las políticas gubernamentales actuales, no hay futuro para los pequeños productores, probablemente tendrán que vender sus tierras y migrar a las ciudades” (B. Pereira, Comunicación personal, abril de 2014). Aunque puede existir una tendencia a catalogar de “villanos” a los grandes agrocapitalistas extranjeros, Pereira se mostró crítico con el Estado por no apoyar a los pequeños propietarios. Afirma que el gobierno podría invertir en lo que denomina “aldeas agrícolas” que podrían funcionar como cooperativas, compartiendo maquinaria agrícola y construyendo fuertes redes de agricultor a agricultor, algo que requiere de asistencia técnica e infraestructura rural. También criticó la concentración de la tierra, subrayando que las lagunas legales que existen sobre el límite máximo de 5.000 hectáreas facilitan que las personas simplemente registren sus propiedades bajo diferentes nombres de sus familiares. Su amigo brasileño posee 50 propiedades, pero ninguna de ellas está a su nombre, por lo que puede controlar unas 20 mil hectáreas sin ningún problema. De esta manera, afirma, el sistema funciona a favor de los intereses de los grandes

propietarios pero en contra los pequeños agricultores. A pesar de vivir en Bolivia por más de 20 años, B. Pereira todavía no se siente parte de Bolivia o de su comunidad. Su esposa es boliviana, pero siente que los bolivianos lo discriminan por la tierra que posee y por el hecho de que es extranjero.

Otro productor brasileño, F. Sousa de Paraná (nombre ficticio), llegó a Bolivia en 1996 para aprovechar las tierras disponibles a precios más bajos. Sousa posee 430 hectáreas, trabaja otras 270 hectáreas que pertenecen a propietarios sin maquinaria, y recientemente compró propiedades de sus vecinos (40 hectáreas cada una) a un precio de USD 1.200 por hectárea. También posee tierras en Brasil, pero las dejó a cargo de sus hijos mientras él permanece en Bolivia. Continúa viajando entre Bolivia y Brasil según los ciclos de siembra y cosecha, viviendo en ambos países durante todo el año. Batista explica que compró 430 hectáreas por USD 50 la hectárea y cree que ahora podría venderlas por USD 6.000 cada hectárea porque son tierras fértiles de alta calidad que producen 3,5 Toneladas/ha, lo que es casi el doble del promedio en la región. Al igual que Pereira, Sousa no se siente parte de la comunidad boliviana y percibe que es discriminado por ser un propietario extranjero. Sin embargo, nunca ha tenido ningún problema con el Estado boliviano y trabaja su tierra en paz, que es todo lo que necesita. Cuando se le preguntó sobre los planes de expandir sus propiedades, Batista afirma que “no hay oportunidades de expandirse, a pesar de que el gobierno dice que hay tierras, pero esas son de mala calidad; todas las buenas tierras de Bolivia que valen la pena trabajar ya están tomadas” (F. Sousa, Comunicación personal, mayo de 2014).

Estas dos historias de ciudadanos brasileños que trabajan la tierra en Bolivia permiten entender las cambiantes relaciones de acceso y control sobre la tierra que tienen lugar por el desarrollo del complejo sojero y la llegada de nuevos actores capitalistas. Estos nuevos actores son medianos y grandes propietarios de Brasil, Argentina y Bolivia que participan bajo modalidades como la *agricultura por contrato* junto con agroindustrias como Cargill, ADM, Gravetal, FINO, etcétera, con las que entran en relaciones para comprar semillas e

insumos agroquímicos y acuerdan contratos que fijan precios de compra de granos al momento de la cosecha y según la cotización de la Cámara de Comercio de Chicago. Estos agricultores capitalizados que tienen tractores y cosechadoras son parte de la minoría, representando solo el seis por ciento de los productores de San Julián y el 17 por ciento de Cuatro Cañadas (INE, 2015a). Estos agricultores están incorporando y absorbiendo las tierras de los propietarios poco capitalizados, ya sea mediante diversos acuerdos contractuales que se conocen como contratos de “partida” o mediante compras directas de tierras, tal como explicó Sousa, quien adquirió las parcelas adyacentes de sus vecinos. Estos procesos, que se conocen como ‘exclusión productiva’, son analizados con detenimiento en el siguiente capítulo.

## **El surgimiento de un nuevo movimiento social**

Estas dinámicas agrarias coincidieron con importantes luchas en las áreas urbanas. Severas desigualdades, particularmente entre las clases del capital y el trabajo, pero también entre lo urbano y lo rural, entre hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, se acentuaron cuando el presidente Hugo Banzer (1997-2001), en alianza con el capital extranjero, privatizó la empresa de suministro de agua de Cochabamba, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), lo que aumentó drásticamente las tarifas del consumo de agua. Los 15 años de reformas neoliberales que recortaron el gasto público, privatizaron los servicios públicos, desregularizaron la economía y liberalizaron el comercio, culminaron con la “Guerra del Agua” en Cochabamba, cuando una alianza sin precedentes entre varias organizaciones laborales, incluyendo la Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR), la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Cochabamba (FDTEC), asociaciones vecinales, comités de agua potable, la CSUTCB, grupos indígenas y otros sectores sociales preocupados por el aumento de las tarifas del agua se unieron bajo la representación de la Coordinadora para la Defensa del Agua y la Vida (Assies, 2003). Se unieron no solamente contra la privatización del suministro de agua, sino en contra de las reformas neoliberales que llevaron a mucha

gente a la exclusión y marginalización desde 1985 (Assies, 2003). La clara alianza Estado-capital, manifiesta en la privatización, se hizo evidente para las clases trabajadoras, lo que condujo a una crisis de legitimidad del Estado que se aceleraba con las protestas convergentes de sectores urbanos y rurales. Fue un momento único en el que se formó una alianza entre los trabajadores de la ciudad y el campo, organizaciones campesinas, vecinales y ONG, todas bajo el paraguas de la Coordinadora para la Defensa del Agua y la Vida. Más que una organización formal, la Coordinadora era una estructura basada en redes que unían a diferentes tipos de organizaciones.

Este movimiento contó con el apoyo intelectual del grupo “Comuna” liderado por destacados académicos de orientación marxista como Luis Tapia, Raúl Prada, Raquel Gutiérrez Aguilar y el ahora vicepresidente Álvaro García Linera, entre otros, quienes podrían calificarse como los “intelectuales orgánicos” que representan los intereses de las clases excluidas, marginadas y explotadas (Gramsci, 1971). La “Comuna” publicó una serie de trabajos desde 1999 criticando el asalto del capitalismo neoliberal a la sociedad boliviana durante los últimos quince años y, de forma general, el asalto neoliberal en América Latina. El trabajo de esos intelectuales revivió la erudición marxista boliviana con una dimensión étnica ubicada dentro del análisis de clase e inspirada en los trabajos del renombrado sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado, particularmente centrado en su concepto de Bolivia como una “sociedad abigarrada” que representa la complejidad de las dimensiones de clase y etnia (Zavaleta, 1986). De hecho, Gutiérrez Aguilar y García Linera formaban parte de los movimientos guerrilleros kataristas que en la década de 1970 facilitaron coaliciones entre movimientos indígenas, campesinos y obreros. Los miembros de la Comuna no eran solo intelectuales, sino activistas y, en el caso de García Linera, pasó a formar parte del partido político que tomó el poder pocos años después.

Surgió así un “nuevo movimiento social” que exigía nuevas formas de participación y democracia directa con alianzas intersectoriales, de clase, género, generacionales y étnicas (Assies, 2003, p. 34). En la práctica, estos “nuevos movimientos sociales”, por toda su com-



plejidad, requirieron que los académicos vayan más allá de la forma economicista del análisis de clase que, por un lado, ignora los aspectos subjetivos de la formación de clases y, por otro, no valora las interpretaciones postmodernistas de tipo subjetivo e idealista (Veltmeyer, 1997, p. 149). En una línea similar, Arsel y otros autores (2015, p. 391) argumentan que la comprensión de las nuevas luchas ambientales que se basan en alianzas de clases requieren de una comprensión más flexible sobre el concepto de clase, un razonamiento que vaya más allá de la relación directa con la producción y distribución del excedente económico, un enfoque que se concentre y otorgue primacía a la exclusión. Un caso estudiado por Arsel y otros autores es el referido a la coalición entre activistas campesinos y una ONG en Turquía, una alianza que se conformó no según sus posiciones de clase compartidas, sino en sus formas compartidas de exclusión política y en el acceso a recursos. El ambientalismo de los campesinos y lo que se denomina como “ambientalismo de los descontentos” produjo, en el caso mencionado, una “colaboración mutuamente beneficiosa” (Arsel, Akbulut y Adaman, 2015, p. 376), similar a la convergencia de movimientos sociales, ONG e intelectuales desde la Guerra del Agua en Cochabamba hasta la elección de Evo Morales y el gobierno del MAS. Así, las medidas de austeridad introducidas por las políticas neoliberales no hicieron sino encender la autoconciencia subjetiva de las clases marginadas, explotadas y excluidas. Mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos, trabajadores rurales y urbanos, ONG e intelectuales, ganaron fuerza con la unidad colectiva de sus identidades subjetivas basadas en sus posturas amplias como clases excluidas y marginadas.

El movimiento –o la convergencia de movimientos– se mantuvo activo hasta que estalló la “Guerra del Gas” y alcanzó su punto máximo en 2003 con la demanda del control estatal de las reservas de gas natural. Estos movimientos precipitaron la renuncia de dos presidentes y finalmente la elección del primer presidente indígena, Evo Morales del MAS. A mediados de la década de 2000, casi el 60 por ciento de la población estaba empobrecida y más de un tercio en situación de pobreza extrema, datos que indican que la mayoría sufría exclusión y marginación (Weisbrot, Ray y Johnston,

2009). Los gobiernos neoliberales que administraron el poder estatal durante los últimos veinte años finalmente sufrieron una crisis de legitimidad que ya no podía reconciliarse ni resolverse con las soluciones residuales inherentes al “reformismo social neoliberal” (Assies, 2000) o con el “multiculturalismo neoliberal” (Hale, 2002). Una nueva alianza de movimientos sociales representó el cambio político que convirtió a los excluidos y marginados en una poderosa mayoría unida contra el neoliberalismo, una alianza desencadenada por una suerte de liberación cognitiva, de conciencias de clase y étnicas combinadas y reforzadas por la participación política que desmanteló parcialmente las desiguales y preexistentes estructuras de poder. Prometiendo restaurar la soberanía nacional sobre los recursos naturales y redistribuir la riqueza entre la mayoría marginada, Evo Morales y el MAS llegaron al poder en nombre del “socialismo comunitario”, obtuvieron legitimidad mediante el apoyo del Pacto de Unidad y, discursivamente, aislaron a las élites oligárquicas y económicas. En el siguiente capítulo se analiza la política del cambio agrario bajo el gobierno de Evo Morales y el MAS, una política que emerge con la producción intensiva en capital que se hace omnipresente, transformando las relaciones sociales agrarias por medio de nuevas formas de exclusión y control.

## Capítulo 3

# Control estatal: la política del cambio agrario de Evo Morales

“Imagínense si la gente de aquí quisiera bloquear las carreteras y destruir las principales rutas de transporte de soya y otros productos. Sería mucha presión para el gobierno. Pero eso no sucede porque los pequeños propietarios se encadenaron y dependen de la agroindustria, por lo tanto quieren que tenga éxito. Si bloquean las carreteras, inmediatamente tendría impactos negativos sobre sus medios de vida. Aquí la gente vive de cosecha en cosecha, por lo que movilizarse contra la agroindustria de la que ahora dependen va en contra de sus mayores intereses”.

J. Pérez, Cámara Agropecuaria  
de Pequeños Productores del Oriente, CAPPO  
(Nombre ficticio, comunicación personal, enero de 2015).

### Introducción

Las numerosas contradicciones respecto del modelo de desarrollo agrícola en Bolivia –en el contexto de una retórica estatal que ensalza la “Revolución Agraria”, la ley de la Madre Tierra y los compromisos con la soberanía alimentaria (McKay, Nehring y Walsh-Dilley, 2014)– reflejan un proceso más amplio de lo que Webber describe como “neoliberalismo reconstituido” (Webber, 2011). Este proceso se caracteriza por cambios en las políticas sociales y económicas pero sin experimentar cambios estructurales importantes en la economía política (Brabazon y Webber, 2014). La retórica del Estado se ha convertido en un “discurso legitimizador” (Kersson, 2013) antes que en una transformación estructural, al tiempo que los principales movimientos sociales fueron cooptados, perdiendo autonomía y posibilidades de empoderamiento (McKay *et al.*, 2014). Como señalan Brabazon y Webber (2014, pp. 461-462), la trayecto-

ria del cambio agrario en Bolivia está “reforzando la concentración de tierras productivas en manos del capitalista agrario de mediana y gran escala, en lugar de desmantelarla”. Y en lugar de romper con el pasado, las políticas estatales actuales han reproducido las relaciones de dependencia con el capital agroindustrial (Córdoba y Jansen, 2014, p. 497), por lo que no ofrecen vías alternativas para los pequeños agricultores o campesinos a través del “desarrollo agrario neocolectivista”, sino que refuerzan un modelo que está en sintonía con las propuestas de salida de la pobreza del Banco Mundial: 1) Que los pobres se hagan agricultores capitalistas dentro del sistema agroindustrial; 2) Que se conviertan en trabajadores rurales asalariados dentro o fuera de la agricultura; y 3) Que migren a las ciudades (Banco Mundial, 2007b).

Este capítulo analiza la política contemporánea del cambio agrario a partir de las relaciones que establece el Estado con sus principales electores, representados por los movimientos sociales del Pacto de Unidad,<sup>1</sup> y con varias fracciones de clase del capital. Desde el lanzamiento de la “Revolución Agraria” en 2006, hasta la “Revolución Productiva” de 2011, el MAS ha intentado transformar la estructura agraria para alcanzar la seguridad y soberanía alimentarias, y el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas. Sin embargo, con el correr de los años, las élites agroindustriales y los terratenientes de las tierras fértiles de Santa Cruz pasaron de ser enemigos del gobierno del MAS a formar una nueva alianza Estado-capital con intereses compartidos para la expansión de la frontera agrícola. Como resultado de esta alianza, los pequeños agricultores, los trabajadores asalariados rurales y los pueblos indígenas fueron todavía más marginalizados y excluidos, al tiempo que la producción agrícola adquirió un carácter más extractivista (McKay, 2017a). Las nuevas dinámicas políticas, alianzas, tensiones y conflictos dentro y entre las partes involucradas tienen implicaciones importantes para

---

1 El Pacto de Unidad, vale la pena reiterarlo, es una alianza de movimientos sociales formalmente conformado en 2004 y compuesta por campesinos (CSUTCB), comunidades interculturales (CSCIB), mujeres indígenas, campesinas y originarias (CNMCIOB-BS), pueblos indígenas (CIDOB) y Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ).

el rumbo de las trayectorias del cambio agrario de Bolivia. La función dual y a menudo contradictoria del Estado capitalista, la de facilitar la acumulación de capital y mantener la legitimidad social al mismo tiempo, es fundamental para comprender estos procesos y las dinámicas cambiantes dentro del nexo Estado-sociedad-capital. Este capítulo analiza, por tanto, las cambiantes relaciones entre el Estado, la sociedad y el capital, analizando la política del cambio agrario en el contexto de un gobierno de izquierda socialmente progresista que llegó al poder prometiendo una revolución agraria pero que luego acabó comprometido con la expansión del complejo sojero agroindustrial.

### **La “Revolución Agraria”: reclamando la legitimidad estatal**

En junio de 2006, el presidente Evo Morales anunció el comienzo de una revolución agraria en las tierras bajas de Santa Cruz, la región donde se asienta la agroindustria (y sus élites) en el país. En presencia de miles de sus partidarios, incluyendo indígenas, campesinos y trabajadores rurales asalariados, el presidente Morales entregó títulos de propiedad (Tierras Comunitarias de Origen, TCO) a favor de 60 comunidades indígenas sobre una extensión de 7,5 millones de hectáreas (Fabricant, 2012, p. 140). Si bien esto, de hecho, representaba un importante reconocimiento formal de los derechos territoriales para las comunidades indígenas, no debe entenderse como una (re) distribución, debido a que estas tierras ya estaban ocupadas y controladas por las comunidades pese a no estar registradas en la base de datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en los diez años anteriores. Prometiendo que se distribuirían 20 millones de hectáreas adicionales a favor de 2,5 millones de pobres rurales en los próximos cinco años, el presidente Morales exclamó: “Los grandes terratenientes del oriente están llorando. Están llorando históricamente porque saben que sus días de gloria han terminado... ¡Aprovecharemos su tierra improductiva y se la daremos a campesinos pobres!” (Citado en Fabricant, 2012, p. 140). Cinco meses después se promulgó la Ley 3545 (Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria) que fue difundida públicamente como “Revolución Agraria”.

Los principales objetivos de la Ley 3545 son: 1) Asegurar que toda la tierra cumpla la Función Económica Social (FES); 2) Redefinir los términos de expropiación de propiedades medianas y grandes por necesidad de interés público, y asegurar que las comunidades indígenas tengan acceso a suficientes recursos y tierra para su reproducción sostenible; 3) Redefinir los términos y priorizar la distribución de tierras fiscales a favor de comunidades indígenas y campesinas; y 4) Reformar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que careció de legitimidad en el período neoliberal para otorgarle mayor transparencia y capacidad de ejecución y transformarlo de la estructura agraria (INRA, 2010, p. 7). La Ley 3545 prohíbe toda forma de trabajo forzoso o no remunerado y permite que los movimientos populares, las autoridades departamentales y municipales, las federaciones indígenas, los sindicatos y las comunidades, participen en el saneamiento, reversión, expropiación y concesión de tierras, empoderando a las poblaciones rurales al hacer posible su participación directa en el proceso agrario (Valdivia, 2010, p. 74). Si bien la Revolución Agraria avanzó en la formalización de la tenencia de la tierra y el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas, no logró dismantlar la estructura agraria desigual que prevalece y que continúa excluyendo y marginalizando a las mayorías rurales, en particular, a los campesinos y productores a pequeña escala (Colque *et al.*, 2016; McKay y Colque, 2016). La Revolución Agraria se entiende mejor como una reforma de la tenencia o formalización de los derechos propietarios, en lugar de una reforma agraria redistributiva. Como explica Byres, “la reforma de la tenencia de los derechos propietarios se refiere a los términos en los que se sostiene y funciona la unidad de explotación”; es una reforma que “busca eliminar aquellos incentivos desalentadores que reducen la inversión, impiden la eficiencia y no permiten el surgimiento de una agricultura eficiente, dinámica y en crecimiento”, mientras que la “reforma agraria redistributiva”, en principio, es más radical, y “busca redistribuir las unidades de explotación, transfiriendo tierras de grandes unidades de explotación a los que no tienen tierras (campesinos sin tierra y trabajadores asalariados) o tienen pequeñas propiedades (campesinos pobres), estableciendo techos máximos para el tamaño de las unidades de explotación” (Byres, 2004, p. 3). Como Bo-

rras demuestra en su estudio sobre la reforma agraria de Filipinas, “una reforma agraria, para que sea realmente redistributiva, debe afectar la estructura agraria preexistente, provocando un cambio de propiedad y/o control de los recursos de la tierra, de modo que el cambio fluya estrictamente desde los terratenientes hacia los sin tierra y las clases pobres, o desde los terratenientes ricos hacia los campesinos pobres y trabajadores rurales” (2007, p. 281). Borrás revela que la redistribución efectiva no excluye necesariamente el uso de tierras fiscales (o estatales) o reformas de los arrendamientos, ni incluye necesariamente la redistribución oficialmente reportada de tierras privadas (2007). Más allá de cuestionar la fiabilidad de los datos oficiales, Borrás (2006, p. 76) señala que numerosas relaciones de producción entre terratenientes y campesinos no se encuentran en tierras privadas, sino en tierras oficialmente catalogadas como públicas a pesar de su apropiación privada, lo que hace que las reformas reales no sean siempre visibles de inmediato para los observadores y estudiosos que erróneamente descartan estas dinámicas. Lo que es verdaderamente importante, sostiene Borrás, es la transferencia de la riqueza basada en la tierra y el poder político de las élites terratenientes a los pobres rurales marginalizados. Este proceso, además, puede adoptar diversas formas.

Las reformas de tenencia y la formalización de los derechos territoriales no son necesariamente medidas redistributivas; por ejemplo, son ciertamente importantes en los casos en que el acceso democrático a la tierra se encuentra bajo amenaza, y por tanto existe una necesidad urgente de reconocimiento y protección (Franco *et al.*, 2015). En el caso de los pueblos indígenas, el reconocimiento y la protección de sus derechos territoriales, autónomos y comunitarios es extremadamente importante, especialmente en el actual contexto mundial de disputa por los recursos y de presión para la adopción de reformas de derechos de la propiedad privada, individualizada y negociable (De Soto, 2000). Sin embargo, en situaciones donde la estructura de tenencia de la tierra es altamente desigual, la formalización de derechos a la tierra puede reforzar y consolidar el existente acceso desigual la tierra, más aún si se lleva a cabo de forma “despolitizada” y “técnica” (Franco, Monsalve y Borrás,

2015, p. 67). En otras palabras, el contexto importa, y no podemos adoptar una u otra perspectiva sobre reforma de la tenencia *versus* la redistribución. En el caso de la Ley 3545, las reformas de la tenencia y la formalización de los derechos se implementaron en un contexto de estructura agraria desigual en términos de tenencia de la tierra y poder político. En consecuencia, la formalización reforzó y consolidó la estructura agraria desigual preexistente. Sin embargo, no podemos ignorar su importancia para el caso de los pueblos indígenas. Por un lado, el proceso de formalización se ha considerado como un logro por el gobierno del MAS, como se analiza más adelante, pero por otro, el Decreto Supremo 2366 de mayo de 2015 retiró la protección de territorios indígenas al legalizar la extracción de hidrocarburos dentro de áreas protegidas preestablecidas, incluyendo parques nacionales, reservas naturales y territorios indígenas (Campanini, 2015). Estas dinámicas y fronteras extractivistas en expansión se discuten más a fondo en el Capítulo 5 de este libro.

A pesar de un discurso progresista y radical, la Revolución Agraria ha sido un proceso de formalización de la tenencia de la tierra. La aplicación de la Función Económica Social (FES) es un intento por alentar a invertir más para “una agricultura eficiente, dinámica y en crecimiento” (Byres, 2004, p. 3). Y en lugar de imponer límites al tamaño de la tierra, como es necesario para cualquier reforma agraria redistributiva, las lagunas legislativas eliminaron prácticamente por completo cualquier avance para fijar límites máximos a las grandes propiedades. La brecha entre el discurso y la práctica estatal es parte de la estrategia política del MAS, una estrategia que busca mantener el poder estatal equilibrando los discursos de legitimación popular sobre la distribución de riqueza y la política de acumulación permanente de capital a través de un modelo de desarrollo extractivista.

Una de las principales funciones de la Ley 3545 fue ampliar el plazo de saneamiento que había expirado en octubre de 2006 (conforme a la Ley 1715 de 1996 del INRA). Entre 1996 y 2006, el saneamiento solo logró titular formalmente aproximadamente el 12 por ciento de las cerca de 106 millones de hectáreas de tierras (públicas y pri-



vadas) que debían ser regularizadas (INRA, 2010). A pesar de esta deficiencia, hubo importantes avances para los derechos indígenas con las TCO de propiedad colectiva. La CPE de 1994 y la Ley 1715 reconocieron las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) como inalienables, indivisibles, irreversibles y colectivas, tierras donde los indígenas pueden ejercer funciones administrativas y judiciales de acuerdo a normas, prácticas y procedimientos propios, siempre que no sean contrarias a la Constitución y leyes existentes (Artículo 171, CPE, 1994). Entre 1996 y 2006, más de ocho millones de hectáreas fueron formalmente reconocidas y tituladas como TCO, lo que representa un impresionante 64 por ciento del total de tierras tituladas durante el mismo período, pero todavía muy lejos de los 16,4 millones de hectáreas de TCO que serían reconocidas durante los siguientes diez años (Colque *et al.*, 2016).

Desde 2007 hasta 2009, el gobierno del MAS afirmó haber titulado y saneado<sup>2</sup> 27 millones de hectáreas de tierras fiscales y privadas, triplicando así, y en solo cuatro años, lo que se había logrado en los diez años anteriores con la Ley 1715 (INRA, 2010). Si bien esta cifra es realmente impresionante, cabe señalar que casi la mitad (15,2 millones de hectáreas) se tituló como “tierras fiscales”, mientras que 11,8 millones de hectáreas ya estaban en proceso de titulación en el periodo anterior, aunque sin que la titulación se haya formalizado (Colque *et al.*, 2016, p.165). La formalización de las tierras fiscales no significa que estas se distribuyeron como propiedades privadas o colectivas, sino que fueron tituladas y registradas como fiscales o estatales. Parte de estas tierras, por supuesto, podrían en el futuro estar sujetas a reformas distributivas, aunque muchas de ellas están situadas en zonas boscosas y en áreas no aptas para los cultivos (Colque *et al.*, 2016). No obstante, el Gobierno Nacional supo usar la cifra de 27 millones de hectáreas tituladas para aumentar su legitimidad mediante discursos públicos y, en realidad, sin desafiar la estructura agraria existente a través de transferencias de suma cero

---

2 El término “tierras saneadas” se refiere a las propiedades que han sido sujetas a una revisión técnica y jurídica por parte del Estado (INRA) para la formalización y titulación como propiedad agraria.

de la riqueza basada en la tierra. La expropiación o reversión de latifundios improductivos, con criterios técnico-legales, no se aplicó, sino que fue usada selectivamente como herramienta política contra ciertos líderes de la oposición considerados separatistas, entre ellos los políticos terratenientes conservadores Branko Marinkovic y Osvaldo Monasterios (Urioste, 2012, p. 453).

Este período políticamente controvertido (desde el año 2006 al 2009) muestra una importante coyuntura en la que las mayorías históricamente marginalizadas, representadas por el Pacto de Unidad, se volvieron parte del Estado y aparecieron representadas por instituciones estatales. Un renovado sentido de clase e identidad política revigorizó a las poblaciones indígenas y campesinas, que en gran medida fueron las responsables del ascenso de Evo Morales y el MAS después de años de lucha contra las reformas neoliberales de las dos décadas anteriores. Las élites económicas, por su parte, marginadas de la administración de las instituciones estatales, vieron peligrar sus intereses económicos. Los discursos populistas sobre la nacionalización de los recursos naturales y la Revolución Agraria pusieron en entredicho el futuro de estas élites, lo que estimuló la creación de una coalición en torno a la llamada “Media Luna”,<sup>3</sup> encabezada por el gobernador de Santa Cruz y el líder de la oposición, Rubén Costas. Las divisiones entre los bolivianos se hicieron cada vez más marcadas y visibles: entre las tierras altas y las tierras bajas, entre indígenas y mestizos, entre las clases trabajadoras y el capital. Después de que las fuerzas opositoras de la Media Luna presionaron por la autonomía, se realizó un referéndum en agosto de 2008 cuyos resultados ratificaron un apoyo abrumador (67 por ciento) para el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. En septiembre de 2008, estallaron las protestas violentas en todo el país cuando la “derecha autonomista”, liderada por Costas, intentó un golpe cívico ocupando e incendiando instituciones públicas en

---

3 La “Media Luna” refiere la forma geográfica de un grupo de cuatro departamentos en Bolivia (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) que fueron controlados por la oposición política después de la elección del MAS en el año 2006.

todo el país,<sup>4</sup> hechos que se detuvieron después de la masacre de Porvenir en la que los enfrentamientos entre el movimiento cívico de derecha y los simpatizantes del MAS provocaron la muerte de 19 personas y varios heridos (UNASUR, 2008). El gobierno movilizó las fuerzas armadas y, con un amplio apoyo entre sus bases sociales, retomó el control de las instituciones públicas, desmovilizando con éxito a las fuerzas opositoras y su intento de golpe de Estado. Para el vicepresidente García Linera este fue el punto de bifurcación, un “choque de fuerzas materiales” que solidificó el control del MAS sobre el poder del Estado a través de la movilización y el apoyo que recibió de las fuerzas sociales, forzando a la oposición a retroceder (García, 2011, p. 22).

Si bien la oposición política quedó debilitada y en declive, todavía contaba con la mayoría en el Senado, lo que le otorgó cierto poder para negociar la versión final de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), la de 2009. Para la política agraria, en concreto, tuvo particular importancia la revisión del artículo 315 de la CPE sobre el límite máximo de la propiedad de la tierra de cinco mil hectáreas. En los borradores de la CPE, preparados junto con los movimientos sociales de la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM)<sup>5</sup>, “se decidió que nadie, de ninguna manera, podría tener propiedades por más de cinco mil hectáreas” (Francescone, 2012, p. 68). La versión final de la CPE establece, primero, que el límite máximo no se aplica retroactivamente (lo que significa que son legales las propiedades existentes con más de cinco mil hectáreas) y, segundo, que ese límite máximo se aplica por cada socio individual (lo que significa que una empresa fácilmente puede jugar con el número de socios para justificar su tamaño), de modo tal que la restricción resulta inaplicable (McKay y Colque, 2016, p. 597). En ese mismo sentido, son por demás reveladoras la legalización inalterada de semillas de soya genéticamente modificadas (GM) y la

---

4 Incluyendo el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

5 La Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) fue fundada en 2007 por el MAS, el Pacto de Unidad y otras organizaciones, para redactar la nueva Constitución y participar en la formación y ejecución del “Proceso de Cambio”.

legislación reciente que aumenta los límites de deforestación (Ley 741), la ley que perdona la deforestación no autorizada (Ley 739) y la norma que extiende la verificación de la FES de dos a cinco años (Ley 740). La Revolución Agraria, por todo esto, no logró transformar la estructura agraria altamente desigual, sino que terminó siendo una reforma de la tenencia de la tierra diseñada para que las áreas rurales sean más comprensibles y descifrables para el Estado, a la vez de facilitar el control sobre los recursos naturales por parte de las élites agroindustriales y terratenientes.

Por tanto, la pregunta es cómo interpretar y comprender las políticas que están detrás de estos procesos y las dinámicas Estado-sociedad-capital después del “punto de bifurcación” que aparentemente consolidó el control del MAS sobre el poder del Estado. Castañón (2015) sugiere que fue en esta época en que la élite cruceña prefirió una alianza con el MAS en lugar de un conflicto continuo. Para no quedar excluidas políticamente, esas élites decidieron que era mejor formar parte del “Proceso de Cambio”. En un trabajo más reciente, Webber reitera este argumento de una “alianza agro-capital-Estado” que surgió en 2010 y de “la ruptura en la relación entre el gobierno y las organizaciones indígenas de las tierras bajas” (2017, p. 339). La ruptura se agravó aún más con el conflicto del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) que comenzó en 2011, llevando a la disolución oficial del Pacto de Unidad y las firmes relaciones entre el Estado y la sociedad que llevaron al poder a Evo Morales y al MAS. Aun así, queda la pregunta sobre por qué el MAS habría abandonado sus planes de Revolución Agraria y formado una alianza con los agrocapiatistas en lugar de apoyar a sus principales electores (bases sociales) representados por los indígenas, campesinos y originarios.

### **La “Revolución Productiva”: una alianza Estado-capital**

Cuando el MAS asumió el poder estatal en 2006 dependía en gran medida del apoyo del Pacto de Unidad. De hecho, muchos dirigentes fueron líderes del MAS y, como tales, fueron absorbidos en puestos clave dentro de las instituciones estatales. Si bien es posible que

los movimientos no hayan sido completamente cooptados por el Estado, lo que es indudable es que perdieron gran parte de su autonomía desde que sus líderes entraron en una relación muy estrecha con el Estado y beneficiosa para ambas partes (a veces para obtener beneficios personales por encima de la organización). Formando una sólida relación entre el Estado y la sociedad, el MAS pudo ganar y mantener su legitimidad trabajando en estrecha colaboración con líderes clave del Pacto de Unidad, quienes a su vez ampliarían la legitimidad estatal al interceder por gastos sociales para sus facciones organizacionales, regionales y municipales (Notas de campo, 2014-2015). Por otra parte, y al absorber al Pacto de Unidad en la Asamblea Constituyente, el MAS pudo desarrollar una fuerte relación con los constituyentes de todo el país y particularmente con los provenientes de poblaciones indígenas y campesinas. Con el apoyo y la participación de grupos de intelectuales de izquierda como la “Comuna” y “El Duende”, en los que participó el actual vicepresidente Álvaro García Linera y el que sería ministro de Economía y Finanzas, Alberto Arce Catacora, el MAS presentó el llamado “Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo” (que habría sido puesto en práctica el 2006 pero publicado el 2011) que según sus promotores desafiaba el modelo neoliberal y conduciría al país hacia una transformación estructural de la economía política.

Según Luis Arce Catacora, el nuevo modelo de Bolivia tiene como fundamento cuatro pilares: 1) Crecimiento y desarrollo basados en el uso de los recursos naturales para beneficio de los bolivianos; 2) Apropriación del excedente económico; 3) Redistribución de las rentas extractivistas; y 4) Reducción de la desigualdad y la pobreza (Arce, 2015). Los excedentes generados por los sectores estratégicos, principalmente rentas (incluyendo hidrocarburos, minería, energía y recursos naturales) se transferirían hacia los sectores económicos que supuestamente generan ingresos y empleos (manufactura industrial y artesanal, turismo, desarrollo agrícola, vivienda, comercio, transporte y otros sectores de servicios) (Arce, 2011, p. 7). El Estado, visto como una entidad burocrática de tipo weberiano, autónoma y capaz, fue concebido como el actor central en este modelo diseñado para redistribuir rentas extractivistas y fomentar la indus-

trialización, reteniendo la producción de plusvalor, generando empleos y superando la dependencia de las exportaciones de materias primas. El modelo sigue el tipo de cambio estructural propuesto por Kuznets según el cual la participación de la producción y el empleo en el sector primario disminuye a medida que el país se desarrolla, transitando hacia el fortalecimiento y la creación de sectores industriales, manufactureros y de servicios. El “Estado redistributivo” así concebido, también utilizaría sus ingresos para la reducción de la desigualdad y la pobreza a través de programas de transferencia en efectivo como los que están hoy en vigencia: el Bono Juancito Pinto<sup>6</sup>, la Renta Dignidad<sup>7</sup> y el Bono Juana Azurduy<sup>8</sup>. En un intento de resumir el modelo de desarrollo concebido por el MAS, el vicepresidente García Linera ha dicho que el Estado en Bolivia persigue un modelo de desarrollo extractivista que le permita redistribuir su riqueza en recursos naturales para así superar el extractivismo (García, 2012).

A pesar de las intenciones declaradas de desafiar el modelo económico neoliberal y buscar la transformación estructural hacia una sociedad socialista (Arce, 2015, p. 4), los objetivos no se cumplieron. Por el contrario, el modelo ha generado procesos de exclusión, apropiación de valor por oligopolios y nuevas formas de extracción económica, social y ambiental que amenazan todavía más a las poblaciones históricamente marginalizadas. El desarrollo agrícola, que según el modelo del MAS debiera ser un mecanismo generador de ingresos y empleos, es exactamente todo lo contrario. El sesgo pro-agroindustria y el complejo sojero intensivo en capital excluyen a las mayorías rurales, además de estar controlados por merca-

---

6 Otorga un bono de 200 bolivianos (USD 29) por año a todos los niños/niñas inscritos en escuelas públicas y hasta sexto grado.

7 Otorga un bono de 1.800 bolivianos (USD 258) anuales a los bolivianos de bajos ingresos mayores a 60 años o más y que reciben pagos de Seguridad Social y un bono de 2.400 bolivianos (USD 344) para quienes no tienen seguro social.

8 Otorga un bono de 50 bolivianos (USD 7) a madres no aseguradas por cuatro visitas médicas prenatales; 120 bolivianos (USD 17) por el parto y 125 bolivianos (USD 18) por cita médica hasta por dos años (Weisbrot, Ray y Johnston, 2009).

dos oligopólicos que se apropian de la mayor parte de los excedentes. Además, durante el gobierno de Morales las exportaciones de productos primarios han aumentado, mientras que la producción de bienes industriales con valor agregado y el procesamiento de materias primas sigue teniendo lugar fuera de las fronteras bolivianas. Según el modelo del MAS, la mano de obra debería migrar desde la agricultura hacia la industria, pero esto no ocurre por la débil articulación entre los sectores económicos, de modo que lo que se ajusta es el excedente de mano de obra según las necesidades de la acumulación de capital. La consiguiente falta de cambio estructural ha reafirmado la persistencia de la dependencia de la economía del sector primario exportador, donde las élites políticas y económicas capturan las rentas extractivistas mientras que la legitimidad estatal se mantiene mediante transferencias de dinero a los pobres.

El *boom* de materias primas de principios de 2000, combinado con la nacionalización parcial de sectores clave de la economía, aumentó el presupuesto del Estado en un 445 por ciento, pasando de USD 5,9 mil millones en 2005 a USD 32,1 mil millones en 2015<sup>9</sup> (MEFP, 2015). Durante el mismo período, la inversión pública aumentó de USD 629 millones a USD 6.179 millones: un aumento impresionante del 882 por ciento. Estos aumentos masivos de presupuestos han acrecentado la capacidad de la burocracia e instituciones estatales para cumplir simultáneamente la función de acumulación y la de legitimación (O'Connor, 1973). Como explica O'Connor, los gastos del Estado tienen un doble carácter según las dos funciones básicas del Estado capitalista: capital social y gastos sociales. El capital social es el gasto requerido para la acumulación privada de la renta; es indirectamente productivo, mientras que los gastos sociales consisten en proyectos y servicios necesarios para mantener la armonía social y cumplir con la función de legitimación del Estado (1973, pp. 6-7). En otras palabras, los gastos de capital social incluyen inversiones en infraestructura económica y física, investigación y desarrollo, así como inversiones para reducir los costos de reproducción

---

9 Convertido a USD a una tasa de 1 USD = 6.89 Bs. Los datos originales son Bs. 40.543 millones en 2005 y Bs 221.181 millones en 2015 (MEFP, 2015).

del trabajo como el seguro social. Si bien el seguro social también puede contribuir a la armonía social y, por lo tanto, a la legitimidad (mediante compensaciones laborales, pensiones de vejez, seguros de desempleo y salud), también es una forma de subsidiar (o socializar) los costos del sector privado (por ejemplo, salarios) facilitando así mayores ganancias para el capital privado (O'Connor, 1973). Los gastos sociales, por otro lado, "ni siquiera son indirectamente productivos" y su mejor expresión son los programas de bienestar social para apaciguar a las poblaciones excedentarias (mano de obra sin empleo) que ya no son necesarias para la acumulación de capital. Pero si bien la capacidad de gasto del Estado boliviano, en términos absolutos, se ha traducido en aumentos sustanciales en el gasto público de todos los sectores,<sup>10</sup> los aumentos en términos relativos son mucho más reveladores. Antes de la llegada al poder del MAS, el 30 por ciento de la inversión pública se destinaba al sector social (saneamiento básico, educación, salud, urbanización y vivienda, seguridad social, deporte y cultura). Con el MAS en el poder, la inversión promedio de los últimos diez años disminuyó al 27 por ciento, mientras que los datos preliminares para el año 2016 estiman una caída al 20 por ciento (MEFP, 2015). La mayor parte de la inversión pública se destina al desarrollo energético e hidrocarburos (40 por ciento) y para infraestructura de transporte (29 por ciento), que en conjunto representan casi el 70 por ciento del presupuesto de inversión pública para el año 2016 (MEFP, 2015).

Como porcentaje del PIB, el ahorro nacional bruto alcanzó, en promedio, el 25,3 por ciento desde el año 2006, mientras que las inversiones promediaron el 17,6 por ciento (Quandl, 2016; Banco Mundial, 2016a). En un país en vías de desarrollo como Bolivia, que carece de sectores manufactureros e industriales con valor agregado robusto, sin un gran mercado interno en la agricultura y fuerza de trabajo más especializada, capacitada o educada, una relación de ahorro-inversión tan alta restringe cualquier plan de transformación productiva. Según Jayati Ghosh, cuando el ahorro interno

---

10 El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) utiliza las siguientes categorizaciones sectoriales: infraestructura, productivo, social y multisectorial.



es mayor que la inversión, existe un “proceso de expoliación del ahorro de la población como un todo, pero sin inversión dentro de la economía para asegurar el crecimiento futuro” (Ghosh, 2015, p. 11). Ghosh argumenta que los países en desarrollo (y la mayoría de las economías orientadas a la exportación) no deberían tener una alta relación ahorro-inversión porque ello es señal de falta de inversión en la diversificación de la economía y para su transformación productiva, particularmente hacia industrias de valor agregado y educación (Ghosh, 2015). Las reservas internacionales en Bolivia aumentaron casi en un 400 por ciento desde que el MAS llegó al poder, pasando de USD 3.178 millones en 2006 a USD 15.123 millones en 2014 (BCB, 2016). Si bien las reservas internacionales sirven para evitar crisis financieras, la falta de inversión en la diversificación económica y mano de obra calificada perpetúa la dependencia de los enclaves extractivos de exportación que son más susceptibles a los volátiles mercados internacionales de materias primas. Por lo tanto, si bien es importante mantener un nivel confortable de reservas cuando se deja la dependencia de materias primas, mantener una relación ahorro-inversión tan alta priva innecesariamente a la economía y a la población de recursos necesarios para una transformación productiva y con alto valor agregado.

Desde la perspectiva de los gastos estatales, estos revelan la prioridad que tienen las inversiones en capital social con intereses de acumulación, particularmente en sectores extractivos, aunque sin suficiente énfasis en el desarrollo de eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, con valor agregado y una fuerza laboral altamente calificada y productiva. El desarrollo de eslabones intersectoriales con valor agregado no parece ser una prioridad ni para las élites capitalistas ni para el Estado. Las élites capitalistas invierten en sectores extractivos (minería, hidrocarburos y soya) y están más interesadas en la extracción, rentas y mercados para la exportación. Los actores estatales, por su parte, siguen interesados en el poder político y, por lo tanto, se balancean entre favorecer los intereses económicos del capital y mantener la armonía social entre las masas. Esto requiere, simultáneamente, estabilidad económica para los intereses extractivistas, evitar posibles crisis económicas mediante ahorros

y reservas, y redistribuir parte de la riqueza mediante transferencias de efectivo y gastos sociales para la población marginalizada y excluida. Por lo tanto, este modelo de desarrollo neoextractivista permite que tanto el Estado como el Capital se beneficien de los frutos del sector extractivo. Si bien la nacionalización parcial de recursos permitió al Estado boliviano recaudar más rentas, estas “terminan reproduciendo los mismos procesos productivos, similares relaciones de poder y los mismos impactos sociales y ambientales” que el modelo económico con control privado o foráneo (Gudynas, 2010a, p. 12). Estas dinámicas han hecho posible la emergencia de una alianza Estado-capital con intereses de acumulación que se refuerzan mutuamente, mientras que las relaciones Estado-sociedad (el MAS y el Pacto de Unidad) y los gastos sociales ampliados contribuyeron a la legitimidad política del Estado.

Después de las elecciones generales de 2009, Evo Morales y el MAS obtuvieron un convincente 64,2 por ciento de los votos y, por primera vez y con mayoría absoluta de dos tercios, controlaron tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, en lugar de buscar reformas estructurales, continuaron con el modelo de desarrollo basado en una lógica neoextractivista. En el sector agrario, el desarrollo agrícola tomó la forma de un “extractivismo agrario”, es decir, formas de extracción económicas, sociales y ecológicas similares a los sectores extractivos tradicionales como la minería y los hidrocarburos. En junio de 2011 se promulgó la Ley 144 de “Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria” con el objetivo principal de lograr la soberanía alimentaria e instalar la capacidad institucional, política, técnica y financiera para aumentar la producción, la transformación y la comercialización de productos agrícolas y forestales (artículo 2, Ley 144). Aunque esta ley está repleta de un lenguaje popular, inclusivo y encaminado hacia la soberanía alimentaria –como la producción comunitaria y orgánica, la recuperación de suelos y semillas nativas, y el respeto a la Madre Tierra para “Vivir Bien”–, la ausencia de reformas estructurales, incluyendo una reforma agraria redistributiva, una mayor dependencia de las importaciones de alimentos para la seguridad alimentaria y la continua concentración

del control sobre los recursos naturales y de la toma de decisiones, erosionaron en la práctica las posibilidades de desarrollo de vías hacia la soberanía alimentaria (McKay *et al.*, 2014, p. 1193). Incluso el desarrollo del complejo sojero y la expansión de la frontera agrícola –principalmente para los cultivos agroindustriales de usos flexibles y orientados a la exportación– ahora se justifican como formas de “soberanía alimentaria” y “seguridad alimentaria”, a pesar de las obvias contradicciones y la mayor dependencia de las importaciones de alimentos básicos (Vicepresidencia, 2012). Bolivia, a pesar de ser un exportador neto de alimentos, sigue dependiendo de las importaciones de alimentos básicos para el consumo interno (INE, 2015b). Estas importaciones aumentaron en un 62 por ciento entre 2010 y 2014 pese al aumento desproporcionado de los precios de importación de alimentos hasta un 92 por ciento (Quispe, 2015; IBCE, 2016). Adicionalmente, las devaluaciones monetarias de Argentina y Brasil también han socavado la competitividad de los cultivos tradicionales a pequeña escala (Quispe, 2015). Esto se debe, en gran medida, al sesgo pro-agroindustria de la Revolución Productiva que ha otorgado poco apoyo efectivo para la mayoría de los agricultores bolivianos. En lugar de cualquier cambio significativo en términos de acceso y control de recursos y toma de decisiones, la Revolución Productiva tiene sus raíces en la nueva economía institucional que intenta minimizar las imperfecciones del mercado, conectar a los agricultores mediante mecanismos de mercado y aumentar la productividad y eficiencia especialmente por medio del reconocimiento de derechos de propiedad privada exigibles (North, 1995; De Soto, 2000).

En otro ámbito, los mecanismos institucionales basados en el mercado, como el Seguro Agrario Universal (artículo 30, Ley 144) y el Fondo Crediticio Comunitario (artículo 51, Ley 144), están diseñados para beneficiar a los pequeños agricultores, campesinos e indígenas, pero requieren de procedimientos burocráticos que siguen siendo vagos e indefinidos (Notas de campo, 2014-2015). También requieren de transacciones en entidades financieras privadas ubicadas centros urbanos que no siempre son de fácil acceso para las mayorías rurales y solo son posibles si los recursos están disponi-

bles (artículo 51, Ley 144), lo que significa que no hay garantías de financiamiento (Villegas, 2011). Muchos de los pequeños agricultores de la zona de expansión de Santa Cruz evitan por completo estas modalidades de crédito ante la eventualidad de experimentar una mala cosecha y no poder pagar sus préstamos (Notas de campo, 2014-2015). Otros dicen que los requisitos son demasiados y que “las entidades financieras siempre intentan sacar lo mejor de ellos” (Leonila Cruz, Entrevista personal, abril de 2014). Esta percepción sobre las entidades financieras y la deuda es común entre los pequeños agricultores de las comunidades soyeras de Cuatro Cañadas y San Julián, quienes señalan que la falta de acceso al crédito está entre los tres principales obstáculos para los pequeños agricultores (2014-2015).<sup>11</sup> Los representantes de las asociaciones de pequeños productores más importantes de la región, incluyendo la Asociación Comunitaria Integral de Productores Agropecuarios de Cuatro Cañadas (ACIPAC), la Asociación de Pequeños Productores del Oriente (APPAO) y la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO), han obtenido acceso a créditos de forma mancomunada para sus miembros al haber negociado con las entidades financieras y con los medianos y grandes productores instalados en la región, pero aun así reconocen que los problemas persisten, especialmente entre quienes pretenden diversificar su producción porque los contratos con esos grandes y medianos productores son para cultivos agroindustriales como la soya, el girasol, el sorgo y el trigo (Notas de campo, 2014-2015). Pero incluso de forma asociada, los agricultores siguen subordinados a la agroindustria y supeditados a las relaciones de deuda y dependencia (Notas de campo, 2014-2015). Esto explica que muchos agricultores, al estar excluidos del proceso de producción, viven de ingresos obtenidos por rentar tierras o trabajar como asalariados rurales (McKay y Colque, 2016). Este punto se analiza más adelante.

Para apoyar a los pequeños agricultores con el suministro de insumos y el acceso a mercados a precios justos, el Estado creó la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). Sin embargo,

---

11 Datos de la Encuesta de Hogares realizada entre 2014 y 2015.

EMAPA se ha visto gravemente limitada por su falta de capacidad y deficiencias en la implementación de sus programas, lo que provocó la exclusión de los productores más marginales y acabó reforzando el modelo de agricultura intensiva, un camino inadecuado para la mayoría de los pequeños productores que EMAPA declara apoyar (Córdoba y Jansen, 2014). Para J. Pérez, uno de los fundadores de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CA-PPO), la asociación de pequeños agricultores más importante de la región con 15 mil miembros, EMAPA “no tiene visión y sufre de falta de planificación... no funciona” (Entrevista personal, San Julián, enero de 2015). J. Pérez cree que EMAPA debe ser propiedad cooperativa y manejada por los agricultores, no por el gobierno central, porque “no tienen las personas adecuadas para dirigir la industria” (Entrevista personal, San Julián, enero de 2015). Como concluyen Córdoba y Jansen (2014, p. 497), EMAPA ha facilitado, quizá paradójicamente, “la integración de los pequeños productores dentro del complejo agroindustrial internacionalizado” que reproduce las relaciones de deuda y dependencia con el capital agroindustrial. Este tipo de enfoques residuales basados en el mercado para la reducción de la pobreza, consideran que esta es una consecuencia de la exclusión de los procesos de desarrollo, bajo el supuesto de que el desarrollo genera crecimiento económico y que, tarde o temprano, aumentará los ingresos de todos (Bernstein, 1992, p. 24). Las políticas de la Revolución Productiva, influidas por estos enfoques, no tienen en cuenta los aspectos relacionales subyacentes de la pobreza y la marginalización en términos de relaciones sociales de producción y reproducción, así como en términos de propiedad y poder (Bernstein, 1992, p. 24). Sin haber desafiado la estructura agraria desigual, las políticas de desarrollo agrícola de Bolivia reforzaron y reprodujeron las formas dominantes de producción (agroindustrial) existentes y, en consecuencia, la concentración de la riqueza y el control de los recursos a través de nuevos mecanismos de exclusión.

En cuanto a los campesinos colonizadores, estos transitaban de forma creciente desde sus pequeñas explotaciones hacia la producción sojera, sustituyendo los cultivos de subsistencia como arroz, maíz, raíces y tubérculos, por soya debido a los mejores precios y mayor

acceso a los crecientes mercados. Los pequeños productores, por su parte, continuaron integrándose (y siendo excluidos, al mismo tiempo) en el complejo sojero manejado por unos pocos medianos y grandes productores. Muchos elementos estructurales del complejo sojero, como la dependencia de la mecanización, semillas importadas, fertilizantes químicos y créditos, han expuesto a campesinos colonizadores y pequeños productores a riesgos cíclicos y los han colocado en una posición desfavorable frente a la agricultura a gran escala. Su falta de acceso al capital y tecnología necesarios para participar y competir como colonizadores y productores, socavó su capacidad de beneficiarse plenamente de sus tierras. El acceso a mercados y otras relaciones de intercambio también están monopolizados por las multinacionales que controlan los distintos componentes del complejo, desde semillas transgénicas, insumos agroquímicos y maquinaria, hasta tierra, silos de almacenamiento y mercados de exportación. La industrialización de la producción agrícola también eliminó las oportunidades laborales. La adopción del herbicida glifosato de Monsanto, por ejemplo, ha reemplazado la necesidad de contratar trabajadores. Como explicó un agricultor, “antes sabíamos emplear entre 60 y 70 personas para limpiar los campos agrícolas después de la cosecha; ahora el glifosato mata todo, así que no necesitamos contratar a nadie” (Freddy, Comunicación personal, octubre de 2014). Esto es lo común en toda la zona sojera. El desarrollo de la producción agroindustrial altamente mecanizada continúa excluyendo a los pequeños agricultores y campesinos colonizadores en un doble sentido: por su imposibilidad para acceder al capital y tecnología (y por tanto maquinaria para poner en producción la tierra), y por la enorme dificultad de acceso a oportunidades laborales viables en un área rural altamente productiva. Esto es particularmente problemático cuando estas formas de exclusión no están acompañadas de otros medios económicos para la absorción laboral.

## **Mecanismos de exclusión social y económica**

Los pequeños propietarios o campesinos colonizadores de Santa Cruz que buscan acceso a tierras en la zona de expansión se enfrentan a una nueva situación en la que los mecanismos de acceso a la

tierra y al agrocaptal son más complejos e implican la exclusión de los descapitalizados.<sup>12</sup> La mayoría de los afortunados que obtuvieron tierra durante la marcha hacia el oriente, a pesar de que son propietarios a pequeña escala, carecen de otros mecanismos de acceso para transformarse en productores capitalistas, debido a su dependencia del agronegocio en términos de acceso a tecnología, capital y mercados. Los pobladores rurales, especialmente los pobres, no solo quedan excluidos de la tierra (cuyo valor por hectárea varía entre USD 2.000 y 5.000/ha), sino que dejan de ser necesarios como mano de obra barata porque el modelo de producción cambió de intensivo en fuerza laboral a intensivo en capital. De este modo, los mecanismos de acceso para la producción han sido “apropiados” por la agroindustria, lo que obliga a los agricultores a integrarse a la cadena de valor agroindustrial para trabajar la tierra. Sin embargo, para esta integración, los pequeños productores quedan excluidos de la producción porque necesitan contratar todos los servicios agrícolas (siembra, fumigación, cosecha) y suscribir contratos de provisión de insumos con la agroindustria. De esta manera, los mecanismos de acceso se convierten en mecanismos de exclusión social y económica, que conducen a relaciones de deuda y dependencia, a posiciones de clase contradictorias y a la diferenciación social.

Los flujos migratorios y las dinámicas laborales a lo largo del tiempo, a su vez, explican la tendencia de la migración urbano-rural. Los datos sugieren que la migración hacia el área rural de las tierras bajas ha disminuido sustancialmente, al igual que la fuerza laboral empleada en el sector agrícola (INE, 2001, 2012). Según los datos del Censo de población, la proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) ha disminuido en el corazón de la zona de expansión soyera. En Cuatro Cañadas, la PEA en agricultura disminuyó del 83,1 por ciento en 1992 al 45,1 por ciento en 2012, mientras que en San Julián este indicador disminuyó del 70 por ciento en el 2001 al 47,3 por ciento para el año 2012 (INE, 2001, 2012). Estos datos

---

12 Aquí nos referimos a los mecanismos de acceso estructural y relacional tales como tecnología, capital, mercados, trabajo, conocimiento, autoridad, identidades y relaciones sociales (Ribot y Peluso, 2003, p. 162).

muestran que el sector agrícola de Santa Cruz se basa en un modelo económico que continúa creciendo económicamente y expandiéndose geográficamente pero sin necesidad de mano de obra adicional (Colque, 2014). Una característica cualitativa importante es que estas cifras no revelan la diferenciación de los pequeños propietarios. Los datos oficiales consideran a quienes alquilan sus tierras como “pequeños agricultores”, pero en realidad estos no participan en actividades productivas porque el modelo intensivo en capital los ha sometido a procesos de ‘exclusión productiva’. Esta es una situación en la que el problema fundamental no es la desposesión directa de la tierra, sino la negación del acceso al agrocaptal para los pequeños propietarios y la separación de la fuerza laboral de las dinámicas de acumulación del capitalismo agrario.

Al comparar y contrastar Santa Cruz y el resto de Bolivia desde una perspectiva laboral, se nos revela que un gran número de campesinos de las tierras altas dejaron atrás sus pequeñas parcelas, no para obtener tierras en la frontera agrícola o para convertirse en asalariados rurales, sino para emigrar a las ciudades. De hecho, muchos campesinos abandonaron sus tierras de Los Andes en gran parte debido al empobrecimiento y la falta de apoyo estatal y porque quedaron excluidos del acceso a tierras en nuevas zonas. También se ha hecho evidente que la severa reducción del flujo migratorio interno desde las tierras altas a las tierras bajas es un cambio estructural y consistente con los hallazgos que muestran cómo la tierra es controlada sistemáticamente por las élites del agro. En el siguiente acápite se examina los cambios agrarios actuales que tienen lugar en Santa Cruz, donde los campesinos colonizadores también están experimentando una otra transición en su inserción dentro del complejo sojero.

### *El contrato de “partida”: un nuevo mecanismo de exclusión*

La “partida” es una forma de arrendamiento de tierras que no se practicaba antes del *boom* sojero, pero ahora se ha vuelto común porque la tierra es relativamente escasa. “Partida” o “al partir” significan compartir o dividir la cosecha o los beneficios del usufructo

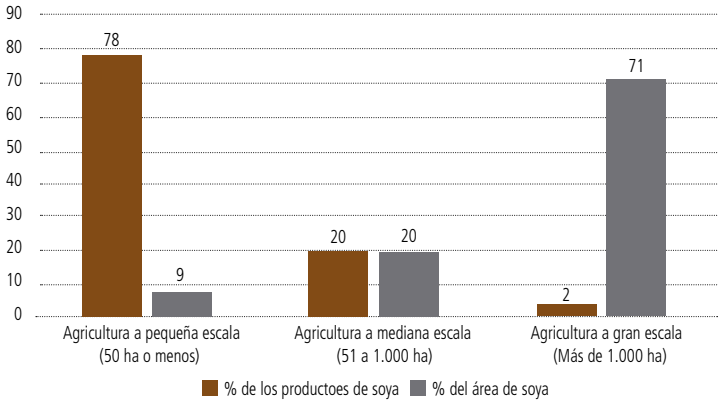


de la tierra entre quienes la trabajan y los que poseen los derechos de propiedad. Con la adopción oficial de semillas genéticamente modificadas en 2005, se intensificó la mecanización del proceso de producción sojera y lo que alguna vez fue una región agrícola intensiva en mano de obra, se transformó a una región agrícola intensiva en capital. Hoy, la producción requiere muy poca mano de obra, lo que elimina oportunidades laborales para las mayorías. Miles de hectáreas pueden cultivarse con pocos trabajadores debido a que –en su lugar– las máquinas sembradoras y cosechadoras trabajan las vastas plantaciones de monocultivos. A pesar de los exigentes requisitos de inversión para dedicarse a este tipo de agricultura, tanto los precios de mercado como la demanda de las grandes multinacionales que controlan el almacenamiento, procesamiento y distribución, atraen incluso a agricultores familiares de escasos recursos –con menos de 50 hectáreas de tierra y sin acceso a maquinaria– para ingresar al complejo sojero. La transición hacia la producción de cultivos comerciales en la zona de expansión cruceña es comprensible. En los últimos diez años, los precios de soya se duplicaron y las agro-multinacionales más grandes del mundo –ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, entre otras– arribaron a la región, controlando la mayor parte del mercado de almacenamiento, procesamiento y exportación (AEMP, 2013; ANAPO, 2015). Para los pequeños agricultores, estas multinacionales garantizan un mercado a precios generalmente favorables en comparación con los riesgos que tendrían que asumir si se aventuraran a producir otros cultivos. Sin embargo, la forma en que los pequeños agricultores participan en la producción sojera es muy distinta de lo que sugieren los datos estadísticos.

Entre los productores de soya en Santa Cruz, por ejemplo, las unidades de gran escala (más de mil hectáreas), que representan solo el dos por ciento del total de los agricultores, controlan el 71 por ciento de la tierra, mientras que los pequeños agricultores (50 hectáreas o menos), que representan el 78 por ciento del total de los agricultores, controlan solo el nueve por ciento de la tierra cultivada con soya (Gráfico 5).

## Gráfico 5

### Tenencia de la tierra por tipo de agricultura Sector sojero de Santa Cruz, 2011



Fuente: ANAPO, 2011.

En la zona de expansión, es decir en las tierras más fértiles del país, los pequeños agricultores representan el 82,9 por ciento del total de títulos agrarios formalizados con el saneamiento pero solo controlan el 16,9 de la superficie, mientras que los medianos propietarios (con un promedio de 325,8 hectáreas) y las grandes propiedades (con un promedio de 1.926,8 hectáreas) representan el 12 por ciento de los títulos agrarios formalizados y controlan el 61,6 por ciento del total.<sup>13</sup> (Colque *et al.*, 2016, pp. 200-201). A pesar de estas desigualdades, no podemos descartar la importancia de los logros del gobierno de Morales en el reconocimiento de territorios indígenas (TCO) y en la prevención de la consolidación de lo que Colque (2016) llama “latifundios especulativos”. Del mismo modo, tampoco podemos ignorar el hecho de que la estructura agraria se mantuvo en gran medida sin cambios y que las nuevas formas de marginalización, exclusión y las relaciones de deuda exacerban las desigualdades rurales (McKay y Colque, 2016; McKay, 2018).

A pesar de la estructura desigual de la tenencia de la tierra, los da-

<sup>13</sup> Incluyendo propiedades comunitarias, TCO y tierras aún sin titular o no formalizadas.

tos sugieren que la producción sojera proporciona un medio de vida para alrededor de 11 mil pequeños agricultores y sus familias. Si bien esto es así, una comprensión más profunda de la dinámica agraria revela que el complejo sojero impone, claramente, relaciones de ‘exclusión productiva’.

En la actualidad, la producción de los dos municipios principales de la zona de expansión, en Cuatro Cañadas y San Julián, depende completamente de la mecanización intensiva en capital, algo de lo que carece cerca del 86 por ciento de los pequeños agricultores (Suárez, Camburn y Crespo, 2010, p. 83). La producción requiere del acceso a maquinaria pesada como tractores, sembradoras, cosechadoras, fumigadoras y camiones de transporte, otros insumos como semillas genéticamente modificadas, fertilizantes, pesticidas y herbicidas a base de sustancias químicas. Para los pequeños agricultores, esto requiere de algún tipo de acuerdo contractual o acceso a créditos financieros. Dado que la ley de tierras prohíbe a los pequeños agricultores (con menos de 50 hectáreas de tierra) utilizar sus predios como un activo para obtener préstamos (hipotecas), las tasas de crédito para los clientes de alto riesgo –los pequeños agricultores, precisamente– son extremadamente altas. Esto deja pocas opciones para los pequeños agricultores, obligándolos a entrar en acuerdos contractuales con los agroindustriales a gran escala o con otros agricultores que poseen maquinaria. Así, los créditos abren puertas para el alquiler de tractores, cosechadoras y fumigadoras, pero los acuerdos con agricultores capitalizados permiten acceso directo y seguro a servicios que van desde la siembra hasta la cosecha.

La ley de tierras también prohíbe a los terratenientes alquilar sus tierras, con el argumento de que la tierra solo es para quienes la trabajan. Sin embargo, para los pequeños agricultores escasos en capital, trabajar directamente la tierra es difícil por los altos costos de inversión para la producción. Por lo tanto, recurren a lo que se conoce como el mencionado acuerdo o contrato de “partida” por el que ellos suministran la tierra y la otra parte los equipos e insumos. En este esquema, los proveedores de tierras, es decir los pequeños propietarios, generalmente reciben entre el 18 y el 25 por ciento de la cosecha, aun-

que en última instancia depende de la negociación entre las partes. Para los pequeños propietarios, la “partida” es una alternativa atractiva porque no los obliga a endeudarse. Ellos no están obligados a invertir o alquilar algún tipo de maquinaria, al contrario, dejan que la otra parte trabaje su tierra y a cambio obtienen entre el 18 y el 25 por ciento de las ganancias netas. Estimando los costos de producción en la zona de expansión entre USD 400 y USD 500/ha, es evidente que hay muchos riesgos de producción para los pequeños propietarios. Además de los problemas de sequías, plagas, inundaciones, etcétera, dependen de rendimientos que están por debajo de 2 toneladas/ha, cifra que se mantuvo durante la última década aunque cada vez es más volátil debido a los impredecibles patrones climáticos (Díez, 2016). El Cuadro 3 muestra los costos de producción de la soya para la cosecha de verano en la zona de expansión.

**Cuadro 3**  
**Costos de producción de soya en la zona de expansión**  
**Campaña de verano, en USD y por hectárea**

<i>Insumos</i>	<i>USD/ha</i>	<i>Operaciones</i>	<i>USD/ha</i>
<i>Semillas</i>	60	<i>Preparación del suelo</i>	7
<i>Tratamiento de semillas</i>	13	<i>Siembra</i>	30
<i>Herbicidas</i>	57	<i>Aplicaciones de agroquímicos</i> <i>(\$ 7 x 5 aplicaciones)</i>	35
<i>Insecticidas</i>	50	<i>Cosecha</i>	55
<i>Fungicidas</i>	60	<i>Transporte (\$ 15 / ton x 2 ton / ha)</i>	30
<i>Desecante de precosecha</i>	13		
<b><i>Total de insumos</i></b>	<b>253</b>	<b><i>Total operaciones</i></b>	<b>157</b>
<b><i>Total costo de producción</i></b>			<b>410 USD/ha</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas en Cuatro Cañadas y San Julián.

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estima que el costo de producción para la producción de soya de verano es de USD 421 en la zona de expansión y de USD 560 en la zona integrada. En promedio, el costo total alcanza a USD 464 por hectárea de soya. Entre los años 2008 y 2011, el precio de compra a los productores alcanzó un máximo de USD 400/Tn, pero desde la caída en los precios de materias primas, el precio de la soya disminuyó al mínimo de hace diez años: USD 230/Tn para el 2016 (ANAPO, 2015, 2016). Con un ren-

dimiento promedio de dos toneladas/Ha, los productores recibirían USD 460/Ha, lo que no cubre los costos de producción, asumiendo que el productor no tiene maquinaria y necesita contratar servicios. Dado que el precio de la soya para el año 2016 es el más bajo desde 2007, sería mejor estimar los ingresos de los productores durante los años pico, entre 2008 y 2015, cuando los precios promediaron USD 339 por tonelada. Sobre la base de un rendimiento mínimo de 2 toneladas/ha, los ingresos alcanzaron USD 678/Ha, lo que resulta en una ganancia de USD 214 por hectárea. Suponiendo que los pequeños propietarios negocian un retorno del 25 por ciento en los contratos de 'partida', les corresponde USD 53,5 por hectárea, por lo que una parcela a pequeña escala de 50 hectáreas genera un ingreso total de USD 2.676,8 durante la campaña de verano. En la campaña de invierno, muchos optan por cultivar trigo, girasol, sorgo o maíz, mientras que la soya disminuye a menos de un tercio de la campaña de verano (en superficie y producción). Los rendimientos y precios caen sustancialmente en el invierno y, dado que los costos de la maquinaria e insumos son relativamente inelásticos, los productores calculan que la campaña de invierno les proporciona el 30 por ciento de sus ingresos anuales (Notas de campo, 2014-15). Ambos ingresos, los de la campaña de verano y de invierno, equivalen a un ingreso anual de USD 3.830 que es superior en USD 677 al salario mínimo nacional de un año (INE, 2016a). Si bien estas estimaciones pueden mostrar una situación adecuada para los costos de vida en áreas rurales, es importante considerar que estos cálculos suponen condiciones relativamente ideales, en términos de precios para los años pico, rendimientos consistentes y producción sin pérdidas en las 50 hectáreas que tienen los pequeños propietarios. Debido a todos estos factores es que la mayoría de los pequeños agricultores en Cuatro Cañadas y San Julián optan por el acuerdo o contrato de 'partida' en lugar de asumir los altos riesgos relacionados con la puesta en producción de tierras.<sup>14</sup>

---

14 Estos recientes cambios sobre la relación entre pequeños propietarios y agricultores capitalistas están influenciados por la modalidad argentina conocida como "pools de siembra", donde un "empresario" organiza un plan de producción, ofrece a los inversores una estrategia de implementación y luego arrienda la tierra (Benchimol, 2008).

## La ‘exclusión productiva’ y sus implicaciones para el cambio agrario

Aunque algunos pueden ver el contrato o acuerdo de “partida” como un arreglo beneficioso para ambas partes, es importante tomar en cuenta las implicaciones de estas trayectorias de cambio agrario dadas las nuevas formas y relaciones de producción, propiedad y poder. En primer lugar, los precios de la soya alcanzaron techos históricos entre 2008 y 2015, con un promedio de USD 339 por tonelada, lo que permitió a los pequeños propietarios beneficiarse de este ciclo. De acuerdo con nuestra encuesta, la mayoría de ellos comenzaron a cultivar soya en 2010, al ver el comportamiento favorable de los precios y las nuevas políticas para el complejo sojero. Entre 1996 y 2007 –en la década anterior al auge– los precios de soya giraban en torno a los USD 173/tonelada. Desde que el precio alcanzó el tope máximo en 2011, ha ido disminuyendo y es probable que no retorne a los niveles anteriores de forma consistente dado que estaríamos ante el final del ciclo de bonanza de los precios de materias primas (Banco Mundial, 2016b). Además, los precios de las materias primas agrícolas como la soya son cada vez más volátiles porque los nuevos instrumentos financieros permiten a los inversores influir en los precios a pesar de estar alejados del proceso productivo, la distribución y el consumo. Es un nuevo tipo de distanciamiento que, como lo plantea Jennifer Clapp, facilita el ingreso de nuevos actores que buscan ganancias a lo largo y alrededor de las cadenas agroalimentarias; se trata de un distanciamiento que fomenta una mayor abstracción del producto desde su forma original hacia un producto a modo de un derivado financiero “virtual” (Clapp, 2014, p. 810). A medida que el sistema alimentario mundial se torna cada vez más financiado,<sup>15</sup> la imprevisibilidad de los precios aumenta, lo que hace más vulnerables a quienes dependen de este precio.

---

15 El término “financiado” se refiere en éste contexto a los nuevos instrumentos financieros ampliamente usados por las corporaciones transnacionales de la agroindustria (Clapp, 2014). Adicionalmente, se refiere al aumento de la importancia de los mercados financieros, motivos financieros, instituciones financieras y élites financieras en la operación de la economía y sus instituciones a nivel nacional e internacional (Epstein, 2005).

En segundo lugar (este punto se ampliará en el siguiente capítulo), el control de los insumos y productos finales por oligopolios del sector sojero y los avances sin fin en tecnología y pesticidas que implica este modelo productivo, han provocado el aumento de los costos de producción en un 76 por ciento desde el año 2002.<sup>16</sup> Y en tercer lugar, la naturaleza ha respondido a las altas tasas de deforestación, al uso abundante de agroquímicos y a la compactación del suelo por las pesadas maquinarias, en forma de mayor volatilidad climática, erosión de suelos, inundaciones y la aparición de nuevas malezas y plagas provocadas por los avances tecnológicos y las nuevas plaguicidas. Este punto también se ampliará en el Capítulo 4.

Con los contratos de “partida” los pequeños propietarios dependen completamente de factores externos fuera de su control. De hecho, pierden inmediatamente el control de sus tierras como un activo productivo. En realidad, la mayoría de los considerados pequeños productores ya no son productores, sino fracciones de clase que podrían caracterizarse mejor como semiproletarios y pequeños burgueses “rentistas”. Son taxistas, comerciantes, conductores de buses, trabajadores de caminos y de la construcción y mecánicos, entre otros oficios. La transición de la producción agrícola desde un modelo intensivo en trabajo a otro intensivo en capital ha separado o excluido a las mayorías rurales del acceso a los factores de producción. Como lo dice Bernstein en referencia a las “clases de trabajo”, estos pequeños productores no están del todo desprovistas de los medios de reproducción ni poseen medios suficientes para reproducirse en sí mismas (2009, p. 73). El contrato de “partida” es, de alguna manera, una forma de proletarización disfrazada que Roger Clapp describe tomando como referencia la *agricultura por contrato*, donde el agronegocio se asegura la tierra y el trabajo del agricultor, al tiempo que deja en sus manos un título de propiedad formal (Clapp, 1988, p. 16; Watts, 1994). De hecho, los pequeños agricultores involucrados en la “partida” están “disfrazados”, porque si bien las estadísticas oficiales los consideran como pequeños agricultores, en realidad no

---

16 Cálculos del autor basados en datos de CAO, IBCE y Notas de campo 2014-2015.

trabajan su tierra. Lo distintivo del acuerdo de “partida” con respecto a la *agricultura por contrato*, como señala Clapp, es que la agroindustria no necesita asegurarse el control de la fuerza laboral de los pequeños propietarios. De hecho, como Tania Li (2011, p. 286) afirma, “se necesita su tierra, pero no su fuerza de trabajo”, en referencia a las plantaciones del sudeste asiático donde las poblaciones locales son excluidas. Si bien la propiedad de la tierra sigue siendo importante, muchos dependen de los ingresos por ceder el uso de la tierra, de manera tal que poseer la tierra no necesariamente determina los términos de control y acceso. Muchos agro-capitalistas medianos y de gran escala solo tienen títulos de una parte de las tierras, pero en realidad se benefician de muchas más debido a los contratos de “partida” con los pequeños propietarios. La penetración del capital industrial y el desarrollo del complejo sojero están conduciendo a un exclusivo entorno de producción donde disminuye la necesidad de mano de obra y aumenta la ganancia relativa capturada por la agroindustria.

Este proceso de transición tiene varias implicaciones no solo para la estructura agraria de las tierras bajas, sino que también afecta los nexos campo-ciudad y su relación con el empleo. Si la mayoría de los 11 mil pequeños productores sojeros ya no están produciendo en sus tierras, es probable que queden desconectados de su condición de agricultores. Las prácticas agrícolas tradicionales se han visto erosionadas con la adopción de la producción capitalista y moderna, de modo que la siguiente generación de posibles agricultores familiares no está aprendiendo cómo producir en la parcela familiar, al contrario, están buscando otras oportunidades de trabajo en las ciudades. Según los datos de nuestra encuesta, la edad promedio de los jefes de hogar es de 48 años y la gran mayoría tienen educación primaria incompleta. Para ellos, con este bajo nivel educativo y años de vida en el entorno rural, las perspectivas de empleo en zonas urbanas son sombrías. Para los jóvenes todavía interesados en la agricultura, el problema es que una familia con cuatro a cinco niños no puede ganarse la vida con una parcela menor a 50 hectáreas dentro del complejo sojero. Los agrocapitalistas medianos y grandes, al igual que la agroindustria, están extendiendo su alcance, primero mediante las “partidas” y más tarde por medio de compras directas



de tierras. Con base en una combinación de datos de nuestra encuesta de 303 hogares, el Censo agrario de 2013, las entrevistas con informantes clave (técnicos agrícolas de ANAPO) y un estudio publicado por Probioma, podemos estimar que entre el 80 por ciento y 95 por ciento de los pequeños propietarios carecen de maquinaria agrícola completa,<sup>17</sup> por lo tanto, dependen de los demás para trabajar su tierra, sea parcial o completamente (Suárez *et al.*, 2010, p. 83; INE, 2015a). La concentración de la tenencia de la tierra no se produce (principalmente) a través de los medios físicos de desposesión, sino mediante un proceso gradual de “acaparamiento del control”. Con la mayoría de los jóvenes rurales pensando en las ciudades, las implicaciones para esta transición agraria apuntan a una masiva migración rural-urbana y reconcentración de la tierra.

Dada esta trayectoria, uno debe preguntarse a dónde irá la actual y próxima generación de pequeños propietarios. En dónde y en qué medida serán absorbidos por la economía urbana es una cuestión importante que merece una mayor exploración. El modelo sojero, intensivo en capital, no está creando sino erosionando las oportunidades laborales. Fearnside (2001, p. 27), por ejemplo, reveló que la producción de soya en Brasil desplaza a 11 trabajadores agrícolas por cada uno que emplea. En Bolivia, y antes de la mecanización, aproximadamente unos diez trabajadores hacían falta para trabajar una hectárea de tierra por día. Pero con la mecanización, una persona puede sembrar 50 hectáreas en 15 o 16 horas, fumigar todo el campo en cinco horas y cosechar en dos o tres días. Los requerimientos de mano de obra han disminuido drásticamente debido a que solo unas cuantas personas pueden trabajar varios cientos de hectáreas y en un período de tiempo mucho más corto. El inconveniente de esta innovación tecnológica es la falta de oportunidades laborales y la exclusión de las mayorías rurales. Este tipo de “destrucción creativa” ofrece nuevas oportunidades de empleo dentro de la cadena industrial de valor agregado, pero los excluidos no tienen lugar en la misma. Lo que observamos en Bolivia es una falta de oportunidades laborales en los centros urbanos.

---

17 Incluye un tractor, una cosechadora y fumigadora.

Por otra parte, los empleos generados por el complejo sojero tienden a la precariedad, son estacionales, obedecen a contratos puntuales y generan incertidumbre. Las oportunidades para el transporte de cosechas, mantenimiento y limpieza de los silos, mantenimiento de caminos, etcétera, ofrecen algunos empleos, pero siguen siendo temporales, esporádicos y según acuerdos flexibles. De acuerdo con los datos del gobierno, el empleo en la agricultura ha disminuido del 36,8 por ciento en 2000 al 29,6 por ciento en 2011, pero si solo tomamos en cuenta a quienes realmente están dedicados a la actividad agrícola, esta cifra sería mucho más baja debido a los procesos de ‘exclusión productiva’ que hemos explicado previamente. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y la ANAPO afirman que la soya genera más de 100 mil empleos directos e indirectos (IBCE, 2014). Más de 70 mil de estas ocupaciones están clasificadas como “productores”, sin embargo, como vimos, la mayoría de estos “productores” están excluidos del proceso de producción. Como Suárez y otros autores (2010) señalan, los otros empleos “directos” e “indirectos” se generan en las tiendas comerciales agrícolas, en el transporte interno, en las instalaciones de almacenamiento y procesamiento, en el transporte para la exportación y en las instalaciones de semillas (Cuadro 4).

Aunque se sabe que son estimaciones de los defensores de la agroindustria y de diversos actores estatales para justificar el desarrollo y expansión del complejo sojero, la afirmación de que la agroindustria generan 100 mil empleos es engañosa. Al margen de la exageración del empleo “directo”, las otras fuentes laborales significativas, almacenamiento (1.431) y transporte (26.824), son temporales y precarias. Muchas de las instalaciones de almacenamiento y procesamiento emplean entre dos a seis empleados a tiempo completo, siete a 14 técnicos a tiempo parcial, y otros siete a 14 trabajadores u obreros a tiempo parcial (Notas de campo 2014-2015). Además, los choferes de camiones de transporte interno son contratados durante el periodo de cosecha que abarca solo unos pocos meses del año y sin ningún tipo de seguridad o beneficios laborales. Los datos de ANAPO son de la campaña de verano, la época más activa y lucrativa del año para la producción agrícola. Para la campaña de

invierno, las estimaciones de empleo total disminuyen a unos 40 mil empleos, incluyendo aquellos a tiempo parcial y precarios. La medición del empleo de cualquier industria debe contabilizar los empleos estables y anuales, no las precarias oportunidades laborales y estacionales de uno a dos meses.

**Cuadro 4**  
**Generación de empleo en el complejo sojero**  
**Campana de verano**

<i>Fuente de empleo</i>	<i>Número de personas empleadas</i>
<b>Empleo directo</b>	
<i>Agricultores y trabajadores agrícolas</i>	70.652
<i>Tiendas comerciales agrícolas</i>	872
<i>Instalaciones de almacenamiento</i>	1.431
<i>Instalaciones de procesamiento</i>	700
<i>Instalaciones de semillas</i>	242
<b>Sub total</b>	<b>73.897</b>
<b>Empleo indirecto</b>	
<i>Transporte interno</i>	20.299
<i>Transporte para la exportación</i>	6.525
<b>Sub total</b>	<b>26.824</b>
<b>Total directo e indirecto</b>	<b>100.721</b>

Fuente: ANAPO, 2005; Suárez *et al.*, 2010.

### *Formas de exclusión generacionales y de género*

Para los jóvenes –los hijos de los colonos migrantes– las oportunidades de empleo son escasas. En el contexto sojero, la pequeña propiedad de 50 hectáreas o menos es insuficiente si se divide entre varios hermanos, lo que no deja más que la opción de adquirir más tierras o encontrar empleo en otro lugar. La falta de industrialización y fuentes de empleo seguras y estables dentro del complejo sojero, son temas problemáticos para los jóvenes rurales porque les generan presión para encontrar empleo en los centros urbanos pero sin una ruta clara y oportunidades disponibles. Esta situación nos plantea preguntas tales como dónde irán los jóvenes rurales y qué opciones existen para ellos. Haciendo referencia a Bernstein (2004)

sobre la cuestión agraria del trabajo, el complejo sojero no es capaz de generar empleos suficientes y seguros o un salario digno para la gran mayoría (Li, 2009, 2011). Es un tema particularmente problemático para los jóvenes rurales ansiosos e interesados en convertirse en agricultores en el sector agrícola mecanizado de Santa Cruz. Estos jóvenes no solo se enfrentan al estrechamiento y, a veces, al cierre total de oportunidades de acceso a la tierra (White, 2012, p. 12), sino que también enfrentan los altos costos de producción y la falta de acceso a maquinarias, capital y créditos.

El líder de la Organización de Jóvenes Patriotas de Cuatro Cañadas (JPCC), Alfredo Armellon, dice que la juventud rural no va a desistir de su derecho a un sustento digno en sus comunidades y a un ambiente sostenible, saludable y en armonía con la Madre Tierra (Armellon, Comunicación personal, noviembre de 2015). Estos derechos de la juventud rural (16-28 años) están garantizados en la Ley 342 del 5 de febrero de 2013. A través del Consejo Plurinacional de la Juventud, los jóvenes pueden participar en los procesos políticos y en múltiples niveles de gobierno para proponer políticas, planes, programas y proyectos, además de evaluar su ejecución (artículo 15, Ley 342). Armellon y la JPCC esperan utilizar este nuevo espacio político para abrir una universidad en Cuatro Cañadas, promover actividades culturales y generar más oportunidades económicas a nivel local para que los jóvenes puedan permanecer en su comunidad. Armellon señala que la situación actual ofrece pocas oportunidades para los jóvenes y muchos se ven obligados a migrar a las ciudades, erosionándose así la base social de la región. Para Armellon y la JPCC, utilizar el proceso político formal e interactuar con el Estado son cuestiones importantes, aunque también se están movilizándose automáticamente desde abajo.

Armellon se unió al Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B) en 2008 y participó en varias ocasiones en la ocupación de tierras. Sin embargo, la combinación del poder de influencia de la agroindustria (CAO, ANAPO, CAINCO, etcétera), con nuevas y complejas relaciones Estado-sociedad caracterizadas por discursos populistas, discursos a favor de 'indígena originario campesinos', y con el MAS

instruyendo explícitamente al MST para que deje de ocupar tierras, además de las promesas incumplidas de revolución agraria, no solo que se redujeron las ocupaciones por parte del MST, sino que se facilitó la presencia en los mecanismos de poder y el control sobre la tierra por parte de las élites terratenientes y agroindustriales (Brabazon y Webber, 2014, p. 449). No puede ser otro el propósito de la Ley 447, aprobada en diciembre de 2013. Es una ley contra el avasallamiento y tráfico de tierras que prohíbe cualquier forma de ocupación y tráfico de tierra y que determina una pena legal de tres a ocho años para quienes participen en tales acciones (artículo 8, Ley 447). Armellon confirma que ahora la gente está movilizándose al norte en busca de tierras, a San José, Guarayos, Concepción y San Javier. Por ahora, los jóvenes no abandonan la esperanza, explica, de movilizarse para obligar al Estado a implementar la revolución agraria que prometió en 2006 (Armellon, Comunicación personal, 2015). Para Armellon, este es un problema regional y político complicado pues se tiene en frente a la élite terrateniente y agroindustrial que siguen siendo muy influyentes. Pero esperar que el Estado actúe no es una opción: los jóvenes y otras asociaciones se están movilizandando para actuar y recuperar sus tierras. Con seis hermanos, Armellon sabe bien que las 50 hectáreas de su padre no serán suficientes para todos. Esto explica su actividad tanto a través de los canales políticos formales que gestiona su organización, la Jóvenes Patriotas de Cuatro Cañadas (JPCC), como a través de la acción directa desde las bases.

Para los jóvenes de Cuatro Cañadas, migrar a la ciudad, más que una aspiración, es un último recurso. Es verdad que la mayoría de los jóvenes no están comprometidos tan activamente como Armellon y tienen que migrar a la ciudad, al menos temporalmente, para poder sostener a sus propias familias y/o familias extendidas (Nota de campo, 2014-2015). Ellos no pueden esperar por muchos años para hacerse cargo de la tierra y mucho menos si esto implica convertirse en un pequeño propietario de tipo rentista. Si estas dinámicas siguen el curso actual, la mayoría de los jóvenes probablemente estarán obligados a emigrar a otros lugares. Todo esto nos lleva a retomar algunas preguntas fundamentales planteadas por

Ben White: ¿Los jóvenes, hombres y mujeres, tendrán todavía la opción y el apoyo necesario para participar en una agricultura mixta, a pequeña escala y ambientalmente racional, que les proporcione alimentos, satisfaga sus propias necesidades, los de su sociedad y de otros lugares distantes?; ¿tendrán que enfrentar esos jóvenes la opción de convertirse en trabajadores asalariados y mal pagados, o en agricultores contratados, dentro de los interminables campos de monocultivos de alimentos o de plantaciones de materias primas para combustibles en tierras que una vez pertenecieron a sus padres?; ¿o tendrán que aceptar esos jóvenes una existencia incierta en el sector informal de las ya abarrotadas ciudades? (2012, p. 16). En otras palabras, ¿quién será el propietario del campo? (White, 2011, 2012) y ¿cuáles serán las implicaciones socioeconómicas, ambientales y políticas de los cambios que se viven en esa región del país?

Incluso entre los jóvenes, las oportunidades de empleo son desiguales. Ser una mujer dentro de una comunidad de la zona de expansión agroindustrial de Cuatro Cañadas y San Julián es mucho más difícil por una serie de razones. Para las mujeres jóvenes de las zonas rurales, las perspectivas laborales son mucho más limitadas. La agroindustria tiende a ser dominada por los hombres, dado que social y culturalmente es raro que las mujeres operen las maquinarias pesadas. En la encuesta a 300 hogares realizada para este trabajo, se identificó tan solo el 14 por ciento de hogares con “jefes” de hogar mujeres. En la mayoría de los casos, estas mujeres eran viudas o madres solteras que se quedaron en el campo. La observación participante, a su vez, nos permitió constatar que las mujeres, en su mayoría, no participan en la producción mecanizada en Cuatro Cañadas y San Julián. Esta construcción social en razón de género – las mujeres no pueden o no deben trabajar con la maquinaria agrícola – se ha visto reforzada por el papel predominante de las mujeres en el mercado laboral doméstico no remunerado y fuera de la economía formal; ellas se encargan de roles importantes para la reproducción social, como es el cuidado de niños, preparación de comidas y cocina, trabajo doméstico y cuidado de ancianos, entre muchas otras tareas. Aunque este trabajo no remunerado es igual o más importante que trabajar en los campos de cultivo, los hombres son quienes

asumen la actividad productiva generadora de ingresos dentro de la economía formal, lo que les concede más poder dentro del hogar y en la comunidad en general. Es importante destacar que para las parejas casadas, la propiedad de la tierra ahora se titula a nombre del esposo y la esposa, pero esto no equivale a cambios reales en las relaciones sociales dentro del hogar. Los hombres, como lo muestra la encuesta levantada, siguen siendo los tomadores de decisiones y podemos suponer que no todos los miembros de la familia tienen necesariamente los mismos intereses (White, 1986; Razavi, 2009). Además, cuando los pequeños propietarios tienen acceso a maquinaria y controlan el proceso productivo, son los jóvenes quienes participan en dicha actividad productiva (Notas de campo, 2014-2015). Rara vez se considera a las mujeres como herederas de la tierra, pero se espera que cuando se casen se muden a la propiedad de su marido para trabajar en labores domésticas no remuneradas para la reproducción social.

Operar con maquinaria pesada no es la única actividad en la que se excluye a las mujeres. Ellas también enfrentan obstáculos como ingenieras agrícolas y agrónomas. Estos servicios de extensión agrícola que están creciendo en la comunidad, requieren que los profesionales viajen solos durante la semana, visitando áreas muy aisladas en el campo. Según la opinión de los ingenieros agrónomos que trabajan en Cuatro Cañadas y San Julián y sus alrededores, y según la opinión de las mujeres jóvenes del campo, estos trabajos tienden a estar dominados por los hombres, y para ello existen dos razones principales. En primer lugar, debido a la estructura patriarcal en las relaciones de género, conocida como “machismo”, los jefes de hogar, predominantemente hombres, se muestran reacios a seguir los consejos de las mujeres ingenieras para gestionar su unidad productiva. En segundo lugar, tanto hombres como mujeres indicaron que los hombres se sienten incómodos cuando su pareja mujer viaja sola, recorre distancias largas y visita unidades productivas manejadas por hombres. Estas cuestiones de género podrían pasarse por alto o hasta ser consideradas como insignificantes, pero tienen implicaciones muy importantes para las mujeres, particularmente para las jóvenes que viven en estos municipios.

Al igual que la juventud rural, las mujeres no son actores pasivos en esta historia. La cabeza de la Federación de Mujeres Interculturales Productoras Agropecuarias de Cuatro Cañadas, la señora Vargas, trabaja con mujeres de las comunidades para implementar proyectos directamente dirigidos a esta población. Ella es viuda y posee diez hectáreas de tierra, siete de las cuales estaban alquiladas bajo la modalidad de “partida” y las restantes tres son tierras inadecuadas y en barbecho (Comunicación personal, marzo de 2014). Tiene tres hijos que ya migraron a otras regiones debido a la falta de oportunidades en la comunidad. Para ella, el mayor desafío es encontrar una oportunidad laboral. Es por eso que puso en marcha la federación de mujeres para apoyarlas con actividades productivas y aumentar su representación en los asuntos económicos, sociales y políticos de la comunidad. Junto con otras 20 mujeres, la señora Vargas maneja actualmente una cooperativa de pollos que tiene aproximadamente seis mil unidades (*Ibíd.*). Su visión es crear más oportunidades para que las mujeres generen sus propios ingresos puesto que en la producción agrícola, altamente mecanizada, no existen tierras disponibles en la comunidad o alrededores. Sus planes y proyectos futuros incluyen emprendimientos que permitan a la comunidad beneficiarse del procesamiento de las materias primas, como es el caso de los pollos que se crían con soya, para que puedan así vender su producción dentro de la comunidad y crear más empleos (*Ibíd.*)

Si bien estos pequeños proyectos podrían brindar oportunidades de ingresos para las mujeres, no están libres de sus propias tensiones internas. Otra pequeña propietaria destacada, la señora Choque, explicó que las organizaciones de mujeres están divididas y desorganizadas (Comunicación personal, diciembre de 2014). La señora Pisaro, la líder de otra organización de mujeres de San Miguel de los Ángeles, también expresó sus dudas. Ella también participó en una cooperativa de pollos, pero dijo que el 50 por ciento de los miembros la abandonaron debido a la burocracia en la obtención de financiamiento, tiempo e inversión, y los bajos ingresos que recibieron hasta la fecha (Comunicación personal, diciembre de 2014). Sin embargo, aquí el problema mayor es que las mujeres son excluidas del complejo sojero, por lo tanto, están obligadas a buscar otras



formas innovadoras para generar ingresos, además de continuar trabajando como trabajadoras domésticas no remuneradas dentro de la esfera de reproducción social. Incluso dentro de los procesos de 'exclusión productiva' y las nuevas formas de control, que son los temas centrales de este estudio, las mujeres enfrentan niveles todavía más profundos de exclusión dentro del hogar y en las relaciones de clase. Analizar en profundidad las intersecciones de clase, género, generación y etnicidad, está más allá del alcance de este libro, pero no deja de ser un tema importante a considerar dentro de la economía política del cambio agrario.

### *Toxicidad y peligros para la salud*

Al margen de la exclusividad, precariedad y escasez del empleo generado por la soya, el hecho de trabajar con agroquímicos y consumir alimentos provenientes de semillas transgénicas es muy peligroso para la salud pública. La mayoría de los agricultores, especialmente los pequeños, y los trabajadores asalariados rurales, mezclan los agroquímicos a mano y se exponen a las sustancias químicas durante la pulverización, limpieza y eliminación de contenedores. La exposición prolongada y la absorción de estas sustancias químicas son altamente peligrosas y deben manipularse con equipos de seguridad especiales (guantes, equipos de mezcla adecuados, máscaras contra el polvo y gafas protectoras), pero el uso de esos equipos es extremadamente raro en Cuatro Cañadas y San Julián, los dos municipios de la zona de expansión sojera de Santa Cruz. El principal agroquímico utilizado en Bolivia es el glifosato, seguido del 2,4-D, la Atrazina y el Paraquat, todos altamente controversiales por sus altos niveles de toxicidad y su asociación con trastornos neurológicos y reproductivos (Catacora-Vargas *et al.*, 2012). El Paraquat, por ejemplo, ha sido relacionado con la enfermedad de Parkinson (Tanner, *et al.*, 2013), mientras que a la Atrazina se relaciona con trastornos reproductivos (Tillitt, Papoulias, Whyte y Richter, 2010; Hayes *et al.*, 2011). El glifosato, el ingrediente activo en el herbicida *Roundup Ready* de Monsanto, fue evaluado recientemente por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la Organización Mundial de la Salud, entidad que lo clasificó como "pro-

bablemente cancerígeno para los seres humanos”, señalando que hay “suficientes evidencias de carcinogenicidad en animales de experimentación” y una asociación positiva entre la exposición a este químico y el cáncer en los humanos, aunque no se pueden descartar por completo otras explicaciones (Guyton *et al.*, 2015; IARC, 2015). La Atrazina y el Paraquat, además, han sido prohibidos en la Unión Europea, mientras que el glifosato fue prohibido en algunos países, pero sigue siendo controversial en la legislación europea. Los datos del Ministerio de Salud de Bolivia revelan que los casos de envenenamiento con agroquímicos en Santa Cruz aumentaron de 183 casos en 2010 a 475 en 2015, lo que representa un promedio de casi un caso reportado por día en los últimos cinco años (Ministerio de Salud, Comunicación personal, agosto de 2016). Los trabajadores en salud y el personal médico de Cuatro Cañadas y San Julián afirman que si bien no tienen datos históricos sobre los casos de cáncer, los problemas de salud relacionados con el uso de agroquímicos están aumentando e incluyen enfermedades de la piel, trastornos gastrointestinales y problemas neurológicos (mareos, dolores de cabeza). Aunque los agricultores de la zona han expresado sus preocupaciones por los problemas de salud recientemente detectados (irritación de la piel, dolores de cabeza), lo cierto es que desconocen los efectos a largo plazo y los impactos de largo plazo sobre la salud de la comunidad (Notas de campo, 2014-2015).

En términos generales, cabe afirmar que la naturaleza extractiva del complejo sojero en Cuatro Cañadas y San Julián no solo está reduciendo las oportunidades laborales, sino que está empeorando las condiciones de vida. Es un modelo productivo particularmente discriminatorio para los jóvenes que buscan permanecer en sus comunidades, para las mujeres que buscan trabajo en el sector y, en general, para las personas con acceso limitado a capital y tierra. La falta de eslabones entre distintos sectores económicos que puedan crear oportunidades productivas con valor agregado limita las posibilidades de empleo. En cambio, los procesos de ‘exclusión productiva’, la discriminación de jóvenes y mujeres y las amenazas para la salud de productores y consumidores, caracterizan las condiciones laborales dentro del complejo sojero.

## **‘Reproducción simple opresiva’ y población excedentaria**

Aunque muchos de los pequeños agricultores han mantenido sus derechos formales de propiedad sobre la tierra, cada vez son más oprimidos o exprimidos por las nuevas formas y relaciones productivas. La tierra es cada vez más escasa y cara, la mano de obra casi obsoleta y los medios de producción (semillas transgénicas, insumos agroquímicos, maquinaria) costosos y en manos de la industria, de modo que los pequeños propietarios experimentan lo que se conoce como ‘reproducción simple opresiva’, un proceso que les impide reproducirse como agricultores y que no brinda oportunidades para su transición hacia trabajadores asalariados (Bernstein, 1979, p. 427; Notas de campo 2014-2015). La mayoría rural que reside en la zona sojera de Bolivia podría bien ajustarse a lo que Tania Li llama “poblaciones excedentarias” (2009). Li distingue este concepto de la “población excedentaria relativa” de Marx, aquella que se convierte en parte de un ejército de reserva de mano de obra que sirve para mantener los salarios bajos y una mayor acumulación de capital. Sin embargo, para Li, dentro de las nuevas dinámicas estudiadas, los lugares (o sus recursos) son útiles, pero no las personas, por lo que la desposesión está separada de cualquier perspectiva de absorción laboral (2009, p. 69). En la zona de expansión sojera boliviana, la desposesión tiene lugar mediante lo que hemos llamado ‘exclusión productiva’, un fenómeno en el que los propietarios pobres en capital carecen de mecanismos de acceso para la puesta en producción de sus propias tierras. Como afirma Li, la clave de la difícil situación de los pequeños productores en este proceso es que su trabajo es excedentario en relación con su utilidad para el capital (2009, p. 68). Dicho de otra forma: en la zona de expansión sojera ya no se requiere mano de obra, y ante la falta de economías eslabonadas, las perspectivas laborales futuras no son prometedoras.

Si recordamos una de las tres vías para salir de la pobreza rural recomendadas por el Banco Mundial (2008), los agricultores que no son lo suficientemente productivos como para competir con los agroempresarios capitalistas deberían encontrar otras fuentes económicas o migrar a las ciudades. El supuesto básico de esta recomendación del

Banco Mundial es que el trabajo excedentario es necesario en otra parte o será absorbido por la economía urbana. Si bien lo primero no es posible en la zona de expansión sojera boliviana, tampoco existen garantías para la segunda opción. En Bolivia, siete de cada diez personas empleadas trabajan en condiciones precarias en el sector informal, sin seguridad social, seguro de salud o pensiones de jubilación (CEDLA, 2014). Entre los jóvenes de entre 20 y 34 años, el desempleo alcanza el 16,6 por ciento, mientras que el desempleo urbano entre los que tienen educación superior (profesionales o trabajadores calificados) alcanza el 10,5 por ciento (CEDLA, 2016a, p. 493). El desempleo es más bajo entre quienes tienen poca o ninguna educación (6,4 por ciento), lo que desalienta a los jóvenes a seguir estudios superiores. El trabajo precario sigue siendo generalizado y los más afectados son los jóvenes, las mujeres y la población con mayor nivel educativo. Esto se debe a la falta de calidad y de empleos con valor agregado donde se requieran trabajadores altamente calificados. La estructura económica seguirá siendo extractivista, sin un mercado interno o procesos de industrialización que puedan absorber a la población excedentaria relativa. Esta es la razón por la que la señora Vargas y la federación de mujeres del municipio de Cuatro Cañadas esperan apoyar a las mujeres para insertarse en nuevas actividades productivas. Para estas mujeres el mayor desafío en la comunidad es encontrar una oportunidad de trabajo (Comunicación personal, marzo de 2014).

Si las familias quieren quedarse en su comunidad, afirma la señora Vargas, tienen que encontrar formas alternativas de ganarse la vida porque la producción de soya ofrece muy pocas oportunidades laborales. Muchas personas sienten la falta de oportunidades de empleo, especialmente los jóvenes y las mujeres. Madelaine, una mujer de 23 años también de Cuatro Cañadas, dice que hay menos posibilidades laborales para aquellos que no trabajan directamente como productores y no tienen tierras. Para ella y su familia las oportunidades disminuyen porque todo está mecanizado, se requiere menos trabajo y las nuevas oportunidades son inexistentes (Comunicación personal, marzo de 2014). Para Madelaine, la expansión sojera ha traído beneficios solo para los productores; para otros, nada más

que impactos negativos (Comunicación personal, marzo de 2014). Anthony, un bachiller recién graduado, se encuentra en una situación similar. Dice que no hay tierra disponible para él y para la gran mayoría, más o menos un 80 por ciento, de sus compañeros que se encuentran en una posición similar. Ocasionalmente Anthony trabaja para los menonitas, pero dice que no existen muchas oportunidades para los jóvenes y que la tierra es demasiado cara (Comunicación personal, marzo de 2014).

La población empleada en actividades agrícolas disminuyó del 37 por ciento en 2000 al 26 por ciento en 2009 (INE, 2012). El porcentaje de la población trabajando en industrias extractivas, construcción y manufactura industrial también disminuyó, aunque levemente, del 17,2 por ciento a poco menos del 17 por ciento en el mismo período, mientras que el porcentaje de “trabajadores no calificados” aumentó en cuatro por ciento y continúa creciendo la fuerza laboral “precaria”, es decir, los que no tienen beneficios y estabilidad (INE, 2012). Según CEDLA, la plusvalía relativa en manos de los trabajadores, en relación con el capital privado y el Estado, ha disminuido del 34,5 por ciento en 2003 al 25,6 por ciento en 2013, mientras que la participación estatal casi se ha duplicado del 13,6 por ciento al 26 por ciento, y la del capital privado aumentó ligeramente del 52,2 por ciento al 52,8 por ciento (CEDLA, 2016b, p. 7). En otras palabras, la explotación laboral del Estado y el sector privado ha aumentado, y ahora se apropian de más del 75 por ciento de la plusvalía (Notas de campo, 2014-15). La persistencia de una economía caracterizada por enclaves extractivos, incluyendo el sector agrícola, deja pocas perspectivas para la juventud rural. Entonces, ¿qué pasará con los jóvenes de Cuatro Cañadas y San Julián presionados por el complejo sojero en expansión? Está por verse si serán absorbidos por las economías urbanas o se convertirán en “poblaciones excedentarias” y sin utilidad para la acumulación de capital. Esto, no obstante, tiene implicaciones importantes para la reestructuración agroindustrial.

Al tiempo que esta transición agraria continúa excluyendo a los agricultores con escasos recursos, las formas organizadas de resistencia que se oponen son relativamente débiles. Como rentistas

semiproletarios, los pequeños propietarios están atrapados en posiciones de clase contradictorias que obstaculizan sus formas de resistencia. Dado que muchos mantienen la propiedad formal de sus parcelas (aunque subordinados por las relaciones de acceso y control) y obtienen ingresos por rentar sus tierras, no se identifican a sí mismos como trabajadores proletarios. Sin embargo, su falta de control sobre el capital físico y su dependencia persistente de la renta de la tierra hace que no se alineen con los intereses de una pequeña burguesía y varios de ellos todavía se autoidentifican como campesinos. Gran parte de los pequeños propietarios se ven en medio de relaciones de clases particulares e incapaces de organizarse como una “clase para sí” debido a que sus estrategias económicas se cruzan con sus historias e identidades individuales (Notas de campo, 2014-2015).

El Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B) está ausente en la mayor parte de la región y en gran medida quedó incapacitado por la política del gobierno contra las ocupaciones de tierras. La ya referida Ley 477 prohíbe las ocupaciones de tierras –la principal estrategia de resistencia y defensa del territorio del MST-B– y encarcela a quienes lo hagan de forma ilegal por tres a ocho años.<sup>18</sup> En Cuatro Cañadas, muchos pequeños productores mostraron su frustración ante los esfuerzos por organizarse en comunidad para hacer valer sus demandas frente al Estado y/o resistir los términos de su inserción en el complejo sojero. Según varios pequeños pero destacados productores, las distintas historias, identidades, demandas y expectativas de diversos grupos de pequeños agricultores han generado dificultades para organizarse y formar alianzas entre los colonizadores. La mezcla de origen geográfico, experiencias e historias personales y, en menor medida, la cuestión étnica, se tradujo en obstáculos para organizarse y actuar de manera proactiva como “clase por sí”. Como dice Betty Rueda, expresidenta de la Organización de Mujeres de Cuatro Cañadas, “uno de los mayores desafíos de la comunidad es la unificación; todos han migrado a estas comunidades desde toda Bolivia y, por lo tanto, tienen diferentes mentalidades,

---

18 Ver UNIR y TIERRA, 2014.

perspectivas y normas. Es difícil organizarse, unificarse en torno a una causa y hacer que las cosas avancen porque la gente no está de acuerdo, no se ven a los ojos, en muchos temas, tienen diferentes ideas, valores, etcétera” (B. Rueda, Comunicación personal, mayo de 2014). Además, la penetración del capital no afectó a todos por igual ni de manera uniforme, y dado que muchos conservan su acceso a parcelas, no existe el deseo de unirse a un movimiento de trabajadores sin tierra.

Para J. Pérez, de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO), el acuerdo general entre los colonizadores es su lealtad al MAS. Después de décadas de dictaduras y gobiernos neoliberales, Evo Morales y el MAS representan simbólica y discursivamente sus intereses. J. Pérez explica que muchos pequeños propietarios emigraron desde las regiones donde el MAS es fuerte (Cochabamba, Potosí, Sucre, Oruro) y fueron parte de la lucha para llevar al poder a Evo Morales y al MAS. Señala que “su fe ciega está alimentada por los discursos indígenas y a favor de campesinos, algo que favorece sus intereses”.

Para Alcides Vadillo, exdirector del Instituto de Reforma Agraria de Bolivia (INRA) y ahora director regional de Fundación TIERRA en Santa Cruz, el movimiento social ha perdido su independencia y su capacidad de movilización para hacer demandas frente al Estado: “Están cooptados” (Vadillo, Comunicación personal, enero de 2015). Para la señora Choque, una colonizadora, pequeña propietaria y dueña de una tienda, que arribó a Cuatro Cañadas en 1992 tiene una perspectiva similar. Ella asevera que en las asociaciones de pequeños productores y los campesinos se benefician muy pocos: “Los dirigentes y la gente que está a la cabeza de las asociaciones, son los únicos que se benefician y el resto se queda con nada” (Choque, Comunicación personal, diciembre de 2014). La señora Choque explica que la producción de soya cambió la cohesión social de las comunidades. “La comunidad se ha vuelto individualista, sin unidad no podemos avanzar juntos”, subraya.

Sin formas organizadas de resistencia, ni desde los movimientos sociales ni desde el Estado, el complejo sojero sigue desarrollándose y extendiéndose en las tierras bajas mientras que el control sobre el tercer producto de importancia en la exportación del país se concentra cada vez más en manos de unos pocos. Estas particulares relaciones de clase han permitido que la alianza Estado-capital persista por medio de un 'dualismo funcional' entre fracciones de clase de capital y trabajo, facilitando el control del MAS sobre el poder estatal y el control de las élites agrocapitalistas sobre el complejo sojero (De Janvry, 1981).

## **El 'dualismo funcional' y el nexa Estado-sociedad-capital**

### *El 'dualismo funcional'*

La coexistencia de la agricultura capitalista y la agricultura de subsistencia representa lo que de Janvry (1981) llama 'dualismo funcional', el concepto que explica que la acumulación ampliada del capital es posible gracias a la presión para bajar los salarios por medio de la presencia de semiproletarios. Dado que el trabajo no está totalmente proletarizado, las necesidades de subsistencia provienen, parcialmente, de la producción propia, lo que permite a los capitalistas reducir los salarios por debajo del mínimo requerido para mantener y reproducir una fuerza laboral totalmente proletarizada. Como dice Kay (2006, p. 472), "la semiproletarización es la única opción disponible para aquellos campesinos que desean conservar el acceso a la tierra por razones de seguridad y supervivencia o porque no pueden encontrar un empleo suficientemente seguro en calidad de trabajadores asalariados, sea en el sector rural o urbano, como para arriesgarse a una migración permanente". Cuando se encuentran en posiciones de clase contradictorias, los pequeños propietarios semiproletarizados tienen intereses propios de los terratenientes, de los asalariados o de simples productores de mercancías, y, por lo tanto es poco probable que se organicen como "clase para sí misma". Este 'dualismo' es particularmente funcional en economías desarticuladas sectorial y socialmente, por lo que la



producción de materias primas (agricultura y minería) no tiene vínculos con otros sectores económicos –como sí ocurre con la producción industrial (hacia afuera y hacia adentro)– y donde la necesaria relación entre las capacidades de producción y consumo no implica una relación entre el rendimiento del capital y rendimiento del trabajo (De Janvry, 1981, pp. 33-34). Donde existe desarticulación, la expansión del mercado no se origina en el aumento de los salarios, sino en los mercados de exportación y en las rentas. En este caso, y desde la perspectiva del capital, el trabajo representa pérdida de ganancias porque no contribuye a la capacidad del consumidor y a la expansión del mercado interno, algo que sí sucedería en economías social y sectorialmente articuladas (De Janvry, 1981). Si bien el ‘dualismo funcional facilita una mayor acumulación de capital, también implica creciente proletarización y empobrecimiento de las masas rurales (De Janvry, 1981, p. 85).

En el caso del complejo sojero, el trabajo asalariado en el agro es casi obsoleto, lo que obliga a los pequeños propietarios a buscar fuentes laborales no agrícolas o convertirse en empresarios innovadores por medio de iniciativas y proyectos cooperativos. En contraste con la conceptualización original de Janvry del ‘dualismo funcional’, el contexto boliviano se caracteriza por la coexistencia de la agricultura capitalista con los pequeños propietarios rentistas cuyas necesidades de subsistencia no provienen principalmente de la producción propia, sino de la apropiación de rentas mediante los acuerdos o contratos de “partida” (McKay y Colque, 2016). No están totalmente divorciados de la tierra, no están totalmente proletarizados, pero carecen de los mecanismos de acceso y control para beneficiarse plenamente de los frutos de su tierra. Con el uso omnipresente de semillas genéticamente modificadas y la llegada de agrocapital extranjero, los pequeños propietarios se han visto afectados por los crecientes costos de producción,<sup>19</sup> por la concentración de la propiedad de la tierra y la monopolización del mercado por parte de la agroindustria (McKay, 2018). Sin embargo, como pro-

---

19 Entre 2002 y 2014 los costos de producción para los productores sojeros aumentaron de USD 263/ha a USD 475/ha (Notas de campo, 2014-2015).

pietarios de tierras, sus intereses económicos continúan alineados con los terratenientes a gran escala y las elites agroindustriales, por lo que esperan una mayor expansión de la frontera agrícola (con la esperanza de acceder a más tierras), aumento de la productividad (rendimientos) y de los precios del mercado según la Cámara de Comercio de Chicago. En lugar de movilizarse en torno a temas laborales o al apoyo para los pequeños agricultores frente a los medianos y grandes agricultores, los pequeños productores están incorporados en la cadena productiva de la soya y, en consecuencia, dependen del complejo sojero. Esto explica la desmovilización de los principales movimientos sociales en la región y ha permitido el desarrollo de la alianza Estado-capital sin que existan serias amenazas para la legitimidad estatal. Como agricultores permanecen vinculados a la tierra y generalmente reservan una pequeña porción para mantener parcialmente sus necesidades de subsistencia en el hogar, de lo contrario dependerían del todo de la renta y de trabajos asalariados con pocas oportunidades de cambiar la economía política actual. El MAS, sin embargo, justifica el desarrollo y la expansión del complejo sojero afirmando que casi el 80 por ciento de los productores sojeros son pequeños, por tanto –asegura el gobierno–, este sector agrícola contribuye a la generación de empleos y a la seguridad alimentaria (ANAPO, 2011; Vicepresidencia, 2012; INE, 2013).

Además, la falta de eslabonamientos económicos y de oportunidades de empleo relacionados con la soya es una característica de lo que de Janvry (1981) llama “economías sectorial y socialmente desarticuladas”. El semiprocesamiento de soya crea pocos empleos temporales, y el “valor agregado” que se obtiene es mínimo, por eso la soya todavía se exporta como materia prima agrícola sin procesar principalmente para la alimentación animal (McKay, 2018). Debido a que la integración de las economías sectoriales depende de los mercados externos (importación de bienes capitalizados con valor agregado y exportación de soya semiprocesada o cruda), y porque la demanda proviene de fuera de las fronteras nacionales, el complejo sojero representa un enclave económico sectorial y socialmente desarticulado. Con la mecanización que reduce drásticamente la necesidad de trabajo asa-

lariado,<sup>20</sup> éste se ha convertido en un excedente para las necesidades de acumulación de capital. Incluso el consumo interno no contribuye a la expansión del mercado interno para los productores capitalistas, lo que significa que no existe ningún incentivo para que la industria mejore los salarios o apoye el empleo. El salario, por tanto, es solo una pérdida neta para la acumulación de capital. No obstante, al participar en la renta de la tierra y en otras actividades precarias que generan ingresos, los pequeños productores pueden subsistir y, además, apoyar los intereses del capital dado su contradictorio posicionamiento de clase. Este 'dualismo funcional' hizo posible la emergencia de la alianza Estado-capital sin tener que enfrentar (hasta ahora) una crisis de legitimidad gubernamental. Mientras se mantenga el 'dualismo funcional', la alianza Estado-capital seguirá favoreciendo los intereses de acumulación de capital a costa de las mayorías rurales.

### **El nexó Estado-sociedad-capital: ¿señal de crisis?**

Al menos cinco factores interrelacionados del nexó Estado-sociedad-capital permitieron que el MAS gane y mantenga el poder estatal, apaciguando a las clases trabajadoras y al capital, sin pasar por una crisis de legitimidad y acumulación: 1) Las fuertes relaciones entre el Estado y la sociedad que surgieron como resultado del Pacto de Unidad tanto antes como después de 2006; 2) La inclusión y absorción de los líderes clave de los movimientos sociales dentro de las instituciones estatales; 3) El *boom* de las materias primas, que se tradujo en el aumento de los ingresos estatales hasta niveles históricos y, en consecuencia, el aumento en la inversión pública y la reducción de la pobreza aunque desde un enfoque residual; 4) El discurso estatal y la política pública de identidad; y 5) El 'dualismo funcional' y la desarticulación sectorial/social. Muchos de estos factores, sin embargo, todavía dependen de los sectores extractivos y, por lo tanto, en gran medida dependen de los precios de las materias primas para sostener el modelo de desarrollo neoextractivista. Con la caída de los precios

---

20 Antes de la mecanización, un trabajador podía cosechar por día una décima parte de una hectárea. Con la maquinaria, un trabajador puede cosechar 25 hectáreas por día (Notas de campo, 2014-2015).

de las materias primas y las crisis socioeconómicas y ecológicas del sector sojero que comenzaron a aflorar el año 2014,<sup>21</sup> la alianza Estado-capital podría enfrentar pronto una crisis de legitimidad.

En 2012, el precio de la soya alcanzó un máximo de USD 623/tonelada, pero desde entonces ha caído en picada hasta alrededor de USD 354/tonelada. La crisis económica de los productores se agravó por los largos períodos de sequía que afectaron severamente los rendimientos y provocaron un endeudamiento generalizado. Además, los precios de los alimentos en las zonas de expansión sojera como Cuatro Cañadas y San Julián aumentaron sustancialmente, especialmente en el caso de los alimentos básicos como frutas y verduras (Fernández Cutino, Comunicación personal, junio de 2016). Estos factores están ejerciendo presión entre los pequeños productores y varios optaron por no sembrar sus parcelas por el temor al endeudamiento. La combinación de estas crisis económicas y ecológicas probablemente obligue a los pequeños propietarios sin capital a abandonar su tierra para proletarianizarse por completo, erosionándose así el 'dualismo funcional' que explica en parte la persistencia de la alianza Estado-capital.

Pero incluso más allá del complejo sojero, el MAS ha puesto en peligro su relación con las organizaciones que conformaron el Pacto de Unidad y las fuertes relaciones entre el Estado y la sociedad que llevaron a este partido político al poder estatal en 2006. El polémico conflicto por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), donde el gobierno autorizó la construcción de una carretera sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, provocó pugnas generalizadas entre los indígenas y el MAS, además de crear tensiones dentro del Pacto de Unidad que finalmente llevaron a fracturas y divisiones (Webber, 2015). La falta de capacidad administrativa estatal y el clientelismo político se hicieron más evidentes con el escándalo de corrupción del Fondo Indígena en 2015. Casi el 70 por ciento de los proyectos tenían

---

21 Por ejemplo, ver un artículo reciente publicado por *Página Siete*, titulado "¿El agro se nos muere? Las plagas y los 'precios bajos' amenazan la producción" (Díez, 2016). Ver también McKay y Colque, 2016.

“irregularidades” y más de USD 180 millones desaparecieron, lo que llevó a procesos judiciales en contra de varios líderes indígenas, así como a la renuncia de la ministra de Tierras y Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo (Fundación Pazos Kanki, 2015, p. 5).

Para empeorar las cosas, estas tensiones se intensificaron por la caída en los precios de las materias primas. Con fondos públicos (y gastos estatales) altamente dependientes de las rentas extractivas, la caída de los precios empujó a la necesidad de ampliar la producción para mantener los ingresos. Esto llevó a la aprobación del controvertido Decreto Supremo 2366 en 2015 que autoriza la exploración y extracción de hidrocarburos en áreas protegidas, pese a que el Defensor del Pueblo, Rolando Villena Villegas, calificó el decreto de inconstitucional y violatorio de los derechos de las comunidades indígenas (Defensoría del Pueblo, 2016). Adicionalmente, el gobierno, junto con los agroempresarios, anunció la expansión de la frontera agrícola de tres millones a 13 millones de hectáreas dentro de diez años. La agroindustria también sigue presionando para la legalización de más semillas transgénicas, incluyendo las del arroz, el trigo y el maíz. Este tema despertó la preocupación de algunos sectores, particularmente la CSUTCB y miembros del Pacto de Unidad, que se organizaron en la Cumbre Agropecuaria en 2015 para intentar detener la legalización de más variedades transgénicas (McKay, 2017b). Es importante señalar que en varias entrevistas realizadas con líderes de la CSUTCB y organizaciones afiliadas manifestaron su desacuerdo con el modelo agroindustrial impulsado por el MAS. Estos testimonios demuestran que al interior de los movimientos sociales hay diferencias respecto a la continuación del apoyo político al MAS. Estas contradicciones internas se evidencian en declaraciones públicas como la de Rodolfo Machaca en el 2016 “El referendo ha dicho que termine su gestión el Presidente. El soberano ha dicho que no puede ‘repostularse’. Entonces eso tiene que respetarse, porque tenemos que cuidar la imagen y el liderazgo de nuestro Presidente también” (Página Siete, 2016).

Esta reacción, quizás sorprendente, muestra en parte una autonomía relativa o posicionamiento político de este sector y el deterioro de las relaciones con el MAS. La caída en los precios de las materias primas y la necesidad de mantener los intereses de acumulación por medio de la expansión geográfica han puesto en cuestión, en alguna medida, la legitimidad estatal y han fracturado la fuerte relación Estado-sociedad, al tiempo que han evidenciado la mutuamente beneficiosa relación Estado-capital que depende de la acumulación de capital y del poder político.

Todos estos factores juntos, incluidos algunos escándalos políticos menores,<sup>22</sup> han comenzado a desentrañar el nexo Estado-sociedad-capital que permitió al MAS mantener el poder del Estado durante 13 años y apaciguar tanto a las clases trabajadoras como al capital mediante el cumplimiento parcial de sus funciones objetivas y subjetivas.

## Conclusión

Las dinámicas agrarias en las tierras bajas de Bolivia están experimentando una transición importante. En este capítulo se ha analizado la política del cambio agrario desde que Evo Morales y el MAS tomaron control del Estado el año 2006. El recorrido se inicia con la “Revolución Agraria” –que reconoció formalmente los derechos territoriales de muchas comunidades indígenas, pero no avanzó en dirección de una reforma agraria redistributiva–, y concluye con la “Revolución Productiva”, destacando su sesgo pro-agroindustria y la emergente alianza Estado-capital. En el curso de este proceso, y a medida que el mercado de la tierra se saturó y los medios de producción se mercantizaron, los pequeños propietarios fueron excluidos de forma gradual de la actividad productiva, aunque mantuvieron la propiedad de sus parcelas. Los pequeños propietarios pobres en capital carecen de los mecanismos necesarios de acceso estructural y relacional para integrarse al complejo sojero agroindustrial como

---

22 Un caso infame es el vínculo amoroso entre el presidente Morales y la ex gerente de CAMC *Engineering Company* de China, Gabriela Zapata. CAMC recibió cinco contratos públicos por valor de unos USD 5 mil millones (Molina, 2016)

productores. Frente a esto, esos pequeños propietarios optaron por establecer acuerdos o contratos de “partida” para alquilar sus tierras a los productores ricos, capitalizados, con acceso a la tecnología y a los mercados, y a las autoridades políticas. Estos mecanismos de exclusión han convertido a los pequeños propietarios en semi-proletarios y pequeña burguesía rentista, obstaculizando así su capacidad de organizarse como una “clase para sí misma” y pasando a ocupar posiciones de clase contradictorias entre el trabajo y el capital. El capítulo ha mostrado cómo se desarrollan estos procesos de ‘exclusión productiva’, procesos que están marcando una trayectoria de cambio agrario que deja y dejará a las mayorías rurales en posiciones muy precarias y con pocas oportunidades laborales.

Por otra parte, el modelo económico de Bolivia basado en las exportaciones de materias primas aún carece de un proceso de industrialización que sea capaz de absorber a la población excedentaria relativa. Las dinámicas agrarias aquí analizadas son parte de ese modelo económico más amplio que se basa en la extracción de recursos naturales para la exportación (minerales, hidrocarburos, soya). Si se abren oportunidades para una alternativa viable en la agricultura –que requeriría de cambios sustanciales en el patrón productivo y también de movimientos sociales más fuertes y organizados desde las bases– probablemente muchos pequeños productores permanecerían en las zonas rurales. Tales desafíos, sin embargo, requieren transformaciones estructurales con respecto a las relaciones de producción y propiedad, lo que cada vez es más difícil debido al rápido avance de la política estatal para expandir la frontera agrícola y su giro desde la “Revolución Agraria” a la “Revolución Productiva” (Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria).

En el modelo actual, los pequeños propietarios pobres en capital se enfrentan a la reproducción simple opresiva porque carecen de mecanismos de acceso a la producción agrícola mecanizada. Sin acceso a capital, tecnología y mercados, e incluso sin un mecanismo efectivo de relación con las autoridades estatales, los pequeños propietarios se encuentran subordinados a las desiguales relaciones de poder en el campo. Las élites terratenientes, los agrocapitalistas y

la agroindustria, han impuesto una cultura de modernización, expansión y producción intensiva en capital, que ha subordinado a las mayorías rurales. Su poder no solo está en la tierra y el capital, sino que está legitimado por los discursos estatales de agroindustrialización y progreso. El control sobre la cadena de valor ha aumentado su poder y su capacidad de apropiarse de los excedentes del proceso productivo. En el siguiente capítulo se analiza la cadena de valor agroindustrial para develar quién controla y se apropia del excedente económico dentro del complejo sojero, tanto al inicio del proceso productivo como al final.



## Capítulo 4

# Control de la cadena de valor: relaciones de deuda y dependencia

“Antes los agroquímicos eran mejores, un químico se encargaba de todo. Ahora los paquetes tecnológicos necesitan un producto para una plaga, otro para otra plaga diferente, otro producto para las hierbas, etcétera. Casi todos los años tenemos un nuevo tipo de hierba o plaga que debemos combatir. Los costos están aumentando, pero nuestros rendimientos no. Los únicos que siguen beneficiándose son las empresas de agronegocios que venden los agroquímicos”.

F. Schmihd (nombre ficticio), un agricultor menonita que inmigró a Santa Cruz desde México en 1983 (Comunicación personal, enero de 2015)

### Introducción

La rápida expansión de las plantaciones de soya, que se duplicó en términos de área cultivada desde el año 2000,<sup>1</sup> ha transformado las relaciones productivas y la trayectoria de desarrollo del departamento de Santa Cruz. Los campesinos colonizadores que llegaron a la región desde Potosí, Oruro, Cochabamba y La Paz, entre otros lugares, transitaron desde su “forma campesina” de producir –orientada a los cultivos tradicionales como maíz, yuca, arroz y frijoles, utilizando mano de obra familiar y produciendo para el consumo doméstico–, hacia un modelo de agricultura mecanizada intensivo en capital y para la exportación.

El abandono de la agricultura de base campesina fue desencadenado por varios factores. Las primeras fases de expansión de la

---

1 De 490 mil hectáreas en 2000 a 942 mil hectáreas en 2014 (ANAPO, 2014).

agroindustria se caracterizaron por la llegada de los menonitas seguidos por los brasileños, quienes introdujeron capital e inversión extranjera con nuevas máquinas y tecnologías. A medida que la penetración del capital avanzó en la década de 1990, también surgieron discursos de modernización y progreso en torno al modelo agroindustrial. Varios factores, entre ellos una serie de gobiernos transitorios y un nuevo programa de reforma agraria y de titulación de tierras altamente ineficiente (saneamiento), sumados a condiciones agrícolas extremadamente desfavorables entre 1996 y 2003 (inundaciones, sequías, rendimientos pobres) y a la falta de apoyo para la agricultura campesina a pequeña escala, dieron lugar a que muchos agricultores abandonaran su tierra para buscar nuevas oportunidades económicas. Los que se quedaron en el campo han tenido que lidiar con la autoexplotación y el trabajo duro, y se han visto obligados a diversificar como fuera posible sus fuentes de sustento. Para mediados y finales de la década de 2000, aquellos que todavía no habían transitado al cultivo de soya lo hicieron motivados por las oportunidades económicas que ofrecía el convertir su tierra de cultivos tradicionales a monocultivos de soya, lo que a su vez ofrecía a los campesinos colonizadores la oportunidad de “progresar”, “modernizarse” y obtener un ingreso atractivo. Esto, sin embargo, tenía un costo: ingresar en el ámbito de las relaciones de deuda y dependencia dentro de la cadena de valor y, para algunos, perder el control sobre su tierra.

## **La cadena de valor agroindustrial y el capital transnacional**

Los incentivos económicos no han sido la única razón para que muchos agricultores abandonen la producción diversificada de cultivos y hayan adoptado los monocultivos. La señora Choque, por ejemplo, llegó a la región de expansión soyera a fines de la década de 1980. Ella y su familia –la señora Choque es hija de un campesino colonizador y líder sindical de Villa Primavera– solían producir maíz, arroz, yuca, plátanos, tomates, cebollas y otros vegetales, y tenían también algunas cabezas de ganado y cerdos. Las únicas cosas que necesitaban comprar, explica, eran la sal y el aceite. Trabajaban sus tierras utilizando mano de obra familiar, produciendo princi-

palmente para el consumo doméstico, vendían los excedentes de su producción en los mercados locales e intercambiaban parte de esos excedentes con otras familias vecinas. A principios de la década de 2000, la agroindustria brasileña Sojima, que ahora controla más de 100 mil hectáreas en la región, compró grandes cantidades de tierra en los alrededores del predio de la señora Choque para la producción a gran escala de soya transgénica. Esta compañía empezó a utilizar en sus campos la fumigación por avionetas, contaminando así el área circundante con agroquímicos como el glifosato, el 2.4-D, la Atrazina y el Paraquat. Como el suelo se contaminaba con la fumigación aérea, los pequeños agricultores se vieron obligados a la transición hacia la producción con semillas genéticamente modificadas (es decir resistentes al glifosato) (Choque, Comunicación personal, diciembre de 2014). Esta historia es común no solo en la comunidad de la señora Choque, sino en toda la zona de expansión agrícola en Santa Cruz (Notas de campo, 2014-2015).

En la comunidad de la señora Choque, Villa Primavera, solo dos de cada 20 familias tienen maquinaria agrícola. El resto, como ella, entra en acuerdos o contratos de “partida” con quien tenga maquinaria para trabajar su tierra. La señora señala que un terrateniente brasileño trabaja la mayoría de las tierras de su comunidad, y aunque formalmente no es el dueño, tiene acceso directo a todas las propiedades que le generan la mayor parte de sus beneficios. Cuando se le preguntó sobre el futuro de los pequeños propietarios de la zona, la respuesta de la señora Choque fue bastante desalentadora: “En el futuro, los pequeños ya no podrán producir. Cada año los costos de producción aumentan porque necesitamos comprar más y más agroquímicos. El clima también ha cambiado, es menos predecible y tenemos menos lluvias. Y como la mayoría de nosotros (los pequeños propietarios) no tenemos acceso a la maquinaria, dependemos de los demás y tenemos que esperar hasta que tengan tiempo para trabajar nuestra tierra. Así se pierden los mejores tiempos para sembrar, fumigar y cosechar”. La señora Choque continúa explicando que en un futuro cercano su familia planea transitar hacia un sistema diversificado de producción para el autoconsumo con una variedad de vegetales, ganados y cerdos, y de esa manera retornar a

la forma de vida campesina que tenían antes. Aunque está preocupada por la contaminación del aire, la tierra y el agua que la rodea, está cansada de no tener ningún control sobre su tierra y sobre el proceso de producción. Para ella, lo que hay no es la agricultura que conoce, sino un proceso industrial que explota la tierra y explota a la gente para obtener ganancias (Choque, Comunicación personal, 9 de diciembre de 2014). A pesar del aumento en el ingreso familiar, la pérdida de control sobre la tierra y sobre el proceso productivo –junto con los costos crecientes para el consumo doméstico de alimentos– está conduciendo al mejoramiento económico pero con degradación social entre los pequeños productores integrados en el complejo sojero (Pegler, 2015). En este trabajo, la degradación social en el complejo sojero se entiende como ‘exclusión productiva’, pero los valores sociales y las identidades campesinas también se erosionan a medida que las relaciones de producción se incorporan dentro de la cadena de valor de la soya y a medida que los cultivos tradicionales son sustituidos por cultivos industriales de usos flexibles. Las mujeres en particular, como la señora Choque, han sido “degradadas” o excluidas por las formas de producción altamente mecanizadas que las excluye del uso de maquinaria pesada (Notas de campo, 2014-2015).

La mayoría de los pequeños propietarios en la región están alquilando sus tierras o entrando en acuerdos “partida” porque los procesos de exclusión productiva los están separando del acceso a los factores necesarios para la puesta de sus tierras en producción (McKay y Colque, 2016). Otros, sin embargo, han crecido y acumulado suficientes ahorros como para comprar un tractor y se han integrado completamente al complejo sojero dependiente de insumos agroindustriales controlados por corporaciones de semillas transgénicas y agroquímicos (es decir, el “paquete tecnológico”). Los créditos a corto plazo y los contratos agrícolas han obligado a los propietarios a entrar en relaciones de dependencia con los agronegocios y formar parte de ciclos de endeudamiento y control. Como dice McMichael (2013, p. 671), “el productor entra en un tipo particular de relaciones de valor que tiene el potencial de convertirse en un instrumento de control, dependencia de la deuda y desposesión”. Este es pre-

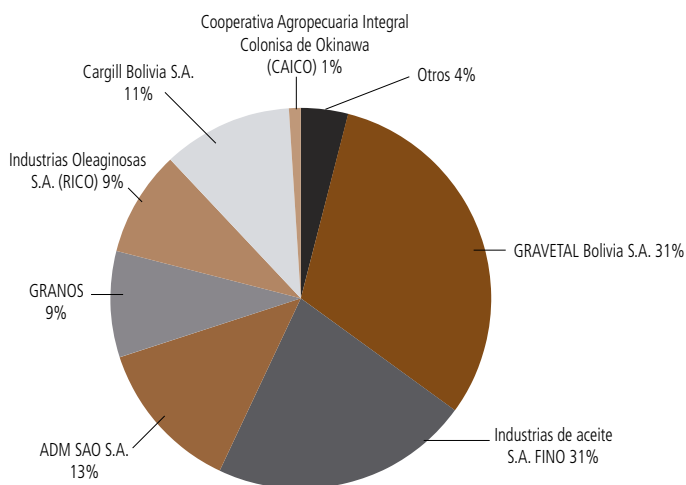
cisamente el tipo de relaciones de valor que llegó a controlar a los agricultores de Santa Cruz. La autonomía de los agricultores sobre su tierra está amenazada y es casi imposible que puedan separarse de estas “cadenas de dependencia” debido a los entornos económicos (contratos con los proveedores, endeudamiento) y ecológicos (degradación del suelo, contaminación, fumigación a gran escala).

La introducción de soya transgénica, por otra parte, ha abierto nuevas oportunidades de mercado para los agronegocios a medida que el mercado agrícola inexplorado de Bolivia abrió una nueva frontera de acumulación. En lugar de comprar tierras, el capital transnacional se apropia del valor de la agricultura industrial a través de insumos agrícolas, almacenamiento y procesamiento, relaciones de crédito y deuda, y mercados de exportación. Esta es otra forma de acaparamiento del control en el sector agrícola. Mientras que los medianos y grandes propietarios de tierras expanden su tamaño por medio de la apropiación, la compra de tierras y el acaparamiento del control (Colque, 2014; McKay y Colque, 2016), el agrocapital transnacional penetra en el mercado mediante el control de semillas, insumos agroquímicos, silos, procesamiento y mercados de exportación. Cuatro de las seis compañías principales que controlan el 85 por ciento del mercado de soya, almacenamiento (silos) y procesamiento, son propiedad del capital extranjero (AEMP, 2013). Con el control oligopólico que tienen, estas seis empresas pueden fijar precios e influir enormemente en la producción de soya. Mediante contratos de suministro, estas empresas tienen un alto grado de control sobre el proceso productivo ya que exigen estándares de calidad específicos que requieren el uso de ciertos insumos y “paquetes tecnológicos”. También tienen acceso a los mercados de exportación y, por lo tanto, controlan la entrada a otros países donde la soya boliviana se valoriza. Sin tener realmente derechos de propiedad sobre la tierra, las relaciones de control y acceso a la tierra y sus recursos productivos están en gran parte en manos del capital agroindustrial. En esta relación, los pequeños productores y agricultores asumen la mayor parte de los riesgos. La volatilidad de los precios internacionales, la sequía, las inundaciones, las plagas y las malas hierbas, son las amenazas potenciales que el productor debe

absorber. Mientras tanto, los agronegocios se benefician con la venta de insumos agrícolas –como semillas, agroquímicos, maquinaria, asistencia técnica, crédito– y a menudo obligan al comprador de sus productos (es decir el productor agropecuario) a vender la totalidad de sus cosechas que acaban siendo almacenadas en los silos e instalaciones de procesamiento de los agronegocios.

Si bien no debemos subestimar la importancia de la tierra y la estructura agraria desigual, otros componentes del complejo sojero también revelan la dinámica agraria cambiante y los procesos de control. Quienes controlan el almacenamiento, procesamiento, distribución y exportaciones, pueden tener más influencia sobre la industria que los propietarios de tierras y los productores. A continuación, en el Gráfico 6 y Cuadro 5 se muestran y describen a los principales actores que controlan el complejo sojero: seis empresas que tienen bajo control el 95 por ciento de la exportación de la soya boliviana.

**Gráfico 6**  
**Cuota de mercado según compañías agroindustriales exportadoras de soya, 2012**



Fuente: Adaptado de AEMP, 2013.

## Cuadro 5

### Agronegocios establecidos en Bolivia en la cadena de valor de la economía de las semillas oleaginosas

<i>Agronegocio</i>	<i>Características principales</i>	<i>Relación con capital extranjero</i>
<i>Gravetal Bolivia S.A</i>	<i>El procesador de soya más grande en la agroindustria boliviana. Produce crudo y harina de soya. 100% orientado a la exportación. Controla el 31 por ciento de las exportaciones bolivianas en derivados y soya. Representó aproximadamente el 10 por ciento de los ingresos en divisas por las exportaciones bolivianas en 2011. El empleo directo generado en Bolivia alcanzó los 4.500 puestos por año.</i>	<i>Desde 2008, el 99 por ciento es propiedad de Capital Inverso SA, una compañía transnacional con sede en Venezuela</i>
<i>Industria de Aceites S.A (FINO)</i>	<i>Segundo mayor exportador de soya y girasol. Produce aceite de cocina, mantequilla, margarina, jabón y otros productos cosméticos para el mercado interno. Controla el 22 por ciento de las exportaciones bolivianas de derivados y soya.</i>	<i>74 por ciento controlado por Urigeler International S.A., una compañía transnacional que es parte de Grupo Romero de Perú.</i>
<i>ADM SAO S.A.</i>	<i>Una de las empresas agroindustriales transnacionales más grandes del mundo que opera en más de 75 países, con activos en abastecimiento, transporte, almacenamiento y procesamiento. En Bolivia, ADM vende y exporta aceites vegetales y harinas proteínicas de soya y semillas de girasol. Comenzó a operar desde 1998 comprando el 50 por ciento de la empresa boliviana SAO. Controla el 13 por ciento de las exportaciones bolivianas del rubro.</i>	<i>Multinacional con sede en los Estados Unidos.</i>
<i>Industrias Oleaginosas S.A.</i>	<i>Procesador de semillas oleaginosas de propiedad boliviana que maneja compras de granos, almacenamiento, instalaciones de procesamiento y mercadeo. Controla el 9 por ciento de las exportaciones bolivianas de derivados y soya. Los principales mercados externos se encuentran en la región andina, América del Norte y los países europeos.</i>	<i>Propiedad de la notoria familia Marinkovic (inmigrantes croatas). Branko Marinkovic es un político y hombre de negocios que huyó de Bolivia después de haber sido acusado por planear una rebelión armada para derrocar al gobierno de Evo Morales.</i>
<i>Cargill Bolivia S.A.</i>	<i>Inició operaciones en Bolivia en 1998. Vende alimentos industriales, exporta productos agrícolas y ofrece servicios financieros. Tiene silos y bodegas donde puede almacenar hasta 27.000 toneladas de granos. También tiene asociaciones con otros propietarios de silos en 12 ubicaciones. Controla el 11 por ciento de las exportaciones bolivianas de derivados y soya.</i>	<i>Multinacional con sede en los Estados Unidos. Cargill es un productor y comercializador internacional de productos y servicios alimentarios, agrícolas, financieros e industriales. Esta compañía emplea a 140 mil personas en 65 países. En 2012, sus ingresos alcanzaron USD 116 mil millones.</i>
<i>GRANOS</i>	<i>Controla el 9 por ciento de las exportaciones bolivianas de derivados y soya.</i>	<i>Establecido en Bolivia. Son inversores internacionales con capital desconocido. Exporta a Perú.</i>

Fuente: Adaptado de *Pacific Credit Rating PCR* (2012), *Nueva Economía* (2011), *AEMP* (2012), *Jubileo* (2013) y sus respectivos sitios web.

Excluyendo a Industrias Oleaginosas S.A. y a GRANOS, el resto de las seis compañías listadas líneas arriba cotizan en bolsas de valores y son propiedad de empresas transnacionales, incluyendo las multinacionales con sede en los Estados Unidos ADM y Cargill. Muchos de estos agronegocios comenzaron a operar en Bolivia a fines de 1990 mediante la adquisición de agroindustrias cruceñas y utilizando sus filiales brasileñas y argentinas para ingresar al país. Estas empresas se caracterizan, principalmente, por actividades tales como la compra de granos, el almacenamiento, procesamiento, comercialización y exportación. Operan a través de la *agricultura por contrato* especialmente con medianos y grandes propietarios, así como con asociaciones de productores. Muchos de estos agronegocios proporcionan a los productores los “paquetes tecnológicos” apropiados que incluyen semillas e insumos agroquímicos con instrucciones para su uso, el número exacto de días que se necesita desde la siembra hasta la cosecha y los estándares requeridos para la calidad del grano. Los productores no están obligados *per se* a comprar estos “paquetes tecnológicos”, pero asumen riesgos adicionales si subcontratan sus propios insumos productivos. Los contratos pueden variar, pero generalmente fijan un precio y una cantidad predeterminados que se comprarán después de la cosecha. Este tipo de contrato brinda a los productores acceso garantizado al mercado y les permite protegerse contra las fluctuaciones de los precios. Evidentemente, tienen más poder de negociación y mejores precios aquellos productores con capacidad de producir grandes volúmenes. Además, el productor devuelve el préstamo inicial para los insumos al momento en que entrega la cosecha. Algunos productores, especialmente los menonitas, a menudo unen sus tierras para aumentar su poder de negociación frente a la agroindustria, obteniendo así un mejor precio por tonelada. A pequeña escala, estos acuerdos son similares a los *pools* de siembra, más comunes en Argentina y Brasil, y en lugar de la participación de inversionistas externos, incluyen grupos más pequeños, asociaciones o comunidades de agricultores. Además, el contrato de “partida” opera dentro de estos esquemas de *agricultura por contrato* porque los agricultores capitalizados que trabajan en tierras de propietarios no capitalizados tienen contratos con las compañías del agronegocio. En otras



palabras, mientras que los agricultores capitalizados se apropian de gran parte del superávit de los pequeños propietarios no capitalizados, los agronegocios se apropian del excedente de los productores a través de la *agricultura por contrato*. La dinámica de la cadena de valor funciona como una cadena de control con la subsecuente apropiación de valor a lo largo de toda la cadena.

Los términos de acceso y control se han transformado. Poseer la tierra ha dejado de ser un activo suficiente cuando un productor entra en este particular tipo de relación de valor, convirtiéndose dependiente de la agroindustria tanto para conseguir los insumos de producción como para vender el producto final. McMichael, por ejemplo, analiza la relación cadena de valor como la formación de “cadenas de dependencia con pequeños productores que ingresan a mercados sobre los que no tienen el control final”, al tiempo que sirve para “generar valor del que se apropian los agronegocios y sus financistas”, en forma de alimentos, piensos y agrocombustibles para los consumidores de élite, redistribuyendo el valor de los productores entre los financiadores de las corporaciones (ya sea dentro del sector de agronegocios o en cualquier otro rubro económico) (McMichael, 2013, p. 672). Todos los riesgos de producción son asumidos por los productores, mientras que el valor que agregan es a través de su fuerza de trabajo y el valor ecológico extraído de sus tierras. En el momento de la cosecha, los productores venden sus cultivos a la agroindustria a un precio por tonelada sujeto a lo que fija la Cámara de Comercio de Chicago y descontando, en promedio, USD 70/tonelada, un ajuste acordado por las seis empresas que controlan los mercados, los silos y la exportación (ANAPO, 2016; FAOSTAT, 2016). Con el fin de limpiar y preparar la tierra para la próxima temporada, se necesita de una inversión inicial, por lo que el endeudamiento a través de la *agricultura por contrato* suele ser una necesidad. “En consecuencia, la deuda es un mecanismo clave de control dentro de la cadena de valor, constituyéndose en el eslabón a través del cual se activa, se reproduce y, en algunos casos, se produce la desposesión de la tierra de los agricultores” (McMichael, 2013a, p. 672). Por supuesto, quienes tienen más acceso a capital, créditos, tierras y maquinarias tienen mayor control sobre la producción y el proceso de toma

de decisiones. Aproximadamente un tercio de los agricultores en Cuatro Cañadas y San Julián poseen un tractor, lo que significa que al menos necesitan contratar servicios operativos para la cosecha y transporte o acordar contratos de “partida” para llevar a cabo el proceso productivo desde la siembra hasta la cosecha (INE, 2015b; Notas de campo 2014-2015). Por lo tanto, las relaciones del control de la cadena de valor varían según la incorporación de agricultores que poseen diferentes mecanismos de acceso.

Si bien es posible cuantificar el valor captado (o retenido) por los pequeños propietarios bajo el contrato o acuerdo de “partida”, sabiendo que ese valor ronda entre el 18 y el 25 por ciento, ocurre lo contrario si queremos cuantificar el valor retenido por las empresas de agronegocios mediante la *agricultura por contrato* y resulta más complicado aún si no están disponibles los costos de producción y los precios de soya. Sin embargo, podemos determinar la concentración del control de los insumos productivos y productos finales de la cadena de valor y los orígenes del capital e industrias. En el caso de los procesadores, también es posible calcular el valor de la molienda en la industria de la soya. La molienda es un proceso de conversión de la soya en harina de soya y aceite de soya, y la diferencia entre el precio de la materia prima y el ingreso se llama Margen Bruto de Procesamiento (MBP) (CBOT, 2006). El MBP (llamado también *crush spread*), es una medida del margen de beneficio de los procesadores de soya. Si bien muchos factores afectan el MBP, según un informe de la Cámara de Comercio de Chicago, “los precios de la soya suelen ser más bajos en la cosecha y tienden a subir durante el año a medida que se acumulan los costos de almacenamiento, intereses y seguros” (CBOT, 2006, p. 1). Evidentemente, esto significa que los productores reciben el precio más bajo por el grano en la época de cosecha, y los agronegocios, que almacenan, procesan y comercializan el cultivo, se apropian de más valor a medida que el precio aumenta a lo largo de la cadena. La molienda resulta en harina de soya (73,3 por ciento), aceite (18,3 por ciento), cáscaras (6,7 por ciento) y desechos (1,7 por ciento). Para calcular el MBP o *crush spread* de la soya, usamos un denominador común, el dólar estadounidense por tonelada métrica, y la siguiente ecuación:

$$\text{MBP} = (\text{Precio de harina de soya } (403,28) \times 73,3 \text{ por ciento}) + (\text{Precio del aceite de soya } (669,86) \times 18,3 \text{ por ciento}) - \text{Precio de soya } (390,40)$$

Con base en los precios de la Cámara de Comercio de Chicago, el MBP para julio de 2016 era de USD 28,15/TM. Esto significa que por cada Tonelada Métrica (TM) de soya producida en Bolivia, la agroindustria se apropia de USD 28,15 (monto válido para julio de 2016). En la campaña de verano del 2014-2015, Bolivia produjo 2.106.600 TM de soya. Asumiendo un MBP de USD 28,15, la agroindustria se habría apropiado de USD 59.300.790 solo por el procesamiento de la cosecha de esa campaña.

**Cuadro 6**  
**Distribución de ingresos del complejo sojero**  
**Pequeños propietarios, productores y agroindustriales**

<i>Ingresos netos por producción de soya, precios del año 2016</i>			
	<i>Pequeños propietarios</i>	<i>Productores capitalizados</i>	<i>Agroindustria les</i>
Contrato "Partida"	25% de ingresos netos	75% de ingresos netos	14.424
Costos de producción (USD / ha)	463,62	463,62	
Precio de la soya (USD / tn)	230	230	
Rendimiento (tn/ha)	2	2	
Ingreso bruto (USD / ha)	460	460	
Ingresos netos (USD / ha)	-3,62	-3,62	
"Partida" (USD / ha)	0	(-)3.62 x ha	
"Partida" (USD / tn)	0	Pérdida neta	28,15
<i>Ingresos netos por la producción de soya (precios promedio de los años de auge (2008-14))</i>			
	<i>Pequeños propietarios</i>	<i>Productores capitalizados</i>	<i>Agroindustriales</i>
Contrato "Partida"	25% de ingresos netos	75% de ingresos netos	
Costos de producción ( USD / ha)	463,62	463,62	
Precio de la soya	338,88	338,88	
Rendimiento (tn / ha)	2	2	
Ingreso bruto / ha	677,76	677,76	
Ingresos netos / ha	214,14	214,14	
"Partida" / ha	53,54	160,61	
"Partida" / tn	26.7675	80.3025	28,15

Fuente: elaboración propia basada en Notas de campo 2014-2015.

El siguiente cuadro (Cuadro 7) muestra las ganancias (o pérdidas) de ingresos netos basadas en datos de esos dos períodos. Se asumen varios supuestos: en primer lugar, la situación hipotética que aquí se presenta se basa en el contrato de “partida” (25 por ciento para el agricultor y 75 por ciento para el agronegocio); luego, se considera también que los costos de producción son aquellos basados en el promedio calculado en el anterior capítulo (USD 463,62/ha); los precios de la soya, a su vez, se basan en los precios vigentes en Bolivia en 2016, y el promedio durante los años de auge de 2008 a 2014; se presupone igualmente, un rendimiento de 2 Toneladas/ha; y, finalmente, el MBP se basa en datos de la Cámara de Comercio de Chicago de julio de 2016.

Como podemos ver, la agroindustria mantiene ingresos consistentes basados en el Margen Bruto de Procesamiento (MBP), en lugar de correlacionarlos directamente con los precios de la soya. Los productores, es decir los agricultores capitalizados que trabajan la tierra de los pequeños propietarios, asumen la mayor parte del riesgo al endeudarse para invertir en insumos agrícolas para la puesta de la tierra en producción, y están sujetos a la volatilidad de los precios y rendimientos y los desastres naturales. Los pequeños propietarios podrían beneficiarse de alguna manera (especialmente durante los años de auge, entre 2008 y 2014) o no recibir nada (como en 2016) y así evitar endeudarse. Durante los años de auge, los productores retuvieron ganancias significativas de aproximadamente USD 160/ha al trabajar la tierra de los pequeños propietarios bajo la figura o contrato de “partida”. Cuando trabajan en su propia tierra con acceso a todos los medios de producción (tractor, cosechadora, fumigador) y sin incurrir en costos de operación (alquiler de maquinaria), los productores retienen ganancias de USD 207/ha sobre la base de las cifras vigentes en 2016 y USD 425/ha durante los años de auge. Este es el tipo ideal de productor al que aspiran todos los pequeños agricultores y es el que atrae a más emprendedores al complejo sojero. Sin embargo, quienes retienen este tipo de ganancias representan entre el cinco y el 20 por ciento del total de productores sojeros. La mayoría de los pequeños son marginalizados y obligados a vender su fuerza de trabajo porque los ingresos derivados de la “parti-

da” son inciertos, sujetos a precios volátiles, condiciones climáticas impredecibles y rendimientos inconsistentes. Adicionalmente, la agroindustria no solo se apropia de las ganancias del procesamiento de la soya, sino que también ha transformado los componentes naturales del proceso de producción agrícola en actividades industriales que luego son reincorporados a modo de insumos agrícolas, apropiándose del valor de estos nuevos insumos agroindustriales (Goodman *et al.*, 1987).

En esa misma perspectiva, la penetración de capital a través de la cadena de valor industrial de la agricultura industrial ha logrado “crear sectores de acumulación mediante la reestructuración del proceso de producción rural” preindustrial “heredado” (Goodman *et al.*, 1987, p. 8). Como la acumulación de capital está restringida por los ciclos de la producción agrícola y procesos naturales inherentes, el capital industrial busca apropiarse de todos y cada uno de los factores de producción, incluyendo semillas, insumos orgánicos, trabajo y tierra. Esto sucedió en las tierras bajas de Bolivia con las semillas transgénicas, agroquímicos, maquinaria agrícola y mercados de tierras. En el otro extremo de la cadena de valor, los productos agrícolas son sustituidos o tienen usos flexibles como insumo industrial, lo que Goodman y otros han denominado ‘sustitucionismo’. Esto es todavía más evidente hoy debido a que los cultivos pueden utilizarse de múltiples maneras, como alimentos, piensos, combustible, material industrial y pueden (o podrían) tener usos flexibles según las condiciones del mercado (Borras *et al.*, 2016). La soya, por ejemplo, puede utilizarse como alimento para animales, alimento humano y aceites, biodiesel y como sustituto del petróleo en la industria (Oliveira y Schneider, 2014); la caña de azúcar para refinar azúcar, para producir etanol y fertilizantes, para la alimentación animal, la bioelectricidad (bagazo) y la fabricación de biopolímeros (plásticos) (McKay *et al.*, 2016b); el maíz para alimentos, forrajes y etanol (Gillon, 2016); los árboles no solo se utilizan como madera y pulpa, sino también en mercados de bioenergía, biomasa y mercados de bonos de carbono de segunda generación (Kroger, 2016). Y estos, son solo unos cuantos ejemplos entre un número creciente de muchos otros cultivos flexibles (Borras *et al.*, 2016). Mediante el avance científico y

tecnológico, la cadena de valor agroindustrial se apropia y sustituye los insumos y productos naturales de la agricultura para hacerla lo más “industrial” posible y así abrir nuevas fronteras para la mercantilización y acumulación de capital.

El ‘apropiacionismo’ y los “paquetes tecnológicos” completos con semillas, agroquímicos e instrucciones de uso, además, han llevado a incrementos tanto en los costos como en las cantidades de insumos utilizados en la producción. En 2004, por ejemplo, Bolivia importó 198 toneladas de semillas de soya a un costo promedio de USD 301/tonelada; en 2012, las importaciones de semillas ascendieron a 9.862 toneladas, lo que representa casi el cinco mil por ciento de crecimiento, con un costo promedio de USD 738/ton (INE, 2012; AEMP, 2013). Durante el mismo período, el área de cultivo de soya aumentó de 852 mil hectáreas a 1.103.390 hectáreas (29,5 por ciento). Este aumento exponencial de las importaciones de semillas, que supera ampliamente la expansión de la superficie cultivada, se debe principalmente a la afluencia de semillas transgénicas después de la legalización de 2005. El aumento revela la dependencia de semillas importadas antes que de semillas producidas en Bolivia. En 2005, las semillas traídas de Argentina llegaron a dominar el mercado, representando el 99,9 por ciento de las importaciones entre 2005 y 2014 (INIAF, 2005-2014). Aunque esto ha llevado a una proliferación de distribuidores de semillas y agroquímicos, solo cuatro empresas controlan el 86 por ciento del mercado boliviano de distribución de semillas transgénicas (INIAF, 2015).

Dado que las semillas de soya transgénica están diseñadas para tolerar el herbicida glifosato, no es de sorprenderse que exista una correlación directa entre el aumento en el uso de estas semillas y los herbicidas, no solo en Bolivia sino en toda América Latina (Catacora-Vargas *et al.*, 2012). El mayor uso de glifosato, combinado con la adopción de un sistema de siembra sin labranza, ha derivado en la aparición de malezas resistentes al glifosato en la producción de soya transgénica, lo que conduce a una mayor aplicación de herbicidas complementarios (Catacora-Vargas *et al.*, 2012, p. 32). Casi todos los agricultores entrevistados en Cuatro Cañadas y San Julián reco-

nocieron la presencia de nuevas plagas y malezas desde la introducción de las semillas transgénicas (Notas de campo 2014-2015).

En San Julián, Marcos Churquina Cabezas, presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Oriente (APPAO), que llegó a la región en 1982 desde Potosí, tiene una evaluación similar sobre las semillas transgénicas y el uso de agroquímicos: “En la década de 1980 trabajábamos con nuestras propias manos, sin agroquímicos, sin maquinaria pesada. Ahora, hay más plagas y malas hierbas y no se puede cosechar nada sin agroquímicos, todo ha cambiado” (M. Churquina, Comunicación personal, noviembre de 2014). Churquina explica que muchos agricultores han optado por la transición a la producción de soya transgénica debido a la contaminación causada por los aviones fumigadores que afectaron a las tierras vecinas, destruyendo aquellos cultivos no resistentes al glifosato y a otros agroquímicos.

Uno de los miembros de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO), J. Pérez, también compartió sus ideas sobre las semillas transgénicas y los insumos agroquímicos por parte de los pequeños agricultores. Estas son sus palabras:

Muchos agricultores de hoy en día ni siquiera podrían nombrar los agroquímicos que usaron el año pasado, o qué plagas y malezas están afectando sus cultivos. La separación de su relación con la tierra los ha vuelto más individualistas y centrados en el rendimiento. Por supuesto, muchos no conocen la ciencia detrás de las semillas transgénicas y no son conscientes de que los agroquímicos permanecen en los suelos durante muchos años después de su uso. Están atrapados en el círculo vicioso de la dependencia de la tecnología, el aumento de los costos y más plagas y malezas. Pero es casi imposible para ellos escapar de esta trampa tecnológica ya que están pensando en el día a día o de cosecha en cosecha. Las preguntas sobre la sostenibilidad y nuevas tierras para las generaciones futuras son secundarias y se abordarán en el futuro.

J. Pérez  
(Comunicación personal, enero de 2015).

J. Pérez, alto funcionario de la alcaldía de San Julián en 2015 y también consultor privado en desarrollo rural, es una de las figuras políticas más importantes que representa los intereses de los pequeños productores de Santa Cruz. Es todavía un importante asesor y afiliado de las asociaciones de pequeños productores más grandes de la región (APPAO y la Asociación Comunitaria Integral de Productores Agropecuarios de Cuatro Cañadas, ACIPAC) con un profundo conocimiento de la política y los cambios socioeconómicos que tienen lugar en el complejo sojero.

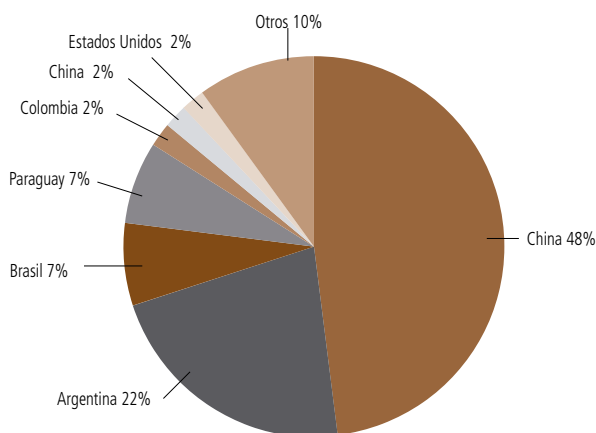
Otro informante clave, que trabaja como ingeniero agrónomo para la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) en San Julián, también explica que las plagas y enfermedades de las plantas aumentan cada año, lo que requiere más y más agroquímicos. Este agrónomo trabaja con más de mil productores en la región, realizando visitas diarias a varias familias cada día. En sus diez años trabajando para ANAPO ha visto de primera mano los cambios que están teniendo lugar y la aparición repentina de plagas y malezas que antes no existían en la región. Cuando se le preguntó sobre el futuro de los pequeños agricultores, y dada la trayectoria actual del proceso productivo sojero, la visión de este informante fue lamentablemente sombría. “Los pequeños agricultores con menos de 50 hectáreas, sin tierra o con poca maquinaria, no sobrevivirán en esta región; eventualmente serán comprados, endeudados y obligados a vender sus tierras. Es difícil decir esto, pero he visto el desarrollo de este proceso en los últimos siete años” (Comunicación personal, enero de 2015). Se pueden mencionar más historias similares y testimonios, tan reveladoras como los datos sobre las importaciones de agroquímicos del siguiente gráfico (Gráfico 7).

Según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), entre 2010 y 2014 la cantidad de agroquímicos registrados en Bolivia aumentó de 12,6 millones de Kg/l a 38,3 millones de Kg/l en 2014: un aumento del 204 por ciento, mientras que el área cultivada aumentó tan solo en 28 por ciento (SENASAG, 2014; ANAPO, 2013). Con base en datos tanto cuantitativos como cualitativos, es claro que desde la introducción de las



semillas transgénicas el consumo de agroquímicos ha aumentado a tasas mucho más altas que las áreas de cultivo. Además, el Gráfico 7 muestra el origen de estos agroquímicos durante el mismo período de tiempo. Especialmente China, pero además Argentina, Brasil y Paraguay, representan el 84 por ciento de las fuentes de origen de los agroquímicos de Bolivia.

**Gráfico 7**  
**Origen de los agroquímicos en Bolivia**  
**2009-2014**



Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASAG (2014).

Las seis compañías que tienen el monopolio sobre el procesamiento, silos y exportaciones de soya, y que controlan el 95 por ciento de la cuota de mercado, también se encuentran entre las 50 empresas más grandes que generan ingresos en Bolivia. Sin embargo, su contribución a los ingresos fiscales es mucho más baja que su clasificación relativa de ingresos, como se ve en el Cuadro 7. El sector agrícola en su conjunto solo contribuyó con el 0,9 por ciento de los ingresos fiscales en 2013, lo que significa que ni siquiera el Estado se apropia de una proporción del valor que se genera dentro de la cadena de valor agroindustrial.

**Cuadro 7**  
**Agroindustria: cuota de mercado,**  
**ranking de ingresos y contribución tributaria**

<i>Empresa</i>	<i>Origen del Capital</i>	<i>Principales mercados de exportación</i>	<i>Cuota de mercado (en %)</i>	<i>Ranking de ingresos 2013</i>	<i>Clasificación y contribución al total de los ingresos tributarios</i>
<i>Gravetal Bolivia S.A.</i>	<i>Venezuela</i>	<i>Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador</i>	31%	16°	77° (0.1%)
<i>Industrias de Aceite S.A. (FINO)</i>	<i>Perú</i>	<i>Colombia, Perú, Chile</i>	22%	9°	38° (0.2%)
<i>ADM SAO S.A.</i>	<i>Estados Unidos</i>	<i>Colombia, Perú, Chile, Ecuador</i>	13%	11°	41° (0.2%)
<i>Cargill Bolivia S.A.</i>	<i>Estados Unidos</i>	<i>Colombia, Perú, Chile, Ecuador, España</i>	11%	48°	<i>Sin clasificar (s. cl.)</i>
<i>Industrias Oleaginosas S.A. (RICO)</i>	<i>Bolivia</i>	<i>Colombia, Perú, Chile</i>	9%	28°	<i>(s. cl.)</i>
<i>Granos S.R.L.</i>	<i>Bolivia</i>	<i>Perú</i>	9%	34°	<i>(s. cl.)</i>

Fuente: Impuestos Nacionales (2014), Nueva Economía (2015).

Solo dos de las seis empresas que figuran en el Cuadro 7 son propiedad y están operadas por capitales bolivianos (Granos, nueve por ciento, y Rico, nueve por ciento), y solo dos empresas (Rico y FINO) producen productos de consumo con valor agregado. FINO, por ejemplo, aprovecha los usos múltiples y flexibles que tiene la soya produciendo aceites de cocina (“Fino”), mantequilla de margarina (“Regia” y “Primor”), manteca (“Karina” y “Gordito”), jabones y detergentes (“Uno”, “Azo”, “Oso”). La mayoría (87 por ciento) de la soya producida en Bolivia es para la exportación.

Si bien la harina y la harina de soya se pueden vender como productos de consumo principalmente para la alimentación animal, la torta de aceite de soya generalmente se procesa (tostada o refinada) como alimento. El aceite de soya crudo también se refina y se vende como aceite vegetal, biodiesel o en una variedad de produc-

tos de consumo, desde margarina, pinturas, jabón, etcétera. Este tipo de semiprocesamiento forma parte del Margen Bruto de Procesamiento (MBP) y está completamente controlado por un mercado oligopólico que no tiene vínculos sectoriales y procesamiento con valor agregado.

Además, la maquinaria pesada como tractores, fumigadores y cosechadoras –principalmente importadas de Brasil (61 por ciento), Estados Unidos (diez por ciento) y Argentina (nueve por ciento)– ha reemplazado el trabajo manual, transformando así todo el proceso productivo con aumentos sustanciales de la productividad (INE, 2016b).

El desarrollo de la agricultura industrial a través de las relaciones de la cadena de valor abre nuevas fronteras para la circulación y acumulación del capital. Pero lo que vemos en Bolivia es importación de insumos agrícolas (semillas, agroquímicos, maquinaria) y exportación de materias primas agrícolas o semielaborados (soya y derivados). Con ambos extremos de esta cadena de valor controlada, en gran medida, por el capital extranjero, el complejo sojero de Bolivia esencialmente extrae el valor ecológico de las tierras fértiles, mientras que el valor agregado (utilidades generadas) se apropia en otros lugares. Debido a su carácter altamente mecanizado, la necesidad de mano de obra también se reduce, lo que resulta en procesos de ‘exclusión productiva’ (McKay y Colque, 2016). La naturaleza extractivista de este tipo de desarrollo agroindustrial, al que nos referimos aquí como “extractivismo agrario”, es paralelo a la economía extractiva de recursos naturales no renovables (minerales, gas natural) que ha caracterizado a Bolivia durante los últimos 500 años. Se pueden establecer similitudes con respecto al carácter extractivo del complejo sojero y los impactos sociales, económicos y ambientales. Estas dinámicas extractivas serán tratadas en el siguiente capítulo.

### **Acaparamiento del control y el ‘arreglo espacio-temporal’**

Volviendo a la definición de acaparamiento de tierras propuesta por Borrás y otros autores (2012), sus tres características clave, entrelazadas, incluyen el poder de controlar la tierra y sus recursos pro-

ductivos, a gran escala, en términos de capital o área involucrada y como respuesta a las crisis actuales y al surgimiento de nuevos centros de acumulación del capital global. Urioste (2012), entre otros, ha demostrado que grandes extensiones de tierra han pasado a ser, predominantemente, propiedad de agro-capitalistas brasileños a lo largo de los últimos 25 años. Aquí, el intento es demostrar cómo se ha desarrollado una nueva fase de acaparamiento del control mediante la cadena de valor agrícola. Las particulares relaciones sociales de producción que esto implica han permitido que el capital agroindustrial controle la tierra y sus recursos productivos sin tener necesariamente derechos de tenencia sobre la tierra porque los mecanismos de acceso (intensivos en capital) facilitaron la apropiación y mercantilización de los medios de producción y las relaciones de deuda y dependencia que emergen a lo largo de la cadena de valor.

En esencia, la cadena de valor agrícola ha creado un 'arreglo espacio-temporal' mediante el cual el capital excedente puede circular y acumularse, apropiándose de la plusvalía, y luego exportándose en forma de materia prima para un mayor procesamiento de valor agregado en otros lugares. Harvey (2003, p. 115) explica que el 'arreglo espacio-temporal' como "un tipo particular de solución a las crisis capitalistas mediante su aplazamiento temporal y expansión geográfica". El arreglo 'espacio-temporal' requiere:

La producción del espacio, la organización de nuevas divisiones territoriales del trabajo, la apertura de complejos de recursos nuevos y más baratos, de nuevas regiones como espacios dinámicos de acumulación de capital, y la penetración de las relaciones sociales capitalistas y arreglos institucionales en formaciones sociales preexistentes [que] proporcionan formas importantes de absorción de los excedentes de capital y trabajo (Harvey, 2003, p.116).

Dado que la producción de soya agroindustrial comenzó mucho antes en los países vecinos de Argentina y Brasil, ambos centros del (agro) capital global en crecimiento, Bolivia ofrecía un espacio estratégico y conveniente para la absorción de los excedentes de capital. En la década de 1990, por ejemplo, cuando muchos brasi-

leños compraban tierras en Bolivia, el mercado de tierras brasileño ya estaba saturado, era costoso y se estaban desarrollando nuevas tecnologías para la expansión en la región del Cerrado brasileño (Marques, 2010; Urioste, 2012; Notas de campo 2014-2015). Esta fase de inversiones fue impulsada por la apertura del mercado de tierras de Bolivia, constituyéndose en un espacio nuevo y más barato para la absorción de capital. Los agricultores brasileños medianos y grandes, como B. Pereira y F. Sousa, mencionados en el Capítulo 2, estaban entre quienes buscaban sitios nuevos para su expansión porque los mercados de tierras en el sur de Brasil ya estaban inflados y saturados. Mientras que los programas de colonización de la década de 1960 y 1970 se diseñaron como una “solución” para absorber la mano de obra excedentaria, incluyendo colonizaciones espontáneas de mineros relocalizados por las políticas neoliberales y la crisis del precio del estaño, la apertura de las tierras bajas de Santa Cruz absorbió excedentes de agro-capital provenientes particularmente de Brasil y Argentina.

Cuando los mercados de tierras cruceños alcanzaron un punto cercano a la saturación e incertidumbre, el capital penetró una vez más a través de las tecnologías de la cadena de valor, el ‘apropiacionismo’ y las relaciones de deuda. El capital ha logrado penetrar la agricultura campesina transformando a los campesinos en productores capitalistas a pequeña escala, semiproletarios, rentistas pequeño-burgueses y trabajadores sin tierra. Esto está cambiando drásticamente las relaciones sociales de producción, el poder y la propiedad en Santa Cruz. Como afirma Harvey (2003, p. 116), tales expansiones geográficas, reorganizaciones y reconstrucciones, a menudo generan amenazas y peligros, sin embargo, “los valores ya están fijados en su lugar (incrustados en la tierra) aunque aún sin realización”. En lugar de producir para el consumo doméstico y local, ahora los productores compran insumos agrícolas externos, cada vez más costosos, controlados y producidos por el capital extranjero, y una vez que agregan trabajo y valor ecológico, venden la soya al mercado oligopólico controlado por el capital extranjero. Como un ‘arreglo’ espacio-temporal para el agro-capital industrial, la cadena de valor agrícola incorpora a los pequeños propietarios como “complejos de

recursos” para absorber y crear capital (McMichael, 2013, p. 674). Como Bolivia no tiene la capacidad de absorber las utilidades generadas, es utilizado como un espacio de absorción temporal de capital y agregador (principalmente) de valor ecológico, mientras que China –importador de casi dos tercios del comercio mundial de soya– absorbe (indirectamente) el valor creado a escala global. Este es el aspecto temporal del ‘arreglo espacio-temporal’. Muy poco de los componentes de valor agregado del complejo sojero son absorbidos en Bolivia. El capital penetra temporalmente en el campo, circula por los suelos y es exportado en su forma mercantil como soya a los mercados externos, donde se procesa y alimenta el complejo mundial de granos-piensos-carnes. Desde una perspectiva amplia sobre la apropiación del valor, podemos observar que, en gran medida, China se beneficia desde los dos extremos del proceso productivo. En primer lugar, como productor de agroquímicos –un producto procesado y con valor agregado exportado a todo el mundo– y, segundo, como el mayor importador y procesador de soya del mundo, principalmente para alimentar el creciente complejo de granos-piensos-carnes. Para apropiarse a nivel nacional de la mayor parte del valor agregado, China adoptó en 1988 una estrategia de importación regida por una estructura impositiva diferenciada que fomenta importaciones de soya en grano, cuyo arancel de importación es de tres por ciento, por encima de la harina de soya (cinco por ciento) y aceite (nueve por ciento) (Lee *et al.*, 2016). Esta estrategia permite que el procesamiento tenga lugar dentro de China, lo que facilita la generación de valor agregado industrial. Además, desde la estrategia china de “salir fuera” (*zou chuqu*), su influencia política y económica en Bolivia así como en toda América Latina, ha aumentado sustancialmente a medida que los países se alejan del “Consenso de Washington” para acercarse a un “Consenso de Beijing” aparentemente menos estricto. Sin embargo, sigue siendo dudoso que estas relaciones “Sur-Sur” lleven a cambios estructurales significativos en términos de alterar la dependencia de América Latina de las exportaciones de materias primas (McKay *et al.*, 2016a).

Como se ha señalado previamente, el valor agregado al inicio y final del complejo sojero es absorbido fuera del país productor, lo

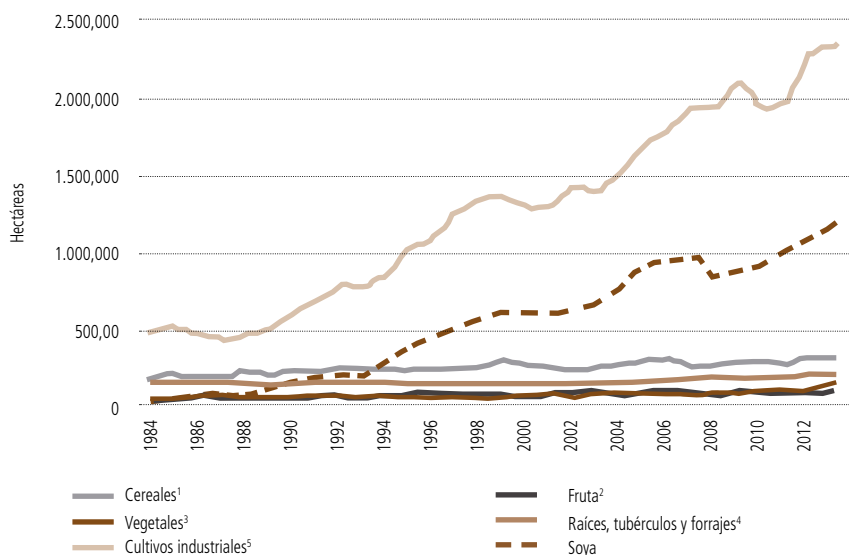
que hace que el complejo sojero de Bolivia sea un consumidor (importador) de productos manufacturados y un productor (exportador) de materias primas agrícolas. Sin embargo, la producción de soya continúa siendo promovida como un factor clave de la Revolución Productiva y como un componente clave del Plan de Desarrollo Económico y Social 2010-2016 (PDES) que busca superar el modelo de exportaciones de materias primas hacia una economía productiva basada en la industrialización de los recursos naturales (PDES, 2015). El sector sojero es parte del “pilar productivo” del Plan Nacional de Desarrollo para generar crecimiento económico, valor agregado, empleo y desarrollo rural (PDES, 2015). El Estado continúa confiando en ANAPO y en el IBCE para tener acceso a la información sobre el complejo sojero, lo que resulta un claro sesgo pro-agroindustrial que distorsiona la realidad. El IBCE (2014), por ejemplo, afirma que el sector genera más de 100 mil empleos, pero tal como se argumentó en el Capítulo 3, esto no refleja completamente la realidad. Además, el experto y economista agrícola de ANAPO e IBCE, Hernán Zeballos Hurtado, afirma que debido a la adopción de semillas transgénicas los costos de producción disminuyeron, que se requiere menos agroquímicos, que los pequeños agricultores adoptaron nuevas tecnologías y que la mayoría de productores sojeros (77 por ciento) son pequeños agricultores (ANAPO, 2014). Si bien este libro refuta muchas de estas afirmaciones, Zeballos Hurtado es percibido como un experto en el tema, y su análisis de datos secundarios y conclusiones son todavía muy influyentes para las políticas públicas. Tanto la industria como el gobierno promueven la producción de soya como una forma para el logro de la soberanía alimentaria (PESD, 2015; ANAPO, 2014), aunque está claro que esto es tan solo un discurso de legitimización (McKay *et al.*, 2014).

Como parte del objetivo de garantizar la “soberanía alimentaria”, en 2007 se restringieron las exportaciones de soya (Decreto 29272) con la idea de garantizar el suministro interno de alimentos antes que priorizar los mercados de exportación, además de crear productos con valor agregado a nivel nacional. Si bien esta política pudo haber tenido las mejores intenciones, solo sirvió para favorecer y aumentar el control oligopólico de los mercados de procesamiento y expor-

tación, y, al mismo tiempo, restringió el acceso directo a los mercados de exportación a las cooperativas y asociaciones de pequeños productores. Además, la economía boliviana apenas consume productos de soya –sobre todo aceite de cocina– y el cultivo comercial en sí mismo lleva a la deforestación masiva, excluye a las mayorías rurales y reemplaza los cultivos tradicionales de consumo interno que bien podrían haber servido como un camino hacia la soberanía alimentaria (McKay *et al.*, 2014; McKay y Colque, 2016). Tras la lenta flexibilización de las regulaciones para la exportación en grano, la política de “soberanía alimentaria”/industrialización solo sirvió para aumentar la concentración del mercado, algo muy alejado de la soberanía alimentaria; por el contrario, el desarrollo y la expansión del complejo sojero han hecho que Bolivia dependa cada vez más de las importaciones de alimentos. De 2010 a 2014, los precios de importación de alimentos casi se duplicaron de USD 357,4 millones a USD 689,1 millones, mientras que el volumen de las importaciones aumentó en el 62,1 por ciento (Quispe, 2015; IBCE, 2016). Aunque Bolivia es un exportador neto de alimentos, esto se debe principalmente a las exportaciones de soya y derivados, pero el país sigue dependiendo de las importaciones de alimentos básicos como harina de trigo, arroz, productos de origen animal, pescados, productos de molienda, almidones, azúcar y otros productos alimenticios necesarios para el consumo doméstico (GCE, p. 122; INE, 2016b). Las monedas fluctuantes de Argentina y Brasil también han socavado el tipo de cambio fijo de la moneda boliviana, permitiendo que bienes más baratos inunden el mercado boliviano a expensas de los productores nacionales. No obstante, en un estudio reciente sobre los precios de la canasta alimentaria de todo el mundo, Bolivia es el segundo país más caro, con un costo del 63 por ciento del salario promedio nacional para el consumo de alimentos (Justo, 2016). El siguiente gráfico (Gráfico 8) muestra el cambio en el uso de la tierra a través del tiempo, ejemplificando el sesgo agroindustrial que ha generado una mayor dependencia de las importaciones de alimentos para el consumo interno, provocando que productores y consumidores dependan más de los volátiles precios de los productos agrícolas y que estén sujetos al sistema alimentario mundial controlado, erosionando cualquier intento de avanzar hacia la soberanía alimentaria.



**Gráfico 8**  
**Superficie de tierra cultivada**  
**Por tipo de cultivo y en hectáreas**



1 Cereales incluyen arroz, grano de cebada y quinua.

2 Las frutas incluyen plátano, duraznos, mandarina, naranja, piña, plátano y uva

3 Las verduras incluyen ajo, arvejas, cebolla, frijoles, maíz y tomate

4 Las raíces, tubérculos y forrajes incluyen papa, yuca, alfalfa, cebada y repollo.

5 Los cultivos industriales incluyen algodón, caña de azúcar, girasol, maní, sésamo, soya, maíz, sorgo y trigo.

(\*) El maíz, el sorgo y el trigo se incluyen como cultivos industriales, ya que se cultivan en rotación con semillas de soya con relaciones y formas de producción similares.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2016).

El gobierno del MAS, en efecto, está siguiendo un modelo de desarrollo rural basado en la integración (o exclusión) de los pequeños agricultores en la cadena de valor agroindustrial, continuando con la producción de cultivos “industriales” para la exportación. El uso del término “industrial” para estos cultivos debe entenderse en el contexto del ‘apropiaciónismo’ y el ‘sustitucionismo’, en lugar de una forma de industrialización caracterizada por la articulación social y sectorial que genera empleo mediante el valor agregado, vínculos económicos o eslabonamientos con otros sectores productivos, y un mercado doméstico para la agricultura. La produc-

ción de cultivos industriales es similar a la noción de “industrias extractivas” que extraen materias primas en grandes cantidades, destinadas a la exportación y con poco procesamiento. Como señala Gudynas (2013), los gobiernos y las empresas adoptan el término “industria” o “industrial” como una estrategia de legitimación para los modelos de desarrollo extractivistas. Sin embargo, de forma similar a otras industrias extractivas como la minería y los hidrocarburos, la soya se procesa en bienes de consumo final en el extranjero, en forma de alimentos para animales, biodiesel, aceite vegetal e insumo para una variedad de otros productos de consumo. La producción de cultivos industriales en Bolivia es, por lo tanto, “industrial”, solo porque contribuye a la industrialización de otros países que se apropian de los excedentes y las rentas generadas en las tierras de Bolivia.

## Conclusión

Este capítulo ha intentado desagregar la cadena de valor agrícola de Bolivia y demostrar cómo surgió una nueva fase de acaparamiento del control por medio de la penetración del agro-capital, particularmente desde Brasil, China y Argentina. Este tipo de acaparamiento del control no implica necesariamente tener derechos sobre la tenencia de la tierra, sino tener el control sobre los recursos de la tierra por medio de una relación de valor caracterizada por la deuda y la dependencia. Esto puede conceptualizarse como un ‘arreglo espacio-temporal’, primero por la saturación del mercado de tierras en el sur de Brasil, lo que provocó la llegada de muchos agro-capitalistas brasileños a las tierras bajas de Bolivia, y, segundo, por el auge de las materias primas en los años 2000 y subsiguientes crisis (crisis de alimentos, financieros y climáticos) que desencadenaron un mayor interés de los inversores mundiales en tierras y recursos naturales. El aspecto temporal del arreglo espacio-temporal se debe a la falta de apropiación y absorción de valor dentro de Bolivia debido a que los productos importados con valor agregado (semillas transgénicas, agroquímicos, maquinarias) circulan a través del suelo boliviano controlado por un mercado oligopólico y luego se exportan en forma de materia prima semiprocesada como soya y derivados.

A su vez, la introducción de semillas transgénicas facilitó una nueva fase de penetración de capital dentro de la agricultura boliviana, ya que el ‘apropiacionismo’ y las relaciones de la cadena de valor transformaron significativamente las relaciones sociales de producción, reproducción, propiedad y poder. El “desbordamiento de capital” desde Argentina y Brasil –dos de los centros agroindustriales y económicos más avanzados de la región, de diferentes maneras– ha penetrado nuevos espacios para la acumulación de capital en Bolivia. China, el mayor fabricante del mundo, también ha ingresado a Bolivia a través de la nueva y creciente dependencia del uso de agroquímicos.

La escala que alcanzaron las relaciones de deuda y dependencia en Bolivia son muy significativas, dado que se estima que el 86 por ciento de los pequeños agricultores, que representan el 78 por ciento del total de unidades productoras de soya, no tienen acceso a la maquinaria que se necesita para la siembra y cosecha (Suárez *et al.*, 2010, p. 83). Utilizando este marco analítico, este capítulo concluye que el acaparamiento del control continúa en Bolivia –principalmente por medio de nuevos mecanismos de control de recursos y mediante relaciones que se tejen dentro de la cadena de valor agroindustrial– apropiando y concentrando el valor en manos de las empresas transnacionales. Si bien los discursos dominantes sostienen que este modelo de desarrollo rural genera empleo, contribuye a la seguridad y soberanía alimentarias, reduce los costos de producción y beneficia a los pequeños productores, en este capítulo hemos argumentado lo contrario. La actual trayectoria del cambio agrario amenaza la capacidad de los pequeños agricultores de trabajar sus tierras, incrementando la dependencia de Bolivia de las importaciones de alimentos y los volátiles mercados internacionales, y conduciendo a dinámicas sociales, económicas y ambientales de carácter extractivo. Estas cuestiones se analizan en el siguiente capítulo.



## Capítulo 5

# El extractivismo agrario y las *políticas de control*

“[El nuevo extractivismo es] el único medio técnico [que tenemos] para distribuir la riqueza material (...) y para permitirnos tener las condiciones materiales, técnicas y cognitivas para transformar su base técnica y productiva. [El proyecto extractivista de Bolivia] no es un objetivo en sí mismo, pero puede ser el punto de partida para superar el extractivismo en sí mismo”.

Álvaro García Linera, Vicepresidente de Bolivia (2012, pp. 33-34).

### Introducción

En los últimos tres capítulos hemos analizado i) el desarrollo de la estructura agraria de Bolivia en su contexto histórico, desde la Revolución de 1952 y las dictaduras, hasta la democracia y los tiempos de reformas; ii) el surgimiento de Evo Morales y el MAS, y la transición de la “Revolución Agraria” a la “Revolución Productiva”, caracterizada por procesos de exclusión productiva y ‘dualismo funcional’ en el campo; y iii) las nuevas formas de penetración y control del capital a través de las relaciones de deuda y dependencia dentro de la cadena de valor. En este capítulo, estas nuevas dinámicas de cambio agrario se analizan en un contexto más amplio, el del modelo de desarrollo neoextractivista que persigue el gobierno del MAS. Aquí se argumenta que estas dinámicas, en conjunto, representan una forma de ‘extractivismo agrario’ que está conduciendo al empobrecimiento social, económico y ambiental que afecta a la mayoría de la población boliviana.

El complejo sojero de Bolivia se ha convertido en parte de un modelo de desarrollo extractivista de Estado, que se basa en tres frentes: los minerales, los hidrocarburos y la soya. Si bien Bolivia tiene una

larga historia de extracción de minerales, el carácter altamente mecanizado e intensivo en capital del sector agrícola es relativamente nuevo. Como se discutió en los capítulos anteriores, la penetración de nuevas formas de capital en la agricultura en las tierras bajas de Bolivia está transformando el paisaje rural, alterando las relaciones sociales de producción, propiedad y poder, y amenazando el acceso (presente y futuro) a tierras y recursos naturales de las mayorías rurales, principalmente compuestas por pequeños propietarios y pueblos indígenas. Este tipo de expansión agrícola, denominado aquí 'extractivismo agrario', se caracteriza por cuatro dimensiones interrelacionadas: 1) Grandes volúmenes extraídos y destinados a la exportación con poco o ningún procesamiento; 2) Concentración de la cadena de valor y desarticulación sectorial; 3) Alta intensidad de degradación ambiental; y 4) Deterioro de las oportunidades laborales y/o condiciones laborales. Este capítulo argumenta que el 'extractivismo agrario' es un concepto útil en términos políticos y analíticos para comprender estas nuevas dinámicas y trayectorias del cambio agrario, dado que revela el carácter altamente extractivo de la agricultura capitalista, particularmente en el contexto contemporáneo de acaparamiento de tierras, "cultivos flexibles" y un sistema agroalimentario cada vez más corporativizado. El concepto 'extractivismo agrario' no se usa como sinónimo de los distintos tipos de agricultura capitalista industrial, ni se utiliza solamente para la producción de soya, sino que caracteriza las dimensiones altamente extractivas de ciertos tipos de la agricultura capitalista que se desarrolló de forma desigual en todo el mundo. Contrariamente a las formas de desarrollo agrícola industrial que pueden conducir al procesamiento con valor agregado, a su eslabonamiento con otros sectores económicos y a la generación de empleos, el 'extractivismo agrario' se usa conceptualmente para identificar el carácter extractivo de ciertos tipos de la agricultura capitalista industrial.

Como parte del nuevo modelo de desarrollo extractivista del Estado, el 'extractivismo agrario' se desarrolló junto con una alianza Estado-capital recientemente conformada como una estrategia para consolidar el poder estatal en Santa Cruz, lo que generó tensiones entre los movimientos sociales influyentes erosionando parcial-

mente las relaciones simbióticas entre el Estado y la sociedad que llevaron al poder a Evo Morales y al MAS en 2006. Situado dentro del contexto más amplio del modelo de desarrollo neoextractivista, en este trabajo se usa el concepto de ‘extractivismo agrario’ para contrarrestar el discurso dominante y los conceptos erróneos asociados con la agricultura industrial. Se entiende y se analiza este concepto a través de los lentes de las *políticas de control* y el nexo Estado-sociedad-capital, revelando los diversos mecanismos de control discutidos en capítulos anteriores y sus dimensiones de poder subyacentes.

Este capítulo está organizado de la siguiente manera: el siguiente acápite proporciona una distinción conceptual entre el convencional discurso extractivista, el nuevo o “neoextractivismo” en América Latina y el surgimiento reciente del agroextractivismo, el extractivismo agrícola o el extractivismo agrario. El tercer acápite analiza el complejo sojero con respecto a cuatro dimensiones interrelacionadas del ‘extractivismo agrario’, develando sus dinámicas en términos económicos, sociales y ambientales. El cuarto acápite analiza ese mismo concepto dentro del marco analítico sobre las *políticas de control*, exponiendo los diversos mecanismos de acceso y control. Comprender el papel del Estado y el nexo Estado-sociedad-capital contribuye a entender lo que aquí se denomina *políticas de control*. El acápite final pone en discusión la necesidad de expandir la noción de ‘nuevo extractivismo’, no solo profundizando en la dinámica extractiva de determinados sectores extractivos, particularmente el extractivismo agrario, sino también profundizando nuestra comprensión de las relaciones cambiantes Estado-sociedad-capital dentro del contexto del “nuevo extractivismo”.

## **Extractivismo, “nuevo extractivismo” y extractivismo agrario**

### *Extractivismo*

Por medio de la coerción colonial y el “consentimiento” poscolonial, y a través de acuerdos político-económicos institucionales, el extractivismo ha caracterizado ampliamente la relación entre el Norte industrializado y el Sur en vías de desarrollo marcado por la

explotación, el control y la exportación de materias primas para alimentar el desarrollo industrial del Norte. La extracción de recursos naturales ha afectado generalmente el desarrollo industrial de las economías exportadoras de materias primas a través de distorsiones económicas como la “enfermedad holandesa” y la “maldición de los recursos naturales” (paradoja de la abundancia). De hecho, el extractivismo ha sido fundamental para las teorías latinoamericanas sobre el desarrollo y el subdesarrollo, desde la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), hasta las estrategias de desarrollo orientadas a la exportación (Kay, 1989).

El término “extractivismo” no es de ninguna manera un concepto nuevo o novedoso. De forma general, el extractivismo refiere “aquellas actividades que mueven grandes cantidades de recursos naturales que no son procesados (o solo en un grado limitado), especialmente para la exportación” (Acosta, 2013, p. 62). Para ser más precisos, Gudynas clasifica el extractivismo en tres dimensiones: 1) Altos volúmenes de recursos extraídos; 2) Alta intensidad de impactos ambientales; y 3) Recursos destinados a la exportación con poco o ningún procesamiento (Gudynas, 2013). En lugar de medir el extractivismo por el volumen de las materias primas (toneladas, fanegas, metros cúbicos o barriles), Gudynas opta por métodos de contabilización que incluyen el análisis de flujos de materiales y energía tales como el denominado MIPS (*Mass Input Per Unit Service*) y el de “mochila ecológica” (*ecological rucksack*) (Schmidt-Bleek, 1999). Esta definición distingue el extractivismo de otras formas de apropiación de recursos naturales por su alta intensidad en impactos ambientales: toxificación, contaminación, degradación del suelo, deforestación, etcétera. Finalmente, el extractivismo incluye solo aquellos recursos que se exportan como materia prima o parcialmente procesados (Gudynas, 2013). El extractivismo como tal, no es sinónimo de minería o producción agrícola, sino que tiene características distintas en términos de cantidad, intensidad, procesamiento y destino. Además, la noción de Acosta del extractivismo como un “modo de acumulación” implica una “lógica estructural y profunda de producción, distribución, intercambio y acumulación” (Chase-Dunn y Hall, 2000, p. 86), por lo tanto, no es simplemente un



sistema técnico de procesamiento de la naturaleza a través del trabajo, según lo sugerido por Álvaro García Linera (2013). De manera similar, Gudynas (2015, p. 189), partiendo de la noción de ‘modos de extracción’ de Bunker (1985), introduce el concepto de ‘modos de apropiación’, una idea que describe las diferentes formas de organizar la apropiación de diferentes recursos naturales en entornos sociales y ambientales específicos. García Linera conceptualiza el extractivismo como una actividad que simplemente extrae materias primas (renovables o no renovables) y, en consecuencia, no distingue la pluriactividad a pequeña escala de poblaciones indígenas viviendo en áreas protegidas como las Reservas Extractivistas (ResEx) en Brasil (Fearnside, 1989), la minería a cielo abierto de Potosí, o la producción de soya en los monocultivos de Santa Cruz.

En la fase actual del capitalismo global dirigido por los principios económicos neoliberales de desregulación, liberalización del comercio y privatización, las corporaciones multinacionales han monopolizado las industrias extractivas en todo el mundo –sean minería, sector hidrocarburífero o extractivismo agrario– para continuar con un modo de acumulación y apropiación que se asemeja al de la época colonial. Durante los años ochenta y noventa, el extractivismo en América Latina se caracterizó por un papel limitado del Estado, por la liberalización de los flujos de capital y la flexibilidad de las regulaciones laborales, ambientales y territoriales (Gudynas, 2010a, p. 3). Sin importar si proviene del capital extranjero o nacional, la inversión en sectores extractivos rara vez ha sido efectiva para construir vínculos de integración productiva con sectores económicos complementarios. Como señala Acosta (2013, p. 67), una característica adicional y clásica de estas economías exportadoras de producción primaria es que son enclaves: el sector petrolero o el sector minero, así como muchas ramas de la agricultura de exportación, actividades forestales o pesqueras, generalmente están aislados del resto de la economía. Esto se debe, en gran medida, al hecho de que las empresas transnacionales llegaron a dominar los proyectos extractivistas aportando las muy necesarias inversiones de capital y tecnología en regiones pobres en capital pero ricos en recursos naturales, regiones, además, que tienen escaso interés en

crear vínculos entre sus distintos sectores económicos puesto que el modo extractivista de acumulación y apropiación es impulsado por los mercados externos en el Norte y las economías emergentes como China e India. El extractivismo se caracteriza por la desarticulación social y sectorial con el resto de la economía, lo que significa que la capacidad de consumo se desarrolla externamente (demanda de exportaciones) y, por tanto, no depende de un mercado interno robusto o de la demanda interna (De Janvry, 1981, p. 34).

Pero después de décadas de explotación de recursos y mano de obra, y ante el continuo empobrecimiento, los movimientos sociales y una izquierda política barrió América Latina durante los últimos quince años prometiendo reformas redistributivas y la ruptura con la lógica del Consenso neoliberal de Washington. Con un papel estatal cada vez mayor, y con diferentes posturas desafiantes contrarias a las políticas neoliberales, surgió un nuevo tipo de proyecto extractivista etiquetado como el “nuevo extractivismo”.

### *El “nuevo extractivismo”*

El nuevo extractivismo se refiere al papel creciente del Estado en los sectores extractivos mediante la nacionalización de industrias clave, asociaciones público-privadas y una mayor recaudación de regalías e impuestos para financiar programas sociales y “garantizar una distribución más equitativa de la riqueza de los recursos” (Gudynas, 2013; Veltmeyer, 2013). Particularmente en América Latina, el nuevo extractivismo ha despertado interés entre muchos académicos sobre si representa una ruptura con los proyectos extractivistas convencionales, si altera las relaciones de producción explotadoras, o mantiene una lógica productiva y explotadora similar, a tiempo de canalizar recursos hacia los pobres de manera residual y con el fin de mantener legitimidad (Bebbington, 2009; Gudynas, 2009, 2013, 2015; Bebbington y Humphreys-Bebbington, 2011; Arsel, 2012; Acosta, 2013; Veltmeyer, 2013; Seoane, Taddei y Algranati, 2013; Svampa, 2013; Veltmeyer y Petras, 2014; Arsel, Mena, Pellegrini y Radhuber, 2014). En lugar de la continua dependencia de las exportaciones de materias primas por parte de las empresas transnacionales, el creciente papel del Estado en los sectores extractivos ha sido, y continúa siendo, promovido por los go-

biernos progresistas de izquierda de América Latina como un medio para reclamar soberanía sobre los recursos naturales, redistribuir las rentas en forma de programas sociales e iniciar un proceso de industrialización con valor agregado.

Por supuesto, la “izquierda” latinoamericana no es una entidad homogénea y estas “nuevas” dinámicas extractivistas se desarrollan de forma diferente según contextos específicos. Lo mismo se puede decir de los proyectos extractivistas convencionales. Sin embargo, un consenso entre los investigadores y académicos mencionados, es que el “nuevo extractivismo” no solo da continuidad a la extracción de recursos bajo una lógica similar a su predecesor, sino que se caracteriza por una mayor expansión dentro de nuevas fronteras y sitios justificándose con discursos populares de bienestar social. Como señala Gudynas, quien acuñó el término “neoextractivismo”, estos gobiernos promueven nuevos sectores extractivos: “Este es el caso con la minería bajo la administración Correa en Ecuador, el apoyo de una nueva minería del hierro en Bolivia, el fuerte protagonismo estatal en promover el crecimiento minero en Brasil y Argentina, mientras que la izquierda uruguaya se aventura en la prospección petrolera en su costa” (Gudynas, 2010a, p. 2). Para Gudynas, el “nuevo extractivismo” se ha convertido, en gran medida, en un componente del nuevo proyecto de izquierda latinoamericano basado en una lógica de acumulación y modernización similar a los enfoques neoliberales y neoclásicos, donde el Estado termina reproduciendo los mismos procesos productivos, relaciones de poder similares y los mismos impactos sociales y ambientales (Gudynas, 2010a, p. 12).

Esta es una lectura similar a la de Bebbington y Humphreys-Bebbington (2011, pp. 141-142) quienes encuentran que las lógicas subyacentes y las consecuencias socioambientales de los proyectos extractivistas en gobiernos neoliberales como Perú y los llamados gobiernos “postneoliberales” como Bolivia y Ecuador, parecen muy similares a sus antecesores, independientemente del proyecto político o modelo ideológico. Si bien en Bolivia y Ecuador, sus constituciones han sido reescritas para otorgar a los pueblos indígenas diferentes formas de autonomía, territorio y beneficios por la extracción de recursos, Bebbington y Humphreys-Bebbington (2011, p. 140) hacen notar que Perú, Ecuador y Bolivia también comparten

una creciente intolerancia a la resistencia hacia esas políticas. Cada uno de esos países ha adosado esa intolerancia con una retórica cada vez más dura, criminalizando protestas (o al menos amenazando) y con una tendencia de sus poderes ejecutivos a emitir propuestas de reformas legislativas que reducen el ejercicio de la participación ciudadana durante los ciclos de inversión extractiva. Veltmeyer llega a conclusiones parecidas, sosteniendo que los regímenes progresistas de izquierda en la América Latina se encuentran atrapados en un laberinto de dependencia renovada de la extracción de recursos naturales (el “nuevo extractivismo”) y de exportaciones de productos primarios (“reprimarización”) (Veltmeyer, 2016). Para Veltmeyer, este tipo de “activismo estatal inclusivo” sigue dependiendo de la política macroeconómica neoliberal y adolece de contradicciones inherentes al capitalismo extractivo (trabajo y capital, naturaleza y desarrollo económico, Norte y Sur) que conducen al aumento de desigualdades, destrucción ambiental y “reprimarización” de la economía (Veltmeyer, 2016).

El extractivismo se ha convertido en un elemento particularmente central en las políticas de desarrollo en toda la región latinoamericana, tanto así, que anula las preocupaciones socioeconómicas y los cambios ambientales adversos, aparentemente disfrutando de un alto grado de primacía teleológica, o lo que Arsel y otros autores (2016) describen como el ‘imperativo extractivo’. El ‘imperativo extractivo’ va más allá de un conjunto de políticas estatales que facilitan la extracción para el desarrollo, son políticas en las la extracción se convierte en una precondition necesaria o incluso en sinónimo de desarrollo. Arsel y otros autores (2016, p. 881) basan su definición del ‘imperativo extractivo’ en tres posiciones ideológicas:

[1] La intensificación de la extracción es indispensable para avanzar hacia un proceso (implícitamente rostowiano) de transformación económica estructural, [2] de modo tal que esa transición desde las exportaciones de materias primas hacia bienes y servicios de mayor valor agregado (y supuestamente más sostenible) (biotecnología en lugar de madera, automóviles eléctricos en lugar de mineral de litio, etc.) necesita ser orquestada y, en gran medida, ejecutada, por el Estado; [3] de manera que la pobreza y la desigualdad deben abordarse de manera urgente a lo largo de esta transición, para no dejar de lado como el objetivo final del desarrollo.

De este modo, la extracción se transforma en un imperativo para el “desarrollo” (entendido como progreso por etapas según el modelo de crecimiento económico de Rostow) cuando está controlada de manera adecuada, aunque parcial, por el Estado (desarrollista) y con el objetivo de industrializar y retener excedentes con valor agregado, al tiempo que canaliza las rentas extractivas hacia el combate de la pobreza y la desigualdad. Esta es la lógica subyacente del “nuevo extractivismo” en América Latina y de la racionalidad de los gobiernos progresistas de “izquierda” de esta parte del mundo para seguir un modelo de desarrollo extractivista “por el interés de la nación”. Sin embargo, como Arsel y otros autores señalan (2016, p. 885), este imperativo supone que existe un interés singular y coherente de la nación, y que el aparato estatal es un Estado de tipo ideal weberiano que está dominado y gestionado decididamente por una maquinaria burocrática eficiente. En ambos casos, es evidente que esto sencillamente no es así. El ‘imperativo extractivo’ ha llegado a ser utilitario para los intereses de las élites políticas y económicas, a costa de implicaciones socioeconómicas y ambientales severamente adversas para las mayorías. A pesar de los discursos de industrialización, el Estado boliviano no ha logrado vínculos industriales con valor agregado, y aunque los programas de transferencia de dinero en efectivo redujeron la pobreza, la falta de cambios estructurales en las relaciones productivas hace vulnerables a las poblaciones marginalizadas frente a *shocks* como la volatilidad de los precios de las materias primas, la discontinuidad de las transferencias de efectivo y la distribución desigual de los costos socioeconómicos y ambientales generados por la expansión de las fronteras extractivas.

### *El “nuevo extractivismo” en Bolivia*

El ‘imperativo extractivo’ se ha hecho cada vez más evidente con una reforma reciente, el Decreto Supremo 2366 del 20 de mayo de 2015, decreto que permite la exploración de hidrocarburos dentro de las áreas protegidas, abriendo 22 de estas áreas, y aproximadamente 24 millones de hectáreas, a la extracción de hidrocarburos (Campanini, 2015). El Cuadro 8 muestra la frontera extractivista en expansión para la explotación de hidrocarburos, una expansión que compro-

mete a 11 de las 22 áreas protegidas. En términos de superficie, el 17 por ciento de la tierra bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) son ahora zonas extractivistas (Campanini, 2015).

**Cuadro 8**  
**Expansión de la frontera extractivista:**  
**áreas protegidas y contratos petroleros**

Nombre del área protegida	Extensión total de área protegida (en hectáreas)	Extensión bajo exploración / explotación	Empresa contratada
Iñao	263.161	90,8%	Total – Gazprom
Tariquia	247.435,12	55%	Petrobras Bolivia; BG Bolivia
Aguarague	108.348	72,5%	YPFB Chaco; Petroandina SAM; Eastern Petroleum & Gas
TIPNIS	1.225.347	35%	Petroandina SAM; Petrobras Bolivia
Pilon Lajas	398.451	85,5%	Petrobras Bolivia, Repsol
Madidi	1.871.060	75,5%	Petrobras Bolivia; Repsol; Petroandina SAM
Tunari	326.366	2,03%	Petroandina SAM
Apolobamba	471.383	1%	Petroandina SAM
Carrasco	686.979,9	6,87%	Petroandina SAM; YPFB Chaco
Manuripi	747.215	31,16%	YPFB
Amboró	598.608,3	20%	YPFB Andina

Fuente: elaborado en base a datos de YPFB y SERNAP compilados por Campanini, 2015.

El extractivismo en Bolivia es parte de un plan de desarrollo más amplio para la industrialización, según afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera durante un evento realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre su Informe de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. El Vicepresidente declaró que Bolivia continuará “usando” el extractivismo en las próximas décadas (Corz, 2016). Según García, el extractivismo en Bolivia tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la población, crear riqueza con distribución equitativa y constituir una

nueva base material no extractiva para preservar y expandir los beneficios de la población trabajadora (García, 2012).

Desde el año 2006, el Estado boliviano ha incrementado su participación en la economía nacional del 15 por ciento al 38 por ciento y controla poco más de 40 empresas en sectores estratégicos como los hidrocarburos, las telecomunicaciones, la electricidad, la minería, la aeronáutica y la industria cementera, entre otros sectores (Lazcano, 2013; Varela, 2014). Lo más notable de ese proceso de intervención estatal fue la nacionalización de hidrocarburos y varios ajustes en el sector minero, incluyendo la nacionalización de la mina de Huanuni y políticas favorables para las cooperativas mineras. En 2014, las empresas mineras estatales representaban tan solo el 8,7 por ciento del valor total de la producción, mientras que las empresas mineras privadas y las cooperativas representaban el 47,4 por ciento y el 43,9 por ciento, respectivamente (Fundación Jubileo, 2016). La nacionalización de los hidrocarburos, a su vez, restableció el gas natural como propiedad del Estado con concesiones intransferibles y permitió la recompra de acciones a empresas que anteriormente se habían apoderado de empresas estatales con la “capitalización” de la década de 1990, además de renegociar los precios de los contratos. Sin embargo, lo más significativo fue la Ley de Hidrocarburos (3058) aprobada en 2005 durante la presidencia de Carlos Mesa, una ley que aumentó los impuestos por la extracción y comercialización de hidrocarburos del 18 por ciento al 50 por ciento. En el 2014, las rentas extractivistas por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) (17,5 por ciento), regalías por hidrocarburos (9,8 por ciento) y regalías mineras (1,3 por ciento) representaban el 28,6 por ciento del total de los ingresos estatales por impuestos y regalías (Villegas, 2015). Los aumentos de impuestos y regalías coincidieron con el *boom* de las materias primas y una mayor demanda que mejoró el presupuesto estatal en 445 por ciento: de USD 5,9 mil millones en 2005 a USD 32,1 mil millones en 2015 (MEFP, 2015)<sup>1</sup>. A pesar de la mayor capacidad fiscal del Estado, se avanzó poco en la industrialización con valor agregado, de modo

1 Montos convertidos a dólares y donde 1 USD = 6.89 Bs. Los datos originales de la fuente son de Bs 40.543 millones en 2005 a Bs 221.181 millones en 2015 (MEFP, 2015).

que las exportaciones bolivianas siguen dependiendo de las materias primas. Entre 2006 y 2013, la participación de las exportaciones de productos primarios sobre el total de las exportaciones, aumentó del 89,4 por ciento al 96 por ciento (CEPAL, 2014).

El Vicepresidente conceptualiza el extractivismo “como una actividad que simplemente extrae materias primas (renovables o no renovables), sin introducir una mayor transformación por el trabajo realizado”, por lo tanto, “todas las sociedades del mundo, capitalistas o no capitalistas, también son, en mayor o menor grado, extractivistas” (García, 2012, p. 32). Para García Linera, el debate central debe girar en torno a las relaciones de producción que surgen cuando se procesa la naturaleza a través del trabajo, pero su análisis ignora el extractivismo como un modo de acumulación o apropiación, tal como argumentan Acosta (2013) y Gudynas (2015). Esos dos autores, por supuesto, reconocen el significado literal de la palabra “extracción”, pero van más allá de la semántica para analizar las relaciones y formas de extracción de recursos naturales en América Latina. García Linera, sin embargo, refuta las críticas al modelo de desarrollo extractivista de Bolivia defendiendo el extractivismo en el sentido literal de “extraer” recursos que, como un sistema técnico de procesamiento de la naturaleza a través del trabajo, nada tiene que ver con injusticias, explotación o desigualdad, y que puede estar presente en sociedades precapitalistas, capitalistas o comunitarias (García, 2012, p. 34). Pero, como fue señalado previamente, García Linera y el gobierno del MAS defienden el extractivismo como una necesidad para “distribuir la riqueza material generada a través del extractivismo (...) para tener las condiciones materiales, técnicas y cognitivas para transformar su base técnica y productiva” (*Ibíd.*). La oposición al extractivismo, desde esta perspectiva, es etiquetada como una forma de imperialismo o “imperialismo verde” según el cual “los gobiernos de las naciones ricas ahora usan las preocupaciones ambientales para promover políticas que niegan a las naciones subdesarrolladas su derecho a controlar y administrar sus propios recursos” (Fuentes, 2011). Esta fue la estrategia y el discurso respecto al infame caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isibor-Sécure (TIPNIS) en el que el gobierno defendió la construcción de una carretera que atravesaría por ese territorio,



alegando que en lugar de violar los derechos indígenas y amenazar el medio ambiente, la ruta garantizaría a las comunidades un mejor acceso a los mercados y servicios de salud, además de estimular el desarrollo (Pellegrini, 2016). El gobierno del MAS, liderado por uno de sus principales marxistas, García Linera, se ha lanzado al ataque para defender el extractivismo afirmando que “detrás de la crítica” al modelo extractivista de los gobiernos revolucionarios y progresistas yace la sombra de “la restauración conservadora” (García, 2012, p. 34). En su análisis del caso TIPNIS, García Linera afirma que cualquier oposición al proyecto de la carretera, sea intencionalmente o no, es contrarrevolucionaria y defiende los intereses de la derecha que quiere mantener lejos del desarrollo y progreso a Bolivia y otros países en desarrollo (2012, p. 1):

El trágico curso de la historia revela que la contrarrevolución puede ir de la mano de una facción de los propios constructores de la revolución que, sin defender necesariamente y como consecuencia de la exacerbación de su particularismo corporativista, regional o sectorial, y sin tener en cuenta la configuración general de las fuerzas sociales a nivel nacional e internacional, termina defendiendo los intereses de las fuerzas conservadoras de derecha y socavando su propio proceso revolucionario. Eso es precisamente lo que sucedió con la llamada Marcha por el TIPNIS.

Por lo tanto, el Estado defiende el extractivismo como una forma de nacionalismo de recursos y como un medio para recuperar su soberanía frente a las fuerzas externas que históricamente explotaron la riqueza de recursos naturales durante el “viejo extractivismo” vigente en los regímenes coloniales y neoliberales. Pero como Arsel y otros autores (2014, p. 123) argumentan:

La nacionalización no resultó en la apropiación de los derechos de propiedad y sustitución de corporaciones extranjeras por parte de entidades económicas de propiedad u operadas por el Estado, ni siquiera por individuos que sean nacionales de estos países. En su lugar, la “nacionalización” ha dejado suficiente espacio para que las corporaciones extranjeras entren en acuerdo bajo diversas formas –

concesiones, empresas conjuntas, etcétera – que reciben la bendición del Estado.

Lo que García Linera y otros defensores del el nuevo extractivismo como Federico Fuentes (2011) descuidan es un análisis más profundo de las relaciones de acceso y control sobre los recursos extraídos y procesados mediante el trabajo como un sistema técnico. De hecho, como afirma García Linera, el problema no es la forma técnica o el extractivismo *per se* si se la define en un sentido literal como extracción de recursos, pero lo que no analiza es la economía política y la política ecológica del extractivismo. Al ignorar los modos de acumulación y apropiación, García Linera utiliza un enfoque muy literal del extractivismo y no acierta en reconocer las subyacentes implicaciones socioeconómicas y ambientales del extractivismo. Por esto es importante profundizar nuestra comprensión del extractivismo para analizar sus características como un “modo de acumulación y apropiación”, no simplemente como un sistema técnico o forma de producción (Acosta, 2013; Gudyndas, 2015).

### *El extractivismo agrario*

La agricultura ya ha sido incluida como una forma de extractivismo en la literatura sobre el nuevo extractivismo o neoextractivismo. Gudyndas (2010a, p. 2), por ejemplo, utiliza el término “extractivismo agrícola” para referirse a la agricultura orientada hacia el monocultivo, a la agricultura que usa transgénicos, maquinaria y herbicidas químicos, y que tiene poco o ningún procesamiento para su exportación como mercancía. Este autor sugiere que no se trata de una “industria”, y que usar este término implicaría algún tipo de industrialización o valor agregado, no solo la producción primaria para la exportación (*Ibid.*). Gudyndas señala que la actividad agrícola que se caracteriza por un alto volumen/intensidad de extracción, semi-procesada y destinada a la exportación, se considera extractivismo, y cuando afirma esto, se refiere particularmente a las plantaciones de soya en América Latina (Gudyndas, 2010a, 2010b, 2013). Giarracca y Teubal, por su parte, sugieren que el término también se aplica a “ciertos tipos de agricultura donde los recursos esencia-

les como el agua, la tierra fértil y la biodiversidad se degradan con el extractivismo” (2014, p. 48). Petras y Veltmeyer usan el término “agroextractivismo” en el contexto de la cuestión agraria del siglo XXI, argumentando que lo que principalmente buscan gobiernos como China y otros inversores internacionales son tierras para satisfacer sus necesidades de seguridad en productos agroalimentarios y energía, mientras que las corporaciones multinacionales del sector extractivo de la economía global se preocupan, principalmente, por alimentar el lucrativo mercado de biocombustibles produciendo palma aceitera, caña de azúcar (para etanol) y soya, o lo que aquí llamamos “cultivos flexibles” (2014, p. 64). Petras y Veltmeyer afirman que “el extractivismo agrícola adopta una serie de formas, pero en el contexto actual lo que ha dominado el debate –aparte de la dinámica del acaparamiento de tierras– ha sido lo que podríamos llamar la economía política del capitalismo de biocombustibles, es decir, la conversión de tierras de cultivo y de la agricultura para alimentos en producción de biocombustibles” (2016, p. 70). Maristella Svampa, a su vez, incluye la producción de los agronegocios y biocombustibles en su comprensión sobre el nuevo extractivismo en América Latina debido a que consolidan un modelo que tiende al monocultivo, a la destrucción de la biodiversidad, la concentración de la propiedad de la tierra y a la reconfiguración destructiva de vastos territorios, todo esto impulsado por lo que llama el “Consenso de los Commodities”<sup>2</sup> (Svampa, 2013, pp. 118-119).

Por lo tanto, el ‘extractivismo agrario’ fue introducido bajo el paraguas del el nuevo extractivismo para referirse, en términos generales, a la producción intensiva de monocultivos a gran escala y para la exportación. Pero, ¿cuál es el carácter extractivo del ‘extractivismo agrario’?, ¿son extractivos todos los tipos de plantaciones de monocultivos que sean intensivos en productos químicos y a gran escala? Por supuesto que el extractivismo puede tomar muchas formas en

---

2 Para Svampa (2013) el “Consensus de los Commodities” se refiere al “ingreso a un nuevo orden económico y político, sostenido por el *boom* de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes” (p. 117).

términos de control y uso de la tierra, relaciones laborales, distribución de excedentes y relaciones sociales de consumo, reproducción y acumulación (Bernstein, 2010). Algunas plantaciones a gran escala pueden requerir una gran fuerza laboral, pueden ser de propiedad cooperativa de los trabajadores, puede que tengan que reinvertir los excedentes dentro de la economía nacional conectando otros sectores económicos, explotar sinergias y dinámicas intersectoriales y producir bienes de consumo con valor agregado para el mercado doméstico. Sin embargo, este tipo de agricultura industrial a gran escala es distinto del que está altamente mecanizado, requiere un mínimo de trabajo asalariado, está orientado a la exportación con poco o ningún procesamiento, controlado corporativamente dentro de un mercado monopolizado y altamente dependiente de insumos químicos externos. Los agronegocios o la agroindustria, como tales, pueden no ser intrínsecamente extractivos, por eso es importante especificar la naturaleza extractiva del proceso. El 'extractivismo agrario', tal como se conceptualiza aquí, se sustenta en gran parte en la literatura antes mencionada sobre el extractivismo entendido como *un modo de acumulación* (Acosta, 2013) y *apropiación* (Gudynas, 2015), así como en las tres dimensiones presentadas por Gudynas: 1) La escala (volumen de material extraído); 2) Los impactos ecológicos (intensidad de la extracción) y 3) El destino del producto (semiprocesado y para la exportación) (Gudynas, 2013). Como *modo de acumulación*, el 'extractivismo agrario' también implica particulares relaciones sociales de producción y reproducción en la fase actual de la agricultura capitalista mediante las que se extrae la plusvalía y se deterioran las oportunidades y/o condiciones laborales, oportunidades y/o condiciones que están marcadas por nuevas formas de control de la cadena de valor. Tomado las tres dimensiones de extractivismo de Gudynas, e inspirados en el trabajo de Alonso-Fradejas (2015),<sup>3</sup> el 'extractivismo agrario' se define aquí según las siguientes cuatro características interrelacionadas: 1) Grandes volúmenes de materiales extraídos y destinados a la

---

3 Alonso-Fradejas (2015) presenta una definición de trabajo respecto de un "extractivismo agrario financiero y flexible" en Guatemala. Un extractivismo caracterizado por un conocimiento y brecha metabólica, oportunidades de trabajo asalariado y malas condiciones de trabajo, y por la apropiación de la plusvalía y la renta de la tierra por capitales financieros (pp. 491-492).

exportación con poco o ningún procesamiento; 2) Concentración de la cadena de valor y desarticulación sectorial; 3) Alta intensidad en la degradación ambiental; y 4) Deterioro de las oportunidades y condiciones laborales en el sector. Varias de estas características se han estudiado en los capítulos anteriores y, por lo tanto, no volveremos a repetir las. No obstante, un argumento para el 'extractivismo agrario' es abordarlo con el fin de caracterizar el complejo sojero y otros sectores agrícolas según las cuatro referidas características interrelacionadas.

El complejo sojero cruceño, además, debe entenderse en el contexto amplio de una economía boliviana basada en el extractivismo, que junto a los minerales y el gas natural, forma parte de la ya referida estrategia estatal de tres frentes del modelo de desarrollo extractivista. Pero, si bien la extracción de minerales y gas natural contribuye significativamente a los ingresos del Estado, el complejo sojero, controlado por capitales extranjeros, no lo hace. El creciente papel del Estado en la economía boliviana desde 2006 ha coincidido con una estrategia de *laissez-faire* en el sector agrícola. La expansión sojera también detuvo la reforma agraria, o la "Revolución Agraria", que fue una parte importante de la agenda política de Evo Morales cuando llegó al poder en 2006. En los acápite que siguen se analiza el complejo sojero según las cuatro características interrelacionadas del 'extractivismo agrario' mencionadas líneas arriba.

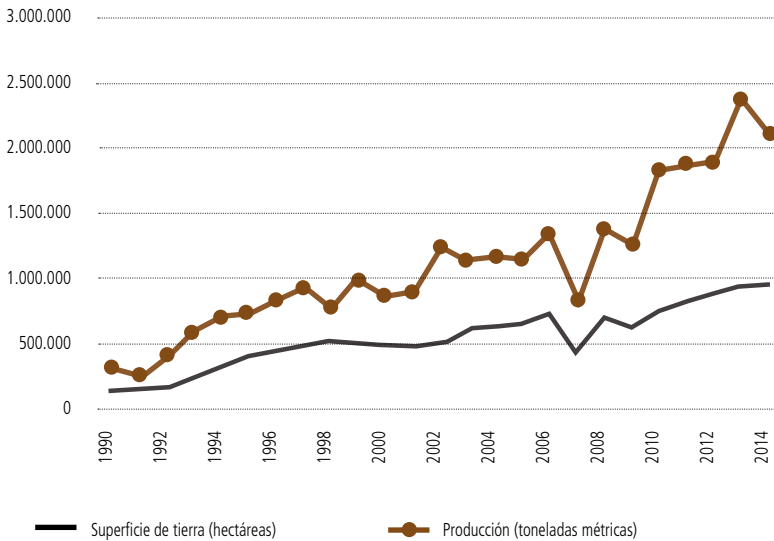
## **'Extractivismo agrario' en Bolivia**

### ***1) Grandes volúmenes de materias primas de exportación***

La primera dimensión del 'extractivismo agrario', tal como se define aquí, se refiere al volumen de materias primas extraídas y que está destinado a la exportación con poco o ningún procesamiento. Los volúmenes se consideran grandes en relación con otras exportaciones del sector agrícola e incluyen la producción acumulada de unidades de menor escala. El procesamiento solo tiene relevancia si genera vínculos intersectoriales de valor agregado y oportunidades de empleo. Como se muestra en la Gráfico 9, la superficie cultivada con soya, al igual que el volumen extraído, ha aumentado dramá-

ticamente en los últimos diez años, pasando de 836.700 Toneladas Métricas (TM) en 2007 a 2.106.600 TM en 2014, mientras que la superficie cultivada en la campaña de verano se duplicó con creces de 428 mil a 935 mil hectáreas durante el mismo período (ANAPO, 2015).<sup>4</sup> En 2013, la soya y derivados destinados a la exportación alcanzó la cifra de 2.357.866 toneladas, lo que representa el 90 por ciento de la producción total (ANAPO, 2015; IBCE, 2015).

**Gráfico 9**  
**Superficie total y producción de soya**  
**Campaña de verano**



Fuente: elaboración propia con datos de ANAPO, 2015.

En teoría, el valor agregado del proceso de producción es el componente que puede desencadenar una articulación intersectorial a medida que los sectores complementarios se involucran en el procesamiento industrial y la manufactura crea empleos mediante vínculos intersectoriales. Sin embargo, cuando la soya es semiprocesada como torta de aceite y harina para la exportación, no ocurre ningún

<sup>4</sup> Datos basados únicamente en la cosecha de verano.

tipo de articulación intersectorial y genera mínimo empleo. La torta de aceite de soya debe procesarse adicionalmente para convertirla en alimentos para animales o productos de consumo. En relación con la capacidad productiva agrícola de Bolivia, la producción de soya es significativamente alta, ocupando de lejos la mayor parte de la superficie cultivada y generando más ingresos de exportación que cualquier otro cultivo. El alto volumen de soya producida, semiprocesada y destinada a la exportación, representa la primera de las cuatro características del extractivismo agrario.

## **2) *La concentración de la cadena de valor y la desarticulación sectorial***

La segunda dimensión del 'extractivismo agrario' en Bolivia se refiere a la concentración del control de la cadena de valor y la falta de articulación sectorial. Las dinámicas de control sobre cada componente de la cadena de valor se han abordado en profundidad en el Capítulo 4. La mayoría de los componentes de la cadena de valor de la agroindustria no se producen en Bolivia, lo que significa que la plusvalía asociada a esos componentes es apropiada en otro lugar. La plusvalía se produce durante la producción de esos valores de uso, que se importan a Bolivia con el fin de aumentar la productividad laboral y, en última instancia, con el fin de extraer más valor de la producción de soya. El suelo boliviano y su fertilidad natural son fuentes del valor de uso en el proceso productivo que, con la aplicación de la fuerza de trabajo e insumos agroindustriales, genera la plusvalía encarnada en la soya, un *commodity* agrícola que se intercambia en los mercados internacionales. Los insumos agroindustriales y la mecanización disminuyeron sustancialmente el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir soya, reduciendo la necesidad de trabajadores y extrayendo, mediante la intensificación, más valor de uso de la naturaleza y, de esa manera, aumentando la plusvalía relativa apropiada por los agroindustriales y los productores capitalistas. Además, el suelo y su fertilidad natural varían según áreas geográficas, permitiendo que aquellos que controlan los suelos más favorables puedan apropiarse de la mayor

parte de los excedentes (Marx, 1981). La fertilidad natural del suelo aumenta la productividad del trabajo y permite la apropiación de los excedentes por parte del productor capitalista o por aquellos que controlan la tierra en forma de renta del suelo (renta diferencial I) (Marx, 1981). Además, los diferentes capitales (semillas, agroquímicos, maquinarias) también pueden producir más valor (al menos temporalmente, debido a la disminución de la fertilidad del suelo) en la misma cantidad de tierra y usando la misma cantidad de fuerza de trabajo. Este es el atractivo de la innovación tecnológica en la agricultura, al igual que las variedades de semillas de alto rendimiento, los agroquímicos y la mecanización avanzada. Esta es otra forma de extracción de ganancias de la naturaleza (como un valor de uso) que los productores capitalistas o terratenientes rentistas del suelo pueden apropiarse como plusvalor (renta diferencial II) (Fine y Saad Filho, 2004). En otras palabras, la renta de la tierra es la apropiación de los excedentes por los propietarios de la tierra. En el contexto del complejo sojero, la apropiación de la principal fuente de valor se produce mediante la renta del suelo, aunque se necesita algo de mano de obra para extraer el recurso y llevarlo al mercado en forma de materias primas agrícolas (mercancías).

La parte central de la producción de soya es la tierra. Tener el control de la tierra significa tener el control sobre el elemento de producción donde se realiza la soya (y la plusvalía). El suelo y el trabajador, como Marx expresó, son las fuentes originales de toda riqueza (Marx, 1976, p. 638). La tierra sirve como medio de producción al proporcionar los nutrientes para el crecimiento del cultivo, y, a la vez, encarna parte del proceso de producción dentro del propio suelo (Harvey, 2006, p. 334). Por supuesto, se requieren otros insumos, incluyendo la fuerza de trabajo, las semillas y la maquinaria, pero la tierra mantiene su protagonismo central. Sin embargo, como se vio en los Capítulos 3 y 4, la propiedad formal de la tierra cada vez tiene menos importancia para la apropiación de la plusvalía debido a los procesos de 'exclusión productiva' y control de la cadena de valor.

El complejo sojero de Bolivia se puede caracterizar por la importación de productos terminados (semillas transgénicas, agroquímicos



y maquinarias), la circulación de este agro-capital por el suelo boliviano controlado por una pequeña minoría de agro-capitalistas, la concentración del control del proceso productivo en manos de pocas empresas, y la exportación del producto semiprocesado. La extracción de la plusvalía del proceso de producción y su apropiación por parte de algunas empresas nacionales y multinacionales (concentración de la cadena de valor), al igual que la falta de vínculos intersectoriales dentro de la economía nacional (desarticulación sectorial), representan una dimensión significativa del 'extractivismo agrario' en Bolivia.

### ***3) Alta intensidad en la degradación ambiental***

La tercera dimensión del extractivismo agrario se refiere a la intensidad de la degradación ambiental en la zona soyera. Esta característica todavía no se ha abordado y, por lo tanto, se examinará con más detalle. La intensidad de la degradación ambiental refiere las prácticas agrícolas insostenibles que tienen efectos duraderos directamente sobre las comunidades cercanas a las zonas de producción, pero también más allá. La producción de soya altamente mecanizada y con semillas transgénicas se basa en un sinnúmero de prácticas agrícolas insostenibles y de uso de la tierra asociada con la disminución de la fertilidad y erosión del suelo, contaminación de las fuentes de agua, altas tasas de deforestación y pérdida de biodiversidad, hechos que contribuyen a cambios climáticos como el aumento de inundaciones y sequías (Hecht, 2005; Pengue, 2005; Müller, Larrea-Alcázar, Cuéllar y Espinoza, 2014). La producción de soya esta también relacionada con el uso intensivo de fertilizantes sintéticos y agroquímicos con que son tratados los monocultivos a gran escala, la mecanización de la producción y la expansión de la frontera agrícola para suministrar soya a mercados de exportación, principalmente para la alimentación animal y el biodiesel (Catacora-Vargas *et al.*, 2012). Este acápite se centra en la intensidad de la degradación ambiental que enfrentan las comunidades rurales en Santa Cruz, con testimonios de primera mano de los pequeños propietarios de los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián.

Desde la legalización de las semillas transgénicas, la cantidad de agroquímicos utilizados en la producción ha superado con creces a la superficie cultivada. Los productores dan fe de lo dicho y explican que, año tras año, nuevos tipos de malezas y plagas amenazan sus cultivos, por lo que requieren nuevos tipos de herbicidas y pesticidas. Las entrevistas personales con agricultores entre 2014 y 2015 revelaron que la mayoría de los pequeños agricultores con menos de 50 hectáreas cosechan cerca de dos toneladas de soya por hectárea, mientras que los medianos y grandes que poseen maquinaria, obtienen hasta tres toneladas por hectárea (Notas de campo, y Entrevistas personales 2014-2015).<sup>5</sup> La falta de maquinaria, la incapacidad de comprar paquetes de alta calidad de semillas y agroquímicos, y la calidad y ubicación de las tierras hacen que los propietarios pobres en capital se encuentren en menor capacidad de producir y competir, al tiempo que sufren la degradación ecológica de forma desproporcionada en términos económicos y sociales.

Paulino Sánchez, prominente líder comunitario de Nuevo Palmar, llegó a Cuatro Cañadas desde Potosí en 1983 y recibió 50 hectáreas de tierra del gobierno. Sánchez afirma que uno de los problemas más desafiantes para los productores de hoy es el agotamiento de la fertilidad del suelo. “El suelo está perdiendo sus nutrientes”, dice, “hay compactación por la maquinaria y la gente usa muchos productos químicos, por lo que los rendimientos están disminuyendo” (Sánchez, Entrevista personal, noviembre de 2014). “En los últimos diez años, los rendimientos han fluctuado entre 1,3 a 2,7 toneladas/ha, lo que dificulta la seguridad económica de los agricultores porque por cada hectárea una tonelada de cosecha cubre aproximadamente el costo de producción”, concluye. Sin embargo, quienes pueden permitirse las mejores semillas y tecnologías no sufren en la misma medida el costo de esta degradación ambiental, al menos no en el corto plazo. Sánchez también explica que muchas personas están preocupadas por los riesgos de invertir en la producción debido a los altos costos de producción y los frecuentes períodos de sequías

---

5 Las entrevistas se llevaron a cabo en Cuatro Cañadas y San Julián con 75 pequeños, medianos y grandes productores de soya entre 2014 y 2015.

e inundaciones. Algunas personas lo han perdido todo debido a los desastres naturales y, por lo tanto, no quieren arriesgar todos sus ahorros en un tractor o cosechadora en medio de tanta incertidumbre. Estos desastres naturales, particularmente los efectos de El Niño y La Niña, están afectando cada vez más no solo a los agricultores y sus cosechas, sino a comunidades enteras. Desde 1990 se produjo un total de 25 inundaciones que provocaron la muerte de 674 personas y afectaron a cerca de tres millones de personas (EM-DAT, 2016). Si bien la expansión de la frontera agrícola y la consecuente deforestación ciertamente no son la única causa para la mayor frecuencia y severidad de las inundaciones y sequías, los bosques y su pérdida tienen una gran influencia sobre los climas regionales y globales porque, por un lado, desempeñan un papel importante como sumideros de carbono y, por otro, también devuelven el agua a la atmósfera mediante la extracción de agua del suelo, proceso que se conoce como “servicio de transpiración” (Malhi *et al.*, 2008).

Un estudio de las Naciones Unidas (ONU) revela que, en los últimos 30 años, Bolivia ha perdido más de seis millones de hectáreas de bosque y tiene una de las mayores tasas de deforestación per cápita del mundo (320 m<sup>2</sup>/persona/año). Esta cifra es 20 veces mayor que el promedio global (16m<sup>2</sup>/persona/año) (ONU-REDD, 2010). El 75 por ciento de esta actividad de deforestación se encuentra en Santa Cruz, con una tasa de deforestación promedio de 200 mil hectáreas por año entre 2000 y 2010 (Cuéllar, Rodríguez, Arroyo, Espinoza y Larrea, 2012).

Otro estudio, el de Müller y otros autores (2013), encontró que entre 1992 y 2004, el 72,6 por ciento de los 1,88 millones de hectáreas de bosques talados en las tierras bajas de Bolivia fue provocado por la agricultura mecanizada de mediana y gran escala (53,7 por ciento) y la agricultura de pequeña escala (18,9 por ciento); el restante 27,4 por ciento le corresponde a la ganadería extensiva. Este período coincide con la expansión inicial de la frontera agrícola cuando la superficie cultivada con soya aumentó de 164.920 hectáreas en 1992 a 602.000 hectáreas en 2004 (ANAPO, 2015). A fines de la década de

1990, por ejemplo, tres comunidades menonitas abandonaron más de 100 mil hectáreas de tierra de soya debido a la erosión, compactación y agotamiento del suelo; estas comunidades vendieron sus tierras a ganaderos y se desplazaron hacia el norte para talar el bosque y habilitar nuevas de cultivo (Fearnside, 2001). Sin embargo, entre 2005 y 2010, Müller y otros autores (2014) encontraron que los principales motores de la deforestación en las tierras bajas se habían revertido: la ganadería, con el 59,7 por ciento, el principal factor, seguida por la agricultura mecanizada (24,6 por ciento) y la agricultura de pequeña escala (15,9 por ciento), que juntos representan el 41,3 por ciento de la deforestación. A medida que los precios de la tierra aumentan y las condiciones del mercado hacen que la soya sea más rentable que la ganadería, la agroindustria presiona a los ganaderos a expandirse hacia nuevas áreas, desencadenando más deforestación y abriendo nuevas áreas para la futura expansión de la soya (Fearnside, 2001; Hecht, 2005; Weis, 2013).

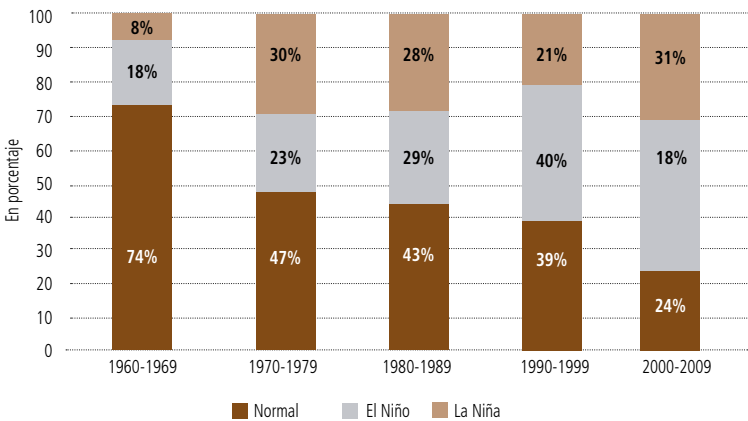
La deforestación no sólo provoca pérdida de biodiversidad, sino que también afecta a las comunidades que dependen de los recursos del bosque para su sustento, en particular los indígenas de Guarayos, Lomerío e Isoso, que se encuentran en alrededores de la frontera agrícola en expansión. Un estudio reciente de Vadillo y otros autores (2013) concluye que la expansión agroindustrial es una de las principales amenazas para el territorio indígena de Lomerío y los pueblos chiquitanos que colectivamente tienen derechos de propiedad colectiva sobre cerca de 260 mil hectáreas, de las cuales el 60 por ciento son bosques. Guarayos es otro territorio indígena amenazado por la expansión agroindustrial. Localizado al norte de la zona de expansión, muchos agricultores en Cuatro Cañadas y San Julián buscan tierras en Guarayos y sus alrededores, donde la frontera se extiende como resultado de la deforestación ilegal, ocupaciones y tráfico ilegal de tierras entre representantes indígenas y productores de soya (Notas de campo, 2014-2015). A pesar de las amenazas sobre los pueblos indígenas y la biodiversidad de la cual dependen muchos para ganarse la vida, la agenda gubernamental anunciada por el vicepresidente García Linera y representantes agroindustriales de la CAO es ampliar la frontera

agrícola en un millón de hectáreas por año hasta 2025 para “garantizar la soberanía alimentaria” (Vicepresidente, 2012; Heredia, 2014). Esto ejemplifica el intento estatal de justificar y legitimar formas de acumulación de capital a través de discursos populares pero que están al servicio de los intereses de las élites terratenientes y agroindustriales, mientras que los agricultores pobres en capital y los pueblos indígenas no solo quedan excluidos, sino amenazados por las consecuencias ambientales de la expansión.

La deforestación tiene mayores implicaciones que la sola pérdida de bosques y biodiversidad. Los bosques brindan una cobertura importante a los suelos, evitan la erosión, absorben las precipitaciones y proporcionan valiosos servicios ecosistémicos que regulan los patrones climáticos. Existe una amplia evidencia de que la deforestación amplifica los riesgos de inundación y exacerba la severidad de los ciclos climáticos de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) (Bradshaw, Sodhi, Peh y Brook, 2007; Malhi *et al.*, 2008). Las rápidas tasas de deforestación han coincidido con el aumento de las inundaciones en Bolivia, entre ellas las que pueden considerarse catastróficas en la historia reciente: 2007/2008 y 2014. En 2007, las inundaciones desplazaron a más de 100 mil familias, provocando la muerte de 50 personas y afectando 366 mil hectáreas de tierras cultivadas, mientras que en 2008 las inundaciones causaron la muerte de otras 67 personas, desplazando a 97 familias de los alrededores del Río Grande, que delimita las principales comunidades productoras de soya de El Puente, San Julián, Cuatro Cañadas y Pailón (zonas aledañas A y B en el Gráfico 10). El nivel del Río Grande, a su vez, aumentó entre 3 y 4,5 metros (BID, 2014). En 2014, 85 municipios fueron afectados, desplazando a 24.036 familias, destruyendo 713 hogares, matando a 44 personas y afectando 352 hectáreas de tierras cultivadas (BID, 2014, p. 8). En mayo de 2015, más de 100 comunidades en el municipio de San Julián perdieron gran parte de sus cosechas debido a las inundaciones. Abraham Guzmán, del Núcleo 20 de San Julián, perdió todo su cultivo (45 hectáreas) al tiempo que se inundaron aproximadamente 700 hectáreas en su comunidad. Para los pequeños productores, esto resulta en la pérdida de casi un año de ingresos y

la pérdida de la inversión en insumos agrícolas que los conduce al endeudamiento –con agronegocios como ADM, Gravetal, Mónica y FINO, y con otros agricultores– que podría llevarlos a tener que vender sus tierras. El fenómeno de El Niño-ENSO y las inundaciones continúan aumentando en intensidad y frecuencia. Como se muestra en el Gráfico 10, en la década de 1960 el departamento de Santa Cruz experimentó el 75 por ciento del tiempo condiciones “normales” sin el fenómeno climático El Niño-ENSO, pero en la década de 2000 este fenómeno se tornó mucho más frecuente. Las cada vez más graves y frecuentes inundaciones y sequías no afectan por igual a todos. En la zona de expansión sojera, especialmente en los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián, la gran mayoría de los pequeños productores ocupan terrenos en la zona inundable y en alrededores del Río Grande, mientras que las medianas y grandes propiedades ocupan las tierras más fértiles y ligeramente más altas que están al este de la Carretera 9.

**Gráfico 10**  
**Grado de ocurrencia de El Niño Oscilación del Sur (ENSO)**  
**Fenómeno climático en Santa Cruz**



Fuente: ACF-IN, 2009.

Pese a que la deforestación provocada por la expansión de la frontera agrícola ha sido identificada como una causal importante de

la creciente frecuencia e intensidad de las inundaciones y erosiones en el Plan de Uso del Suelo (PLUS) de Santa Cruz, el Gobierno Nacional aprobó nuevas leyes que perdonan la deforestación ilegal (Ley 739), aumentan los límites de deforestación (Ley 741) y amplían la verificación de la Función Económico-Social (FES) de dos a cinco años (TIERRA, 2016). En lugar de implementar regulaciones estrictas contra la deforestación y promover prácticas de reforestación y sostenibilidad, el gobierno está invirtiendo cerca de USD 17 millones en proyectos de construcción de bloques de contención para proteger a las comunidades y tierras productivas y así facilitar la continuidad de la expansión de la frontera agrícola al servicio de los intereses del complejo sojero (ANAPO, 2015). Parte de estos fondos, sin embargo, deben ser recaudados por los gobiernos municipales, con aportes de medianos y grandes agricultores quienes se muestran reacios a ayudar a la comunidad si es que sus parcelas no están directamente amenazadas.

Estas soluciones residuales no abordan las crisis ecológicas sistémicas que emergen de la producción agroindustrial a gran escala y la deforestación. Los agricultores tienen más incertidumbres que nunca, en términos de rendimientos volátiles, debido a la disminución de la fertilidad de los suelos y al uso creciente de agroquímicos, a la presencia de sequías e inundaciones debido al fenómeno de El Niño-ENSO, tormentas de polvo, pérdida de biodiversidad e incapacidad para diversificar la producción y la contaminación de las fuentes de agua debido, en parte, a la fumigación generalizada.

Además, un estudio realizado por Mekonnen y Hoekstra (2011) del *Twente Water Center* en los Países Bajos, encontró que por cada tonelada de soya cosechada se requiere una tonelada de agua. Teniendo en cuenta la pérdida de la cobertura forestal, la disminución de la fertilidad del suelo, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua, todo apunta a un grave déficit ecológico que podría derivar en una crisis ecológica, si es que persiste este modelo de producción. La gran cantidad de agroquímicos utilizados, de 12,6 millones de kilogramos en 2010 a 38,3 millones de kilogramos en 2014, está agotando los suelos y amenazando la salud y la seguridad de las

comunidades (SENASAG, 2014). Es pues evidente la extracción ecológica que tiene lugar en la región como resultado de un complejo sojero agroindustrial en expansión.

La penetración capitalista en la agricultura y la apropiación de semillas, fertilizantes, e incluso el control de plagas por parte de la industria, ha conducido al “socavamiento discontinuo pero persistente de elementos concretos del proceso de producción agrícola, su transformación en actividades industriales y su reincorporación en la agricultura como insumos” (Goodman *et al.*, 1987, p. 2). Este proceso, que estos autores llaman ‘apropiacionismo’ ha provocado una ruptura irreparable en el *metabolismo socioecológico*. La sustitución de insumos naturales por insumos industriales facilita la extracción acelerada del valor de la naturaleza, anulando las limitaciones ecológicas anteriores, mientras que los “paquetes tecnológicos” como los fertilizantes sintéticos, las semillas genéticamente modificadas, los agroquímicos y la mecanización, anulan de manera similar los conocimientos, las prácticas y el trabajo tradicional de los agricultores, convirtiéndolos, cada vez más, en agricultores totalmente dependientes de la agroindustria, en agricultores cuyos conocimientos tradiciones acaban siendo prácticamente obsoletos Esta separación y desprecio por el *metabolismo socioecológico*, descuida los procesos naturales de regeneración y la simbiosis de los procesos agroecológicos, y facilita la rápida degradación ambiental al externalizar los costos y optar por “soluciones” tecnológicas. Tal anulación biofísica es insostenible y su tendencia hacia una crisis ecológica y a moverse hacia nuevos sitios verdes, es una muestra de las aceleradas contradicciones de la agricultura capitalista industrial (Weis, 2010). Con casi el 90 por ciento de la soya y los derivados destinados a la exportación, el valor ecológico no sólo se extrae y se realiza fuera de las fronteras nacionales, sino que el modo de extracción disminuye la capacidad productiva de los recursos naturales a largo plazo, lo que lleva al empobrecimiento ecológico y a un intercambio ecológico desigual entre los países que comercian el producto (Bunker, 1984; Gudynas, 2015). Tal como Bunker subraya en su importante trabajo sobre las economías extractivas de exportación de la cuenca



amazónica y su tendencia a flujos netos desiguales de intercambio de materia y energía con economías industriales productivas o articuladas, “debemos considerar los efectos de la explotación del trabajo y de la explotación de los ecosistemas completos como fenómenos separados pero complementarios, los cuales afectan el desarrollo de regiones en específico” (1984, p. 1053). La extracción del valor ecológico de la naturaleza es una característica definitoria del ‘extractivismo agrario’ de Bolivia. Como escribió Bunker (1984, p. 1056) hace más de 30 años, “las consecuencias ecológicas y demográficas de estas perturbaciones probablemente durarán mucho más que la demanda por las materias primas agrícolas o el modo particular de extracción que está en curso”. Para Bolivia, el empobrecimiento socioeconómico y ecológico del principal modo de extracción –la minería– debería servir como un crudo recordatorio. El trágico subdesarrollo y empobrecimiento de la otrora más grande y rica ciudad de Potosí, o la desaparición más reciente del segundo lago más grande de Bolivia –el Lago Poopó–, del que dependen cientos de familias, ejemplifican las duras realidades del extractivismo.

#### *4) El deterioro de las oportunidades y las condiciones laborales*

La cuarta dimensión del ‘extractivismo agrario’ en Bolivia se refiere a la falta de oportunidades laborales y/o al deterioro de las condiciones laborales en el complejo sojero. Esta característica se refiere a los procesos de ‘exclusión productiva’, formas de exclusión en razón de género y generacionales, toxicidad y peligros para la salud, además de aludir la ‘reproducción simple opresiva’ de la población excedentaria. En este acápite no vamos a repetir lo abordado en el Capítulo 3, pero vamos a anotar las tendencias más amplias sobre la dinámica laboral asociada al ‘extractivismo agrario’.

Desde la perspectiva laboral, no existe nada intrínsecamente indeseable respecto a la producción mecanizada de soya. De hecho, la mayoría de la gente preferiría beneficiarse del aumento de la productividad laboral y de las condiciones laborales menos exigentes desde el punto de vista físico al incorporar la agricultura

mecanizada. En otras palabras, la mecanización como una forma de producción agrícola no es un problema en sí misma, sino las relaciones sociales de producción asociadas, relaciones sociales que deben entenderse dentro de un contexto socioeconómico más amplio. Cuando esta forma de producción requiere mucho menos fuerza laboral y está inserta dentro de una economía desarticulada sectorial y socialmente, puede generar una “población excedentaria” (Li, 2009). Esta dimensión del ‘extractivismo agrario’ no se limita a la menor necesidad de trabajadores asalariados en el proceso de producción, sino también al deterioro de las condiciones laborales en términos de salud, seguridad y precariedad. El corte manual de la caña de azúcar en Brasil, por ejemplo, todavía proporciona un medio de vida para unas 500 mil personas, pero las condiciones son extremadamente exigentes tanto mental como físicamente, y a menudo en condiciones similares a la esclavitud (Alves, 2006; McGrath, 2013). Los datos de la Comisión de la Pastoral de la Tierra (*Comissão Pastoral da Terra*, CPT) de Brasil revelaron que diez mil trabajadores fueron liberados de las condiciones de trabajo esclavistas en el sector cañero entre los años 2003 y 2010 (Brasil, 2011). Además, en referencia a las plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar de Guatemala, Alonso-Fradejas (2015, p. 492) afirma que “mientras el trabajo y los acuerdos laborales se organizan flexiblemente para maximizar la extracción de excedentes, las condiciones laborales están dañando la salud física y mental, e incluso de forma fatídica”. Ambas dimensiones del trabajo se consideran parte del ‘extractivismo agrario’. En el complejo sojero altamente mecanizado de Bolivia, lo que está generando poblaciones excedentarias es la falta de utilidad de la mano de obra para la acumulación de capital.

### **El ‘extractivismo agrario’ y las *políticas de control***

Las cuatro dimensiones interrelacionadas del ‘extractivismo agrario’ ponen de manifiesto el carácter altamente extractivista del complejo sojero. Al profundizar la mirada sobre estas dinámicas extractivas nos encontramos con las dimensiones del poder y los mecanismos de acceso y exclusión para entender cómo el desa-

rrollo y la expansión del complejo sojero agroindustrial están transformando las relaciones sociales agrarias y las políticas que están detrás de estos procesos. Partiendo de Lukes (2005) y otros autores, la noción de poder puede conceptualizarse según tres dimensiones: 1) El poder de hacer que alguien o un grupo haga algo que de otro modo no lo haría (por ejemplo, forzar); 2) El poder de excluir a otros (por ejemplo, regulación, relaciones de mercado); y 3) El poder de la manipulación (por ejemplo, legitimación, hegemonía cultural) (Gaventa, 1980; Lukes, 2005; Hall, Hirsch y Li, 2011). Estas dimensiones de poder son distintas pero interrelacionadas. Por ejemplo, las personas pueden ser desplazadas forzosamente de sus tierras por parte de una corporación agroindustrial políticamente conectada o una élite capitalista capaz de negociar con las autoridades estatales una concesión legal de tierras que, si los tribunales no se oponen, legitima su derecho agrario formal y es capaz de manipular las percepciones sobre la expulsión de la gente. Esta hipotética situación muestra cómo estas tres dimensiones de poder se solapan y pueden reforzarse mutuamente como “paquetes de poder”. Los mecanismos de acceso estructural y relacional de Ribot y Peluso, en ese mismo sentido, abarcan esta gama de poderes que afectan la capacidad de las personas para beneficiarse de los recursos (Ribot y Peluso, 2003, p. 154). Estos recursos incluyen tecnología, capital, mercados, oportunidades laborales, conocimiento, autoridad, identidades sociales y relaciones sociales que pueden influir sobre el acceso (*Ibid.*, pp. 164-165). La mayoría de estos mecanismos de acceso estructurales y relacionales se encuentran dentro de la primera y segunda dimensión del poder (el poder de hacer que alguien o un grupo haga algo que de otro modo no lo haría, y el poder de excluir a otros). El acceso al conocimiento, como explican Ribot y Peluso, incluye “creencias, controles ideológicos y prácticas discursivas, así como sistemas negociados de los significados”, y por ello se incorporaran dentro de la tercera dimensión del poder (el poder de la manipulación) (2003, p. 168) (Cuadro 9).

### Cuadro 9 Mecanismos de poder, exclusión y acceso

	<i>Primera dimensión del poder</i>	<i>Segunda dimensión del poder</i>	<i>Tercera dimensión del poder</i>
<i>Características</i>	<i>Fuerza, negociación</i>	<i>Fuerzas del mercado, barreras institucionales, exclusión.</i>	<i>Manipulación, legitimidad, hegemonía cultural, guerra de posición</i>
<i>Poderes de exclusión</i>	<i>Fuerza</i>	<i>Mercados, regulación</i>	<i>Legitimación</i>
<i>Mecanismos de acceso</i>	<i>Autoridad</i>	<i>Tecnología, capital, mercados, trabajo, autoridad, identidad, relaciones sociales</i>	<i>Conocimiento</i>

Fuente: elaboración propia basada en Lukes, 2005; Hall *et al.*, 2011; Ribot y Peluso, 2003.

Los mecanismos de acceso asociados con el complejo sojero de Bolivia se encuentran principalmente dentro de la segunda dimensión del poder (el poder de excluir a otros). Sin embargo, como señala Colque (2014), las élites agrocapitalistas se apropian de tierras ilegalmente a través de su posición de autoridad en la frontera, donde la autoridad estatal está ausente; las élites terratenientes, en este caso, pueden usar la fuerza para extender sus propiedades. Además, y particularmente a mediados de la década de 2000, cuando las plantaciones de soya se expandieron rápidamente, muchos pequeños productores, obligados o de forma voluntaria, sustituyeron la producción de cultivos tradicionales por los monocultivos de soya. Muchos, por supuesto, se sintieron atraídos por la idea de “modernización” de sus parcelas con producción mecanizada, variedades de semillas de alto rendimiento (Genéticamente Modificadas) y sus necesarios “paquetes tecnológicos”. Otros, como la señora Choque mencionada en el Capítulo 3, se vieron obligados a cambiar al cultivo de soya transgénica debido a la contaminación generalizada de sus tierras. No había manera de seguir con otros cultivos debido a que la fumigación aérea y a que los ríos contaminaban todos los otros cultivos con agroquímicos como el glifosato. En otras palabras, la gente puede ser “forzada” a hacer algo que de otro modo no haría, excepto despojo físico y violencia. Otro ejemplo sobre la primera dimensión del poder es el acceso a la autoridad. El personal de la Unidad de Desastres Naturales del municipio de San Julián recibe quejas frecuentes sobre la construcción de presas ilegales y

desvíos de los cursos de ríos que inundan las parcelas vecinas. La mayoría de estas quejas fueron formuladas por los pequeños propietarios en contra de las empresas de agronegocios que violan la Ley 2140, artículo 17, que prohíbe dichas acciones (Comunicación personal, octubre de 2014). Sin embargo, muchos de estos agronegocios son económica y políticamente influyentes y tienen conexiones con el nivel gubernamental regional o incluso nacional. Los actores estatales, como la mencionada Unidad de Desastres, tienen una capacidad muy limitada para actuar contra las empresas grandes e influyentes. Como dice un miembro de esa repartición, “incluso nosotros del Gobierno Municipal no podemos cambiar. Ellos (los agronegocios) son demasiado poderosos para nosotros. Intentamos que paguen multas o cumplan con la ley, pero no escuchan. ¿Qué podemos hacer? Tienen conexiones con autoridades superiores que nos anulan” (Comunicación personal, octubre de 2014). En este caso, es el acceso a la autoridad (la primera dimensión del poder) lo que les otorga a los agronegocios el poder de desviar el curso de los ríos o construir represas ilegalmente, sin las consecuencias legales que solo son aplicables para el resto de la sociedad.

La mayoría de los mecanismos de acceso y de poder de exclusión del complejo sojero caen dentro de la segunda dimensión del poder (el poder de excluir a otros). La producción de soya intensiva en capital requiere acceso a tecnologías, capital y mercados, lo que excluye a las mayorías rurales. Además, excluye y elimina por completo el acceso a las oportunidades laborales. A pesar de ello, los pequeños propietarios son alentados a integrarse y participar en las relaciones de la cadena de valor, tal como recomienda el Banco Mundial con su enfoque residual para la reducción de la pobreza. Se condena el uso de la fuerza ilegítima (primera dimensión del poder), habilita el poder del mercado para la asignación de personas, bienes y servicios de manera eficiente y efectiva (segunda dimensión del poder) y no cuestiona las lógicas subyacentes de este tipo de desarrollo (tercera dimensión del poder). Sin cuestionar la lógica del mercado, estos enfoques asumen que si encontramos una manera de incluir a las personas dentro de las relaciones de mercado existentes, esto conducirá al “desarrollo” y a la reducción de la pobreza. Pero, ¿cómo

esta lógica del “desarrollo” se convirtió en parte del discurso dominante del Estado boliviano y ganó legitimidad, en un país que inscribe en su Constitución conceptos como “Vivir Bien”, Derechos de la Madre Naturaleza y Soberanía Alimentaria?

Como se mencionó en el Capítulo 2, la expansión de la frontera agrícola de Santa Cruz comenzó con la marcha al oriente. Campesinos, mineros y trabajadores rurales recibieron parcelas de 50 hectáreas o menos, mientras que los que tenían acceso a la autoridad estatal (élites políticas y económicas) recibieron cientos de miles de hectáreas. La tierra fue apropiada por la fuerza, por las relaciones sociales y de autoridad. Durante el período de la reestructuración neoliberal en los años ochenta y noventa, el Estado buscó un nuevo tipo de legitimidad mediante el multiculturalismo neoliberal. Se otorgaron títulos de propiedad y los actores estatales intentaron aumentar su control territorial y legitimidad, aunque el “funcionamiento normal del mercado” siguió excluyendo a las mayorías rurales (Mackintosh, 1990, p. 43). El agrocaptal, predominantemente brasileño, penetró en el campo boliviano trayendo consigo prácticas de producción intensivos en capital y aportes de los *Seis Grandes* y el grupo ABCD. Cuando Evo Morales y el MAS llegaron al poder, los discursos populistas desafiaron las lógicas subyacentes del desarrollo neoliberal. Una “Revolución Agraria” prometió transformar la estructura agraria desigual, redistribuir las tierras a las poblaciones indígenas y campesinas y tomar el camino hacia la soberanía alimentaria. La legitimidad de las élites terratenientes y agro-capitalistas fue desafiada y a la vez el Estado amenazaba su riqueza y poder. Sin embargo, el discurso estatal pronto cambió de una “Revolución Agraria” a una “Revolución Productiva”. Los actores estatales adoptaron el modelo agroindustrial, dejaron de preocuparse de la estructura agraria desigual y alentaron a los pequeños propietarios a entablar relaciones dentro de la cadena de valor, tal como había recomendado el Banco Mundial. En lugar de desafiar los mecanismos de exclusión que marginan a las mayorías y las bases sociales del MAS (campesinos indígenas), los actores estatales conformaron una alianza Estado-capital en Santa Cruz para mantener su poder político y control sobre el aparato estatal, y, al mismo tiempo, per-

mitiendo a las élites terratenientes y agro-capitalistas mantener y obtener más control sobre la tierra y los recursos naturales. Como dijo el exviceministro de tierras, Alejandro Almaraz (2014, p. 54), “el proyecto indígena y campesino (...) ha sido derrotado, y se han reinstalado los intereses y el poder dominantes del sector empresarial, de los oligarcas y los latifundistas”. Las reformas legales como la ampliación de la FES, condescendientes con la deforestación indulgente y el “perdonazo” de la deforestación ilegal, el límite máximo a la gran propiedad no retroactivo, el abandono de una reforma agraria redistributiva, las penas más severas contra la ocupación campesina de tierras, la legalización de las actividades extractivas dentro de territorios indígenas, los planes de legalización de todos los cultivos transgénicos (Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, 2015), el subsidio anual de USD 700 millones que beneficia en gran medida a la agroindustria, además del compromiso de expandir la frontera agrícola, son todas evidencias de la nueva alianza Estado-agro-capital (Almaraz, 2015). Walter Chavez (2013), un exasesor de Evo Morales y ahora crítico del MAS, describe este proceso como “lucha-victoria-inclusión-expansión”. Puede entenderse que “lucha” refiere la lucha por el poder estatal antes y después de 2006, mientras que “victoria” alude el apoyo abrumador recibido por Evo Morales y el MAS en las elecciones nacionales de 2006 y en el referéndum de 2008. “Inclusión y expansión”, a su vez, refieren a la necesidad de incluir a las élites influyentes de Santa Cruz dentro de la agenda política gubernamental para expandir su alcance político y mantener el poder del Estado. Los discursos y reuniones entre los políticos del MAS y la élite de Santa Cruz han dejado cada vez más claro que se ha consolidado una nueva relación entre el Estado y el agro-capital (Viaña, 2012; Webber, 2016). Estos cambios en el nexo Estado-sociedad-capital no deben entenderse como acciones estatales y toma de decisiones autónomas de una maquinaria burocrática unificada, sino como resultados que reflejan el equilibrio de fuerzas en la sociedad y la lucha de clases. Como se explicó en el Capítulo 3, las particulares posiciones de clase de las masas, presentadas aquí como ‘dualismo funcional’, permitieron al Estado formar esta alianza sin pasar por una crisis de legitimidad.

Estas dinámicas de clase y políticas del cambio agrario han hecho que la agroindustria aumente su control sobre los recursos naturales. Los agroindustriales no sólo tienen un mercado oligopólico cuando se trata de insumos agrícolas y cultivos cosechados, sino que también controlan, en gran medida, la investigación y el desarrollo (I+D) y, por lo tanto, el acceso al conocimiento. Esto les permite establecer agendas de investigación y de desarrollo que sirven a sus intereses de acumulación y de control efectivo de los mecanismos dentro de la tercera dimensión del poder (el poder de la manipulación). El resultado es el 'extractivismo agrario'.

El 'extractivismo agrario' extrae materias primas en grandes volúmenes destinados a la exportación, controladas por un mercado oligopólico que se apropia de la plusvalía del trabajo y la naturaleza y sin crear vínculos intersectoriales y con valor agregado. Además, elimina las oportunidades laborales y contribuye a la degradación ambiental. Los mecanismos de acceso estructurales y relacionales que abarcan las señaladas tres dimensiones del poder permiten a la agroindustria apropiarse de la plusvalía y retener los beneficios de la producción sojera, sin poseer necesariamente la tierra. Los discursos estatales y los de las asociaciones de productores de oleaginosas continúan promoviendo la expansión de la frontera agrícola a nombre de la soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, empleo rural y desarrollo (García, 2012; IBCE, 2014). Las relaciones estratégicas entre los actores estatales elegidos y las clases capitalistas de Santa Cruz usan estos discursos legitimadores para mantener su control sobre el aparato estatal y el complejo sojero, respectivamente. La ausencia de resistencia, debido a una variedad de factores históricos y culturales previamente discutidos, pero también debido a las limitaciones del 'dualismo funcional', ha permitido que las clases capitalistas ganen y mantengan el control de los recursos naturales y el complejo oleaginoso, a expensas de la mayoría rural y el entorno natural. Para el MAS, no valió la pena correr los riesgos políticos y económicos que implican desafiar la riqueza y el poder de las clases capitalistas de Santa Cruz. Además, sin resistencia ni organización social, el Estado no tiene capacidad de emprender una reforma agraria a favor de los pobres o desafiar la lógica del com-



plejo agroindustrial. Hacen falta sinergias que se refuercen mutuamente desde los promotores de reformas desde abajo (Fox, 1993; Borrás, 2007).

Si bien los actores estatales ciertamente tienen cierta autonomía y capacidad mediante sus agencias individuales, el Estado, como un conjunto disputado de relaciones sociales, no ejerce el poder a su antojo, sino que funciona según el equilibrio de las fuerzas de clases en la sociedad. Con el equilibrio de fuerzas fuertemente favorable para las élites agrocapitalistas y grandes propietarios, sin fuerzas de resistencia, el gobierno del MAS tendría muy poco que ganar y mucho que perder si se llevaran a cabo las políticas transformadoras. Como anota Fox, “la acción estatal es el resultado de una relación recíproca de causa y efecto entre los cambios en el equilibrio de poder dentro del Estado y los cambios en el equilibrio de poder dentro de la sociedad” (Fox, 1993, p. 22). Esta es la razón que explica la importancia de las formas de resistencia desde abajo si se desea desmantelar y transformar el carácter extractivo del complejo sojero. Sin embargo, la legitimidad del modelo de desarrollo agroindustrial está profundamente arraigada dentro de las estructuras de poder y con los mecanismos de acceso y control –no sólo en Bolivia sino a nivel mundial– cada vez más concentrados sobre el sistema alimentario mundial. Sin poner en cuestión la lógica y las relaciones de poder subyacentes del complejo sojero agroindustrial, es probable que los procesos de exclusión, apropiación de la riqueza y degradación ambiental, sigan encaminándose hacia una trayectoria truncada del cambio agrario.

## Conclusión

El “nuevo extractivismo” no puede caracterizarse únicamente por el creciente papel del Estado en la apropiación de las rentas de los sectores clave de la economía extractiva para redistribuirse entre la población en forma de programas sociales. De hecho, el nuevo extractivismo en América Latina generalmente implica un mayor papel del Estado, pero este rol acrecentado también puede adquirir formas diferentes con el fin de aumentar no solo su control econó-

mico, sino también su control político sobre el territorio. Las decisiones de abandonar la reforma agraria redistributiva, fortalecer la propiedad privada, flexibilizar medidas de control de la deforestación y facilitar la expansión de la agroindustria y la frontera agrícola, han sido resultados de la dinámica relacional del nexo Estado-sociedad-capital. Para evitar una potencial guerra de clases y pérdida del poder estatal, la clase gobernante representada por el MAS optó por una alianza de clases del capital representadas por las élites terratenientes y agroindustriales de Santa Cruz. Esta decisión fue una respuesta a la fortaleza económica de las clases capitalistas de la “Media Luna” que, en años anteriores, amenazaron al Estado con el separatismo y un golpe violento.

Este capítulo ha intentado exponer las implicaciones socioeconómicas y ambientales del desarrollo y expansión del complejo sojero, revelando su carácter extractivo y la política que está detrás de estos procesos. Más que una forma de “agroindustrialización”, se ha argumentado aquí que el sector sojero se caracteriza mejor como ‘extractivismo agrario’. Como concepto, el ‘extractivismo agrario’ es política y analíticamente útil para comprender las nuevas dinámicas del cambio agrario provocado por este particular tipo de desarrollo agrícola capitalista. El concepto desafía directamente la noción de “agroindustrialización” al develar la falta de vínculos industriales, de generación de empleo y de beneficios para la economía nacional. El ‘extractivismo agrario’ debe entenderse dentro un contexto más amplio del modelo de desarrollo neoextractivista. El MAS, autoproclamado como “gobierno de los movimientos sociales”, mantuvo su legitimidad y control sobre el aparato estatal mediante el uso de rentas extractivistas para financiar programas sociales. Si bien el complejo sojero no genera ingresos significativos para el Estado, permite un equilibrio similar al que generan otros sectores extractivos entre acumulación de capital y legitimidad política.

El equilibrio de fuerzas no ha experimentado cambios similares en el sector minero e hidrocarburífero. La historia de movilizaciones organizadas de los mineros fijó su posición como una poderosa fuerza social. Ello obligó al Estado a otorgar concesiones a las coo-

perativas mineras y empresas mineras estatales para no arriesgarse a una crisis de legitimidad. La política del gas natural estuvo en el corazón de la “Guerra del Gas” que, entre otros factores, llevó a la elección de Evo Morales y el MAS con su discurso de nacionalización de los recursos naturales (Arsel, Mena, Pellegrini y Radhuber, 2014; Pellegrini, 2016). A diferencia de las experiencias de los sectores mineros e hidrocarbúricos, en las tierras bajas de Santa Cruz las luchas y resistencias no tomaron forma. A pesar de la estructura agraria desigual, los pequeños propietarios fueron integrados en el complejo sojero, luego fueron excluidos y, finalmente, atrapados en las relaciones de deuda y dependencia. El complejo sojero alcanzó un alto grado de legitimidad incluso entre los excluidos y marginalizados. En este escenario, el equilibrio entre la acumulación de capital y la legitimidad política se mantiene una vez más, aunque bajo diferentes circunstancias. La legitimidad política se mantiene con discursos de modernización, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y desarrollo rural –en parte esto es posible debido a las contradictorias posiciones de clase de los pequeños sojeros–, mientras que los intereses de acumulación de las clases del capital se mantienen sin interferencia del Estado.

Se están haciendo más evidentes las discrepancias y contradicciones entre la trayectoria del cambio agrario marcado por el modelo de desarrollo agroindustrial y los objetivos generales del modelo de desarrollo rural definidos por el Gobierno Nacional. Los objetivos de la “Revolución Productiva” y el Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, son desarrollar el sector agrícola como un sector estratégico generador de ingresos y empleos (Arce, 2011). Como se ha expuesto en este libro, las características extractivas del desarrollo agroindustrial están excluyendo a las mayorías rurales y amenazando el futuro de la agricultura dado el alto nivel de degradación ambiental, mientras que la plusvalía (principalmente en forma de renta del suelo) es apropiada por el mercado agroindustrial de carácter oligopólico. Sin embargo, el componente de inclusión social (transferencias monetarias) del modelo de desarrollo neoextractivista, combinado con el rentismo de los pequeños propietarios a través de los acuerdos o contratos de “partida”,

han hecho posible la persistencia de los pequeños propietarios en el complejo sojero a pesar de estar desprovistos de mecanismos de acceso y excluidos del proceso de producción. Detrás de un modelo de desarrollo rural aparentemente incluyente están las formas ocultas de exclusión que poco a poco conducen a la desaparición de los pequeños propietarios y a una mayor concentración de poder y control de recursos dentro del sector agrario. En consecuencia, la dinámica extractivista del desarrollo agroindustrial erosiona y contradice los objetivos declarados de la estrategia de desarrollo nacional del gobierno. La política gubernamental de reducción de la pobreza ha tenido bastante éxito en el corto plazo y dentro de un contexto de precios internacionales extremadamente favorables de las materias primas, pero las desigualdades estructurales persisten y las contradicciones comienzan a emerger a la luz a medida que los precios de las materias primas caen, las crisis ambientales son más frecuentes y la 'exclusión productiva' conduce a la desposesión. A medida que estas dinámicas lleguen a un punto crítico, el Estado podría enfrentar pronto una crisis de legitimidad, en la medida en que las contradictorias posiciones de clase de los pequeños propietarios comiencen a diferenciarse en capital y trabajo, lo que es probable que resulte en un nivel elevado de conciencia de clase y la formación de "clase para sí". Estas son las dinámicas de las *políticas de control* asociadas con el complejo sojero de Bolivia.

## Conclusión

A lo largo de este libro se ha demostrado cómo la forma de producción intensiva en capital del complejo de soya en Bolivia está conduciendo a nuevas formas y mecanismos de exclusión, al control de la cadena de valor, y a la apropiación y extracción de excedentes que marginalizan y subordinan todavía más a la mayoría de los pequeños productores sojeros. Los procesos de ‘exclusión productiva’ han divorciado a los pequeños propietarios –no hasta el punto de despojarlos de sus tierras– del acceso a los medios necesarios para poner en producción sus tierras. Quienes no están excluidos y siguen trabajando sus predios quedaron atrapados en relaciones de deuda y dependencia dentro de la cadena de valor. En ambos extremos de esta cadena de valor, un mercado oligopólico controla los medios de producción y el producto final (soya), apropiándose así de la mayor parte de los excedentes generados. Contrariamente a las afirmaciones que sostienen que este tipo de desarrollo agrícola es beneficioso para la economía, para la generación de empleos, la seguridad alimentaria, e incluso beneficioso para la soberanía alimentaria, este estudio ha expuesto su carácter exclusivista y extractivista, en términos sociales, económicos y ambientales, del complejo sojero. Las *políticas de control*, como marco analítico, nos han ayudado a comprender la naturaleza controvertida del Estado y las relaciones entre los actores estatales, sociales y capitalistas, revelando la emergencia de una alianza Estado-capital facilitada por relaciones de clase específicas y por contradicciones dentro de la sociedad. En este capítulo se presentan y profundizan estas y otras conclusiones, además de identificar algunas implicaciones del estudio para investigadores, legisladores y movimientos sociales.

## Nuevas dinámicas de control, exclusión y extracción

Si uno adopta la formulación original sobre “acaparamiento de tierras” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, para analizar la dinámica del cambio agrario de Bolivia, la conclusión sería que no existe tal fenómeno y que la seguridad alimentaria no está amenazada (Soto Baquero y Gómez, 2012, p. 560). Además, si uno lee los informes publicados por la ANAPO o el IBCE, o escucha los discursos de los líderes del MAS, como los del vicepresidente García Linera, podría concluir que el complejo sojero está creando decenas de miles de puestos de trabajo, que proporciona un medio de vida para miles de pequeños agricultores que hacen parte mayoritaria de los productores de soya (78 por ciento) y que contribuye a la seguridad alimentaria del país e, incluso, a la soberanía alimentaria. El Banco Mundial ciertamente aplaudiría estas iniciativas que están anotadas en las conclusiones del “Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008: Agricultura para el Desarrollo”, donde recomienda la integración de los pequeños productores dentro de las relaciones de la cadena de valor agroindustrial. Pero, como en este libro se ha demostrado, estos discursos y narrativas dominantes son engañosos y presentan argumentos disimulados para seguir promoviendo dicho modelo de desarrollo agrícola. Un enfoque de derechos de propiedad no captura los procesos de ‘exclusión productiva’ ni las formas de control de la cadena de valor que hemos abordado en el Capítulo 4. Una caracterización más matizada sobre las formas contemporáneas de acaparamiento de tierras, como el “acaparamiento del control” presentado por Borrás y otros autores (2012), y utilizando la “teoría del acceso” de Ribot y Peluso (2003), nos permite capturar estos cambios contemporáneos en las relaciones sociales de producción, la propiedad y el poder. La ausencia de ciertos mecanismos de acceso estructurales y relacionales impide a los pequeños propietarios beneficiarse de los frutos de su tierra, un hecho que no solo se debe a los “poderes de exclusión” sino también a las formas de control e incorporación adversa que obstaculizan la formación de una conciencia de clase y de formas organizadas de movilización

social. La falta de acceso al capital, tecnología y créditos, privan a los pequeños propietarios sin capital de poner en producción sus tierras, lo que los obliga a alquilarlas a otros y buscar medios alternativos de generación de ingresos. Pero los mecanismos de exclusión y control son más profundos que solo tener acceso al capital o créditos. Aquellos con capacidad de poner en producción sus tierras ingresan a relaciones de deuda y dependencia dentro de una cadena de valor controlado oligopólicamente por los agronegocios. Estos agricultores asumen todos los riesgos y sus ingresos se ven cada vez más amenazados por los volátiles e inciertos rendimientos, los desastres naturales, el aumento de los costos de producción y la presencia creciente de nuevas plagas y malezas. Si bien pueden retener más beneficios que los rentistas pequeños burgueses y semiproletarios, también corren el riesgo de caer en relaciones de deuda donde acaban siendo controlados por exigencias de ciertos estándares de producción, créditos entre la siembra y cosecha, y mercados manejados por la agroindustria. Pero más allá de los pequeños productores y agricultores con capital limitado y de los agricultores ricos en capital e integrados en la cadena de valor, este estudio ha revelado el carácter extractivo del complejo sojero y sus implicaciones socioeconómicas y ambientales para el conjunto de la sociedad.

En este trabajo se ha argumentado a favor de la necesidad de comenzar a replantearnos ciertos tipos de la llamada agricultura “industrial” para entenderlos bajo el concepto de ‘extractivismo agrario’. Es importante mostrar el carácter altamente extractivista de la producción agrícola y dejar de ser utilitarios para ese discurso legitimador que equipara este tipo de producción agrícola con la industrialización. Hemos presentado cuatro dimensiones interrelacionadas del ‘extractivismo agrario’: 1) Grandes volúmenes de materiales extraídos y destinados a la exportación con poco o ningún procesamiento; 2) Concentración de la cadena de valor y desarticulación sectorial; 3) Alta intensidad en la degradación ambiental; y 4) Deterioro de las oportunidades y/o condiciones laborales. En conjunto, estas cuatro características de la agricultura capitalista se han convertido en la norma, no en la excepción. Los hechos concretos como el control cor-

porativo sobre el sistema alimentario, el control desde los insumos agrícolas hasta las cosechas, la subsunción del trabajo en el capital y la acelerada apropiación (y extracción) del valor de la naturaleza a través del uso de agroquímicos, maquinaria pesada y deforestación para la expansión de la frontera agrícola, no deberían ser caracterizados como industrialización sino como extracción. La influencia y el poder sobre la investigación y desarrollo (I+D) por parte de los agronegocios, alimentado por discursos neomaltusianos sobre la necesidad de alimentar a una población que crece, han conferido a la agroindustria un aura de legitimidad y autoridad en el sector. El 'extractivismo agrario' nos obliga a ir más allá de las dicotomías excesivamente simplificadas de agricultura a gran escala versus agricultura a pequeña escala, transgénicos versus agroecología, o de considerar todos los tipos de agricultura como "industriales". El 'extractivismo agrario' nos obliga a profundizar nuestro análisis sobre las relaciones de producción, distribución, consumo y acumulación, y las implicaciones ambientales relacionadas. Implica interesarse en los mecanismos de acceso estructural y relacional e ir así más allá de los derechos de propiedad y el origen del capital, revelando tanto las implicaciones socioeconómicas y ambientales que tiene la penetración del capital, como las nuevas formas de producción.

Estos cambios no podrían haberse comprendido correctamente sin tener en cuenta la economía política internacional más amplia sobre la alimentación y agricultura y el desarrollo de tecnologías de la Revolución Verde. La explosión sojera en Brasil y su posterior propagación por la región tiene sus raíces en la distensión de la Guerra Fría y las nuevas relaciones comerciales entre Brasil y Japón. En el caso de Bolivia, los brasileños ingresaron al país durante los períodos autoritarios de expansión de la frontera agrícola liderados por el Estado y cuando se ejecutaron las reformas neoliberales que promueven inversiones extranjeras mediante mercados de tierras baratas; los brasileños compraron y se apropiaron de las mejores tierras bolivianas, trayendo consigo tecnologías y maquinarias e inversión de capital. Esto ocurrió desde el momento en que los mercados de tierras en Brasil se saturaron y, más tarde, cuando surgieron oportunidades rentables para la agroindustria transnacional: los



*Seis Grandes*, ABCD y compañías agroindustriales latinas de Brasil y Argentina penetraron en el mercado boliviano de tierras y en el de los agronegocios, tal como ocurrió en el resto de la “República de la Soya”. Brasil adoptó mucho antes la categoría de “nuevo país agrícola” (NPA), al autodefinirse como la potencia agroindustrial de la región, y cuando las nuevas “tierras sin explotar” se abrieron a la inversión, los agrocapitalistas aprovecharon las oportunidades, primero para acceder a tierras, y más adelante para ingresar al mercado de insumos y de los granos cosechados. Como país de origen de la producción sojera a gran escala y de las tecnologías de la Revolución Verde, la influencia de Brasil es la de una hegemonía regional y su modelo de desarrollo agrícola es percibido como avanzado, moderno y replicable. La influencia brasileña en el complejo sojero de Bolivia es, por lo tanto, algo que debe entenderse en su contexto histórico y no solamente como una ola reciente de inversiones en tierras a gran escala ni únicamente mediante relaciones gubernamentales. Los agrocapitalistas brasileños, ante todo, se convirtieron en parte de la élite agrocapitalista y terrateniente boliviana a medida que la frontera agrícola se expandía mientras ellos se apropiaban o compraban tierras gracias a su poder económico en contextos con débil presencia y autoridad estatal. De hecho, desde 1996 el proceso de titulación de tierras (saneamiento) ha seguido adelante, aunque de forma insuficiente, desordenada e incompleta (Colque *et al.*, 2016). Por ello, y en lugar de enfatizar la “extranjerización” de la tierra y la agricultura, en este estudio hemos subrayado la importancia de cómo la nueva penetración de capital, extranjera o nacional, está cambiando las relaciones sociales de producción, acumulación y política agraria.

### **Las políticas de control: poder, acceso y Estado**

Al contextualizar históricamente el desarrollo de la estructura agraria de Bolivia, este trabajo ha mostrado cómo las formas de exclusión y mecanismos de control cambiaron con el tiempo, desde el uso de la autoridad y la fuerza, los mercados y la regulación, hasta la legitimidad y el consentimiento. Las dimensiones subyacentes de los mecanismos de poder, control y acceso, se analizaron según el nexo

Estado-sociedad-capital debido a que el equilibrio de fuerzas dentro de una determinada sociedad nos ayuda a comprender los cambios políticos y socioeconómicos. Las *políticas de control*, el marco analítico guía de este estudio, ha permitido capturar las nuevas formas y mecanismos de control de recursos y de apropiación del valor (o extracción) en sectores (agro) extractivos, a partir del análisis enfocado en el acceso en lugar de propiedad o derechos concesionales. Estos mecanismos incluyen varias formas de despojo y desplazamiento, pero también mecanismos de exclusión y apropiación que no requieren necesariamente la separación física de las personas de sus tierras o la propiedad formal de los derechos agrarios. Esos mecanismos también proporcionan un marco analítico para evaluar las dobles y a menudo contradictorias funciones del Estado al facilitar la acumulación de capital y al mantener la legitimidad política y las relaciones estratégicas entre los actores estatales y sociales para, en definitiva, obtener y mantener el control sobre el aparato estatal. El uso de este marco analítico para entender el desarrollo y la expansión del complejo sojero agroindustrial, nos permite poner de manifiesto cuán problemático puede ser este modelo de desarrollo dominante para las mayorías rurales, el medio ambiente y la economía nacional. Las ganancias en productividad y crecimiento económico no “gotear” hacia los pobres de las zonas rurales, sino que conducen a la exclusión, apropiación del valor y extracción. La integración de los pequeños propietarios dentro de las relaciones de la cadena de valor, tal como se recomienda en el Informe de Desarrollo 2008 del Banco Mundial, no toma en cuenta los mecanismos de acceso de carácter estructural y relacional, la propiedad y el poder analizados en este libro. Tomando un enfoque relacional, este estudio pone en cuestión la lógica agroindustrial del desarrollo, sacando a la luz su dinámica extractiva y los impactos perjudiciales para la economía nacional, para las oportunidades de empleo y para el entorno natural.

Las dinámicas de exclusión, apropiación del valor y extracción, no son exclusivas del complejo sojero agroindustrial, sino más bien características sistemáticas del modelo de desarrollo agroindustrial. Los componentes “industriales” son controlados mediante el ‘apropiacionismo’ y el ‘sustitucionismo’, no mediante vínculos sectoriales

ni a través de la producción industrial de valor agregado (Goodman *et al.*, 1987). Además, como explica Tony Weis, el modelo agroindustrial está deteriorando los fundamentos biofísicos de la agricultura tales como la erosión de los suelos y la salinización, la extracción en exceso del agua y amenazas para su suministro a largo plazo, la pérdida de biodiversidad y los “servicios ecosistémicos” cruciales (por ejemplo, polinización, formación de suelos) y, por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (Weis, 2010, p. 316). El sesgo pro-agroindustrial de las políticas nacionales de muchos Estados-nación, particularmente en el Norte Global, y la creciente concentración del control por parte de las *Seis Grandes* compañías agroquímicas (Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y BASF) y las transnacionales de granos ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus), no solo favorecieron la formación de mercados oligopolios que fijan precios y limitan las opciones de consumo, sino que aumentaron el control corporativo sobre la I+D, conocimientos agrícolas y la autoridad de las corporaciones. Las amenazas que todo esto representa van más allá de los mercados y las regulaciones y apuntan a la legitimización de discursos por medio de la manipulación que buscan el consentimiento de la opinión pública. Es urgente y pertinente que sigamos examinando críticamente las implicaciones socioeconómicas y medioambientales del desarrollo agroindustrial en todo el mundo, con el fin de no dar por sentada la legitimidad que reclaman desde las agendas de investigación y desarrollo oligopólica y corporativamente controladas para el desarrollo agroindustrial. Como he demostrado, es crucial ir más allá de un enfoque basado en los derechos de propiedad de la tierra o centrarse exclusivamente en los orígenes del capital (es decir, la “extranjerización”) para avanzar hacia las formas y mecanismos de exclusión, control, apropiación de excedentes y extracción relacionada con la penetración del capital. Para comprender plenamente estas nuevas dinámicas del cambio agrario, no solo debemos abordar aquellos aspectos relacionados con la acumulación, sino también las nuevas formas y relaciones de producción, así como el rol y la naturaleza del Estado en las formaciones históricas. En el contexto actual de “fiebre” por los recursos naturales, las nuevas y cambiantes dinámicas del cambio agrario desencadenadas por el desarrollo capitalista justifican la

relevancia de retornar las contemporáneas cuestiones agrarias sobre el capital y el trabajo (Akram-Lodhi y Kay, 2009).

Si bien sabemos que en muchas partes del mundo el capital se está apoderando y revolucionando la agricultura a través de la mercantilización, es menos visible el hecho de que es un proceso altamente desigual y variado que toma diversas formas a lo largo de los diferentes períodos históricos. En el período contemporáneo de la cadena de valor agroindustrial y del capitalismo global, este trabajo ha expuesto algunas de esas formas y dinámicas del cambio agrario que emergieron en el contexto del complejo sojero de Bolivia. Su forma intensiva en capital es exclusiva, mientras que la concentración del control del capital industrial al inicio y final del proceso productivo agrícola no solo ha creado nuevos espacios de acumulación de capital, sino que son espacios de apropiación de la mayor parte de la plusvalía sin la necesidad de tener la propiedad formal o los títulos de propiedad sobre la tierra. Los pequeños propietarios que representan a la mayoría rural fueron incorporados adversamente a estas nuevas relaciones de la cadena de valor, atrapados en contradictorias posiciones que obstaculizan su conciencia de clase y cualquier forma organizada de resistencia. Estas nuevas maneras de penetración del capital se están formando y están siendo moldeadas por la dinámica política caracterizada en el sector agrario por el 'dualismo funcional'. Atrapado en contradictorias posiciones de clase, resulta de interés del capital que los pequeños propietarios permanezcan en sus tierras. Y si estas mayorías finalmente llegaran a ser desposeídas por medio de la 'reproducción simple opresiva' que hemos discutido en el Capítulo 3, podrían surgir poblaciones excedentarias capaces de amenazar la alianza Estado-capital, alterando el delicado equilibrio entre acumulación y legitimidad. Como marco analítico, las *políticas de control* capturan estas dinámicas de producción, acumulación y formaciones políticas en contextos específicos e históricamente contextualizados. Más allá del complejo sojero y de las específicas dinámicas del cambio agrario de Bolivia, la *política de control* se pueden utilizar en todos los sectores y áreas geográficas para analizar las dinámicas socioeconómicas y políticas. Sea caña de azúcar en Brasil, China o África del Sur, palma aceitera en Indo-

nesia, Colombia o Nigeria, o maíz en Estados Unidos o México, las *políticas de control* pueden ayudarnos a entender cómo las nuevas formas de penetración del capital están causando transformaciones agrarias con implicaciones para la sociedad, la economía y el medio ambiente. Las vías de penetración del capital en el sector agrícola y los nuevos actores involucrados —a través del ‘apropiacionismo’, el ‘sustitucionismo’, usos flexibles y mercados financieros— exigen una comprensión más profunda de cómo estos procesos están moldeando las relaciones sociales de producción, la propiedad y el poder. El caso boliviano presenta nuevas formas de incorporación encubierta y adversa que acaban por truncar las trayectorias del cambio agrario. Los pequeños propietarios están excluidos, aunque “oficialmente” siguen catalogados como pequeños agricultores del sector sojero. El carácter altamente extractivista de los nuevos tipos de agricultura bajo el nombre de cadenas de valor “agroindustrial”, hace que no exista ningún tipo de industrialización en el mercado nacional. Por el contrario, los componentes industriales se producen fuera de Bolivia y buscan nuevos espacios y sitios para circular, ingresar a procesos productivos y extraer plusvalía. Del mismo modo que la producción intensiva en capital moldea las relaciones de producción, también reconfigura las formaciones políticas en el campo. El caso boliviano demuestra la ausencia de movilizaciones organizadas de “clase para sí” debido a las formas cambiantes y las relaciones de producción del complejo sojero. Estas son las dinámicas de cambio agrario que debemos continuar abordando y divulgar en la sociedad en general. Al haber combinado el análisis del acceso, acaparamiento del control y la teoría del Estado en un marco analítico de economía política agraria inspirado en los trabajos de Byres (1996) y Bernstein (1996, 2010), este estudio espera haber contribuido a nuestra comprensión de las dinámicas contemporáneas del cambio agrario que tienen lugar mediante el avance de las *políticas de control* y otros procesos como la ‘exclusión productiva’, el control de la cadena de valor, el ‘extractivismo agrario’ y el nexo Estado-sociedad-capital que, cuando se aplica a otros sectores económicos y contextos, puede iluminar tendencias más generalizables sobre la contemporánea penetración del capital agroindustrial en el campo.

## Trayectorias del cambio agrario: lecciones e implicaciones

Se pueden extraer varias implicaciones generales de este estudio para una mayor investigación científica, para los responsables de políticas públicas y para los movimientos sociales que están llamados a jugar un papel importante. Para los investigadores, varias corrientes y tendencias del cambio agrario apuntan a temáticas importantes aunque poco estudiadas. Primero, las megafusiones de compañías agroindustriales, farmacéuticas, químicas y petroleras, como la fusión Monsanto-Bayer, o Shell-Cosan para producir caña de azúcar bajo la lógica de “cultivos flexibles” (McKay *et al.*, 2016b), y la ‘financiarización’ de alimentos y la agricultura caracterizada por los derivados de productos agrícolas, fondos de tierras agrícolas, manejo de riesgos agrícolas, etcétera (Ghosh, 2010; Murphy, Burch y Clapp, 2012; Fairbairn, 2014; Isakson, 2014), requiere investigaciones que trasciendan más allá del sector agrícola para entender de forma amplia los vínculos y relaciones sectoriales. Esto implica examinar las relaciones entre los sectores industriales y agrícolas. En segundo lugar, las formas cada vez más creativas en que el capital ha penetrado en el campo requieren de análisis que se centren en el acceso y el control, en lugar de los derechos de propiedad y derechos concesionales. De forma complementaria, se necesita ahondar en el análisis más allá de lo rural para abordar cómo y por qué la gente se mueve entre lo urbano y lo rural o por qué tiene estrategias de sustento diversificadas como agricultores, rentistas, comerciantes o trabajadores asalariados rurales y urbanos. El ‘dualismo funcional’ y las contradictorias posiciones de clase que caracterizan a los semiproletarios y pequeños rentistas de la tierra tienen implicaciones significativas para políticas de resistencia y trayectorias del cambio agrario. En tercer lugar, saber si los sectores extractivos están siendo integrados a nivel corporativo, y si las formas de resistencia y movilizaciones organizadas también deberían integrarse y formar alianzas. Mostrar el carácter extractivo de la producción agrícola y reformularla como ‘extractivismo agrario’ puede no solo desafiar el discurso legitimador de la agricultura industrial y, potencialmente, puede conducir a alianzas estratégicas entre quienes luchan por la justicia social en los sectores

(agro) extractivos. Hacen falta más estudios sobre el 'extractivismo agrario' en otros sectores agrícolas y regiones, y estudios de casos para desarrollar y refinar este concepto. Cuarto: las nuevas relaciones entre los países en desarrollo y las economías emergentes, como los BRICS y algunos países de renta media, requieren un análisis a mayor profundidad y con sentido crítico. Las inversiones, el comercio y las relaciones financieras entre China y Bolivia, por ejemplo, han aumentado drásticamente en los últimos diez años. En 2015, las empresas chinas obtuvieron la mayoría de los contratos públicos del Estado boliviano, mientras que el Banco de Importación y Exportación de China se convirtió en el mayor financiador de Bolivia. Dado que el comercio bilateral se multiplicó por 11 desde el 2005, China superó a Brasil y Estados Unidos como el principal país de origen para las importaciones de Bolivia. Igualmente, algo que no se ha dilucidado es cómo el llamado "Consenso de Pekín" difiere del "Consenso de Washington" y cuáles son sus implicaciones para el cambio agrario y el control de los recursos. Quinto: a pesar del aumento en el control corporativo sobre el sistema alimentario mundial, las alternativas como la soberanía alimentaria siguen siendo importantes, pero deben ser evaluadas rigurosamente en términos de su viabilidad y contradicciones en el contexto contemporáneo. Muchos de los llamados Estados 'neextractivistas' de América Latina han destinado importantes fondos para programas de soberanía alimentaria, pero son fondos que provienen de la extracción de recursos naturales. Esos modelos de desarrollo profundamente contradictorios requieren de mayor investigación sobre sus límites y posibilidades, convergencias y contradicciones de los esfuerzos por encontrar alternativas de soberanía alimentaria que –en la práctica– todavía dependen de las rentas extractivistas.

Para los investigadores de Bolivia, este estudio señala la necesidad de continuar investigando y revelando los desafíos que enfrentan los pequeños propietarios en momentos de transición, esto con el fin de estar involucrados y ejercer presión sobre los actores estatales. Si esta trayectoria del cambio agrario sigue la tendencia actual, como lo sugiere este estudio, el gobierno del MAS podría enfrentar una mayor presión desde la sociedad, especialmente desde las

poblaciones rurales que acabarían siendo superfluas para las necesidades de acumulación de capital. Esto podría desencadenar un descontento social generalizado entre varios movimientos sociales, sabiendo que surgen formas contestatarias ante hechos como los del TIPNIS, el Fondo Indígena, COMIBOL y varios otros escándalos políticos como los falsos créditos académicos del Vicepresidente o la relación amorosa del Presidente con una exgerente de la CAMC de China. La legitimidad del MAS es frágil, y para las elecciones de 2019 necesitará restablecer sus relaciones con la sociedad civil y tendría que apoyar a un nuevo candidato para evitar depender de una sola personalidad y un liderazgo al estilo de los caciques que han dañado países como Venezuela. Los intelectuales orgánicos en Bolivia, como los asociados con Comuna, o las ONG críticas e investigadores asociados con la Fundación TIERRA, CEDIB, CIPCA, PROBIOMA, entre otros, deben continuar difundiendo sus valiosas investigaciones y abrir espacios de diálogo por igual con actores estatales y movimientos sociales. Durante el trabajo de campo para este estudio, muchas personas de los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián estaban muy ansiosas y felices de compartir sus historias, experiencias y desafíos, en parte, porque nadie los está escuchando. Uno de los propósitos principales de esta investigación es proporcionar una salida para que estas historias sean compartidas y escuchadas entre un público más amplio. Como investigadores, debemos continuar compartiendo estas y otras historias para entender mejor la realidad que enfrentan las poblaciones rurales en contextos de acelerado desarrollo capitalista de la agricultura.

Para los responsables de políticas y funcionarios del gobierno, los hallazgos de este estudio deberían tomarse con un alto sentido de urgencia e importancia. La mayoría rural representada por los pequeños propietarios ha mantenido, en su mayor parte, derechos formales sobre sus tierras. Esto es extremadamente importante para su sustento y el futuro de la agricultura en las tierras bajas de Bolivia. Antes de que se vean obligados a abandonar sus tierras por las razones expuestas a lo largo de este estudio, los actores estatales responsables de las reformas deben usar sus capacidades y posición estratégica para afectar la tendencia actual y buscar aliados



dentro de la sociedad. En primer lugar, las ambivalencias sobre el límite máximo a la gran propiedad agraria deben eliminarse de una vez y aplicarse sin tergiversaciones para eliminar el latifundio y redistribuir la tierra entre los sin tierra o con poca tierra. En segundo lugar, es necesario reorientar las políticas agropecuarias alejándolas del sesgo pro-agroindustrial y terrateniente y dando prioridad a las necesidades e intereses de las mayorías rurales, incluyendo mujeres y jóvenes. El modelo boliviano de desarrollo agropecuario orientado a la exportación ha aumentado la dependencia nacional de las importaciones de alimentos, haciendo vulnerable a los bolivianos ante los precios volátiles de los productos básicos y la inseguridad alimentaria, lejos de cualquier camino hacia la soberanía alimentaria. En tercer lugar, Bolivia debe centrarse en la industrialización y el fortalecimiento de los nexos intersectoriales entre el campo y la ciudad, entre la agricultura y la industria, lo que generará mayores oportunidades de empleo a través del procesamiento y actividad productiva con valor agregado. Hasta la fecha, la llamada estrategia de “industrialización” solo consiste en importar bienes industrializados que ya tienen valor agregado para utilizarlos en la extracción de recursos naturales para la exportación. El complejo sojero se ha convertido en una forma de ‘extractivismo agrario’ muy similar al de los sectores mineros e hidrocarbúricos. En cuarto lugar, la crisis ambiental y la crisis ecológica son reales e inminentes. El aumento de la intensidad y gravedad del fenómeno El Niño-ENSO ha causado inundaciones y sequías de consideración tan solo en los últimos dos años. Los agricultores ya no pueden seguir los ciclos regulares de siembra y cosecha. Los rendimientos son extremadamente volátiles, la fertilidad de los suelos está en declive y aparecen nuevas plagas cada año. La deforestación no solo está agravando estas crisis ambientales, sino que amenaza los medios de vida de los pueblos indígenas. Se necesitan políticas ambientales más estrictas que no pueden estar separadas de un modelo de desarrollo agrícola más sostenible.

Para los movimientos sociales, las ONG aliadas e investigadores-activistas, este estudio pone de manifiesto la importancia de formar alianzas más amplias y movimientos sociales convergentes en sus

luchas contra un “enemigo” común o por la gestación de un paquete de políticas. Esta es, en parte, la razón para haber conceptualizado ciertos tipos de agricultura capitalista industrial como ‘extractivismo agrario’, para facilitar la convergencia entre quienes se movilizan y trabajan en torno a los sectores (agro) extractivos. Además, históricamente, la convergencia de los movimientos sociales es lo que ha logrado cambiar el equilibrio de fuerzas en la sociedad y abrir caminos hacia transformaciones políticas y sociales. Esto quedó demostrado durante las luchas revolucionarias de la década de 1950 y, cincuenta años después, durante las luchas contra las políticas neoliberales que eventualmente llevaron al poder a Evo Morales y al MAS. Autoproclamado como “gobierno de los movimientos sociales”, la legitimidad política del MAS depende de su relación con los principales movimientos sociales representados en el Pacto de Unidad. A pesar de su fractura en los últimos años, sus bases sociales se mantienen entusiastas y fuertes, y sus luchas comunes las une en contra de las diversas formas de exclusión y amenazas sobre sus medios de subsistencia ante la expansión del extractivismo.

La historia demuestra que lo mejor que pueden hacer estos movimientos es continuar conformando alianzas flexibles para aumentar su fuerza e influencia en representación de campesinos, indígenas, mujeres y sindicatos de las clases trabajadoras rurales y urbanas. Si bien sus relaciones con el Estado son importantes, su autonomía es crucial para mantener su capacidad de crítica y vigilancia frente a los actores estatales. Además, las políticas de los propios movimientos son igualmente importantes para garantizar que no surjan ni clientelismo político individual ni caciques que utilicen sus cargos para intereses personales. Esperamos que este trabajo haya proporcionado algunos elementos y perspectivas, particularmente sobre las posiciones de clase de los pequeños propietarios integrados al complejo sojero.

## Epílogo

El ascenso del MAS y la elección del presidente Evo Morales el año 2006 representaron una nueva era en la historia y política boliviana porque encarnó al primer presidente indígena de Bolivia, prometió revertir las políticas neoliberales y buscar una agenda de desarrollo socialmente justa e inclusiva a favor de los pobres. La nacionalización de los recursos naturales, los planes de redistribución de la riqueza, la reforma agraria y los discursos antiimperialistas que rechazan el modelo neoliberal fueron aplaudidos y apoyados por las mayorías. Los discursos de soberanía alimentaria, derechos de la Madre Tierra y el “Vivir Bien” reemplazaron a los discursos capitalistas sobre las necesidades del crecimiento económico y búsqueda de una “era de gran consumo masivo”. El llamado “gobierno de los movimientos sociales” transformó las relaciones entre el Estado y la sociedad con la incorporación de los movimientos sociales más prominentes dentro del Estado. Indígenas, campesinos, mineros, trabajadores sindicales y mujeres, quedaron empoderados simbólicamente, política y materialmente. La participación política fue un factor importante en este proceso, los principales movimientos sociales fueron convocados a redactar una nueva Constitución Política del Estado y varios líderes de los movimientos fueron designados para ocupar puestos a nivel ministerial. La historia de Morales, su identidad y discurso, acrecentaron la legitimidad del Estado ya que, finalmente, la mayoría de los bolivianos podía autoidentificarse con el líder. Pero a medida que los líderes de los movimientos transitaban a cargos gubernamentales, fueron absorbidos de forma gradual y parcialmente cooptados por el aparato estatal. Muchos movimientos sociales perdieron casi toda su autonomía para desafiar y criticar al gobierno y fueron presas del temor a perder el apoyo del Estado, el acceso a los recursos, y ser etiquetados como opositores y enemigos del “Proceso de cambio”.

El auge de las materias primas aumentó la capacidad fiscal del Estado y parte de las rentas extractivas se distribuyeron entre los pobres mediante bonos, transferencias de dinero en efectivo y proyectos dirigidos por el Estado. Sin embargo, lo que en realidad ha predomi-

nado es un alto grado de clientelismo político desde el momento en que los ingresos estatales se transfirieron a regiones y a los líderes de las organizaciones a cambio de apoyo político incondicional. El presidente Morales advirtió explícitamente que si no votaban por los candidatos del MAS en las elecciones municipales o departamentales, no recibirán apoyo del Estado.<sup>1</sup> Y cuando empezaron a caer los precios de las materias primas, y por lo tanto los ingresos fiscales, el MAS comenzó a expandir el modelo extractivista hacia nuevas fronteras: litio, gas natural, minerales y materias primas agrícolas. Las rentas extractivas y la mayor acumulación de capital se han hecho imprescindibles para la legitimidad política del MAS. Sin embargo, estas funciones duales del Estado capitalista se contradicen en su forma actual porque el modelo estatal extractivista no ha logrado transformar las estructuras socioeconómicas desiguales de producción, distribución, consumo y acumulación, y mantiene una economía basada en exportaciones de productos primarios controlados por oligopolios. Pero, si bien la legitimidad estatal se vio comprometida por los conflictos extractivos en el sector de hidrocarburos y minería (Pueblo, 2016), incluyendo el infame conflicto del TIPNIS (Fundación TIERRA, 2018), este no ha sido el caso ante la expansión del complejo sojero como un tipo de extractivismo agrario.

Este trabajo ha proporcionado un análisis crítico, basado en la economía política agraria, sobre cómo y en qué medida el desarrollo y expansión del complejo sojero agroindustrial está transformando las relaciones sociales agrarias en las tierras bajas de Bolivia y las relaciones Estado-sociedad emergentes de este proceso. Se han puesto en evidencia las formas de exclusión, los mecanismos de control y apropiación de valor, y las dinámica extractivas del complejo sojero. El concepto de *política de control* nos ha ayudado a comprender

---

1 En un acto público transmitido por el canal de televisión *Gigavisión*, el presidente Morales exclamó: “Solo quiero decirles a nuestros abuelos y las generaciones futuras: ¿Cómo puedo trabajar con la ciudad de El Alto con gente de derecha? No voy a trabajar (con esta gente), hermanos. Si quieren trabajar más allá aquí está (el candidato del MAS) Edgar Patana, si quieren más trabajo está (la candidata del MAS) Felipa Huanca. Reflexionen, depende de ustedes” (Chuquimia, 2015).

el papel y la naturaleza del Estado y de las relaciones entre las clases dentro de la sociedad. Esta crítica está escrita con un sentido de urgencia porque los cambios agrarios analizados continúan desarrollándose y amenazando a las mayorías rurales. A pesar de estas trayectorias de cambio poco prometedoras, tal como hemos explicado a lo largo de este libro, esas direcciones o tendencias de ninguna manera representan resultados predeterminados. Tanto los actores estatales como la sociedad pueden provocar cambios y reencauzar su curso alejándose del extractivismo para acercarse hacia la soberanía alimentaria y el “Vivir Bien”. Esperamos que este trabajo contribuya a estos esfuerzos.



# Bibliografía

- ACF-International Network (ACF-IN) (2009). *Santa Cruz: Plan departamental de contingencias para desastres naturales. Proyecto Dipecho-Rio Grande - Mision Bolivia-Paraguay*. Santa Cruz.
- Acosta, A. (2013). Extractivism and neo extractivism: two sides of the same curse. En: M. Lang y D. Mokrani. (Eds.), *Beyond Development: Alternative Visions from Latin America* (pp. 61–86). Amsterdam:Transnational Institute.
- Action Group on Erosion, Technology and Concentration (ETC Group). (2015). Breaking Bad: Big Ag Mega-Mergers in Play Dow + DuPont in the Pocket? Next: Demonsanto?, ETC Group Communiqué 115 (Diciembre).
- Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) (2013). *Estudio Mercado Del Grano de Soya*. La Paz: Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de Empresas.
- Akram-Lodhi, A.H. y Kay, C. (2009). *Peasants and globalization: political economy, rural transformation and the agrarian question*. Routledge ISS studies in rural livelihoods. London and New York: Routledge.
- Albó, X. (2002). Bolivia: From Indian and Campesino Leaders to Councillor and Parliamentary Deputies. En: R. Sieder. (Ed.). *Multiculturalism in Latin America: Indigenous Rights, Diversity and Democracy* (pp. 74–102). New York: Palgrave Macmillan.
- Almaraz, A. (2014). Las luchas indígenas y campesinas en los dos ciclos de la Reforma Agraria. En: TIERRA (Ed.) *Recientes Transformaciones Agrarias en Bolivia: Memoria* (pp. 49–57). La Paz: TIERRA.
- Almaraz, A. (2016). El MAS abraza el modelo capitalista. *Petropress* 35, 3.16. Recuperado de [www.https://cedib.org/publicaciones/el-mas-abraza-el-modelo-capitalista-petropress-35-3-16/](https://cedib.org/publicaciones/el-mas-abraza-el-modelo-capitalista-petropress-35-3-16/)

- Alonso-Fradejas, A. (2015). Anything but a story foretold: multiple politics of resistance to the agrarian extractivist project in Guatemala. *The Journal of Peasant Studies*, 42(3-4), 489-515.
- Álvarez, N. (2005). *Cuatro Cañadas: Tierra y Desarrollo Rural*. La Paz: Fundación TIERRA.
- Alves, F. (2006). Por que morrem os cortadores de cana? *Saude e Sociedade*, 15(3), 90-8. Recuperado de <https://www.scielosp.org/pdf/sausoc/2006.v15n3/90-98/pt>
- ANAPO. (2014). *Informe de Campaña Verano 2013-2014: Soya*. Santa Cruz: Asociacion de Productores de Oleadinosas y Trigo.
- ANAPO. (2015). *Memoria Anual 2015*. Santa Cruz: Asociacion de Productores de Oleaginosas y Trigo.
- ANAPO. (2016). Soya sube de precio en la Bolsa de Chicago. Recuperado de <http://www.anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=1&id=649>.
- Arce, L. (2011). El Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo. *Economía Plural* Año 1/ Nº 1/ Septiembre
- Arce, L. (2015). El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano. *Economía Plural* Agosto.
- Arsel, M. (2012). Between 'marx and markets'? The state, the 'left turn' and nature in Ecuador. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 103(2), 150-63.
- Arsel, M., Akbulut, B. y Adaman, F. (2015). Environmentalism of the malcontent: anatomy of an anti-coal power plant struggle in Turkey. *The Journal of Peasant Studies*, 42(April), 371-95.
- Arsel, M., Hogenboom, B. y Pellegrini, L. (2016). The Political Economy of the extractive imperative in Latin America. *The Extractive Industries and Society*, (3), 880-7.
- Arsel, M., Mena, C., Pellegrini, L. y Radhuber, I. (2014). Property rights, nationalisation and extractive industries in Bolivia and Ecuador. En: M. Bavinck, L. Pellegrini, y E. Mostert. (Eds.), *Conflict on natural resources in the global South - conceptual approaches*. (pp. 109-28). Leiden: CRC Press/Balkema.



- Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO). (2011). *Memoria Anual 2011*. Santa Cruz: Asociación de productores de oleaginosas y trigo.
- Assies, W. (2000). El constitucionalismo multiétnico en América Latina: el caso de Bolivia. En: *XII Congreso Internacional Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal: Desafíos en el Tercer Milenio*. Arica.
- Assies, W. (2003). David versus Goliath in Cochabamba: Water Rights, Neoliberalism, and the Revival of Social Protest in Bolivia. *Latin American Perspectives*, 30(130), 14–36.
- Barber, R.G., Orellana, M., Navarro, F., Diaz, O. y Soruco, M.A. (1996). Effects of conservation and conventional tillage systems after land clearing on soil properties and crop yield in Santa Cruz, Bolivia. *Soil & Tillage Research*, 38, 133–52.
- Banco Central de Bolivia (BCB). (2016). *Administración de las reservas internacionales: Gestión 2015*. La Paz: BCB.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2014). *Perfil de riesgo de desastres para Bolivia ante inundaciones y deslizamientos en cuencas seleccionadas*. Washington, DC.
- Banco Mundial. (13 de mayo de 1998). *Implementation completion report Bolivia Eastern Lowlands: Natural Resource Management and Agricultural Production Project*. Washington, DC: World Bank.
- Banco Mundial. (2007a). *Bolivia Land for Agricultural Development Project*. Washington, DC.
- Banco Mundial. (2007b). *World Development Report 2008: Agriculture for Development*. World Development Report 2008. Washington: World Bank.
- Banco Mundial. (2016a). World DataBank. *World Bank*. Recuperado de <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx>.
- Banco Mundial. (2016b). *The Commodity Cycle in Latin America: Mirages and Dilemmas*. Washington: World Bank.
- Bebbington, A. y Humphreys Bebbington, D. (2011). An Andean Avatar: Post-Neoliberal and Neoliberal Strategies for Securing the Unobtainable. *New Political Economy*, 16(May 2015), 131–45.

- Bebbington, A. (2009). The new extraction: Rewriting the political ecology of the Andes? *NACLA Report on the Americas*, 42(5), 12–20.
- Benchimol, P. (20 de abril de 2008). La concentracion de la tierra: Latifundios y pools de siembra. *Pagina 12*. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3460-2008-04-20.html>
- Berg, B. L. (2009). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Seventh. Toronto: Allyn and Bacon.
- Berg, B.L. (2001). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. 4th Ed. Boston: Allyn and Bacon.
- Bernstein, H. (1979). African peasantries: A theoretical framework. *The Journal of Peasant Studies*, 6(4), 421–43.
- Bernstein, H. (1992). Poverty and the Poor. En: H. Bernstein, B. Crow, and H. Johnson, (Eds.) *Rural Livelihoods: Crises and Responses*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Bernstein, H. (1996). Agrarian questions then and now. *The Journal of Peasant Studies*, 24(1–2), 22–59.
- Bernstein, H. (2009). V.I. Lenin and A.V. Chayanov: looking back, looking forward. *Journal of Peasant Studies*, 36(1), 55–81.
- Bernstein, H. (2010). *Class dynamics of agrarian change*. Halifax and Winnipeg: Fernwood Publishing.
- Borras, S.M.J. (2006). The Philippine Land Reform in Comparative Perspective : Some Conceptual. *Journal of Agrarian Change*, 6(1), 69–101.
- Borras, S.M.J. (2007). *Pro-poor land reform: a critique*. Ottawa: University of Ottawa Press.
- Borras, S.M.J. y Franco. J. (2010). From Threat to Opportunity? Problems with the Idea of a 'Code of Conduct' for Land- Grabbing. *Yale Human Rights & Development L.J.*, 13(2010), 507–23.
- Borras, S.M.J., Franco, J.C., Gomez, S., Kay, C. y Spoor, M. (2012). Land Grabbing in Latin America and the Caribbean. *Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 845–72.

- Borras, S.M.J., Franco, J.C., Isakson, S.R., Levidow, L. y Vervest, P. (2016). The rise of flex crops and commodities: implications for research. *Journal of Peasant Studies*, 43(1), 93–115.
- Boserup, E. (1965). *The conditions of agricultural growth: the economics of agrarian change under population pressure*. London: Allen & Unwin.
- Brabazon, H. y Webber, J.R. (2014). Evo Morales and the MST in Bolivia: Continuities and discontinuities in agrarian reform. *Journal of Agrarian Change*, 14(3), 435–65.
- Bradshaw, C.J.A., et al. (2007). Global evidence that deforestation amplifies flood risk and severity in the developing world. *Global Change Biology*, 13(11), 2379–95.
- Brown, L. (2012). *Full planet, empty plates: The new geopolitics of food scarcity*. New York: WW Norton & Company.
- Bunker, S.G. (1984). Modes of Extraction, Unequal Exchange, and the Progressive Underdevelopment of an Extreme Periphery: The Brazilian Amazon, 1600-1980. *American Journal of Sociology*, 89(5), 1017.
- Byres, T.J. (1986). The Agrarian Question, Forms of Capitalist Agrarian Transition and the State: An Essay with reference to Asia. *Social Scientist*, 14(11/12), 3–67.
- Byres, T.J. (1996). *Capitalism from Above and Capitalism from Below: An Essay in Comparative Political Economy*. UK: Palgrave Macmillan.
- Byres, T.J. (2004). Introduction : Contextualizing and Interrogating the GKI Case for Redistributive Land Reform. *Journal of Agrarian Change*, 4(1–2), 1–16.
- Campanini, J. (25 de mayo de 2015). *El Decreto 2366 dicta la sentencia a las Áreas Protegidas en Bolivia*. Cochabamba: CEDIB. Recuperado de [https://cedib.org/post\\_type\\_documentos/el-decreto-2366-dicta-sentencia-a-las-areas-protegidas-en-bolivia/](https://cedib.org/post_type_documentos/el-decreto-2366-dicta-sentencia-a-las-areas-protegidas-en-bolivia/)
- Castañón, E. (2015). Discurso empresarial vs. realidad campesina: la ecología política de la producción de soya en Santa Cruz, Bolivia. *Cuestión Agraria*, 2(1), 65–86.

- Catacora-Vargas, G., Galeano, P., Agapito-Tenfen, S., Aranda, D., Palau, T. y Onofre R. (2012). *Soybean Production in the Southern Cone of the Americas : Update on Land and Pesticide Use*. Norway: GenOk - Centre for Biosafety.
- Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). (1 de Mayo 2014). Desempleo en Bolivia se reduce pero crece trabajo informal. Recuperado de <http://www.cedla.org/obess/43776>
- CEDLA (2016a). *Una década y media en el mundo del trabajo: compendio del boletín Alerta Laboral 2000-2015*. La Paz: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario.
- CEDLA. (2016b). Diez años y Bolivia no cambió. *Alerta laboral*, (76). La Paz: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario.
- Cerdeira, A.L., Gazziero, D.L.P., Duke, S.O. y Matallo, M.B. (2011). Agricultural impacts of glyphosate-resistant soybean cultivation in South America. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 59(11), 5799–807.
- Chase-Dunn, C. y Hall, T.D. (2000). Comparing world-systems to explain social evolution. En: R.A. Denemark, J. Friedman, B.K. Gills, y G. Modelski. (Eds.), *World System History: The social science of long-term change*. London and New York: Routledge.
- Chavez, W. (29 de septiembre de 2013). El largo camino hacia la conquista de la hegemonía: Evo, Santa Cruz y la Revolución. *El Desacuerdo*. Recuperado de [https://archive.org/stream/Desacuerdo9LowBn/Desacuerdo\\_9\\_low\\_bn\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/Desacuerdo9LowBn/Desacuerdo_9_low_bn_djvu.txt).
- Chicago Board of Trade (CBOT). (2006). *CBOT Soybean Crush*. Chicago: Chicago Board of Trade.
- Clapp, J. (2014). Financialization, Distance, and Global Food Politics. *Journal of Peasant Studies*, 41(5), 797–814.
- Clapp, R.A.J. (1988). Representing reciprocity, reproducing domination: Ideology and the labour process in Latin American contract farming. *The Journal of Peasant Studies*, 16(1), 5–39.
- Colque, G. (2014). *Expansión de la frontera agrícola: Luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano*. La Paz: TIERRA.

- Colque, G., Tinta, E. y Sanjinés, E. (2016). *Segunda Reforma Agraria: Una historia que incomoda*. La Paz: TIERRA.
- Conaghan, C.M., Malloy, J.M. y Abugattas, L.A. (1990). Business and the 'Boys': The Politics of Neoliberalism in the Central Andes. *Latin American Research Review*, 25(2), 3–30.
- Conference, M.W. (2015). Mennonite World Conference: A Community of Anabaptist related Churches. Recuperado de <http://mwc-cmm.org/article/world-directory>.
- Conlon, M. (2009). *The history of U.S. soybean exports to Japan*. GAIN Report.
- Cordoba, D. y Jansen, K. (2014). The return of the state: Neocollectivism, agrarian politics and images of technological progress in the MAS Era in Bolivia. *Journal of Agrarian Change*, 14(4), 480–500.
- Corz, C. (18 de agosto de 2016). García Linera dice que Bolivia ganó una década y perfila 20 años de extractivismo. *La Razón*. Recuperado de [http://www.la-razon.com/index.php?\\_url=/economia/Garcia-extractivismo-produccion-PNUD-Bolivia-pobreza\\_0\\_2547945273.html](http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/Garcia-extractivismo-produccion-PNUD-Bolivia-pobreza_0_2547945273.html)
- Craviotti, C. (2016). Which territorial embeddedness? Territorial relationships of recently internationalized firms of the soybean chain. *The Journal of Peasant Studies*, 6150(April), 1–17.
- Cuéllar, S., Rodríguez, A., Arroyo, J., Espinoza, S. y Larrea, D. (2012). *Mapa de deforestación de las tierras bajas y los yungas de Bolivia 2000-2005-2010: Proyección Sistema de Coordenadas Geográficas, Datum WGS84*. Santa Cruz de la Sierra.
- Defensoría del Pueblo. Estado Plurinacional de Bolivia. (2016). *Sin los pueblos indígenas no hay estado plurinacional. Situación de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos en el Estado Plurinacional de Bolivia*. La Paz: Defensoría del Pueblo.
- Deininger, K. y Byerlee, D. (2011). *Rising Global Interest in farmland: can it yield sustainable and equitable benefits?* Washington: World Bank.
- Denzin, N.K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Second. Igarss 2014. New York: McGraw-Hill.

- Díez, G.L. (2 de mayo de 2016). ¿El agro se nos muere? Las plagas y los ‘precios bajos’ amenazan la producción. *Página Siete*. Recuperado de <https://www.paginasiete.bo/gente/2016/5/2/agro-muere-plagas-precios-bajos-amenazan-produccion-95111.html>
- Domhoff, G.W. (1987). The Wagner Act and Theories of the State: A New Analysis Based on Class-Segment Theory. *Political Power and Social Theory*, 6, 159–85.
- Domhoff, G.W. (1996). *State Autonomy or Class Dominance? Case Studies on Policy Making in America*. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter.
- Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). (2014). *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*. Santiago: Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
- Ehrlich, P.R. y Ehrlich, A.H. (1990). *The Population Explosion*. New York: Simon and Schuster.
- Ehrlich, P.R. y Ehrlich, A.H. (2009). The Population Bomb Revisited. *The electronic Journal of Sustainable Development*, 1(3), 63–71.
- Elgert, L. (2015). ‘More soy on fewer farms’ in Paraguay: challenging neoliberal agriculture’s claims to sustainability. *The Journal of Peasant Studies*, 6150(September), 1–25.
- Epstein, G. (2005). Introduction: Financialization and the world economy. En: G. Epstein. (Ed.) *Financialization and the world economy*. Cheltenham: Edwar Elgar, 3–16.
- Evans, P.B., Rueschemeyer, D. y Skocpol, T. (1985). *Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Evenson, R.E. (2005). Besting Malthus : The Green Revolution. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 149(4), 469–86.
- Ezquerro-Cañete, A. (2016). Poisoned dispossessed and excluded: A critique of the neoliberal soy regime in Paraguay. *Journal of Agrarian Change*, 16(4), 702-710.
- Fabricant, N. (2012). *Mobilizing Bolivia’s Displaced: Indigenous Politics & the Struggle Over Land*. Chapel Hill, NC.: University of North Carolina Press.

- Fairbairn, M. (2014). 'Like gold with yield': evolving intersections between farmland and finance. *Journal of Peasant Studies*, 41(June 2015), 1–19.
- FAO. (2016). SAVE FOOD: Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. Recuperado de <http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/>.
- FAO, IFAD y WFP. (2015). *The State of Food Insecurity in the World: Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of uneven progress*. Rome: FAO, IFAD and WFP.
- FAOSTAT. (2016). Food Balance. Recuperado de <http://faostat3.fao.org/browse/FB/FBS/E>.
- Fearnside, P.M. (1989). Extractive Reservices in Brazilian Amazonia. *BioScience*, 39(6), 387–93.
- Fearnside, P.M. (2001). Soybean cultivation as a threat to the environment in Brazil. *Environmental Conservation*, 28(1), 23–38.
- Fine, B. (1994). Towards a political economy of food. *Review of International Political Economy*, 1(3), 519–45.
- Fine, B. y Saad Filho, A. (2004). *Marx's Capital*. 4th ed. Lond and Sterling,, Virginia: Pluto Press.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2015). *The State of Food and Agriculture 2015. Social Protection and Agriculture: Breaking the Cycle of Rural Poverty*. Rome: FAO.
- Foweraker, J. (1981). *The struggle for land: a political economy of the pioneer frontier in Brazil from 1930 to the present day*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fox, J. (1993). *The Politics of Food in Mexico*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Francescone, K. (2012). Paths of Development in Bolivia: Contradictions of the Proceso de Cambio (Thesis Master of Arts in Political Economy). Carleton University.

- Franco, J.C. (2008). Making Land Rights Accessible: Social Movements and Political-Legal Innovation in the Rural Philippines. *Journal of Development Studies*, 44(7), 991–1022.
- Franco, J.C., Monsalve, S. y Borrás, S.M. (2015). Democratic land control and human rights. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, (15), 66–71.
- Friedmann, H. (1993). The political economy of food: a global crisis. *New Left Review*, 197, 29–57.
- Friedmann, H. y McMichael, P. (1989). Agriculture and the State System. The rise and decline of national agricultures, 1870 to present. *Sociologia Ruralis*, 29(2), 93–117.
- Fuentes, F. (25 de septiembre de 2011). Bolivia: Against 'Green Imperialism'. *Monthly Review*. Recuperado de <https://mronline.org/2011/09/25/bolivia-against-green-imperialism/>
- Fundación Jubileo. (2016). *Reporte de las industrias extractivas en Bolivia*. La Paz: Fundación Jubileo.
- Fundación TIERRA. (2018). 'TIPNIS' Cuestión Agraria. Volumen 4, Julio. La Paz: TIERRA.
- Galeano, L.A. (2012). Paraguay and the expansion of Brazilian and Argentinian agribusiness frontiers. *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement*, 33(4), 458–70.
- García, A. (2012). *Geopolitics of the Amazon*. Landed-Hereditary Power and Capitalist Accumulation Climateandcapitalism.com. Recuperado de <https://climateandcapitalism.com/wp-content/uploads/sites/2/2013/01/Geopolitics-of-the-Amazon-A4.pdf>
- García, Á. (2011). Las Tensiones Creativas de la Revolución. La quinta fase del Proceso de Cambio. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
- García, Á. (29 de abril de 2013). Once Again on So-called 'Extractivism'. *Monthly Review*. Recuperado de <https://mronline.org/2013/04/29/g1290413-html/>
- Gaventa, J. (1980). *Power and powerlessness: Quiescence and rebellion in an Appalachian valley*. Oxford: Clarendon Press.



- Ghosh, J. (2010). The Unnatural Coupling: Food and Global Finance. *Journal of Agrarian Change*, 10(1), 72–86.
- Ghosh, J. (2015). Emerging markets and development: Is there a contradiction? *En: Malcolm Adisheshaiah Lecture*. Chennai.
- Giarracca, N. y Teubal, M. (2014). Argentina: Extractivist dynamics of soy production and open-pit mining. En: H. Veltmeyer y J. Petras (Eds). *The New Extractivism: A post-neoliberal development model or imperialism of the twenty-first century?* London: Zed Books.
- Gill, L. (1987). Frontier expansion and settlement in lowland Bolivia. *Journal of Peasant Studies*, 14(3), 380–98.
- Gill, L. (2000). *Teetering on the rim: global restructuring, daily life, and the armed retreat of the Bolivian state*. New York: Columbia University Press.
- Gobierno Municipal de Cuatro Cañadas (2008). Plan Municipal de Ordenamiento Territorial.
- Goodman, D., Sorj, B. y Wilkinson, J. (1987). *From farming to biotechnology: a theory of agro-industrial development*. Oxford, UK: Basil Blackwell.
- Gould, W.T.S. (2009). *Population and Development*. Science. London and New York: Routledge.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. London: Lawrence and Wishart.
- Gras, C. (2009). Changing patterns in family farming: The case of the pampa region, Argentina. *Journal of Agrarian Change*, 9(3), 345–64.
- Greene, J.C., Caracelli, V.J. y Graham, W.F. (1989). Toward a Conceptual Framework for Mixed-Method Evaluation Designs. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 11(3), 255–74.
- Grindle, M. (2000). *Audacious Reforms: Institutional Invention and Democracy in Latin America*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Gudynas, E. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En: *Extractivismo, política y sociedad* (pp. 187–225). Quito: Centro Andino

de Acción Popular (CAAP) y Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).

- Gudynas, E. (2010a). The New Extractivism of the 21st Century: Ten Urgent Theses about Extractivism in Relation to Current South American Progressivism. *Americas Program Report*, January 21, 1–14.
- Gudynas, E. (2010b). Agropecuaria y nuevo extractivismo bajo los gobiernos progresistas de América del Sur. *Territorios*, 5, 37–54.
- Gudynas, E. (2013). Extracciones, extractivismos y extrahecciones. *Observatorio del Desarrollo*, 18, 1–18.
- Gudynas, E. (2015). *Extractivismos: Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza*. Cochabamba: CEDIB.
- Guyton, K.Z., Loomis, D., Grosse, Y., El Ghissassi, F., Benbrahim-Tallaa, L. y Guha, N. (2015). Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. *The Lancet Oncology*, 16(5), 490–1.
- Hale, C.R. (2002). Does Multiculturalism Menace? Governance, Cultural Rights and the Politics of Identity in Guatemala. *Journal of Latin American Studies*, 34(3), 485–524.
- Hall, D., Hirsch, P. y Li, T.M. (2011). *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore and Honolulu: NUS Press and University of Hawaii Press.
- Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Harvey, D. (2006). *The Limits Capital*. London: Verso.
- Hayes, T.B., Anderson, L.L., Beasley, V.R., De Solla, S.R., Iguchi, T. y Ingraham, H. (2011). Demasculinization and feminization of male gonads by atrazine: Consistent effects across vertebrate classes. *Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology*, 127(1–2), 64–73.
- Hecht, S.B. (2005). Soybeans, development and conservation on the Amazon frontier. *Development and Change*, 36(2), 375–404.
- Hecht, S.B. (2014). The Social Lives of Forest Transitions and Successions: Theories of Forest Resurgence. En: *The Social Lives of Forests*. Chicago and London: The University of Chicago Press.

- Heredia, H. (2014). Gobierno so abre a construir la agenda del millon de ha. *El Deber*. Recuperado de <http://www.eldeber.com.bo/economia/gobierno-abre-construir-agenda-del.html>.
- Herring, R.J. (2001). Data as Social Product. En: R. Kanbur, (Ed.) *Q-Squared: Combining Qualitative and Quantitative Methods in Poverty Appraisal*. Delhi: Permanent Black.
- Holloway, J. y Picciotto, S. (1977). Capital, Crisis and the State. *Capital & Class*, 1(2), 76–101.
- Howard, P.H. (2015). Intellectual property and consolidation in the seed industry. *Crop Science*, 55(6), 1–7.
- International Agency for Research on Cancer (IARC). (2015). *Evaluations of five organophosphate insecticides and herbicides*. International Agency for Research on Cancer. Geneva.
- Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). (2014). *Soya : Su importancia como cadena de valor agroproductiva en Bolivia*. Santa Cruz: Instituto Boliviano de Comercio Exterior.
- IBCE. (2015). *Cifras del comercio exterior Boliviano Año 24/Nº 239*. Santa Cruz: IBCE.
- IBCE. (1 de febrero de 2016). Bolivia: Comercio Exterior de Alimentos. Boletín Electrónico Bisemanal No 481. Recuperado de <http://ibce.org.bo/publicaciones-ibcecifras-pdf.php?id=420>
- International Fund for Agricultural Development (IFAD). (2010). *Rural Poverty Report 2011*. Rome: International Fund for Agricultural Development (IFAD).
- Impuestos Nacionales. 2014. *Memoria 2013*. Servicio de Impuestos Nacionales. La Paz.
- Instituto Nacional de Estadística (INE). (2012a). *Ficha Resumen Censo Población y Vivienda 2012*. La Paz.
- INE. (2012b). Información Estadística [en línea]. *Instituto Nacional de Estadística*.
- INE. (2013). *Primer Censo Agropecuario*. La Paz.

- INE. (2015a). *Primer Censo Agropecuario 2013*. La Paz.
- INE. (2015b). *Comercio Exterior*. La Paz.
- INE. (2016a). Salario Mínimo Nacional [en línea]. *Información Estadística*.
- INE. (2016b). *Comercio Exterior*. La Paz.
- Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). (2015). *INIAF Semillas Santa Cruz, Solicitud de Importación Recepcionadas*. Santa Cruz.
- Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). (2010). *La Tierra Vuelve a Manos Indígenas y Campesinas*. Instituto Nacional de Reforma Agraria. La Paz: INRA.
- Isakson, S.R. (2014). Food and finance: the financial transformation of agro-food supply chains. *Journal of Peasant Studies*, 41(5), 749–75.
- James, C. (2015). *20th Anniversary (1996 to 2015) of the Global Commercialization of Biotech Crops and Biotech Crop Highlights in 2015*. Ithaca, NY.
- De Janvry, A. (1981). *The Agrarian Question and Reformism in Latin America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Jepson, W., Brannstrom, C. y Filippi, A. (2010). Access Regimes and Regional Land Change in the Brazilian Cerrado, 1972-2002. *Annals of the Association of American Geographers*, 100(1), 87–111.
- Jerven, M. (2014). The Political economy of agricultural statistics: Evidence from India, Nigeria and Malawi. *Journal of Agrarian Change*, 14(1), 129–45.
- Jessop, B. (2008). *State Power: A Strategic-Relational Approach*. Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015. Cambridge: Polity Press.
- Justo, M. (2016). *¿Qué países tienen la canasta básica más cara (y barata) en América Latina?* BBC News. Recuperado de [https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160224\\_america\\_latina\\_canasta\\_basica\\_cara\\_ppb](https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160224_america_latina_canasta_basica_cara_ppb)
- Kamel, F. (2013). Paths from pesticides to Parkinson's. *Science*, 341(6147), 722–3.

- Kay, C. (1981). Political economy, class alliances and Agrarian change in Chile. *The Journal of Peasant Studies*, 8(4), 485–513.
- Kay, C. (1989). *Latin American Theories of Development and Underdevelopment*. London: Routledge.
- Kay, C. (2006). Rural Poverty and Development Strategies in Latin America. *Journal of Agrarian Change*, 6(4), 455–508.
- Kay, C. (2009). Development strategies and rural development: exploring synergies, eradicating poverty. *Journal of Peasant Studies*, 36(1), 103–37.
- Kay, C. y Urioste, M. (2007). Bolivia's Unfinished agrarian reform: Rural poverty and development policies. En: A.H. Akram-Lodhi, S.M. Borras, and C. Kay. (Eds.), *Land, poverty and livelihoods in the era of globalization: Perspectives from developing and transition countries* (pp. 41–79). London and New York: Routledge.
- Kersson, T. (2013). *Food Sovereignty and the Quinoa Boom in Bolivia*. Food Sovereignty: A Critical Dialogue. New Haven, No. 79.
- Klein, H.S. (2011). *A Concise History of Bolivia*. Second. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kloppenborg, J.R. (2004). *First the seed: the political economy of plant biotechnology*. Second. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
- Kopp, A.J. (2015). *Las colonias menonitas en Bolivia: antecedentes, asentamientos y propuestas para un diálogo*. La Paz: TIERRA.
- Krasner, S.D. (1978). *Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy*. Book. Princeton, NJ.: Princeton University Press.
- Kruse, T. (2001). Transición política y recomposición sindical: reflexiones desde Bolivia. En: E. de la Garza, (Ed.) *Los sindicatos frente a los procesos de transición política* Buenos Aires: CLACSO.
- Lazcano, M. (29 de noviembre de 2013). Estado boliviano controla el 38% de la economía. *La Razón*. Recuperado de [http://www.la-razon.com/economia/boliviano-controla-economia\\_0\\_1952204799.html](http://www.la-razon.com/economia/boliviano-controla-economia_0_1952204799.html)

- Leach, M. y Fairhead, J. (2000). Challenging Neo-Malthusian Deforestation Analyses in West Africa's Dynamic Forest Landscapes. *Population and Development Review*, 26(1), 17–43.
- Lee, S.T., Tran, A., Hansen, J. y Ash. M. (2016). *Major Factors Affecting Global Soybean and Products Trade Projections*. United States Department of Agriculture-Economic Research Service.
- Li, T.M. (2009). To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Populations. *Antipode*, 41(S1), 66–93.
- Li, T.M. (2011). Centering labor in the land grab debate. *Journal of Peasant Studies*, 38(2), 281–98.
- Lipton, M. (1977). *Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development*. Cambridge: Harvard University Press.
- Little, P.D. y Watts, M.J. (1994). *Living under Contract: Contract Farming and Agrarian Transformation in Sub-Saharan Africa*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View*. Second. New York: Palgrave Macmillan.
- Mackey, L. (2011). Legitimizing foreignization in Bolivia: Brazilian agriculture and the relations of conflict and consent in Santa Cruz, Bolivia. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing (6-8 April 2011).
- Mackintosh, M. (1990). Abstract Markets and Real Needs. En: H. Bernstein, B. Crow, M. Mackintosh, y C. Martin, (Ed.) *The Food Question: Profits Versus People?* (pp. 43–53). London: Earthscan Publications Ltd.
- Malhi, Y., Roberts, J.T., Betts, R.A., Killeen, T.J., Li, W. y Nobre, C.A. (2008). Climate change, deforestation, and the fate of the Amazon. *Science*, 319(5860), 169–72.
- Malloy, J.M. (1970). *Bolivia: The Uncompleted Revolution*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Marques, H. (2010). O desenvolvimento da cadeia produtiva da soja na Bolívia e a presença brasileira : uma história comum. Universidade de São Paulo.

- Marx, K. (1976). *Capital: A Critique of Political Economy Volume One*. Middlesex, England: Penguin Books.
- Marx, K. (1981). *Capital: A Critique of Political Economy Volume Three*. London: Penguin Books.
- McGrath, S. (2013). Fuelling global production networks with slave labour?: Migrant sugar cane workers in the Brazilian ethanol GPN. *Geoforum*, 44, 32–43.
- McKay, B., Alonso-Fradejas, A., Brent, Z., Xu, Y. y Sauer, S. (2016a). China in Latin America: towards a new ‘consensus’ of resource control? *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 1(5):592-611.
- McKay, B., Sauer, S., Richardson, B. y Herre, R. (2016b) The political economy of sugarcane flexing: initial insights from Brazil, Southern Africa and Cambodia. *The Journal of Peasant Studies*, 43(1), 195–223.
- McKay, B.M., Hall, R. y Liu, J. (2016c). Introduction: The rise of BRICS : implications for global agrarian transformation. *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 1(5):581-591.
- McKay, B. y Colque, G. (2016). Bolivia’s soy complex: the development of ‘productive exclusion’. *Journal of Peasant Studies*, 43(2), 583–610.
- McKay, B., Nehring, R. y Walsh-Dilley, M. (2014). The ‘State’ of Food Sovereignty in Latin America: Political Projects and Alternative Pathways in Venezuela, Ecuador, and Bolivia. *Journal of Peasant Studies*, 41(6), 1175–200.
- McKay, B. M. (2018). Control grabbing and value-chain agriculture: BRICS, MICs and Bolivia’s soy complex. *Globalizations*, 15(1), 74-91.
- McKay, B.M. (2017a). *Agrarian extractivism in Bolivia*, *World Development*. 91, 199-211. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.04.007>
- McKay, B.M. (2017b). *The politics of convergence in Bolivia: social movements and the Movimiento al Socialismo*. *Third World Quarterly* . Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2017.1399056>
- McMichael, P. (2013). Value-chain Agriculture and Debt Relations: contradictory outcomes. *Third World Quarterly*, 34(4), 671–90.

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). (2015). *Proyecto Presupuesto General del Estado Gestión 2016*. La Paz.
- Mekonnen, M.M. y Hoekstra, A.Y. (2011). The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products. *Hydrology and Earth System Sciences*, 15(5), 1577–600.
- Mennonite Church USA. (2014). Mennonite Church USA. Recuperado de <http://mennoniteusa.org/who-we-are/>.
- Miller, H.I. y Conko, G. (2001). Precaution without principle. *Nature biotechnology*, 19(4), 302–3.
- Morales, J.A. y Sachs, J.D. (1989). Bolivia's Economic Crisis. En: J.D. Sachs (Ed.). *Developing Country Debt and the World Economy* (pp. 57–80). Chicago: University of Chicago Press.
- Müller, R., Larrea-Alcázar, D.M., Cuéllar, S. y Espinoza, S. (2014). Causas directas de la deforestación reciente (2000-2010) y modelado de dos escenarios futuros en las tierras bajas de Bolivia lowlands and modeling of future scenarios. *Ecología en Bolivia*, 49(1), 20–34.
- Müller, R., Pistorius, T., Rohde, S., Gerold, G. y Pacheco, P. (2013). Policy options to reduce deforestation based on a systematic analysis of drivers and agents in lowland Bolivia. *Land Use Policy*, 30(1), 895–907.
- Murmis, M. y Murmis, M.R. (2012). Land concentration and foreign land ownership in Argentina in the context of global land grabbing. *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement*, 33(4), 417–38.
- Murphy, S., Burch, D. y Clapp, J. (2012). *Cereal Secrets: The World's Largest Commodity Traders and Global Trends in Agriculture*. Oxfam Research Report.
- Naciones Unidas (UN). (2015). *World population prospects*. United Nations. New York: United Nations.
- Newell, P. y Glover, D. (2003). *Business and biotechnology: regulation and the politics of influence*. IDS Working Paper. Brighton, No. 192.
- Nicholls, C.I. y Altieri, M.A. (1997). Conventional agricultural development models and the persistence of the pesticide treadmill



- in Latin America. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 4, 93–111.
- Nickson, R.A. (1981). Brazilian colonization of the eastern border region of Paraguay. *Journal of Latin American Studies*, 13(1), 111–31.
- Nordlinger, E.A. (1981). *On the Autonomy of the Democratic State*. Cambridge: Harvard University Press.
- North, D.C. (1995). The new institutional economics and third world development. En: J. Harris, J. Hunter, and C.M. Lewis, (Eds.) *The new institutional economics and third world development* (pp. 17–26). London and New York: Routledge.
- Nueva Economía. (6 al 12 de septiembre 2015). *Las 100 empresas de Bolivia con más ingresos el 2014*. Santa Cruz. Recuperado de <http://nuevaeconomia.com.bo/>
- O'Connor, J. (1973). *The Fiscal Crisis of the State*. New York: St. Martin's Press.
- Oki, K. (2008). *U.S. food export controls policy: three cases from 1973 to 1981*. USJP Occasional Paper. Cambridge.
- Oliveira, G. de L.T. (2016). The geopolitics of Brazilian soybeans. *The Journal of Peasant Studies*, 43(2), 348–72.
- Oliveira, G. de L.T. y Hecht, S. (2016). Sacred groves, sacrifice zones and soy production: globalization, intensification and neo-nature in South America. *The Journal of Peasant Studies*, 43(2), 251–85.
- Oliveira, G. de L.T. y Schneider, M. (2016). The politics of flexing soybeans: China, Brazil and global agroindustrial restructuring. *The Journal of Peasant Studies*, 43(1), 167–94.
- Ormachea, E. (2007). *¿Revolución agraria o consolidación de la vía terrateniente? El gobierno del MAS y las políticas de tierras*. La Paz: CEDLA.
- Oya, C. (2012). Contract Farming in Sub-Saharan Africa A Survey of Approaches, Debates and Issues - OYA - 2011 - *Journal of Agrarian Change* - Wiley Online Library, 12(1), 1–33.

- Página Siete. (2016). *CSUTCB pide no insistir con la reelección de Evo y Álvaro*. Recuperado de <https://www.paginasiete.bo/nacional/2016/3/27/csutcb-pide-insistir-reeleccion-alvaro-91185.html>
- Paige, J.M. (1978). *Agrarian Revolution. Social Movements and Agriculture in the Underdeveloped World* The Free Press.
- Painter, M. y Partridge, W.L. (1986). *Lowland Settlement in San Julian, Bolivia: Project Success and Regional Underdevelopment*. Worcester and Binghamton.
- Papa, J.C. y Tuesca, D. (2014). *Los problemas actuales de malezas en la región sojera núcleo argentina : origen y alternativas de manejo*. Buenos Aires.
- Pederson, P. (2007). *Soybean Uses. Iowa State University - Soybean Extension and Research Program*.
- Pegler, L. (2015). Peasant inclusion in global value chains: economic upgrading but social downgrading in labour processes? *The Journal of Peasant Studies*, 42(5), 929–56.
- Pellegrini, L. (2016). Resource Nationalism in the Plurinational State of Bolivia. En: P.A. Haslam and P. Heidrich. (Eds.), *The Political Economy of Resources and Development: From Neoliberalism to Resource Nationalism*. London: Routledge.
- Pengue, W. A. (2005). Transgenic Crops in Argentina: The Ecological and Social Debt. *Bulletin of Science, Technology & Society*, 25(4), 314–22.
- Pérez, M. (2007). No todo grano que brilla es oro: Un análisis de la soya en Bolivia. La Paz: CEDLA.
- Petras, J. y Veltmeyer, H. (2005). *Social Movements and State Power: Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador*. London and Ann Arbor: Pluto Press.
- Petras, J. y Veltmeyer, H. (2014). *Extractive Imperialism in the Americas: Capitalism's New Frontier*. Leiden and Boston: Brill.
- Petras, J. y Veltmeyer, H. (2016). *Power and Resistance: US Imperialism in Latin America*. Leiden: Koninklijke Brill.

- Piñeiro, D.E. (2012). Land grabbing : concentration and ' foreignisation ' of land in Uruguay. *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d ' études du développement*, 33(4), 471–89.
- Poulantzas, N. (1978). *State, Power, Socialism*. London: Verso.
- Quandl (2016). Bolivia Total Investment, % of GDP. *Quandl*. Recuperado de [https://www.quandl.com/data/ODA/BOL\\_NID\\_NGDP-Bolivia-Total-Investment-of-GDP](https://www.quandl.com/data/ODA/BOL_NID_NGDP-Bolivia-Total-Investment-of-GDP).
- Quispe, A. (19 de julio de 2015). Importación de alimentos casi se duplica en los últimos cinco años. *La Razón*. Recuperado de [http://www.la-razon.com/economia/Importacion-alimentos-duplica-ultimos-anos\\_0\\_2309769111.html](http://www.la-razon.com/economia/Importacion-alimentos-duplica-ultimos-anos_0_2309769111.html)
- Razavi, S. (2009). Engendering the political economy of agrarian change. *Journal of Peasant Studies*, 36(1), 197–226.
- Repórter Brasil. Organisation for Communication and Social Projects (Mayo 2011). Brazil' s ethanol in the world: Socio-environmental impacts of export sugarcane companies. *Evaluation*, 20 p. Recuperado de <http://reporterbrasil.org.br/documentos/Sucarcane2011.pdf>
- Redo, D., Millington, A.C. y Hindery, D. (2011). Deforestation dynamics and policy changes in Bolivia' s post-neoliberal era. *Land Use Policy*, 28(1), 227–41.
- Ribot, J.C. y Peluso, N.L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–81.
- Saad Filho, A. (2010). Neoliberalism, Democracy and Economic Policy in Brazil. *Development and Society*, 39(1), 1–28.
- Saad Filho, A. (2014). Two transitions in Brazil: Dilemmas of a neoliberal democracy. *The Bulletin*, (927).
- Sanabria, H. (1999). Consolidating States, Restructuring Economies, and Confronting Workers and Peasants: The Antinomies of Bolivian Neoliberalism. *Comparative Studies in Society and History*, 41(3), 535–62.
- Schmidt-Bleek, F. (1999). *The Factor 10/MIPS-Concept: Bridging Ecological, Economic, and Social Dimensions with Sustainability Indicators*. Tokyo.

Scott, J.C. (1998). *Seeing Like a State*. New Haven: Yale University Press.

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG). (2014). Database: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.

Seoane, J., Taddei, E. y Algranati, C. (2013). *Extractivismo, despojo y crisis climática: Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra América*. Buenos Aires: Ediciones Herramiento.

De Soto, H. (2000). *The mystery of capital: why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else*. New York: Basic Books.

Soto, F. y Gómez, S. (2012). *Dinámicas del Mercado de la Tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Rome: FAO.

Soyatech. (2016). Soy facts. Recuperado de <https://www.soyatech.com/>.

Spoor, M. (2002). Policy regimes and performance of the agricultural sector in Latin America and the Caribbean during the last three decades. *Journal of Agrarian Change*, 2(3), 381–400.

Steininger, M.K., Tucker, C.J., Ersts, P., Killeen, T.J., Villegas, Z. y Hecht, S.B. (2001). Clearance and fragmentation of tropical deciduous forest in the Tierras Bajas, Santa Cruz, Bolivia. *Conservation Biology*, 15(4), 856–66.

Suárez, R.V., Camburn, M., y Crespo, S. (2010). *El pequeño productor en el cluster de la soya: caso cruceño*. Santa Cruz: PROBIOMA.

Svampa, M. (2013). Resource extractivism and alternatives: Latin American perspectives on development. En: M. Lang and D. Mokrani. (Eds.), *Beyond Development: Alternative Visions from Latin America*. Amsterdam and Quito: Transnational Institute and Rosa Luxemburg Foundation.

Tanner, C.M., Kamel, F., Ross, G.W., Hoppin, J.A., Goldman, S.M., Korell, M. (2011). Rotenone, Paraquat, and Parkinson's Disease. *Environmental Health Perspectives*, 119, 866–72.

- The Economist. (26 de agosto de 2010). Brazilian agriculture. The miracle of the cerrado Recuperado en <https://www.economist.com/briefing/2010/08/26/the-miracle-of-the-cerrado>.
- The International Disaster Databe (EM-DAT). (2016). Emergency Events Database. Recuperado de <https://www.emdat.be/database>.
- Thiesenhusen, W.C. (1989). *Searching for Agrarian Reform in Latin America*. London: Unwyn Hyman.
- Thorn, R.S. (1971). The Economic Transformation. En: J.M. Malloy and R.S. Thorn (Eds). *Beyond the Revolution: Bolivia since 1952* (pp. 157–232). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Tillitt, D. E., Papoulias, D. M., Whyte, J. J., y Richter, C. A. (2010). Atrazine reduces reproduction in fathead minnows (*Pimephales promelas*). *Aquatic Toxicology*, 99(2), 149–59.
- Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). (2008). *Informe de la comisión de UNASUR sobre los sucesos de Pando: Hacia un alba de justicia para Bolivia*. Quito.
- Urioste, M. (2001). El monocultivo de la soya en el municipio de Pailón. En: M. Urioste y D. Pacheco. (Eds.) *Las tierras bajas de Bolivia a fines del Siglo XX*. La Paz: PIEB.
- Urioste, M. (19 de octubre de 2009). *La revolución agraria de Evo Morales: desafíos de un proceso complejo*. Recuperado de <http://www.bivica.org/upload/revolucion-agraria.pdf>.
- Urioste, M. (2010). *Land Governance in Bolivia*. La Paz.
- Urioste, M. (2012). Concentration and ‘foreignisation’ of land in Bolivia. *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d’études du développement*, 33(4), 439–57.
- Union of Concerned Scientists (USC). (Diciembre de 2013). *The Rise of Superweeds — and What to Do About It*. Union of Concerned Scientists. Recuperado de [https://www.ucsusa.org/food\\_and\\_agriculture/our-failing-food-system/industrial-agriculture/the-rise-of-superweeds.html#.W7Ib09dKjIU](https://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/our-failing-food-system/industrial-agriculture/the-rise-of-superweeds.html#.W7Ib09dKjIU).
- USDA-ERS. (2016). Commodity costs and returns [en línea].
- Valdivia, G. (2010). Agrarian Capitalism and Struggles over Hegemony in the Bolivian Lowlands. *Latin American Perspectives*, 37(4), 67–87.

- Van Cott, D.L. (2002). Constitutional Reform in the Andes: Redefining Indigenous-State Relations. En: *Multiculturalism in Latin America: Indigenous Rights, Diversity and Democracy*. Hampshire and New York: Sieder, R.
- Van Cott, D.L. (2005). *From Movements to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van Dijck, P. (1998). Economic transformation and policy reform: Shocks and balances. En: P. Van Dijck, ed. *The Bolivian experiment: structural adjustment and poverty alleviation*. Amsterdam: CEDLA.
- Varela Mendoza, E. (2014). El Estado controla 43 empresas en Bolivia. *El Deber*.
- Veltmeyer, H. (1997). New social movements in Latin America: The dynamics of class and identity. *Journal of Peasant Studies*, 25(1), 139–69.
- Veltmeyer, H. (2013). The political economy of natural resource extraction: a new model or extractive imperialism? *Canadian Journal of Development Studies-Revue Canadienne D Etudes Du Developpement*, 34(1), 79–95.
- Veltmeyer, H. (2016). Extractive Capital, the State and the Resistance in Latin America. *Sociology and Anthropology*, 4(8), 774–84.
- Veltmeyer, H. y Petras, J. (2014). *The New Extractivism: A post-neoliberal development model or imperialism of the twenty-first century?* London: Zed Books.
- Viaña, J. (2012). Estado plurinacional y nueva fase del proceso boliviano. En: M. Thwaites Rey, (Ed.) *El estado en América Latina: Continuidades y rupturas*. Santiago del Chile: CLACSO.
- Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. (31 de agosto de 2012). Gobierno y CAO acuerdan ampliar la frontera Agrícola para garantizar soberanía alimentaria. *Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia*. Recuperado de <http://www.vicepresidencia.gob.bo/Gobierno-y-CAO-acuerdan-ampliar-la>.
- Villegas, P. (24 de junio de 2011). Los transgénicos y la modificación genética de la política agraria en Bolivia. *CEDIB*. Recuperado de [http://www.cedib.org/post\\_type\\_titulares/los-transgenicos-y-la-modificacion-genetica-de-la-politica-agraria-en-bolivia/](http://www.cedib.org/post_type_titulares/los-transgenicos-y-la-modificacion-genetica-de-la-politica-agraria-en-bolivia/).

- Villegas, P. (2015). Lo que tiene que pasar, pasa. La crisis de las materias primas. *Petropress*, (35), 41–55.
- Vos, R., Haeduck, L. y Mejia, J.A. (1998). Structural adjustment and poverty. En: P. Van Dijk, ed. *The Bolivian experiment: structural adjustment and poverty alleviation*. Amsterdam: CEDLA.
- Watts, M.J. (1994). Life under Contract: Contract Farming, Agrarian Restructuring, and Flexible Accumulation. En: P.D. Little and M.J. Watts. (Eds.), *Living under Contract: Contract Farming and Agrarian Transformation in Sub-Saharan Africa* (pp. 21–77). Madison: University of Wisconsin Press.
- Webb, E.J., Campbell, D.T., Schwartz, R.D y Sechrest, L. (1966). *Unobtrusive Measures: Nonreactive Research in the Social Sciences*. Chicago: Rand McNally & Company.
- Webber, J.R. (2011). *From Rebellion to Reform in Bolivia*. Chicago: Haymarket Books.
- Webber, J.R. (2015). Revolution against ‘Progress’: Neo-Extractivism, the Compensatory State, and the tipnis Conflict in Bolivia. En: S.J. Spronk and J.R. Webber. (Eds.), *Crisis and Contradiction: Marxist Perspectives on Latin America in the Global Political Economy* (pp. 302–34). Leiden: Brill.
- Webber, J.R. (2016). Evo Morales and the political economy of passive revolution in Bolivia, 2006–15. *Third World Quarterly*, 37(10), 1855–76.
- Webber, J.R. (2017). Evo Morales, *transformismo*, and the consolidation of agrarian capitalism in Bolivia. *Journal of Agrarian Change*, 17(2), 330–47.
- Weis, T. (2010). The accelerating biophysical contradictions of industrial capitalist agriculture. *Journal of Agrarian Change*, 10(3), 315–41.
- Weis, T. (2013). The meat of the global food crisis. *The Journal of Peasant Studies*, 40(1), 65–85.
- Weisbrot, M., Ray, R., y Johnston, J. (2009). *Bolivia: the economy during the Morales administration* (No. 2009-47). Center for Economic and Policy Research (CEPR).

- Wesz Jr, V.J. (2016). Strategies and hybrid dynamics of soy transnational companies in the Southern Cone. *The Journal of Peasant Studies*, 43(2), 286–312.
- World Food Programme (WFP). (5 de noviembre de 2013). What causes hunger? Recuperado de <https://www.wfp.org/stories/what-causes-hunger>.
- White, B. (1997). Agroindustry and contract farmers in upland West Java. *Journal of Peasant Studies*, 24(3), 100–36.
- White, B. (2011). Who will own the countryside? *Dispossession, rural youth and the future of farming*, Valedictory Address delivered on, 13.
- White, B. (2012). Agriculture and the Generation Problem: Rural Youth, Employment and the Future of Farming. *IDS Bulletin*, 43(6), 9–19.
- White, C.P. (1986). Everyday resistance, socialist revolution and rural development: The Vietnamese case. *Journal of Peasant Studies*, 13(2), 49–63.
- WHO. (2016). *Obesity and overweight*. Geneva.
- Shurtleff, W., y Aoyagi, A. (2009). *History of soybeans and soyfoods in Africa (1857-2009): extensively annotated bibliography and sourcebook*. Soyinfo Center.
- Winland, D.N. (1993). The quest for Mennonite peoplehood: ethno-religious identity and the dilemma of definitions. *Canadian Review of Sociology & Anthropology*, 30(1), 110–38.
- World Wide Fund for Nature (WWF). (2014). *The Growth of Soy Impacts and Solutions*. WWF Report. Gland, Switzerland.
- Zavaleta Mercado, R. (1986). *Lo Nacional-Popular en Bolivia*. México: Siglo Veintiuno.
- Zoomers, A. (2003). Land liberalisation and sustainable development En Latin America: Unravelling the land sales market of Santa Cruz, Bolivia. *International Development Planning Review*, 25(3), 245–62.



# Sobre el autor

## **Ben M. McKay**

Profesor asistente de desarrollo y sostenibilidad en la Universidad de Calgary en Canadá. Recibió su doctorado del Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS) adscrito a la Universidad Erasmus de Rotterdam en La Haya, Holanda. Es investigador asociado de la Fundación TIERRA y hace parte de las Iniciativas BRICS en Estudios Agrarios Críticos (BICAS). Su investigación se ha desarrollado principalmente en el área de las políticas de cambio agrario en América Latina.





La penetración del capital transnacional no tiene fronteras. En las últimas décadas, las empresas multinacionales han expandido rápidamente su alcance geográfico y han creado nuevos mecanismos de control de la agricultura; desde el inicio –semillas genéticamente modificadas, agroquímicos, maquinarias agrícolas y tecnologías– hasta el final del proceso productivo, esto es hasta la comercialización y exportación de materias primas agrícolas. Las relaciones de producción, poder y propiedad se han transformado en el campo. La soya es el cultivo agroindustrial ícono de este tipo de cambios agrarios.

Este libro analiza cómo el desarrollo y la expansión del complejo sojero de Bolivia está cambiando el campo. Son nuevos procesos de exclusión y control que se caracterizan como “extractivismo agrario” y que tienen implicaciones de fondo para la sociedad, la economía y el medio ambiente. Estas dinámicas de cambio agrario no son exclusivas de Bolivia ni del complejo sojero, sino que son parte de procesos amplios que tienen lugar dentro del sistema agroalimentario mundial dominado por complejos agroindustriales.

ISBN: 978-99974-323-3-9



9 789997 432339